

Notas 94

de población



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe • CEPAL
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía • CELADE

Notas de población N° 94

Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva

Antonio Prado
Secretario Ejecutivo Adjunto

Dirk Jaspers_Faijer
Director, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(CELADE) - División de Población de la CEPAL

Ricardo Pérez
Director, División de Documentos y Publicaciones

La revista **Notas de población** es una publicación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, cuyo propósito principal es la difusión de investigaciones y estudios de población sobre América Latina y el Caribe, aun cuando recibe con particular interés artículos de especialistas de fuera de la región y, en algunos casos, contribuciones que se refieren a otras regiones del mundo. Se publica dos veces al año, con una orientación interdisciplinaria, por lo que acoge tanto artículos sobre demografía propiamente tal como otros que aborden las relaciones entre las tendencias demográficas y los fenómenos económicos, sociales y biológicos. Las opiniones expresadas en esta revista son responsabilidad de los autores, sin que el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sea necesariamente partícipe de ellas. Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas

Comité editorial:

Ciro Martínez Gómez, Coordinador
Jorge Martínez, Editor especial

Guiomar Bay, Fabiana del Popolo, Sandra Huenchuan, Dirk Jaspers_Faijer, Timothy Miller,
Jorge Rodríguez, Magda Ruiz, Paulo Saad, Alejandra Silva, Miguel Villa, Orly Winer
Liliana Cuevas, secretaria.

Redacción y administración: Casilla 179-D, Santiago, Chile. E-mail: liliana.cuevas@cepal.org
Ventas: publications@cepal.org. Precio del ejemplar: 12 dólares. Suscripción anual: 20 dólares.

Notas de población

Año XXXIX • N° 94 • Santiago de Chile



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL

Este número contó con el apoyo financiero parcial del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Diseño de portada: Alejandro Vicuña Leyton

Ilustración de portada: Te espero, 2006, Karin Momberg (www.karinmomberg.com). Derechos reservados.

Publicación de las Naciones Unidas

ISBN: 978-92-1-221093-3

ISSN: 0303-1829

LC/G.2542-P

Número de venta: S.12.II.G.15

Copyright © Naciones Unidas 2012

Todos los derechos reservados. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones. Sede de las Naciones Unidas, N.Y.10017, EE.UU. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

Sumario

Presentación <i>Jorge Martínez Pizarro</i>	7
Tres décadas de cambio y continuidad en la nupcialidad latinoamericana <i>Jeroen Spijker, Luis López Ruiz y Albert Esteve Palós</i>	11
Crisis económica mundial y oportunidades de la migración calificad <i>Jorge Martínez Pizarro</i>	37
La frontera entre el Paraguay y el Brasil y la importancia del territorio, las instituciones y la sociedad en la formación de la identidad “brasiguaya” <i>Denise Helena França Marques, Roberto do Nascimento Rodrigues, Dimitri Fazito de Almeida Rezende y Weber Soares</i>	67
La urbanización en el México contemporáneo <i>Jaime Sobrino</i>	93
Transición de la movilidad: Estudio de perfiles de migrantes de la tercera edad en el Brasil <i>Marden Barbosa de Campos, Alisson Flávio Barbieri y Gilvan Ramalho Guedes</i>	123
Dinámica demográfica, ciclo de vida económica y déficit generacionales de consumo: El caso del Perú y sus regiones <i>Ciro Martínez Gómez, Walter Mendoza y Claudia Saravia</i>	149
Áreas de alta vulnerabilidad ambiental en América Latina y el Caribe: Una perspectiva regional a escala subnacional <i>Susana B. Adamo, Liana Razafindrzay y Alexander de Sherbinin</i>	177

Presentación

Jorge Martínez Pizarro

En este número de la Revista Notas de Población se reúnen ocho trabajos sobre distintos temas relevantes en la investigación sociodemográfica en América Latina y el Caribe, que abarcan tanto escalas regionales como nacionales. En ellos se adoptan enfoques y metodologías orientadas a poner de relieve las transformaciones que acontecen en la población, sus espacios y ambientes, las familias y generaciones.

Paola La Guardia Zorzín, Simone Warjman y Cássio M. Turra, en su artículo “Previdência Social e Desigualdade Racial no Brasil”, abordan el problema de la distribución de recursos entre grupos raciales a través de la previsión social. Utilizando dos perspectivas metodológicas distintas, muestran que existe una disminución de las desigualdades de ingreso entre los adultos blancos y negros, y que la participación de ambos grupos se equilibra en el presupuesto previsional, a pesar de la mayor proporción de jóvenes entre los negros.

Jeroen Spijker, Luis López Ruiz y Albert Esteve Palós nos presentan, desde la mirada del investigador europeo, las principales transformaciones ocurridas en los regímenes de nupcialidad latinoamericanos durante el período 1970-2000. En su artículo titulado “Tres décadas de cambio y continuidad en la nupcialidad latinoamericana”, los autores muestran, a partir de microdatos censales del proyecto sobre el uso público integrado de series de microdatos (IPUMS), que existe un importante proceso de reestructuración en los regímenes, asociado al incremento de las uniones consensuales, así como también importantes cambios en la evolución del calendario nupcial.

Jorge Martínez Pizarro aborda la migración internacional de recursos humanos calificados en el contexto actual, un tema poco tratado y que,

sin embargo, es central en las discusiones sobre el escenario económico recesivo. En su artículo titulado “Crisis económica mundial y oportunidades de la migración calificada” analiza los diversos escenarios en que coexiste la crisis con los migrantes, y concluye que, a pesar de que no se cuenta con información detallada en los países de destino, es importante debatir sobre esta situación en la región debido a las posibles oportunidades que se abren a los países.

Denise Helena Franca Marques, Roberto do Nascimento Rodrigues, Dimitri Fazito de Almeida Rezende y Weber Soares examinan un tema clásico en la literatura sobre población en el artículo titulado “La frontera entre el Paraguay y el Brasil y la importancia del territorio, las instituciones y la sociedad en la formación de la identidad ‘brasiguaya’”. Los autores trazan un panorama de los factores que han contribuido a la formación de una comunidad transnacional característica de las fronteras del Paraguay y el Brasil, y analizan las interacciones espaciales y sociales en el proceso de circulación transfronteriza.

Jaime Sobrino, en su artículo “La urbanización en el México contemporáneo”, examina las principales tendencias de este proceso a partir de la década de los ochenta. Mediante un enfoque demográfico y de economía espacial, basado en la información de los censos de población y vivienda de 1980, 1990, 2000 y 2010, el autor estudia las principales características de la evolución demográfica y la urbanización mexicana durante el siglo XX, analiza sus patrones en el contexto regional y aborda la evolución de la conformación metropolitana, la distribución de la población y el empleo al interior de las metrópolis y la emergente formación de regiones urbanas. Finalmente, ofrece propuestas para la agenda futura de política territorial.

Marden Barbosa Campos, Alisson Flávio Barbieri y Gilvan Ramalho Guedes, en su artículo “Transición de la movilidad: Estudio de perfiles de migrantes de la tercera edad en el Brasil”, analizan la transición demográfica y la migración de los adultos mayores en el Brasil. A través del estudio de la movilidad entre los estados de Minas Gerais y São Paulo y con datos de los censos de 1991 y 2000, los autores ponen de relieve el papel de factores sociales y familiares, así como de los aspectos económicos y de las redes sociales. A la luz del envejecimiento demográfico, se estaría en presencia de nuevos perfiles entre los migrantes, lo que conllevará nuevas demandas.

Ciro Martínez, en su artículo “Dinámica demográfica, ciclo de vida y déficits generacionales de consumo: El caso del Perú y sus regiones”, examina la interacción de los patrones de consumo y producción por

edad y los resultantes déficits de consumo o demandas de transferencias económicas entre distintos grupos en diferentes etapas del ciclo de vida. Sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza del Perú 2009, se cuantifican los volúmenes de recursos necesarios para asegurar el financiamiento de los déficits de consumo de los grupos en edad escolar y adultos mayores, y se examina el papel del sector público a través del gasto en educación y salud —frente al papel del sector privado— en el financiamiento de esos déficits

Finalmente, Susana B. Adamo, Liana Razafindrazay y Alexander de Sherbinin, en su artículo titulado “Áreas de alta vulnerabilidad ambiental en América Latina y el Caribe: Una perspectiva regional a escala subnacional” analizan dos dimensiones de la vulnerabilidad ambiental, la externa y la interna. La integración de tres bases de datos espaciales —desastres naturales, población y pobreza— en un sistema de información geográfico permite identificar áreas de alta vulnerabilidad, determinar el tamaño y la distribución de la población localizada en las mismas, y constatar la existencia de diferentes niveles de pobreza, lo que pone de relieve la importancia de considerar diferentes escalas espaciales en el análisis de la vulnerabilidad ambiental.

Tres décadas de cambio y continuidad en la nupcialidad latinoamericana¹

Jeroen Spijker²

Luis López Ruiz²

Albert Esteve Palós²

Resumen

Uno de los rasgos más sobresalientes de los regímenes de nupcialidad latinoamericanos reside en la estabilidad del calendario de las primeras uniones. Sin embargo, investigaciones recientes apuntan hacia un paulatino retraso del calendario nupcial en algunos países de la región, sobre todo entre las cohortes más jóvenes. Estos indicios, junto con las mejoras experimentadas durante los últimos años en términos de métodos estadísticos y acceso a microdatos censales, justifican la realización de un estudio comparativo. El objetivo del presente trabajo consiste en documentar las principales transformaciones ocurridas en los regímenes de nupcialidad latinoamericanos durante el período 1970-2000. Los datos utilizados proceden de las muestras de microdatos censales del proyecto sobre el uso público integrado de series de microdatos (IPUMS). Los resultados muestran que ha habido cambios en los regímenes de nupcialidad latinoamericanos, ya que en ellos existe un importante proceso de reestructuración asociado al incremento de las uniones consensuales a costa de los matrimonios formales. También hay profundos cambios en la evolución del calendario nupcial cuando se analizan los datos a nivel desagregado por estrato educativo.

¹ Esta investigación ha sido financiada por el Consejo Europeo de Investigación (StG2009-ERC-2009-StG-240978) y el Plan Nacional I+D+i CSO2011-24544.

² Investigador del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona (España).

Summary

One of the most striking features of the nuptiality patterns observed in Latin America is the invariability in the timing of the first union. However, recent research indicates that the age at which the first union takes place is being pushed back gradually in some countries in the region, especially among the youngest groups of the population. These results, along with the advances in statistical methods and improved access to census microdata in recent years, justify a comparative study on this issue. This article aims to document the main changes in marriage trends in Latin America during the period 1970-2000. The data used are census microdata samples from the Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS). The results show that nuptiality patterns in Latin America have changed and that a significant restructuring process is under way, with an increase in consensual unions to the detriment of formal marriages. An analysis of the data disaggregated by educational level also shows significant changes in the age at which unions take place

Résumé

Un des traits les plus saillants des régimes de nuptialité en Amérique latine est la stabilité du calendrier des premières unions. Toutefois, des recherches récentes font apparaître un recul progressif du calendrier nuptial dans certains pays de la région, en particulier dans les groupes les plus jeunes. Ces indices, ainsi que les améliorations observées au cours de ces dernières années en termes de méthodes statistiques et d'accès aux microdonnées censitaires, justifient la réalisation d'une étude comparative. La présente étude a pour but de documenter les principales transformations enregistrées par les régimes de nuptialité en Amérique latine durant la période 1970-2000. Les données utilisées sont issues des échantillons de microdonnées censitaires du projet sur l'utilisation publique intégrée de séries de microdonnées. Les résultats font apparaître que les régimes de nuptialité en Amérique latine ont connu des changements et qu'ils ont fait l'objet d'un important processus de restructuration associé à une augmentation des unions consensuelles au détriment des mariages formels. L'analyse des données au niveau désagrégé par strate éducative permet d'observer de profondes modifications dans l'évolution du calendrier nuptial.

Introducción

Uno de los aspectos más sobresalientes de los regímenes de nupcialidad latinoamericanos es la estabilidad que a lo largo del tiempo ha mostrado el calendario de las primeras uniones. La evidencia empírica aportada por diversos investigadores (Naciones Unidas, 1990; García y Rojas, 2002; Fussell y Palloni, 2004) sugiere la existencia de este patrón, por lo menos durante la segunda mitad del siglo XX. Este hecho contrasta con lo que sucede en la mayoría de los países industrializados, donde la edad de entrada en la primera unión ha tendido a aumentar (Fitch y Ruggles, 2001; Kiernan, 2000), como resultado de distintos procesos de modernización en las esferas pública y doméstica. Sin embargo, investigaciones más recientes apuntan hacia un paulatino retraso del calendario nupcial en algunos países de la región (Parrado y Zenteno, 2002; Binstock, 2005), principalmente en las cohortes más jóvenes. Esta situación suele asociarse a un conjunto de transformaciones vinculadas directamente con la esfera de la reproducción y el papel de las mujeres en las sociedades latinoamericanas. Entre algunas de estas transformaciones se encuentran: la aceleración de los procesos de transición demográfica, el aumento de la participación femenina en los mercados laborales y la incorporación masiva de las mujeres al sistema educativo formal (Ariza y de Oliveira, 2001; García, 2004).

Estos indicios, junto con las mejoras experimentadas durante los últimos años en términos de métodos estadísticos y acceso a microdatos censales, justifican un estudio de carácter comparativo que permita explorar con un mayor nivel de desagregación la idea de estabilidad asociada a los patrones de entrada en la primera unión. La práctica de utilizar indicadores y datos a nivel agregado podría invisibilizar los cambios que ocurren en determinados sectores de la población. El hecho de contar con microdatos censales no solo permite apreciar con mayor detalle el comportamiento de estos grupos, sino que facilita la aplicación de métodos para controlar los efectos de composición que podrían interferir en el examen de los patrones de nupcialidad. El objetivo del presente trabajo consiste en documentar las principales transformaciones ocurridas en los regímenes de nupcialidad latinoamericanos durante el período 1970-2000 para observar si la idea de invariabilidad de estos regímenes es todavía actual. Se otorga especial énfasis a los cambios relacionados con el calendario (edad de ingreso en la primera unión) y el tipo de unión (cohabitación o matrimonio), en un contexto de expansión educativa. Los datos utilizados proceden de las muestras de microdatos censales del proyecto IPUMS, sobre la base del Minnesota Population Center (Minnesota Population Center, 2011). Se cuenta con ocho países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá, y dieciséis muestras de microdatos censales.

A. Enfoques conceptuales

Existen diversos enfoques para explicar las variaciones en el calendario de la nupcialidad, en función del énfasis que cada uno de ellos otorga a las distintas dimensiones que conforman este proceso. Entre las perspectivas más antiguas se encuentran las que consideran la edad de entrada en unión como producto de la dinámica de equilibrio hacia la que tienden los sistemas demográficos. De esta forma, el celibato y los cambios en el calendario nupcial, junto con el control de la fecundidad, constituyen los mecanismos mediante los que se regula el crecimiento poblacional. Esta perspectiva suele encontrarse, por ejemplo, en las propuestas de origen maltusiano (*preventive checks*) y en los estudios de K. Davis (1963). Otras perspectivas presentes en la mayoría de los estudios son: la de la independencia económica femenina, las que estudian el efecto de los mercados matrimoniales sobre la entrada en unión y las que enfatizan el papel del contexto sociocultural.

1. Perspectiva de la independencia económica femenina

Tanto sociólogos como economistas han intentado explicar los cambios en la nupcialidad como producto de diversos procesos de modernización social. De esta forma, autores como Becker (1973, 1974), Bloom y Bennet (1990) y Espenshade (1985) argumentan que, en la medida en que se transita hacia sociedades cada vez más modernas e industrializadas, se debilita uno de los principios básicos del matrimonio: la división sexual del trabajo. En este sentido, se considera que hombres y mujeres evalúan los beneficios potenciales de una unión en función de la complementariedad de sus atributos. Tradicionalmente, los atributos masculinos mejor valorados se asocian con la capacidad para desempeñarse en la esfera pública y asegurar el ingreso económico del hogar, mientras que en el caso de las mujeres se valora su aporte a la esfera doméstica. Por ejemplo, desde el punto de vista de la “nueva economía doméstica”, Becker (1973, 1974) argumenta que los logros educativos y profesionales de las mujeres tienden a disminuir sus niveles de especialización en el ámbito doméstico, así como su dependencia económica con respecto al hombre. Por este motivo, se reducen los beneficios percibidos, lo que se traduciría en una menor cantidad de matrimonios y mayores retrasos en la edad de entrada en unión.

2. Enfoque de los mercados matrimoniales

Esta perspectiva constituye una adaptación de la teoría de la búsqueda de empleo (*job search theory*), proveniente del campo de la economía laboral.

Entre sus precursores se encuentran England y Farkas (1986), así como Oppenheimer (1988). En concreto, el enfoque argumenta que hombres y mujeres conforman un mercado matrimonial cuya lógica no opera exclusivamente a través de los deseos de las personas, sino en función de la disponibilidad de efectivos de uno u otro sexo. La premisa central es que el calendario nupcial se encuentra directamente relacionado con las incertidumbres que rodean la transición hacia los roles económicos propios de la adultez, las perspectivas favorables en los mercados laborales y las características propias de los mercados matrimoniales locales. En un momento determinado, cada uno de estos factores puede obstaculizar o facilitar la búsqueda del futuro cónyuge, lo que genera retrasos o adelantos en el calendario nupcial. En sociedades más tradicionales caracterizadas por una fuerte diferenciación de los roles de género, la edad para el matrimonio estará fuertemente determinada por las posibilidades que tienen los hombres de transitar hacia una situación económicamente estable. En contextos donde las diferencias entre los roles de género tienden a reducirse, las características que hombres y mujeres consideran valiosas a la hora de emparejarse se asemejan cada vez más. De ahí que, conforme se alarga el tiempo dedicado a la educación, es predecible un aumento de la edad en el momento de la unión y una reducción de las diferencias de edad.

3. El contexto sociocultural

Finalmente, se encuentran los trabajos que privilegian la dimensión sociocultural del matrimonio. Estos estudios consideran los patrones de nupcialidad como producto de cambios ideacionales (Jayakody y otros, 2008), o transformaciones en los sistemas familiares y de género (Mason, 1987, 2001), que varían de un contexto a otro en función del estatus social de las mujeres y de las características específicas que asumen los sistemas de dominación patriarcal. Usualmente, en las sociedades donde el patriarca ejerce un férreo control sobre sus miembros, las edades en el momento del matrimonio tienden a ser más tempranas (McDonald, 1985). Bajo esta perspectiva también pueden ubicarse los trabajos que pertenecen a la corriente denominada “familista”. En términos generales, el familismo podría definirse como una serie de valores culturales arraigados fuertemente y que enfatizan la importancia del matrimonio y la familia (Vega, 1990). En un estudio reciente, Fussell y Palloni (2004) argumentan que la estabilidad del calendario de la nupcialidad en América Latina se encuentra asociada al familismo. De esta forma, las mujeres provenientes de zonas rurales, o que no tienen acceso al mercado laboral o a la educación, tienden a casarse más temprano, pues se encuentran más estrechamente vinculadas a un

modo de vida en que las redes de apoyo familiar conforman una práctica fundamental de subsistencia. Así, la persistencia del régimen de nupcialidad latinoamericano se explicaría a partir de las redes de apoyo familiar, que no solo contribuyen a la creación de riqueza, sino que amortiguan los efectos negativos generados a partir de la inestabilidad social y económica (Fussell y Palloni, 2004, pág. 1211).

En síntesis, las teorías expuestas refieren de una u otra forma a elementos puntuales que a su vez forman parte de procesos más amplios de cambio y modernización en los ámbitos económico, social y cultural. Son procesos que paulatinamente van redefiniendo el papel que desempeñan hombres y mujeres en la sociedad y propician distintas reconfiguraciones en los sistemas familiares y de género. En última instancia, estas transformaciones tienen el poder de modificar a largo plazo los patrones reproductivos de la sociedad, de los cuales la nupcialidad no es una excepción. Entre los factores a los que suele atribuirse un mayor poder como elemento de cambio y modernización destaca la variable educativa (Jejeebhoy, 1996), por lo que en este estudio se le presta especial atención. La importancia de la educación como variable explicativa del comportamiento nupcial se fundamenta en que: i) es el determinante más importante del mayor o menor grado de éxito en las estructuras ocupacionales de las sociedades industrializadas, y ii) refleja la influencia que ejercen los recursos culturales de las personas en el momento de realizar la selección de su pareja. En teoría, y de acuerdo a las perspectivas presentadas en este apartado, el aumento de los niveles educativos de hombres y mujeres resultaría en un retraso del calendario nupcial, sobre todo si se toma en consideración que, a partir de los años setenta, América Latina ha experimentado enormes progresos asociados a la universalización de la educación básica. Por ejemplo, para 1970 el porcentaje de personas que tenían 12 o más años de escolaridad era de 9,7%, 19,2% y 15% en el Brasil, Colombia y México, respectivamente. En 2000, estos mismos valores alcanzaban el 34,2%, 47,4% y 54,9%. Los efectos de esta expansión educativa se han observado especialmente en el caso de las mujeres. Por lo tanto, esperamos encontrar un aumento general de la edad de entrada en unión, que a su vez se acentúa a medida que aumenta el nivel educativo.

B. Rasgos comunes de los sistemas de nupcialidad latinoamericanos

Los principales rasgos de los regímenes de nupcialidad latinoamericanos han sido bien documentados por un significativo grupo de investigaciones,

principalmente a partir de la década de 1990 (Camisa, 1977; Naciones Unidas, 1990; Zavala de Cosío, 1995; Rosero-Bixby, 1996; De Vos, 1998; Quilodrán, 2000; Naciones Unidas, 2000; Castro Martín, 2001; García y Rojas, 2002; Fussell y Palloni, 2004; Rodríguez, 2005). En términos generales, los hallazgos centrales de estos trabajos pueden resumirse de la siguiente forma: i) la edad media en el momento de la unión se sitúa en un nivel intermedio entre las observadas en los países desarrollados y los de Asia y África; ii) esta variable ha mostrado relativa estabilidad a lo largo del tiempo; iii) no se ha identificado relación alguna entre los cambios en el calendario de la nupcialidad y los niveles de fecundidad, y iv) existe un sistema dual de nupcialidad, basado en la coexistencia de matrimonios y uniones consensuales, que se remonta a la época colonial.

En la región latinoamericana, al igual que sucede en el resto de los países en desarrollo, la variable educativa ejerce una fuerte influencia sobre la edad de entrada en la primera unión. Por ejemplo, cálculos realizados por las Naciones Unidas sobre la base de los estudios mundiales sobre la fecundidad de finales de los años setenta revelan que las mujeres con siete o más años de escolaridad se unen más tarde en comparación con las mujeres sin educación formal. Las diferencias entre los valores de la edad promedio en el momento de la unión fluctuaban desde un año en Haití hasta cinco años en Colombia entre el grupo de mujeres con mayor y menor escolaridad. En diez países existían diferencias de cuatro años (Naciones Unidas, 1990). Asimismo, datos provenientes de las encuestas de demografía y salud (DHS) indican que, en el caso de las generaciones nacidas entre 1940 y 1970, las diferencias en la edad de entrada en unión rondan en promedio los cinco años entre las personas sin escolaridad y aquellas con nueve años y más de instrucción (Heaton y otros, 2002). Sin embargo, al analizar la relación entre el nivel educativo y la edad media de la población soltera al casarse (SMAM, sigla en inglés) entre 1970 y 2000, estos mismos estudios no reportan cambios a lo largo del tiempo. La evidencia generada a partir de los datos censales, los estudios sobre la fecundidad y las encuestas de demografía y salud (DHS), confirma este hecho (Weinberger y otros, 1989; Naciones Unidas, 1990; Singh y Samara, 1996; Heaton y otros, 2002; Westoff, 2003; Fussell y Palloni, 2004; Mensch y otros, 2005).

A pesar de la existencia de estos rasgos comunes, hay importantes variaciones internas. Esta diversidad ha motivado la agrupación de los países de la región en subregiones, ya sea en función de la edad de

entrada en unión, o sobre la base del porcentaje de uniones consensuales. Tradicionalmente, en los estudios realizados durante los años setenta, ochenta y noventa suelen identificarse tres subregiones (Camisa, 1977; Naciones Unidas, 1990; Zavala de Cosío, 1995; Quilodran, 2003):

- i) países de nupcialidad temprana, entre 18 y 19 años de edad promedio en el momento de la primera unión: países de Centroamérica y el Caribe. Este grupo se caracteriza por una alta presencia de uniones consensuales, con valores que sobrepasan el 50% del total de personas unidas captadas por el censo;
- ii) países de nupcialidad intermedia, entre 20 y 21 años: Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela (República Bolivariana de). Tradicionalmente, los países de América del Sur y del altiplano mexicano tienen una nupcialidad menos temprana que el grupo anterior. Costa Rica y Panamá se distinguen de los otros países centroamericanos al haber adoptado un patrón de uniones menos precoz, lo que podría asociarse con niveles más elevados de escolaridad femenina (Zavala de Cosío, 1995). Aquí, el porcentaje de uniones consensuales oscila entre el 20% y el 50%, y
- iii) países de nupcialidad tardía, entre 22 y 23 años de edad promedio en el momento de la unión: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Por regla general, este grupo de países se asocia con poblaciones que recibieron cantidades importantes de inmigrantes europeos a principios del siglo XX. También se observan altos niveles de escolaridad y, en las grandes ciudades, la nupcialidad es más tardía que en los grupos anteriores. Los porcentajes de uniones consensuales dentro de este grupo suelen ser menores al 20%.

En cuanto a la evolución reciente de estos regímenes de nupcialidad, además de la estabilidad del calendario de entrada en unión, el otro fenómeno que ha llamado la atención de los investigadores se relaciona con el aumento generalizado de las uniones consensuales durante las últimas décadas. Los datos más recientes (Castro Martín y Martín García, 2008) indican que este tipo de unión se está expandiendo en los países que anteriormente mostraban los niveles más bajos, al mismo tiempo que se ha mantenido o aumentado levemente en los países que ya de por sí tenían altos niveles. Aunque históricamente las uniones consensuales se han considerado como un fenómeno típico de zonas rurales y estratos urbanos empobrecidos, la evidencia sugiere que este tipo de unión se está difundiendo en todos los estratos sociales y que su aumento relativo ha sido mayor en los grupos más escolarizados (Quilodrán, 2000; Castro Martín, 2002; Rodríguez, 2005).

C. Datos y métodos

Los datos utilizados en esta investigación proceden de las muestras de microdatos censales de las rondas correspondientes a 1970 y 2000 en relación con los siguientes países: Argentina (1970, 2001), Brasil (1970, 2000), Chile (1970, 2002), Colombia (1973, 2005), Costa Rica (1973, 2000), Ecuador (1974, 2001), México (1970, 2000) y Panamá (1970, 2000). Se trata de muestras armonizadas por el proyecto IPUMS internacional (Minnesota Population Center, 2011), puestas a disposición de la comunidad científica a través de su página web ³.

Los datos censales no proporcionan información acerca de la edad de entrada en unión, la duración de las uniones actuales, la existencia de uniones anteriores, ni el nivel educativo que se poseía en el momento de unirse. De hecho, por lo general los censos proporcionan únicamente información concerniente al tipo de unión y algunas otras características que poseían las personas en el momento de la entrevista⁴. Como es práctica tradicional en los estudios en que se utilizan datos transversales, se supone la existencia de cierta continuidad en los patrones de conducta agregados de los grupos de edad en distintos momentos censales. Sin embargo, esto no significa que se pueda hacer suposiciones acerca de cambios específicos en el comportamiento marital de las cohortes, especialmente en períodos caracterizados por intensas transformaciones demográficas

Una restricción adicional se asocia con la propia definición del estado civil. Tradicionalmente, los censos proveen información sobre la base de cinco categorías: solteros, casados, separados, divorciados y viudos. Sin embargo, en América Latina es habitual incluir la pregunta acerca de las uniones consensuales, debido a la particular condición de dualidad de sus regímenes de nupcialidad⁵. Esto significa que muchas personas ingresan a la vida en pareja a través de la cohabitación, sin llegar nunca a formalizar su vínculo conyugal por la vía legal. A efectos de este trabajo, únicamente se ha seleccionado a las personas que nunca han formado parte de una unión (matrimonio o cohabitación), con el propósito de construir la categoría “nunca unidos”. Esto se basa en la premisa de que el paso de la soltería al estado de unión es un proceso irreversible. De esta forma, quienes han experimentado separación marital, divorcio, o pérdida de la pareja se excluyen de esta categoría.

³ Véase [en línea] www.ipums.org.

⁴ Las excepciones en el caso latinoamericano son el Brasil 2000, la Argentina 2001 y la República Dominicana 2010; donde de una u otra manera se capta información sobre la unión previa o al menos es factible detectar a los “nunca unidos”.

⁵ En todas las muestras censales aquí utilizadas se incluyen las “uniones consensuales” como variable específica, y también como categoría específica dentro de la variable “estado marital”.

Sin embargo, uno de los problemas asociados al uso de datos censales para el estudio de las uniones consensuales reside en que su disolución no queda registrada. Dado que los censos no contienen datos acerca de la historia marital, no existe forma de saber si las personas que provienen de una unión consensual extinta, ya sea por muerte o separación de su pareja, vuelven a autodeclararse solteras. Por este motivo, además de las categorías tradicionales de “casado” y “unión consensual”, hemos construido para ambos sexos una tercera categoría denominada “solteros sin hijos”; con la intención de obtener un mejor acercamiento a quienes nunca han pertenecido a una unión, ya sea legal o consensual. Este criterio de diferenciación tiende a ser más efectivo en el caso de las mujeres (Esteve y otros, 2011). El supuesto explícito en que se basa esta nueva categoría consiste en considerar que aquellas personas que alguna vez han tenido hijos ya han experimentado una relación previa (aunque sea breve), con alguien del sexo opuesto⁶. Esta situación puede conducir a clasificar erróneamente a las personas cuyos hijos nacieron de relaciones sexuales extramatrimoniales que no guardan ningún parecido funcional con las uniones conyugales, especialmente entre los grupos más jóvenes. Sin embargo, consideramos que los beneficios potenciales de aplicar esta metodología sobrepasan la magnitud del sesgo en que se incurre. En términos de las variables utilizadas para construir esta nueva categoría, se decidió descartar la pregunta acerca de los “hijos que alguna vez ha tenido”, dado que no se aplica a los hombres. En su lugar, se seleccionó la variable que establece el número de hijos propios que residen en el mismo hogar (NCHILD). Esta variable ha sido creada por el proyecto IPUMS a partir de las relaciones de parentesco entre los miembros del hogar (Sobek y Kennedy, 2009). En el siguiente apartado (véase el gráfico 1), se muestran los resultados obtenidos al calcular las proporciones de solteros.

En relación con la variable educativa, utilizamos una clasificación compuesta de cuatro categorías: “sin primaria”, “primaria completa”, “secundaria completa”, “universidad completa”. Para ello hemos recurrido a la variable EDATTAN, creada por IPUMS a fin de homogeneizar los distintos sistemas educativos en un esquema común basado en las recomendaciones de las Naciones Unidas respecto del levantamiento de los censos de población (UNESCO, 2006). Este esquema se basa en un sistema de seis años de primaria, tres de secundaria inferior, tres de secundaria superior y universidad. Con excepciones, la mayoría de los países, incluidos los de América Latina, se adaptan a este esquema⁷. En todos los casos, se clasifica a las personas en función del último nivel

⁶ En este estudio hemos considerado exclusivamente las uniones heterosexuales.

⁷ Véase [en línea] www.ipums.org.

educativo alcanzado; por ejemplo, si alguien ha cursado cuatro años de secundaria hasta el momento del censo, se considera como perteneciente al grupo de “primaria completa”.

I. Indicadores de nupcialidad

Tal como se mencionó anteriormente, a diferencia de las encuestas retrospectivas o los datos de panel, los censos no proporcionan información acerca de la biografía marital de las personas y, sobre todo, de las características que poseían cuando se unieron, incluida su edad, nivel educativo, relaciones anteriores y tipo de unión (matrimonio o unión consensual). Por este motivo, el estudio del calendario nupcial a partir de la información censal implica la utilización de medidas indirectas. Los indicadores más utilizados son las proporciones de soltería y la SMAM. Esta última representa una medida sintética de nupcialidad propuesta por Hajnal (1953), que se obtiene a partir del cómputo de las proporciones de soltería en cada grupo de edad. En este estudio, la SMAM se calculó utilizando edades simples y partiendo del supuesto de que ninguna unión ocurría antes de los 15 años. La ecuación utilizada se formaliza en los siguientes términos⁸:

$$SMAM = \frac{15 + (\sum_{x=15}^{50} S_x) - (50 S_{50})}{1 - S_{50}}$$

Donde S_x representa la proporción de personas que nunca ha estado en unión a la edad x . De hecho, el procedimiento puede considerarse como una forma de calcular el número promedio de años vividos en soltería por las personas menores de 50 años. En la presente investigación no solo se calculan las edades de entrada en unión a nivel agregado respecto de cada país, sino que se realiza el análisis a nivel desagregado en función de los grupos educativos. Esto obliga a utilizar distintas edades según el grupo educativo en cuestión. Así, en el caso de los grupos “menos de primaria” y “primaria completa” se trabaja con las edades de 15 a 50 años. En el caso del grupo educativo con secundaria completa, las edades contempladas van de los 17 a los 50 años y, finalmente, en el caso del grupo con estudios universitarios, se incluye a las personas cuyas edades van de los 22 a los 50 años.

⁸ En algunos casos existe una declaración de edad inexacta, especialmente en las edades terminadas en cero. Además, la proporción de solteros a los 50 años (que ejercen una fuerte influencia en la estimación de la SMAM se calculó como el promedio del grupo de edad de 45 a 54 años.

D. Resultados

I. La edad en el momento de la unión

En el gráfico 1 se muestran las proporciones de “nunca unidos” por edad, sexo y país correspondientes a las rondas censales de 1970 y 2000. Los hombres se unen a edades más tardías que las mujeres, por lo que observamos a cualquier edad proporciones más elevadas de nunca unidos entre los hombres que entre las mujeres. Conforme aumenta la edad, las diferencias entre hombres y mujeres disminuyen. En México, la proporción de nunca unidos alcanza valores muy similares entre hombres y mujeres a los 35-39 años (10% en el caso de los hombres y 7% en el de las mujeres), mientras que en Panamá la proporción de nunca unidos a esta misma edad es, respectivamente, de 19% y 8%. Al comparar las proporciones de mujeres nunca unidas a los 15-19 años, el Ecuador, Panamá y México son los países con calendarios de entrada en unión más tempranos, mientras que la Argentina y Chile son los más tardíos. En el primer grupo de países, aproximadamente un 20% de las mujeres de 15 a 19 años ya había entrado en unión a esta edad. En la Argentina y Chile este porcentaje es inferior, del 13% y el 14%, respectivamente, en el año 2000.

En cuanto al cambio en el tiempo, los datos muestran una estabilidad de las proporciones de nunca unidos entre 1970 y 2000. A excepción de los hombres en Chile, la diferencia entre estos dos años no supera los ocho puntos porcentuales en ninguna edad, sexo ni país. Las proporciones de mujeres nunca unidas en Chile, Colombia y Costa Rica no muestran prácticamente cambio alguno entre 1970 y 2000. En el resto de los países, los datos de la ronda censal de 2000 evidencian un aumento muy modesto de las proporciones de nunca unidos que demuestran que las cohortes más jóvenes están retrasando muy lentamente la entrada en unión. Solo entre las mujeres brasileñas observamos una ligera disminución en las proporciones de nunca unidas en el año 2000 en comparación con 1970.

Entre los factores que ejercen mayor influencia sobre la edad de entrada en unión sobresale la educación (Jejeebhoy, 1996). En el caso de los países latinoamericanos, el contexto histórico asociado con el período elegido (1970-2000) se caracteriza por un intenso proceso de universalización de la educación básica; así como la incorporación masiva de las mujeres en el sistema educativo formal. De hecho, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha sostenido durante los últimos años el argumento de que “hoy en la región prácticamente no se registran desigualdades de acceso entre hombres y mujeres” (CEPAL, 2002, pág. 93).

Gráfico I
**PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE NUNCA HAN ESTADO EN UNIÓN,
 SEGÚN SEXO, EDAD Y RONDA CENSAL, 1970 Y 2000**

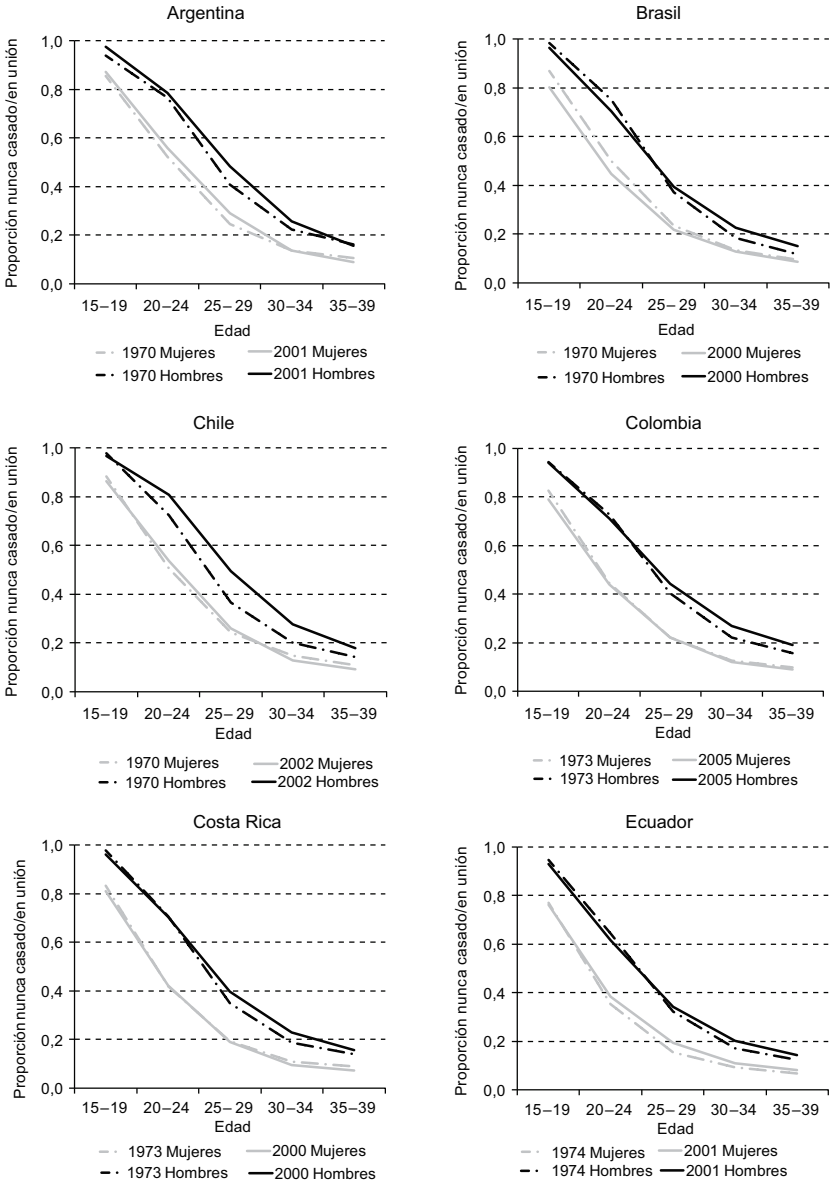
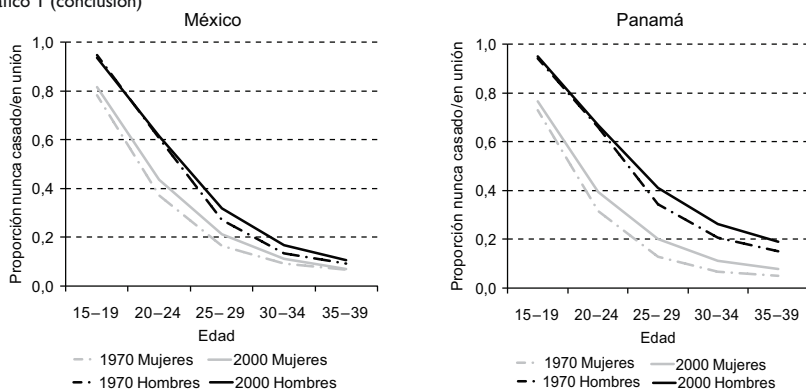


Gráfico I (conclusión)

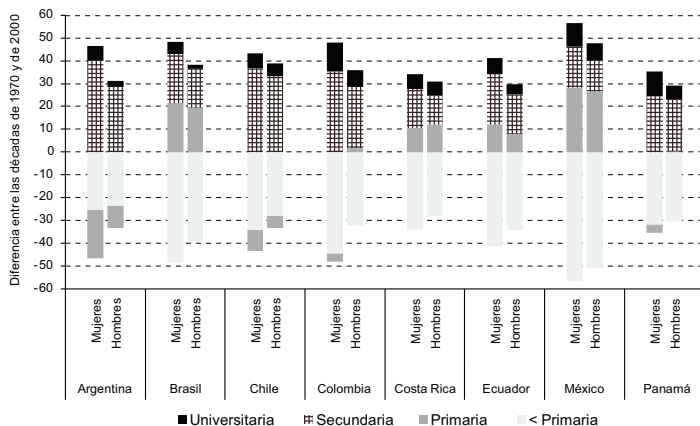


Fuente: Elaboración propia sobre la base de IPUMS-I (2011), [en línea] <https://internacional.ipums.org/internacional/>.

2. La expansión educativa

En el gráfico 2 se reflejan estos avances. En él puede apreciarse que entre la década de 1970 y la de 2000 ha disminuido drásticamente el porcentaje de población con niveles de primaria incompleta. En su lugar, la expansión del sistema educativo ha propiciado el aumento de la población con niveles de primaria completa y, fundamentalmente, de secundaria completa, que es donde más cambios se perciben. Esta dinámica tiende a apreciarse con mayor claridad en el caso de las mujeres, cuyos rangos de cambio reflejados por la longitud de las barras tienden a ser los más amplios. Asimismo, en términos generales se aprecia un aumento en el grupo de personas que ha completado sus estudios universitarios. El aumento más pronunciado en el caso de las mujeres indica una reducción de la brecha educativa de género.

Gráfico 2
PORCENTAJES DE CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL GRUPO DE EDAD 25-29, RONDAS CENSALES DE 1970 Y 2000
 (En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de IPUMS-I (2011) [en línea] <https://internacional.ipums.org/internacional/>.

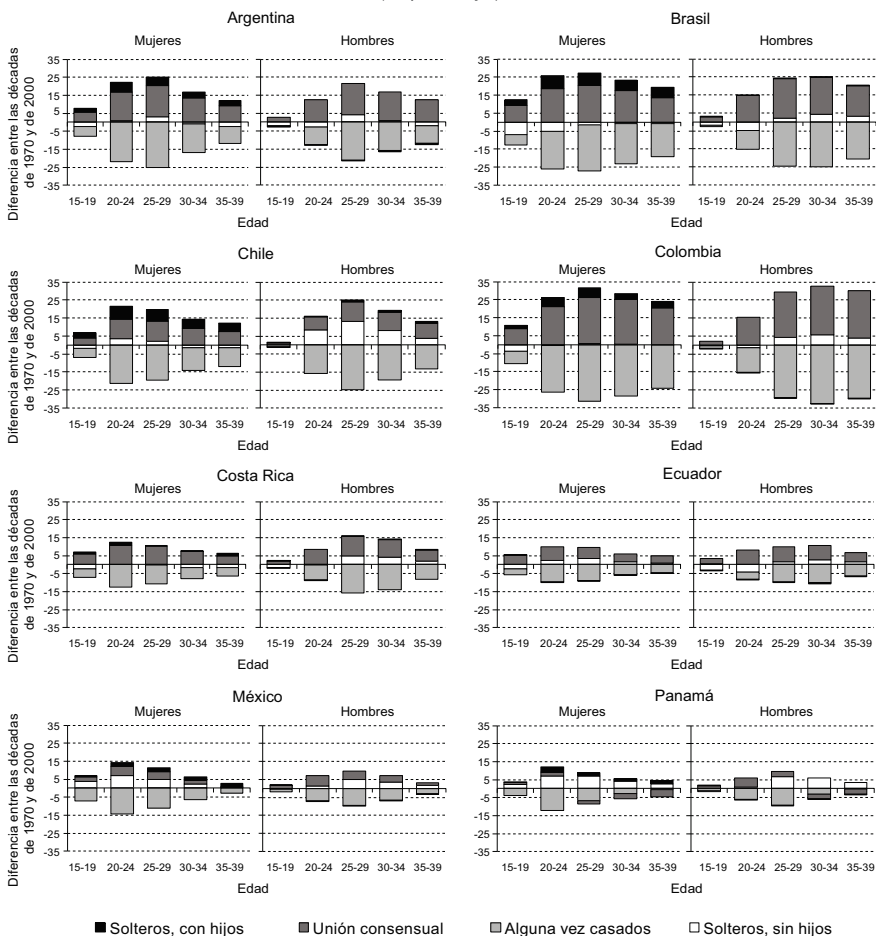
3. El aumento de la cohabitación

Tal y como se expuso anteriormente, los regímenes de nupcialidad latinoamericanos destacan por la coexistencia de matrimonios y uniones consensuales desde tiempos coloniales. La agrupación por países presentada en la sección II sugiere una posible asociación entre las proporciones de cohabitación y el calendario de las uniones. Por este motivo, resulta de interés obtener una visión general acerca de la composición de las uniones en el período objeto de estudio. En el gráfico 3 se muestran los cambios en la composición de las uniones en dos momentos distintos, establecidos por las rondas censales de 1970 y 2000. En ellos se aprecia un importante crecimiento de las uniones consensuales en detrimento de los matrimonios legalmente constituidos, lo que contribuye a que se mantenga más o menos estable la proporción de unidos a lo largo del tiempo en la mayoría de los países latinoamericanos (véase el gráfico 1). Prácticamente en todos los países y grupos de edad se observa este fenómeno, que se acentúa en las generaciones más jóvenes. La Argentina, el Brasil, Chile y, especialmente, Colombia son los países donde la sustitución de matrimonios por cohabitación es más pronunciada. En la Argentina, la proporción de mujeres casadas entre los 25 y 29 años ha caído en 25 puntos porcentuales entre 1970 y 2000, pero la proporción de mujeres cohabitantes sumada a la de solteras con hijos ha contrarrestado prácticamente la totalidad de la caída de los matrimonios. El crecimiento más destacado de la cohabitación y la caída más pronunciada de los matrimonios se ha dado en Colombia entre 1973 y 2005. La proporción de mujeres casadas a los 25-29 años cayó en más de 30 puntos porcentuales, mientras que la cohabitación y las madres solteras crecieron en una cifra similar. Los cambios en Costa Rica, el Ecuador, México y Panamá han sido comparativamente menos importantes. En el caso de Panamá, los niveles de cohabitación estaban en 1970 muy por encima a los del resto de los países.

Hasta el momento se ha podido verificar, basándose en datos a nivel agregado, que la mayoría de los países muestran un leve retraso en el calendario de la nupcialidad, situación que se evidencia un poco más en el caso de las mujeres (salvo en el Brasil). Esta relativa estabilidad en el calendario de la nupcialidad se da paralelamente a un significativo aumento de las uniones consensuales en detrimento de los matrimonios legales. Asimismo, se ha verificado la fuerte expansión que han experimentado los sistemas educativos latinoamericanos entre 1970 y 2000. Dado que esta expansión ha modificado la composición de la estructura educativa en función de los distintos grupos (sin primaria, con primaria completa, secundaria completa, universidad completa), y que estos grupos poseen distintos comportamientos asociados con la nupcialidad, es probable que estos efectos estructurales estén invisibilizando en alguna medida los cambios que podrían estar ocurriendo.

Gráfico 3
CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN ALGUNA VEZ UNIDA, SEGÚN SEXO, EDAD Y PAÍS ENTRE LAS RONDAS CENSALES, DÉCADAS DE 1970 Y 2000

(En porcentajes)



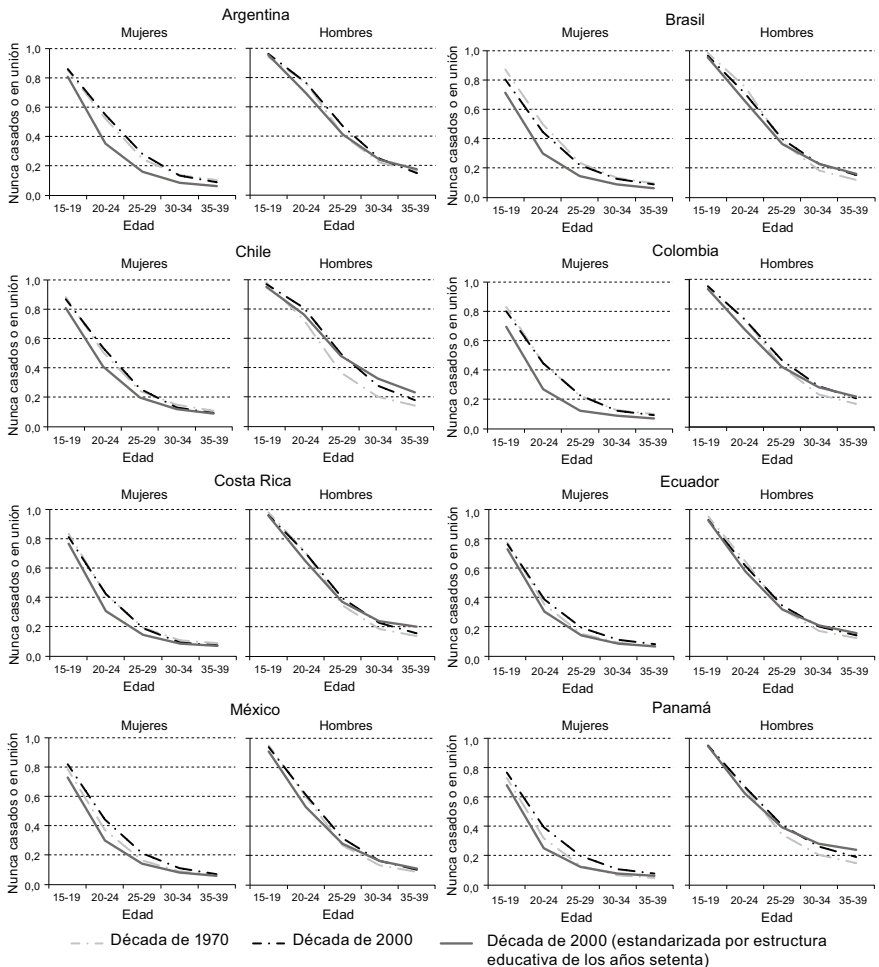
Fuente: Elaboración propia sobre la base de IPUMS-I (2011) [en línea] <https://international.ipums.org/international/>.

4. ¿Es estable el calendario de entrada en unión?

Considerando estos hechos, se ha querido evaluar si la estabilidad en el calendario de la nupcialidad se mantiene una vez controlado el efecto de los cambios en la composición de la estructura educativa sobre las proporciones de soltería. En el gráfico 4 se muestran las proporciones de solteros observadas en 1970 y 2000, y las que se habrían obtenido en 2000 si se hubiera conservado la estructura educativa de 1970. Es decir, se emplea el método

de estandarización tradicional, que consiste en aplicar las proporciones de soltería del año 2000 a la estructura educativa de 1970 para cada país. Así, en el caso de las mujeres puede apreciarse que de haberse mantenido la misma composición de la estructura educativa de los años setenta, el calendario de la nupcialidad habría sido más temprano de lo que muestran las proporciones reales. En otras palabras, las mujeres se habrían unido a edades más tempranas. Sobre todo las pertenecientes a los grupos de edad de entre 15 y 30 años.

Gráfico 4
PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE NUNCA HAN ESTADO EN UNIÓN, SEGÚN SEXO, EDAD Y RONDA CENSAL, PROPORCIONES REALES Y PROPORCIONES ESTANDARIZADAS, 1970 Y 2000
(Proporción)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de IPUMS-I (2011), [en línea] <https://international.ipums.org/international/>.

En el caso de los hombres, las diferencias entre las proporciones reales y estandarizadas tienden a ser menores en comparación con las mujeres. Probablemente, el hecho de que los procesos de expansión educativa hayan afectado en mayor medida a las mujeres determine este patrón. En general, se observa que la edad de entrada en el matrimonio habría sido un poco más temprana de haberse mantenido estable la estructura educativa de 1970, sobre todo en las edades por debajo de los 30 años. A partir de esta edad, se aprecia más bien un ligero aumento en las proporciones estandarizadas, principalmente en Chile, Costa Rica y Panamá.

Aunque las proporciones de soltería (reales y estandarizadas) nos aportan un primer acercamiento al estudio del calendario nupcial, es recomendable la utilización de medidas sintéticas. En el cuadro 1 se presentan los resultados obtenidos al calcular la SMAM por nivel educativo. Este indicador constituye una medida resumen de las proporciones de soltería a edades específicas, lo que facilita el análisis comparativo, ya sea de hombres o de mujeres, grupos educativos o países. En las columnas 1, 2, 3 y 4 del cuadro 1 se muestra la edad en el momento de la unión en función del grupo educativo. La columna 5 se refiere al valor obtenido para el total del país y corrobora nuevamente la existencia del fenómeno de estabilidad. Sin embargo, la situación varía cuando se analizan los datos desagregados por nivel educativo (columnas 1-4). En este sentido, se observa que la edad de entrada en unión se ha retrasado notablemente para hombres y mujeres con educación universitaria (a excepción de las ecuatorianas). Los mayores retrasos se dan en Panamá y Costa Rica, donde estas diferencias alcanzan, respectivamente, los 4 y 3,89 años en el caso de las mujeres, y 5,14 y 5,18 años en el caso de los hombres. Los grupos educativos con secundaria completa también presentan retrasos, aunque de menor magnitud. Por el contrario, en los grupos con niveles de “menos de primaria” y “primaria completa”, se aprecia que la tendencia es hacia la estabilidad, o incluso hacia la disminución de las edades de la primera unión (sobre todo entre las mujeres brasileñas y colombianas).

Por otra parte, en la columna 6 se muestran los valores estandarizados para la ronda censal de 2000 (o sea, se mantiene constante la estructura educativa de 1970 y se utilizan las proporciones de soltería de 2000). En la columna 7 se aprecian las diferencias entre los valores observados del indicador SMAM durante 1970 y 2000. Estas diferencias pueden descomponerse en dos factores: el efecto debido al cambio en la composición de la estructura educativa (columna 8), y el efecto debido al cambio en los propios niveles de soltería dentro de cada grupo educativo (columna 9). La estabilidad surge a partir de la interacción entre ambos

Cuadro I
EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN SOLTERA AL CASARSE, SEGÚN SEXO,
PAÍS, RONDA CENSAL Y GRUPO EDUCATIVO

		Edad media de la población soltera al casarse (SMAM)					Año 2000, estandarizada por estructura educativa de los años setenta (6)	Cambio 1970-2000		
Año	Menos de primaria (1)	Primaria completa (2)	Secundaria completa (3)	Universidad completa (4)	Total (5)	Diferencia observada (7)		Efecto en la estructura educativa (8)	Efecto en el nivel de soltería (9)	
Mujeres										
Argentina	1970	20,67	22,89	23,91	26,46	22,68				
Argentina	2001	20,36	21,01	25,61	28,85	23,55	21,31	0,87	2,24	-1,38
Brasil	1970	22,19	24,71	26,11	26,87	22,81				
Brasil	2000	19,88	21,32	24,80	27,13	22,22	20,43	-0,59	1,79	-2,37
Chile	1970	21,99	22,58	23,13	24,14	22,71				
Chile	2002	21,22	21,01	24,35	27,84	23,01	21,59	0,29	1,41	-1,12
Colombia	1973	20,77	22,53	23,77	23,98	21,85				
Colombia	2005	18,96	19,40	23,03	27,14	21,81	19,55	-0,05	2,26	-2,31
Costa Rica	1973	19,67	21,82	23,21	23,17	21,25				
Costa Rica	2000	19,11	20,47	23,93	27,17	21,64	20,46	0,39	1,17	-0,79
Ecuador	1974	19,74	21,63	22,38	26,48	20,95				
Ecuador	2001	19,74	20,02	22,87	26,11	21,20	20,22	0,25	0,98	-0,73
México	1970	20,09	22,68	23,17	25,45	21,14				
México	2000	20,26	21,20	24,69	27,11	22,45	20,79	1,32	1,66	-0,35
Panamá	1970	18,63	20,74	21,60	24,02	20,48				
Panamá	2000	18,59	19,69	23,40	27,91	21,75	19,97	1,27	1,76	-0,51
Hombres										
Argentina	1970	25,65	26,06	26,30	28,63	26,06				
Argentina	2001	25,35	25,86	28,52	30,29	26,91	25,91	0,86	1,01	-0,15
Brasil	1970	25,92	27,14	28,15	28,43	26,22				
Brasil	2000	25,69	25,94	27,88	29,82	26,41	25,91	0,18	0,49	-0,31
Chile	1970	26,14	25,22	25,37	27,47	25,69				
Chile	2002	28,16	26,74	28,40	30,13	27,67	27,42	1,99	0,26	1,73
Colombia	1973	25,99	26,01	26,14	27,97	26,16				
Colombia	2005	25,13	24,99	27,30	31,28	26,47	25,40	0,30	1,06	-0,76
Costa Rica	1973	25,25	25,18	25,82	24,98	25,32				
Costa Rica	2000	25,46	25,16	27,83	30,12	26,14	25,67	0,83	0,47	0,35
Ecuador	1974	24,26	25,35	25,43	27,05	24,94				
Ecuador	2001	23,79	23,98	26,21	28,77	24,71	24,10	-0,24	0,61	-0,84
México	1970	23,61	25,06	25,72	26,74	24,30				
México	2000	23,83	24,24	26,61	28,63	25,04	24,24	0,73	0,80	-0,06
Panamá	1970	24,88	25,09	24,19	25,36	24,95				
Panamá	2000	25,50	25,25	26,74	30,54	25,99	25,60	1,04	0,39	0,65

Fuente: Elaboración propia sobre la base de IPUMS-I (2011), [en línea] <https://international.ipums.org/international/>.

factores. Por ejemplo, a pesar de que los cambios en la composición de la estructura educativa han contribuido a aumentar la edad de entrada en la unión en 2,26 años en el caso de las mujeres colombianas; el efecto del cambio en las proporciones de soltería dentro de cada nivel educativo la redujo en 2,31, por lo que la edad se mantiene constante.

En términos generales, se observa que los cambios en la composición de la estructura educativa contribuyen a aumentar la edad de entrada en unión; mientras que los cambios de comportamiento de los grupos educativos propician reducciones. Esto no significa que todos los grupos educativos estén retrasando la entrada en unión, pero sí los que tienen un mayor peso en el conjunto de la población. Por ejemplo, aunque la población de mujeres con estudios universitarios aumentó significativamente su edad de entrada en unión entre 1970 y 2000, para 1970 sus porcentajes variaban entre el 0,4% y el 2,6% en el Ecuador y Costa Rica, respectivamente. Aun con las mejoras educativas experimentadas durante este período, hacia 2000 sus valores fluctuaban entre el 4,3% y el 10,1% en Chile y Panamá, respectivamente (véase el cuadro A-1 del anexo). En el caso de los hombres ocurre una situación similar.

Por otra parte, se aprecia que el efecto de la estructura educativa ha sido mayor que el efecto de los cambios en los niveles de soltería y ha impactado con mayor fuerza a las mujeres que a los hombres. Para ellas, los valores que resumen el efecto de la estructura educativa sobre la edad de entrada en la unión van desde los 2,26 y 2,24 años en Colombia y la Argentina, respectivamente, hasta los 0,98 años en el Ecuador. Esta situación contrasta con la de los hombres, cuyos valores más elevados se localizan en la Argentina y Colombia (1,01 y 1,06, respectivamente). Asimismo, se aprecia que el efecto de los niveles de soltería también suele ser mayor en las mujeres, con valores que ascienden a -2,37 y -2,31 años en los casos del Brasil y Colombia, respectivamente. Llama la atención que en el caso de los hombres chilenos, costarricenses y panameños, los cambios en los niveles de soltería tienen signo positivo. Esto explica el hecho de que los hombres de estos países sean los que más han retrasado su calendario, sobre todo en el caso de Chile (1,99) y Panamá (1,04).

E. Conclusiones

El objetivo de este trabajo consistía en documentar las principales transformaciones ocurridas en los regímenes de nupcialidad latinoamericanos durante el período 1970-2000. Para cumplir con este propósito, se utilizaron las muestras de microdatos censales de ocho países

latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá. Este período se caracteriza por fuertes procesos de transformación social, que a su vez han modificado el papel de las mujeres en sociedad y las pautas de formación familiar (por ejemplo, aceleración de los procesos de transición demográfica, aumento de la participación femenina en los mercados laborales e incorporación masiva de las mujeres en los sistemas educativos formales). Las distintas teorías formuladas hasta la fecha relacionan estos procesos de modernización social con importantes modificaciones en los patrones de formación de uniones, como resultado del aumento en los niveles de autonomía personal y un mayor control de las personas sobre su propia sexualidad.

Si bien es cierto que en investigaciones recientes se informa acerca de la existencia de una intensa dinámica de cambio asociada principalmente al aumento de las uniones consensuales, los trabajos referidos a la edad de entrada en unión suelen concluir que la estabilidad a lo largo del tiempo es la norma predominante. Esta aparente contradicción entre lo que predicen las perspectivas teóricas y lo que sucede en la práctica a nivel regional ha motivado el desarrollo de este trabajo. En términos generales, nuestros resultados sugieren que existe un importante proceso de reestructuración de los regímenes de nupcialidad latinoamericanos, principalmente en relación con el incremento de las uniones consensuales a costa de los matrimonios formales. Existen además cambios significativos en la evolución del calendario de la unión, cuando se analizan los datos a nivel desagregado.

En lo que respecta a la composición de la estructura de los sistemas de nupcialidad regionales, se corrobora lo que otros autores ya han señalado (Quilodrán, 2000; García, 2004; Rodríguez, 2005; Castro Martín y otros, 2008) y que puede resumirse de la siguiente manera: i) hay un fuerte aumento de las uniones consensuales, sobre todo en los países que anteriormente poseían bajos niveles, y ii) este incremento se ha dado con mayor fuerza en los grupos más escolarizados. Además, a lo anterior debe añadirse que se han incrementado las proporciones de personas solteras con hijos, sobre todo en edades por encima de los 25 años. Aunque este fenómeno podría asociarse con el aumento de los divorcios y separaciones en la región, queda la duda acerca del trasfondo que origina la expansión de las uniones consensuales. A este respecto, diversos autores (Castro Martín, 2002; García, 2004; Rodríguez, 2005) han insistido en que no existe un significado unívoco detrás de este proceso expansivo. Más bien, la mayoría concuerda en que se da, por un lado, una intensificación del patrón tradicional predominante (asociado con los grupos menos escolarizados y de más bajos recursos) y, por otro, el surgimiento de un tipo de unión más

moderno y próximo en significado al que suele encontrarse en los países más desarrollados, como parte de los procesos que rodean la segunda transición demográfica. Desgraciadamente, la identificación de uno u otro patrón (tradicional o moderno) requiere fuentes de información distintas de los microdatos censales utilizados en este estudio. Es decir, fuentes de naturaleza cualitativa o, al menos, encuestas que contengan mayor información acerca de la biografía marital de las personas.

En relación con el calendario nupcial, se concluye que las personas que integran los grupos con mayor escolaridad (universitarios y con secundaria completa) presentan un comportamiento tendente al retraso del calendario nupcial. Esto no se tradujo en un aumento generalizado de la SMAM, debido a que fue neutralizado por una tendencia hacia la estabilidad o incluso el adelanto de la unión por parte de los grupos con menor nivel educativo entre 1970 y 2000. En pocas palabras, los indicadores a nivel agregado reflejan la conducta de los grupos menos instruidos y que conforman la mayor parte de la población (menos de primaria y primaria completa). Precisamente, es este juego de pesos y contrapesos a nivel grupal lo que causa la ilusión de estabilidad cuando se analizan los datos a nivel agregado.

En síntesis, el conjunto de datos aquí presentados nos permite refutar la idea de invariabilidad de los regímenes de nupcialidad latinoamericanos. Al contrario, se comprueba la existencia de una importante dinámica de cambio, tanto en lo que atañe a la estructura que los caracteriza en términos del tipo de unión, como en relación con su calendario. La utilización de datos a nivel agregado (por ejemplo, de país) suele invisibilizar estas transformaciones, sobre todo si se consideran los altos niveles de heterogeneidad y desigualdad social que caracterizan el conjunto de la región. Los patrones de cambio percibidos en el calendario de la unión no actúan en la dirección esperada o propuesta por las distintas teorías expuestas en este trabajo. Esto equivale a decir que los procesos de expansión educativa no actuaron por completo en la dirección esperada de retrasar en forma generalizada la edad de entrada en unión. En respuesta a nuestra hipótesis, podemos afirmar que la edad de entrada en unión aumentó solamente entre la población con educación secundaria o más, con la excepción de los hombres chilenos, en los que aumentó entre todos los grupos. Entre la población con menos de secundaria hubo generalmente un descenso en la edad de entrada en primera unión. Surgen las siguientes interrogantes: ¿esta relación se manifiesta por igual en todos los contextos y grupos sociales? ¿Existen estratos sociales donde el aumento de la autonomía o independencia económica podría ocasionar más bien el efecto

opuesto de adelantar la edad de la unión? ¿El aumento en los niveles de cohabitación a costa de los matrimonios formales influye de alguna forma sobre el calendario nupcial? Sin lugar a dudas, la respuesta a estas preguntas absorberá gran parte del esfuerzo dedicado por los estudiosos del tema en años venideros.

Bibliografía

- Ariza, M. y O. de Oliveira (2001), “Familias en transición y marcos conceptuales en redefinición”, *Papeles de población*, N° 28.
- Becker, G.S. (1973), “A Theory of Marriage: Part I”, *The Journal of Political Economy*, vol. 81, N° 4.
- ____ (1974), “A Theory of Marriage: Part II”, *The Journal of Political Economy*, vol. 82, N° 2.
- Binstock, G. (2005), “Educación, matrimonio y unión en la Ciudad de Buenos Aires”, *Papeles de población*, N° 43.
- Bloom, D.E. y N.G. Bennett (1990), “Modeling American marriage patterns”, *Journal of the American Statistical Association*, vol. 85, N° 412.
- Camisa, Z. (1977), *La nupcialidad de las mujeres solteras en América Latina*, serie A, N° 1034, San José, Costa Rica, Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).
- Castro Martín, T. (2001), “Matrimonios sin papeles en Centroamérica: Persistencia de un sistema dual de nupcialidad”, L. Rosero Bixby (comp.), *Población del Istmo 2000: Familia, migración, violencia y medio ambiente*, San José, Centro Centroamericano de Población.
- ____ (2002), “Consensual unions in Latin America: Persistence of a dual nuptiality system”, *Journal of Comparative Family Studies*, vol. 33, N° 1.
- Castro Martín, T., y T. Martín García (2008), “Are women better-off in consensual unions or in marriages? An exploration of gender relations by union type in the Latin American context”, documento presentado en el seminario internacional “Changing Transitions to Marriage: Gender Implications for the Next Generation in Developing Countries (IUSSP)”, Nueva Delhi, 10 a 12 de septiembre.
- Castro Martín, T., T. Martín García y D. Puga (2008), “Matrimonio Vs. unión consensual en Latinoamérica: Contrastes desde una perspectiva de género”, documento presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), Córdoba (Argentina), 4 a 6 de septiembre.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2002), *Panorama social de América Latina 2001-2002 (LC/G/2183-P)*, Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.02.II.G.65.
- Davis, K. (1963), “The theory of change and response in modern demographic history”, *Population Index*, vol. 29, N° 4.
- De Vos, S. (1998), “Nuptiality in Latin America”, *Working Paper*, N° 98-21, Wisconsin, Center for Demography and Ecology.
- England, P., y G. Farkas (1986), *Households, Employment and Gender. A Social, Economic, and Demographic View*, Hawthorne, Nueva York, Aldine.
- Espenshade, T. (1985), “Marriage trends in America: Estimates, implications, and underlying causes”, *Population and Development Review*, vol. 11, N° 2.
- Esteve, A., J. García y R. McCaa (2011), “La enumeración de la soltería femenina en los censos de población: Sesgo y propuesta de corrección”, *Papeles de población*, vol. 16, N° 66.

- Fitch, C.A. y S. Ruggles (2000), "Historical trends in marriage formation: The United States 1850-1990", *Ties that Bind: Perspectives on Marriage and Cohabitation*, L.J. Waite y otros (comps.), Nueva York, Aldine de Gruyter.
- Fussell, E., y A. Palloni (2004), "Persistent marriage regimes in changing times", *Journal of Marriage and Family*, vol. 66, N° 5.
- García, B. (2004), "Las uniones conyugales en América Latina: Transformaciones en un marco de desigualdad social y de género", *Notas de población*, N° 78 (LC/G.2229-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- García, B. y O. Rojas (2002), "Cambio en la formación y disoluciones de las uniones en América Latina", *Papeles de población*, N° 32.
- Hajnal, J. (1953), "Age at marriage and proportions marrying", *Population Studies*, vol. 7, Londres, London School of Economics.
- Heaton, T., R. Forste y S. Otterstrom (2002), "Family transitions in Latin America: First intercourse, first union and first birth", *International Journal of Population Geography*, vol. 8, Londres, Institute of British Geographers.
- Jayakody, R., A. Thornton y W.G. Axinn (2008), *International Family Change: Ideational Perspectives*, N° 37, Nueva York, L. Erlbaum Associates.
- Jejeebhoy, S.J. (1996), *Women's Education, Autonomy, and Reproductive Behaviour: Experience from Developing Countries*, serie International Studies in Demography, Londres, Oxford University Press.
- Kiernan, K.E. (2000), "European perspectives on union formation", *The Ties That Bind: Perspectives on Marriage and Cohabitation*, L.J. Waite y otros (comps.), Nueva York, Aldine de Gruyter.
- Mason, K.O. (1987), "The impact of women's social position on fertility in developing countries", *Sociological Forum*, vol. 2, N° 4.
- (2001), "Gender and family systems in the fertility transition", *Population and Development Review*, vol. 27.
- McDonald, P. (1985), "Social organization and nuptiality in developing societies", *Reproductive Changes in Developing Countries*, J. Cleland y J. Hobcraft (comps.), Londres, Oxford University Press.
- Mensch, B.S., S. Singh y J.B. Casterline (2005), "Trends in the timing of first marriage among men and women in the developing world", *Working Papers*, Nueva York, Consejo de Población.
- Minnesota Population Center (2011), *Integrated Public Use Microdata Series, International: Version 5.0 (Machine-readable database)*, Minneapolis, University of Minnesota.
- Naciones Unidas (1990), *First Marriage: Patterns and Determinants* (ST/ESA/SER.R/76), Nueva York.
- (2000), "World Marriage Patterns" [en línea] <http://www.un.org/esa/population/publications/worldmarriage/worldmarriage.htm> [fecha de consulta: 17 de julio de 2011].
- Oppenheimer, V. K. (1988), "A theory of marriage timing", *The American Journal of Sociology*, vol. 94, N° 3.
- Parrado, E.A. y R.M. Zenteno (2002), "Gender differences in union formation in Mexico: evidence from marital search models", *Journal of Marriage and the Family*, vol. 64, N° 3.
- Quilodrán, J. (2003), "Efecto de la transición demográfica sobre la formación familiar", *Papeles de población*, vol. 9, N° 37.
- (2000), "Atisbos de cambios en la formación de las parejas conyugales a fines del milenio", *Papeles de población*, N° 25.

- Rodríguez, J. (2005), “Unión y cohabitación en América Latina: ¿Modernidad, exclusión, diversidad?”, *serie Población y desarrollo*, N° 57 (LC/L.2234-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.154.
- Rosero-Bixby, L. (1996), “Nuptiality trends and fertility transition in Latin America”, *The Fertility Transition in Latin America*. J. M. Guzmán y otros (comps.), Londres, Oxford University Press.
- Singh, S. y R. Samara (1996), “Early marriage among women in developing countries”, *International Family Planning Perspectives*, vol. 22, Nueva York, Guttmacher Institute.
- Sobek, M., y S. Kennedy (2009), *The Development of Family Interrelationship Variables for International Census Data*, serie Working Paper, N° 2009-02, Minneapolis, Minnesota Population Center.
- UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (2006), *Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE 1997*, Nueva York.
- Vega, W.A. (1990), “Hispanic families in the 1980s: a decade of research”, *Journal of Marriage and Family*, vol. 52, N° 4.
- Weinberger, M.B., C. Lloyd y A.K. Blanc (1989), “Women’s education and fertility: a decade of change in four Latin American countries”, *International Family Planning Perspectives*, vol. 15, Nueva York, Guttmacher Institute.
- Westoff, C.F. (2003), “Trends in marriage and early childbearing in developing countries”, *DHS Comparative Reports*, Calverton, ORC Macro.
- Zavala de Cosío, M.E. (1995), “Dos modelos de transición demográfica en América Latina”, *Perfiles latinoamericanos*, vol. 4, N° 6.

Anexo

Cuadro A-1
**PROPORCIÓN DE POBLACIÓN DE 15 A 49 AÑOS SEGÚN GRUPO
 EDUCATIVO, SEXO, PAÍS Y RONDA CENSAL**

	Década de 1970				Década de 2000			
	Menos de primaria	Primaria completa	Secundaria completa	Universidad completa	Menos de primaria	Primaria completa	Secundaria completa	Universidad completa
Mujeres								
Argentina	36,3	59,1	3,0	1,6	8,4	48,4	36,9	6,2
Brasil	85,7	9,3	4,4	0,6	40,3	32,2	22,5	5,1
Chile	41,4	49,0	8,8	0,9	9,3	45,9	40,5	4,3
Colombia	58,3	36,6	4,5	0,6	16,8	40,6	33,5	9,2
Costa Rica	48,0	46,1	3,3	2,6	16,4	54,9	20,9	7,8
Ecuador	60,4	33,7	5,5	0,4	24,2	45,1	25,1	5,6
México	69,8	28,2	1,4	0,6	20,1	55,7	17,3	6,8
Panamá	45,5	44,5	8,4	1,5	13,2	45,1	31,6	10,1
Hombres								
Argentina	35,1	56,9	4,9	3,1	9,6	55,1	29,5	5,8
Brasil	84,6	10,1	3,8	1,5	45,3	32,2	18,3	4,2
Chile	39,6	49,1	9,5	1,8	9,4	47,9	37,4	5,3
Colombia	56,7	35,7	5,6	2,1	19,9	42,0	29,9	8,2
Costa Rica	47,5	46,1	4,0	2,4	17,7	55,9	18,6	7,8
Ecuador	55,3	37,3	5,9	1,5	22,9	48,0	22,6	6,4
México	65,6	30,0	2,3	2,1	17,3	57,4	16,3	8,9
Panamá	46,1	44,1	7,5	2,3	13,2	50,4	29,0	7,5

Fuente: Elaboración propia sobre la base de IPUMS-I (2011) [en línea] <https://international.ipums.org/international/>.

Crisis económica mundial y oportunidades de la migración calificada¹

Jorge Martínez Pizarro²

Resumen

Se analizan algunos asuntos pendientes y emergentes en torno a la migración calificada en la región, que la actual crisis económica mundial podría colaborar a transformar en una “oferta de oportunidades” para beneficio de los países, incluidos sus emigrados y sus potenciales migrantes calificados. Como temas emergentes, se indaga sobre las dificultades que han enfrentado los migrantes de mayor calificación en los países desarrollados y cómo las han superado y cuál ha sido la importancia de la migración calificada y las diásporas para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Como temas pendientes, se recuerda que desde hace décadas la región ha sido protagonista de la emigración de personal calificado, la que se ha percibido, evaluado e interpretado por sus consecuencias negativas, como pérdidas de población altamente calificada (*brain drain*), y luego a través del retorno y, especialmente, por medio del establecimiento de vínculos con los emigrados, como oportunidades para encarar las pérdidas. En el trabajo se formulan varios interrogantes: ¿hasta qué punto el mayor desempleo y las peores condiciones de trabajo en los países desarrollados puede retardar o contener la emigración calificada?, si la crisis fomentase el retorno de personal calificado, ¿se aceleraría la “circulación de cerebros” en beneficio de los países de origen?, ¿los beneficios que obtienen los países de destino a partir de

¹ Este trabajo recibió la colaboración de Magdalena Soffia Contrucci, del CELADE-División de Población de la CEPAL, y constituye una versión ampliada de otros anteriores.

² Asistente de investigación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL.

la inmigración calificada se visualizan con más fuerza en épocas de recuperación de las crisis? Se concluye que la demanda de talentos no disminuyó con la crisis (algunas medidas proteccionistas parecen haber sido de corta vida); se registró un deterioro de los niveles de empleo de estos trabajadores (según el país de destino), aunque su situación con relación al conjunto de los migrantes o de los nativos menos calificados sigue siendo de menor vulnerabilidad; los migrantes calificados acuden a estrategias de subempleo antes que al retorno o el desempleo y no se ha dado un retorno masivo de migrantes calificados ni de los migrantes en su conjunto. El supuesto de que ante una eventual disminución de la demanda los países latinoamericanos tendrían una oportunidad para retener su personal calificado no ha podido comprobarse. Las asimetrías salariales y de empleo persisten aun en tiempos de crisis y se mantienen como factor desencadenante de la emigración. No es claro que los retornados accedan a oportunidades para alentar la circulación de cerebros, con lo cual es preciso redoblar los esfuerzos de vinculación.

Abstract

This article analyses pre-existing and emerging issues in relation to the migration of skilled workers in the region, examining how the current global economic crisis could be turned into an opportunity benefiting the countries of the region, those who have migrated and potential migrants. In terms of emerging issues, the article investigates the difficulties faced by the most highly skilled migrants in developed countries and how they have overcome them. It also looks at how the migration of qualified individuals and the existence of a diaspora have affected development in Latin America and the Caribbean. With regard to the pre-existing issues, the author recalls that skilled migrants have been leaving the Latin American and Caribbean region for decades. The negative consequences of that fact, including brain drain, have been measured, evaluated and interpreted, as have the opportunities for redressing the balance, such as the return of migrants and, in particular, the connections established between the region and its migrants abroad. The article poses several questions. To what extent will higher unemployment and worsening working conditions in developed countries halt or reverse the migration of skilled individuals? If the crisis prompts the return of skilled individuals, will it speed up the process of brain circulation to the advantage of countries of origin? Will the benefit that destination countries experience as a result of the qualified immigrants they receive be magnified in the recovery period following the crisis? It concludes that demand for highly skilled migrants did not decline during the crisis, thanks to a number of short-term protectionist measures; nevertheless, the level of employment among this category of workers did deteriorate (depending on the destination country), but not by the same extent as for other migrants or less skilled workers from the destination country. On the whole, the crisis has resulted in the underemployment of qualified migrants, rather than their return or unemployment. Indeed, there has been no mass return of either skilled migrants or migrants in general. It was not possible to confirm whether a drop in demand for qualified migrants abroad would enable Latin American countries to retain their skilled workers. Asymmetries in terms of wages and employment opportunities have persisted, even during the crisis, and still constitute push factors for migration. It is not clear whether those who return have access to opportunities that foster brain circulation and it is therefore essential to redouble efforts to build connections.

Résumé

L'auteur se penche sur plusieurs aspects non résolus et émergents en matière de migration qualifiée dans la région que la crise économique mondiale actuelle pourrait aider à transformer en « offres d'opportunités » en faveur des pays, y compris de leurs émigrés et de leurs migrants qualifiés potentiels. Les questions émergentes sont notamment les difficultés rencontrées par les migrants les plus qualifiés dans les pays développés et la façon dont ils les ont surmontées, ainsi que l'importance de la migration qualifiée et des diasporas pour le développement de l'Amérique latine et les Caraïbes. L'un des problèmes non résolu est l'émigration du personnel qualifié, phénomène observé depuis des décennies dans la région qui a été perçu, évalué et interprété, en raison de ses effets néfastes, d'abord comme la perte d'une population hautement qualifiée (exode des cerveaux) et ensuite, grâce au retour de cette population et en particulier à l'établissement de liens avec les immigrés, comme l'opportunité de compenser ces pertes. Plusieurs questions sont posées dans le cadre de l'étude: dans quelle mesure la hausse du chômage et l'aggravation des conditions de travail dans les pays développés peuvent-elles retarder ou freiner l'émigration qualifiée? Au cas où la crise favoriserait le retour du personnel qualifié, la « mobilité des cerveaux » s'en verrait-elle accélérée au profit des pays d'origine? Les avantages de l'immigration qualifiée obtenus par les pays de destination sont-ils plus visibles dans les phases de relèvement après la crise? L'étude permet de conclure que la crise ne s'est pas traduite par une diminution de la demande en main-d'œuvre compétente (certaines mesures protectionnistes semblent avoir été éphémères); les niveaux d'emploi de ces travailleurs ont enregistré une certaine détérioration (selon le pays de destination), mais leur situation par rapport à l'ensemble des migrants ou des autochtones moins qualifiés reste moins vulnérable; les migrants qualifiés ont recours à des stratégies de sous-emploi plutôt que d'opter pour le retour ou le chômage et on n'observe pas de retour massif de migrants qualifiés ni de migrants en général. Il n'a donc pas été possible de vérifier l'hypothèse selon laquelle, face à une diminution éventuelle de la demande, les pays latino-américains pourraient retenir leur personnel qualifié. Les asymétries sur le plan des salaires et de l'emploi persistent, même en temps de crise et restent un facteur de déclenchement de l'émigration. L'étude n'établit pas non plus si des opportunités sont offertes aux rapatriés pour encourager la mobilité des cerveaux, raison pour laquelle il convient de redoubler d'efforts pour établir des liens.

Introducción

Los impactos de la crisis económica sobre la migración calificada —denominación genérica para referirse a un segmento particular de la fuerza de trabajo— han sido relativamente pasados por alto en los países de América Latina y el Caribe. Más han opinado los analistas de países desarrollados al invocar las preocupaciones del primer mundo. A pesar de que no se cuenta con información detallada, es importante debatir sobre esta situación en la región debido a las posibles oportunidades.

A lo anterior se suma el hecho de que las consecuencias se han asociado en especial a situaciones bastante sensibles, entre otras, las opiniones alarmistas sobre los impactos en el empleo y salarios de los migrantes en su conjunto, las tendencias en los flujos de remesas y el renacimiento de un clima antiinmigratorio en países desarrollados. Se ha reconocido en forma generalizada la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes, particularmente los latinoamericanos de menor calificación.

Los pocos análisis de la migración calificada en el contexto de la crisis se remiten a la evaluación de las decisiones proteccionistas en países receptores, concentrada en sus alcances y perspectivas de éxito, más que en sus resultados. Muy poco se ha dicho, en efecto, sobre la problemática que enfrentan los propios migrantes calificados y las diásporas, o sobre los impactos y oportunidades que pudieran traer tales medidas para los países de origen de esos migrantes. Es decir, falta la visión de los países que forman y proveen estos recursos.

¿Qué problemáticas han enfrentado los migrantes de mayor calificación en los países desarrollados y, en caso de que existan, cómo las han superado? ¿Cuál ha sido y seguirá siendo la importancia de la migración calificada y las diásporas para el desarrollo de América Latina y el Caribe? Esto puede identificarse dentro de un conjunto de temas emergentes que la crisis hace propicio debatir.

Ahora bien, es oportuno señalar que desde hace décadas América Latina y el Caribe ha sido protagonista de la emigración de personal calificado y que, habitualmente, esto se ha percibido, evaluado e interpretado a través de sus consecuencias negativas, como la fuga de cerebros (*brain drain*). Con posterioridad, se ha esgrimido que esto puede enfrentarse por medio del retorno y, especialmente, del establecimiento de vínculos con los emigrados, apoyando la creación de redes científicas asociadas a las diásporas, basada en la idea de la existencia de un mercado global de talentos o recursos humanos calificados. Empalmado estas propuestas, surgió también la idea de la circulación de cerebros, que sería

toda una expresión del capitalismo global. Estos son temas de arrastre que conviene tener presente en toda discusión sobre los impactos de la recesión económica (y sus síntomas duraderos) en la migración calificada: ¿hasta qué punto una crisis, que trae mayor desempleo y peores condiciones de trabajo en los países desarrollados, puede retardar o contener la emigración calificada desde América Latina y el Caribe? ¿Si la crisis fomentase el retorno de personal calificado significa entonces que acelera la “circulación de cerebros” en beneficio de los países de origen? ¿Será que los beneficios que obtienen los países de destino a partir de la inmigración calificada se visualizan con más fuerza en épocas de recuperación de las crisis?

Existen numerosos asuntos pendientes en torno a la migración calificada y la crisis podría contribuir a elucidar algunos. Se trataría, en definitiva, de identificar una “oferta de oportunidades” para el beneficio de los países de la región, de sus emigrados y sus potenciales migrantes calificados

A. Temas emergentes: hipótesis a considerar

Una serie de hipótesis pueden erigirse en relación a la difusión de la crisis y las probabilidades de que esto disminuya la demanda de mano de obra calificada, modifique las tasas de empleo de los inmigrantes más educados o provoque el retorno selectivo de profesionales. En un contexto de menor oferta de empleos, algunas de estas presunciones deberían tener una lectura positiva para los países en desarrollo, de acuerdo con algunas premisas asociadas a elementos coyunturales y a oportunidades de retención, retorno y circulación.

En primer lugar, los análisis más generales disponibles en la actualidad revelan que la demanda de talentos provenientes desde el exterior podría haber disminuido en los países desarrollados, además de que en su momento fue alentada por algunas medidas específicas temporales de origen proteccionista. Como en toda crisis recesiva, el empleo de menor calificación es fuertemente afectado y las medidas de los gobiernos para proteger sus mercados laborales nacionales suelen concentrarse en la mano de obra de menor calificación. En principio, esto se explicaría por el impacto de las medidas sobre la opinión pública, la que valoraría ante todo decisiones que apunten a proteger a la mayoría de los trabajadores locales (Duncan y Waldorf, 2010). Las iniciativas para restringir la inmigración calificada, en cambio, han estado más orientadas a la coyuntura reinante en un buen número de países, basándose, por ejemplo, en criterios de admisión más exigentes (Cerna, 2009). De este modo —y esta sería la

lectura optimista—, a mediano plazo, muchos migrantes profesionales ya establecidos no verían amenazada su fuente de trabajo, permanecerían en el extranjero y, en consecuencia, no tendrían motivos para desvincularse de sus países de destino.

Ahora bien, si efectivamente se verifica la disminución de la emigración entre los calificados, aunque sea de modo coyuntural, esto significaría una oportunidad para los países en desarrollo. Los migrantes potenciales permanecerían, al menos temporalmente, en sus países de origen, lo que daría ocasión para expandir las masas críticas de conocimiento y ofrecerles empleo, salarios atractivos y ambientes laborales estimulantes. Estos son justamente los factores que, con arreglo a las generaciones y las ocupaciones, han estado detrás de la emigración de personal calificado desde sus inicios. En todo caso, no puede dejar de mencionarse que las bajas de los salarios en los principales países de destino han sido relativamente pequeñas en comparación con las diferencias salariales estructurales que siguen existiendo entre los países según su nivel de desarrollo (Chappell y Glennie, 2010). Además, la crisis afectó a la mayor parte de los países del mundo, desarrollados y en desarrollo, lo que sugiere que las expectativas de empleo para la mano de obra más calificada también pueden verse restringidas en los países de origen.

Asimismo, se presume que los migrantes calificados tienen menos probabilidades de sufrir grandes caídas en su tasa de empleo, especialmente cuando sus empleadores han invertido cantidades no despreciables de recursos para trasladarlos al país o para ampliar sus calificaciones (Papademetriou y otros, 2010).

También se destaca que el desempleo y la falta de ingresos que podrían afectar a los migrantes calificados en algunas ocupaciones se enfrentarían con una estrategia de búsqueda de labores con menor exigencia en calificaciones, aprovechando las ventajas de su formación y la disponibilidad de recursos de capital humano y social. En lo inmediato, se trataría de descender en la escala de habilidades, prefiriendo la subutilización o el subempleo al desempleo. Si bien esta alternativa permite capear el desempleo, esto debería traer un desplazamiento de empleos para los trabajadores menos calificados, cuyo impacto dependerá de la cantidad de involucrados (Orrenius y Zavodny, 2009; Papademetriou y Terrazas, 2009).

Paralelamente, podría haberse registrado un retorno entre algunos migrantes cuya opción ya estaba prevista, o bien de quienes se encontraban en una migración temporal (incluidos estudiantes de postgrado que proyectaban estadías de más largo plazo y que pudieran ver truncadas

sus expectativas). No se ha producido un retorno masivo en esos casos, ni tampoco en el de los migrantes en su conjunto, aunque lo destacable es que este proceso acontece por igual en ausencia de políticas deliberadas en su favor, por lo que no es impensable el regreso de algunos migrantes calificados. De verificarse, el retorno brindaría nuevas e inesperadas oportunidades para aprovechar las experiencias y formaciones de los emigrados, en un marco de absorción de empleo, en particular para los jóvenes recién entrenados.

Al mismo tiempo, la circulación de mano de obra calificada podría verse alentada al existir un retorno temporal de algunos talentos, pero estos probablemente volverían a migrar una vez superadas las rigideces recesivas, con lo que reforzarían los vínculos preexistentes con las diásporas³.

Las evidencias disponibles son escasas y no puede probarse completamente ninguna hipótesis, si bien se han conocido las medidas adoptadas por varios países para restringir la inmigración calificada⁴. Más difícil es evaluar la situación de la migración calificada entre países en desarrollo. Tampoco es posible pasar por alto que se requiere de un horizonte temporal más largo para examinar estas ideas. Sin embargo, existe cierta información que, aunque no aclara estas hipótesis directamente, permite avanzar en la discusión e identificar oportunidades

I. La evidencia disponible

Los datos recogidos por estudiosos en algunos de los principales países de destino de los migrantes latinoamericanos dan una idea de lo que estaría ocurriendo con las tendencias en la admisión, retorno y empleo de estos trabajadores según su nivel de calificación.

Una primera conclusión extraíble de la evidencia sobre los flujos y el retorno es que, aunque ha ocurrido mucho más lentamente, la inmigración de personal calificado en los países desarrollados no ha desaparecido ni ha disminuido. Al menos esto es lo que se percibe con respecto a la migración temporal.

³ Otra variante de la migración calificada la componen adultos y jóvenes voluntarios que, atraídos por programas específicos, desarrollan misiones intensas, aunque relativamente cortas, sobre transferencia de conocimientos y creación de capacidades en países en desarrollo. Aún está en debate la idea de que el voluntariado de las diásporas puede contrarrestar los efectos de la migración calificada, a través de la circulación o ganancia de conocimientos. Con todo, no está claro si la permanencia o el desarrollo de los programas de voluntariado se vieron afectados por los recortes presupuestarios que desató la crisis financiera global en varias unidades gubernamentales (Terrazas, 2010).

⁴ Como ejemplo, Cerna (2009) ha elaborado un estudio comparativo acerca de las implicaciones de la crisis sobre la inmigración calificada y las respuestas de política en 12 países de diferentes regiones (Asia y el Pacífico, Europa, Oriente Medio y América del Norte).

En el primer conjunto de gráficos se muestra que entre 2007 y 2010 el flujo a los Estados Unidos registró caídas en algunas de las principales categorías de visas de trabajo temporal para personal calificado. Por ejemplo, se registró una baja del 24% entre los trabajadores altamente calificado (visa tipo H-1B), del 28% entre los visitantes por motivos de negocios (visa tipo B-1) y del 12% en los traslados intraempresariales (visa tipo L-1). Con todo, en 2009 y 2010 las solicitudes de visas tipo H-1B para trabajadores temporales calificados por parte de empleadores norteamericanos alcanzaron la cuota anual disponible, aunque de manera algo más lenta que en años precedentes (Papademetriou y otros, 2010, pág. 13). Además, la última información disponible en torno a 2010 sugiere que las emisiones de visas en estas categorías comienzan a recuperarse hasta los niveles anteriores.

Por otra parte, el conjunto de gráficos muestra que la admisión de inmigrantes con “aptitud extraordinaria” (visa tipo O-1) llegó a niveles nunca antes registrados, con la misma tendencia al alza que venía dándose desde antes de la recesión, aunque el crecimiento en el último tiempo haya sido ligeramente más lento que el de años pasados (Papademetriou y otros, 2010, pág. 27). Así, entre 2007 y 2010 el alza fue del 12% respecto del conjunto de extranjeros con aptitudes extraordinarias, e incluso del 30% para los provenientes de América Latina y el Caribe.

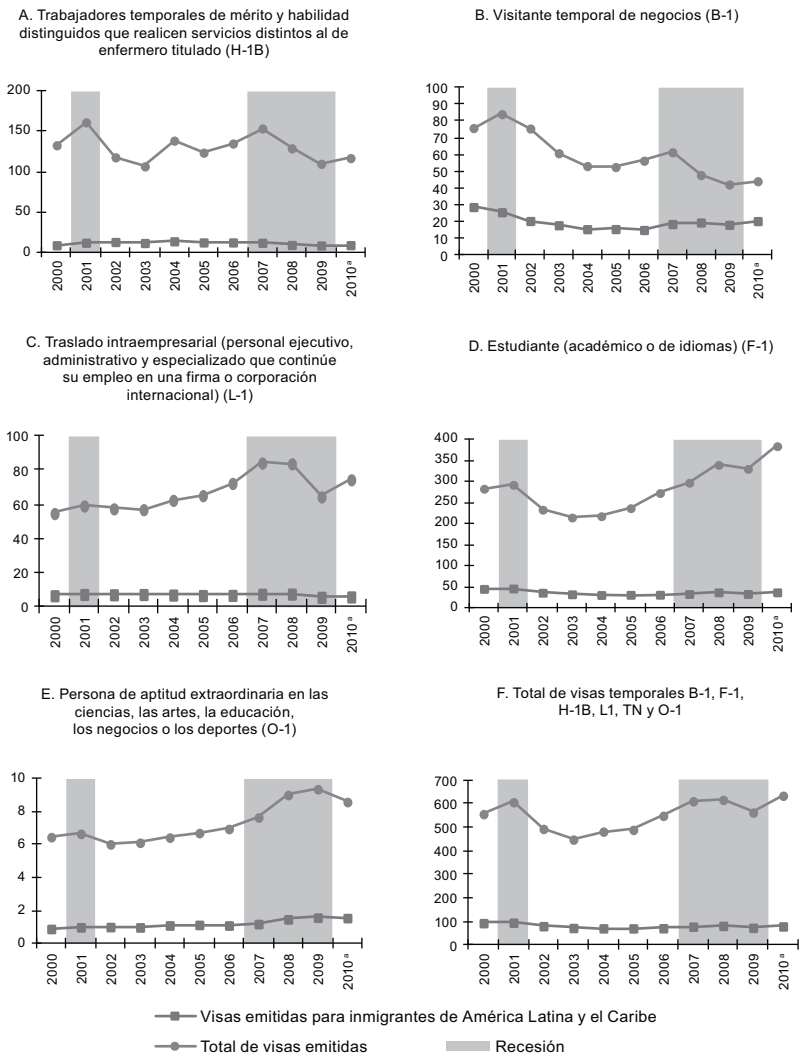
El principal ingreso de personal calificado —o de potenciales migrantes calificados— corresponde al grupo de estudiantes comprendidos en la categoría de visa F-1, cuyas admisiones también habrían alcanzado máximos históricos, incluso tras haber estallado la crisis, con un alza del 29% entre 2007 y 2010 (véase el gráfico 1D).

En promedio, el flujo de migración calificada no habría disminuido por efecto de la crisis, sino que incluso habría registrado una leve alza en el período 2007-2010. En el caso de los migrantes calificados provenientes de América Latina y el Caribe, la tendencia en la emisión de visas se mantuvo prácticamente inalterada durante los años extremos del período de crisis, con un aumento del 1% (véase el gráfico 1F)

En el caso de España, se ha demostrado que “durante 2009 muchas ocupaciones calificadas estaban entre los únicos trabajos abiertos a nuevos procesos de reclutamiento en el extranjero” (Papademetriou y otros, 2010, pág. 106). Además, la Unidad de Grandes Empresas (UGE) —creada por el Ministerio del Trabajo e Inmigración para administrar y facilitar la inmigración calificada— aprobó más de 2.000 autorizaciones de trabajo —una cantidad similar a la de años anteriores— lo que sugiere que en España la demanda de este tipo de trabajadores continúa, a pesar de la recesión (Papademetriou y otros, 2010).

Gráfico I ESTADOS UNIDOS: VISAS EMITIDAS EN LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DE MIGRANTES CALIFICADOS, AÑOS FISCALES 2000 A 2010

(En miles)



Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos, Travel.State.Gov, "Visa Statistics" [en línea] www.travel.state.gov/visa/statistics.

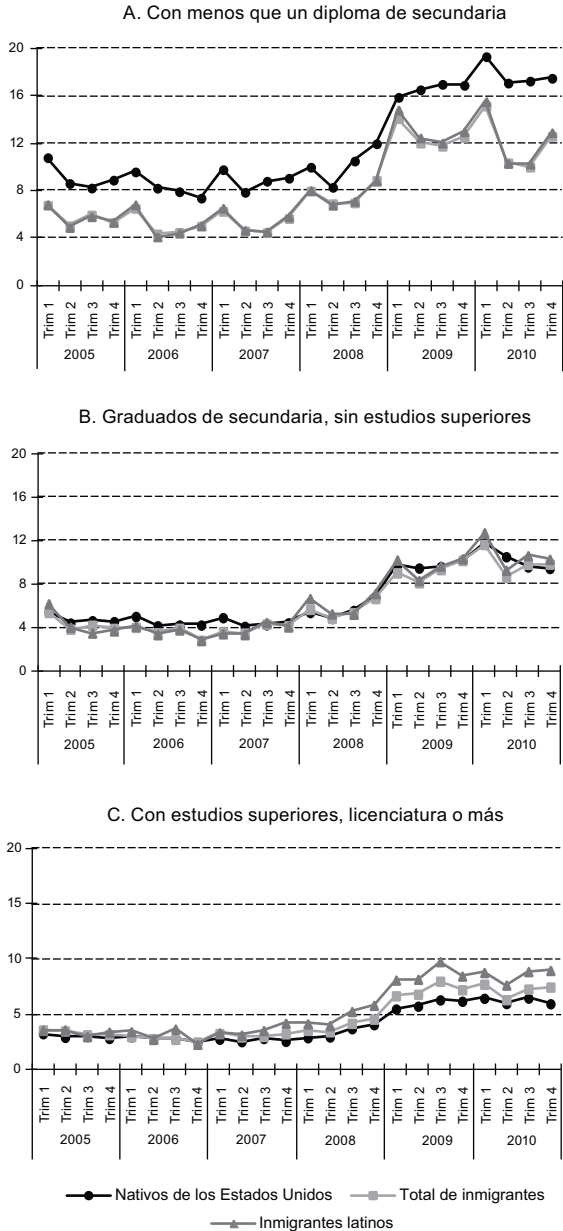
^a Los datos correspondientes al año fiscal 2010 deben considerarse preliminares y sujetos a ligeras modificaciones.

En relación al desempleo, es ampliamente conocido que los trabajadores que presentan niveles de formación más altos, sean migrantes o nativos, siempre gozarán de mejor empleabilidad que los que tienen un menor nivel de educación. Además, en un análisis estadístico realizado por el Instituto de Políticas de Migración (Orrenius y Zavodny, 2009) se encontró que, en el caso de los Estados Unidos, la brecha de empleo suele ser casi inexistente entre nativos e inmigrantes con alto grado de calificación, mientras que dentro del grupo de los menos educados, se ven más desfavorecidos que los nativos. Algo de esto se aprecia con los indicadores de desempleo, que de todos modos pueden estar afectados por un aumento diferencial de la participación laboral (véase el gráfico 2). Una realidad algo diferente se da en el caso de España, donde el desempleo de los nativos suele ser casi igual al de los inmigrantes latinoamericanos dentro del grupo de los menos calificados, pero notablemente menor entre los que han alcanzado un mayor nivel de formación (véase el gráfico 3). Hay que considerar que los contrastes entre estos dos países de destino de la migración regional son un tanto forzados, pues es muy probable que los mercados laborales tengan características diferentes, que llevan a que el mayor desempleo entre los inmigrantes sea más frecuente en España.

Ahora bien, las tendencias cíclicas en el empleo y el desempleo producto de la crisis reciente sí que han sido más pronunciadas en el caso de los inmigrantes. Según Orrenius y Zavodny, al menos en lo que respecta a los Estados Unidos, “la tasa de empleo de inmigrantes es mucho más sensible al ciclo económico que la tasa de empleo de nativos, y las mayores diferencias se producen entre los trabajadores menos educados. A corto plazo, las fluctuaciones cíclicas de las tasas de empleo y desempleo de los trabajadores menos calificados están también mucho más fuertemente correlacionadas con el crecimiento del PIB en el caso de los inmigrantes que en el de los nativos” (Orrenius y Zavodny, 2009, pág. 21).

En particular, en el gráfico 2 se muestra que las alzas en el desempleo de migrantes más calificados han sido bastante menos pronunciadas que las de los menos calificados. Del mismo modo, en el gráfico 3 se muestra que en España los trabajadores altamente calificados también han sufrido un aumento del desempleo, pero bastante más moderado que el experimentado por los de mediana y baja calificación

Gráfico 2
ESTADOS UNIDOS: TASAS DE DESEMPELO TRIMESTRALES DE MIGRANTES Y NATIVOS SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO, 2005-2010
 (En porcentajes)

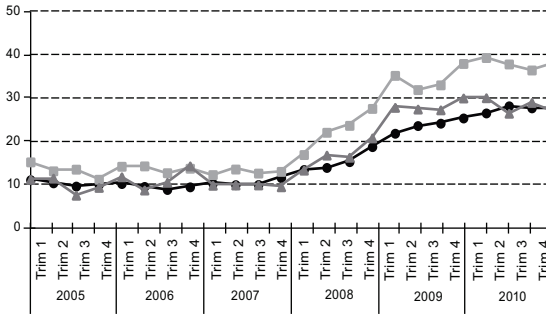


Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Oficina de Censo de los Estados Unidos, Current Population Survey (CPS).

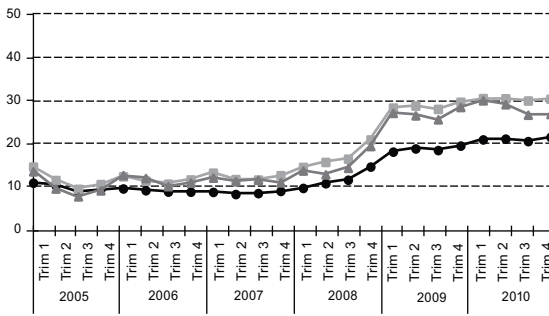
Gráfico 3
ESPAÑA: TASAS DE DESEMPLEO TRIMESTRALES SEGÚN NACIONALIDAD
ESPAÑOLA, LATINOAMERICANA O EXTRANJERA TOTAL, Y NIVEL DE
FORMACIÓN ALCANZADO, 2005-2010

(En porcentajes)

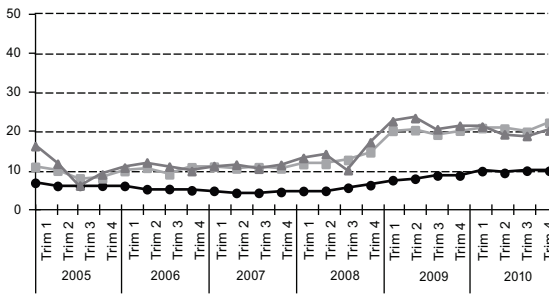
A. Educación primaria o menos



B. Educación secundaria



C. Educación superior y doctorado



● España ■ Extranjera: total
 ▲ Extranjera: América Latina

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE), Encuesta de Población Activa (EPA) 2005-2010.

Además del desempleo, el subempleo y la marginalización de la fuerza laboral son otras formas de vulnerabilidad que deben reconocerse entre los inmigrantes en general, incluidos los de mayor calificación. Ante el subempleo, los migrantes altamente calificados a menudo acceden a trabajos con requisitos de habilidades inferiores a su nivel educativo. En un estudio del Instituto de Políticas de Migración (Papademetriou y otros, 2010) se propone un método práctico para medir el subempleo: identificar la proporción de trabajadores que, aunque desean estar empleados a tiempo completo, están contratados en trabajos de jornada parcial (*involuntary part-time workers*). Desde este punto de vista, hacia mediados de 2010, la proporción de subempleados entre los inmigrantes de origen hispano residentes en los Estados Unidos ascendía a la mitad. Producto de la recesión, el subempleo aumentó en todos los grupos de trabajadores, incluidos los nativos pero, sin duda, los más afectados fueron los de origen hispano. Según Papademetriou y sus colaboradores, esta situación los pone en riesgo de permanecer atascados en este tipo de trabajos de insuficiente remuneración pero, simultáneamente, les da la posibilidad de ser los primeros en la fila a la hora de solicitar un trabajo permanente cuando las vacantes sean abiertas (Papademetriou y otros, 2010).

Los ingresos percibidos también pueden ser un indicador del subempleo. No existe mucha evidencia disponible en este ámbito. Por de pronto, se sabe que en los Estados Unidos los inmigrantes inicialmente ganan menos que los nativos con similar edad, nivel de educación y habilidad para el inglés, pero sus ingresos medios coinciden con los de los nativos después de 15 a 20 años de residencia en el país (Orrenius y Zavodny, 2009, pág. 15).

La situación puede ser complicada para las personas migrantes en su conjunto. A la larga, los trabajadores más educados, más calificados y mejor pagados tienen más probabilidades de mantenerse empleados durante una recesión, mientras que los menos educados, menos calificados (y peor pagados) suelen ser los primeros en ser despedidos (Solon, Barsky y Parker, citados en Orrenius y Zavodny, 2009).

En relación a las estrategias destinadas a hacer frente a la crisis y las posibilidades de retorno de los migrantes calificados, otro estudio de Papademetriou, Sumption y Somerville (2009) indica que:

...muchos inmigrantes económicos altamente calificados son jóvenes y solteros y por consiguiente, poco tendientes a tener fuertes lazos familiares en el país de destino. Esto los hace potencialmente más proclives a retornar a sus hogares si es que pierden su empleo. En efecto, para las personas cuyo estatus de visado las ata a un empleador específico, el retorno puede ser la única alternativa a trabajar ilegalmente. Al mismo tiempo, el hecho de que los migrantes sean altamente calificados sugiere que pueden costear los gastos involucrados en retornar al hogar, incluso si se proponen finalmente tratar de regresar al país de destino. De todos modos, en el caso de los inmigrantes cuyas condiciones de visado les permiten permanecer en el país de destino, un nivel de alta calificación les provee mayor flexibilidad para encontrar otro trabajo, ya que están en mejores condiciones de transferirse a otros sectores o de descender temporalmente a una ocupación que esté por debajo de su nivel educacional. Además, muchos trabajan en sectores como la salud o los servicios sociales que no son tradicionalmente cíclicos y que se espera continúen creciendo a un fuerte ritmo al compás del envejecimiento de las sociedades de acogida. Por ejemplo, más del 15% de los inmigrantes están empleados en la salud y los servicios sociales en Dinamarca, Noruega, Suecia y el Reino Unido (Papademetriou, Sumption y Somerville, 2009, pág. 3).

Aun si se admiten diferencias entre los países de destino como los aquí mencionados, varios autores señalan que, de cualquier modo, la crisis económica global afectó desigualmente a los migrantes internacionales y la evidencia, aunque fragmentaria y preliminar, sugiere que sus impactos han tenido un sesgo basado en las calificaciones, según el cual los migrantes más calificados, en algunos casos, han obtenido incluso ventajas relativas (Cerna, 2009; Papademetriou y Terrazas, 2009; Duncan y Waldorf, 2010). Los migrantes potenciales y los establecidos también han sido afectados por cambios en las cuotas de admisión y modificaciones en las exigencias del perfil de las calificaciones exigidas para el ingreso de los extranjeros al mercado laboral, pero sus ocupaciones, conocimientos y recursos financieros les han permitido disponer de más elementos para capear las adversidades.

Sin duda, según el país de que se trate, es muy posible que algunos migrantes calificados enfrenten una vulnerabilidad inédita en sus vidas, debido a la oferta de empleos temporales y al trabajo en horas extraordinarias

sin pago. Se trata, en todo caso, de una vulnerabilidad muy distinta a la de los trabajadores de menores calificaciones.

Habida cuenta de estas disquisiciones, cabe interrogarse, ¿por qué sigue siendo importante entonces el examen de la migración calificada? Todo hace prever que, más allá de la crisis, los inmigrantes de mayor calificación seguirán en demanda en el mundo desarrollado, al mismo tiempo que los países en desarrollo pueden disponer de espacios de acción para aprovechar oportunidades.

2. El proteccionismo tiene corta vida

El reclutamiento de especialistas provenientes de los países en desarrollo ha sido una constante desde hace varias décadas y es un hecho visible de la migración contemporánea que no parece verse afectado en gran escala por la crisis global. Un claro ejemplo se ha dado en el área de la salud, en la que se ha reclutado activamente a médicos y enfermeras en países como el Reino Unido para suplir su escasez de profesionales.

En rigor, en una época en que la norma capitalista es la economía del conocimiento y la sociedad envejece, la demanda de capital humano sigue siendo elevada en los países desarrollados, cuyos Estados (y quizás sus empresas) prefieren a los inmigrantes calificados aun en momentos de contracción económica. De ahí que las medidas de carácter proteccionista que pueden afectar la demanda de trabajadores migrantes de alta calificación no solo no tendrían asidero, sino que podrían hasta demorar la recuperación económica (Duncan y Waldorf, 2010).

Esto lleva a la problemática propia con que los países desarrollados buscan enfrentar los coletazos de la crisis. Según Cerna (2009), basado en un informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), las modificaciones de los criterios de admisión de inmigrantes calificados son de diverso cuño. Comprenden cambios en las cuotas, en las exigencias de experiencia y calificaciones, en imposiciones más rígidas para la renovación de permisos laborales y en el estímulo al retorno.

Es evidente que el objetivo más común de las políticas migratorias de los países tradicionalmente receptores ha apuntado a elevar el perfil de calificación de los futuros inmigrantes y reducir, al mismo tiempo, las cantidades (por ejemplo, el sistema de puntuaciones que se aplica en el Reino Unido). A ello podría sumarse el concepto de la temporalidad, que se asociaría a menores costos laborales.

Algunas de esas iniciativas han sido muy criticadas. Clemens (2009), resumiendo una opinión bastante generalizada, indica lo siguiente: "... restringir el acceso a los Estados Unidos a los trabajadores inteligentes,

altamente educados y emprendedores es perjudicial para el desarrollo. Las conexiones internacionales entre los trabajadores calificados han sido un elemento importante en los motores de crecimiento y reducción de la pobreza que han surgido en varios países en desarrollo durante las últimas décadas”.

Se trata de reconocer que la inmigración no solo puede suplir una mano de obra inexistente en las sociedades envejecidas, sino que puede contribuir a largo plazo al crecimiento económico de los países de destino. Existe una serie de estudios que lo demuestran. Así pues, las decisiones proteccionistas no tendrían largo alcance.

3. La permanencia de los ingresos como factor motivador

Muchos estudiantes universitarios, particularmente de postgrado, son candidatos directos a convertirse en cerebros o talentos entre la fuerza de trabajo, dadas las destrezas que les ha otorgado la educación. Algunos estudios muestran que ciertos grupos pueden ser muy propensos a transformarse en emigrados. En ellos, la oferta salarial suele ser el factor que ha sobresalido en las decisiones migratorias (Chappell y Glennie, 2010).

Los salarios son siempre factores importantes para tales decisiones, pero no son los únicos ni exclusivamente los más valorados. Con todo, las ocupaciones vinculadas a la ingeniería y la computación muestran entre sus candidatos una fuerte valoración por la aspiración a altos salarios, justamente por tratarse de profesiones en que los conocimientos son más fáciles de transferir. Es decir, la posibilidad de transformarse en migrantes es mayor entre dichas especialidades, pues se asocia más directamente con la movilidad en busca de posiciones de alto salario en un país distinto (Chappell y Glennie, 2010).

Chappell y Glennie (2010) muestran que, en contraste, en los campos en que las habilidades tienen menos posibilidad de ser transferidas a otro país (típicamente, en las profesiones asociadas al ejercicio de la abogacía y las leyes, que tienen muchas especificidades nacionales y culturales), los profesionales migrantes no llegan a ganar salarios más elevados que sus colegas en el país de origen. Su experiencia y sus credenciales no suelen ser reconocidas, por lo que en su caso los diferenciales salariales son un factor menos importante o poco relevante en la decisión migratoria.

Si se ha demostrado que los ingresos percibidos son un factor decisivo para motivar la emigración de jóvenes universitarios o profesionales, cabría esperar que la eventual merma de ingresos provocada por la crisis financiera en algunas áreas del mercado laboral extranjero desincentivara

la salida de este personal calificado. Sin embargo, es difícil que las ocupaciones más sensibles a la transferencia hacia un país desarrollado sean mejor remuneradas en los países de origen, por lo que no es de esperar que la emigración se vea afectada.

¿A dónde llevan estos análisis? Desde una perspectiva a largo plazo, se hace doblemente necesario evaluar la opción de vinculación y el fortalecimiento de las colaboraciones a distancia con los emigrantes relacionados con actividades en que el salario ha sido totalmente decisivo para migrar y, probablemente, contribuya en gran medida para no retornar.

4. Los estudiantes y los estudios en el extranjero, un tema que conviene tener en cuenta

Los estudios de postgrado en el extranjero se han reconocido desde hace mucho tiempo como un detonante de la decisión emigratoria. En la región se valora de forma importante la realización de estudios de este nivel en países desarrollados y esto se debe a varios motivos. Uno de ellos es la obtención de un título en instituciones de estos países, lo que supondría una ventaja competitiva en el mercado laboral del país de origen; otros son la multiculturalidad, la centralidad del saber, el prestigio y las potencialidades de una mayor equidad de género para las mujeres. Muchos de estos factores se entrecruzan con las expectativas de permanecer en el mercado laboral del país de destino una vez finalizada la capacitación y obtener así mejores ingresos.

Conjuntamente, hay una acción deliberada de los países desarrollados con miras a captar estudiantes extranjeros a través de sus políticas de becas, pues el proceso de formación puede constituir un buen mecanismo de selección de los estudiantes más destacados. Se agregan una ampliación de la oferta educativa extranjera y una reducción de sus costos en algunos países, en lo que destacan singularmente muchas universidades en España (Martínez, 2005; Pellegrino, 2002).

Aunque el examen de esta situación debe ser pormenorizado, no está claro que la región esté experimentando oleadas de egresados que emigran para realizar estudios de postgrado en el extranjero. En cambio, es menos dudosa la existencia de un proceso de internacionalización de los sistemas de educación superior. La privatización de la educación superior regional está ligada a este fenómeno. Hay un creciente interés por flexibilizar las normas pertinentes para potenciar este proceso, por ejemplo, en el contexto de las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), en que algunos países han abogado por una apertura comercial en todas las modalidades de suministro de servicios educativos, regulada, eso sí, por un estricto control académico (Rodríguez Gómez, 2005).

5. Los migrantes calificados y sus problemáticas específicas ante la crisis

Más allá de las apreciaciones de algunos analistas del primer mundo, lo más seguro es que en la problemática de los migrantes calificados se hayan combinado diversas situaciones, particularmente en el caso de los latinoamericanos. En países como los Estados Unidos se ha visto que la pérdida de empleos durante la crisis, desde 2008, no ha sido uniforme en los distintos sectores. El cuidado y la salud, la educación y los servicios sociales, se encuentran incluso entre los sectores en que se crearon empleos en ese país durante los últimos meses de 2009, debido a la especialización que exigen y que no suele quedar cubierta fácilmente por los trabajadores locales. Todo ello abona a favor de un escenario menos adverso para la mano de obra calificada (Cerna, 2009; Papademetriou y Terrazas, 2009).

Así vistas las cosas, los migrantes calificados que no han retornado ni piensan hacerlo podrían continuar formando parte de las diásporas o, mejor aun, reforzar su filiación. Por ese motivo, la crisis insta a reforzar las medidas de vinculación a través de redes y mantener las diásporas integradas más sistemáticamente a los procesos de desarrollo de los países de origen de los migrantes. El propio concepto de diásporas sugiere que, en momentos de crisis, es posible acudir a las comunidades en el exterior, al menos, como una fuente de ayudas solidarias en iniciativas muy específicas

Es muy difícil que para los migrantes calificados se hayan producido impactos negativos más notables que los que se plantean para el conjunto de la fuerza de trabajo de menos calificación —al menos en los Estados Unidos— y que han terminado por reflejarse sintéticamente en la mayor incidencia del desempleo en términos comparativos durante el período de más fuerte contracción de la actividad económica. De ahí el asidero de estas hipótesis y la tarea que tienen los países en desarrollo de no descuidar y proyectar en forma más sistemática sus iniciativas de vinculación con los migrantes calificados y de apoyo a las redes científica

6. Tránsitos desde la temporalidad a la permanencia

La temporalidad de la migración —medida en función del visado concedido y la inclusión en programas específicos— debe considerarse en el debate actual sobre la migración calificada. La idea básica de la circulación de cerebros gira en torno a la migración temporal, que involucra retornos ocasionales y propicia la aplicación de habilidades e inversiones en el país de origen.

¿Se ha dado esta situación de temporalidad en la migración calificada en América Latina? Las evidencias son casi inexistentes, al

menos si se compara la región con otras regiones en desarrollo. Tampoco se identifican estudios que aborden estos hechos y la migración temporal parece haberse considerado más bien entre categorías específicas de trabajadores, no necesariamente de elevada calificación, que es para quienes se han implementado la mayoría de los programas en la región. Estos han involucrado, en general, pequeñas cuotas de trabajadores y un número selecto de países de reclutamiento (CEPAL/SEGIB/OIM, 2010).

En estos programas, se destaca con frecuencia el carácter regular de la movilidad y su premisa definitoria, esto es, el retorno al país de origen una vez concluido el contrato laboral. Además, existe consenso en que los gobiernos, tanto de los países de origen como de destino, deberían hacer un esfuerzo mayor con miras a dedicar más recursos al fortalecimiento de la capacidad institucional en la gestión de la migración laboral, tanto a nivel de políticas como de programas y proyectos (Cordero, 2010).

En lo que respecta a los países en desarrollo, se suele mencionar —a veces en forma acrítica— que algunas de las ventajas de los programas de trabajadores migratorios temporales son la flexibilidad y una mayor aceptación pública en los países receptores, además de incrementar las transferencias de remesas y nuevas habilidades hacia los países de origen. Esto ameritaría más evaluaciones, en especial, cuando se supone que, producto de la experiencia temporal, se fortalecería el establecimiento de redes comerciales y empresariales entre países de origen y destino (Cordero, 2010), ya que no está claro que estos programas involucren a recursos de alta calificación.

Por su parte, es muy probable que los países desarrollados desplieguen y aprovechen efectivamente estos circuitos de la temporalidad de los recursos humanos calificados en asociación con empresas multinacionales. De este modo se promueven las evidencias en favor de la circulación y se muestran sus bondades desde el punto de vista de la competitividad y la economía global.

De esto se infiere que habría dos alternativas para identificar las relaciones de la migración calificada con las diásporas: la migración permanente y la migración temporal. Mientras que la primera ha dado origen necesariamente a la operatoria de vinculación con las comunidades de científicos y personal de alta calificación en el exterior, la segunda sería parte de un proceso distinto. ¿En qué condiciones se relacionan ambas modalidades?

Es sabido, de manera general, que muchos migrantes temporales calificados suelen permanecer en los países desarrollados una vez expirada su visa de trabajo. Aunque la información es escasa, hay estudios que

indican que hasta un 80% de ellos suelen transitar a un estatus permanente en los Estados Unidos (Jachimowicz y Meyers, 2002). A través de mecanismos diversos como la obtención de un empleo seguro y estable, hasta el matrimonio con un nativo o, en último caso, el paso hacia la irregularidad, el ajuste deviene en un nuevo estatus y ello parece ser más común entre trabajadores temporales provenientes de Asia (China, Filipinas y la India). Se menciona además que los trabajadores sujetos a visas temporales como las H-1B son candidatos habituales a las visas con estatus legal permanente basado en el empleo, pues estas visas no están condicionadas a la intención de retornar a los países de origen, por lo que las leyes implícitamente terminan favoreciendo la transición hacia una residencia permanente (Papademetriou y otros, 2010, pág. 27). De ahí que muchos analistas señalen que, si el sistema de visas basado en empleo permanente fuese capaz de responder oportunamente a las necesidades del mercado, los empleadores no utilizarían las visas temporales para captar a trabajadores migrantes de alta calificación. De este modo se reduciría la presión sobre dicho sistema (Jachimowicz y Meyers, 2002).

La migración temporal calificada tiene menos rango de acción para los países de origen. En su existencia formal, el sistema de visados de los países de destino es tan decisivo como los arreglos institucionales en forma de programas específicos. Así, la movilidad temporal de cerebros es poco probable o no sería en estos tiempos una opción al alcance de los países de América Latina, aun cuando las mermas económicas en los países desarrollados puedan incentivar el retorno de algunos migrantes calificados

B. Temas recurrentes en la región que trascienden la crisis y tienen la mayor importancia

La crisis ha traído oportunidades que habrá que evaluar, desde el punto de vista de los intereses de los países latinoamericanos. Pero hay asuntos que no se han superado. El tema recurrente en la región ha sido el de las pérdidas asociadas a la fuga de cerebros (*brain drain*). Por las consideraciones expuestas, son más lejanos los debates en torno a las posibilidades de la movilidad de cerebros (*brain circulation*). La idea de las pérdidas tiene mucho fundamento en la medida en que no se discutan acciones y se omita la existencia y el papel potencial de las diásporas calificadas. Esto es de particular preocupación en el caso de las economías pequeñas, que suelen verse más afectadas por la emigración de sus enfermeras y profesoras, como sucede en muchas naciones caribeñas. No obstante, los países

más poblados de la región sufren pérdidas igualmente significativas de profesionales en áreas muy especializadas, cuya salida constante amenaza las masas críticas de conocimiento.

La emigración de capital humano de alta calificación seguirá siendo un problema a escala agregada mientras persista la falta de respuestas ante la alta selectividad de los emigrantes y ante su escasa circulación y vinculación con sus países de origen⁵.

En América Latina no se parte de cero en estas discusiones. Existe una interesante tradición en los estudios de la migración calificada en la región, en los que progresivamente se han ido incorporando las nuevas expresiones de la movilidad como parte de los impactos de la actual globalización (Martínez, 2005, Pellegrino, 2006). Se han debatido las propuestas conceptuales del mundo anglosajón, desde la “circulación de cerebros” (*brain circulation*) y el “rescate de cerebros” (*brain gain*) hasta el “intercambio de cerebros” (*brain exchange*), en las que se trataría de convertir a los migrantes en agentes individuales o grupales de transferencia de conocimiento y de tecnología (Martínez, 2005; Pellegrino, 2001).

La identificación de los factores de la emigración calificada es y sigue siendo un desafío prioritario (Solimano, 2005). Es útil reiterar que, más allá de las diferencias salariales, hay aspectos relacionados con las condiciones de trabajo, la infraestructura disponible, la facilidad de acceso al instrumental y los materiales necesarios para las labores —componentes importantes de las posibilidades de realización profesional—, que son también elementos de peso para constituir escenarios de atracción en los países desarrollados. La brecha en el desarrollo científico y tecnológico con los países desarrollados no contribuye a superar estos desequilibrios. Tampoco la demanda del mercado estimula la generación y consolidación de capacidades de innovación en la región. Por ejemplo, el predominio y la hegemonía económica de las corporaciones multinacionales que colocan subsidiarias en algunos de sus países no han demostrado tener efectos de desarrollo científico en ellos (Pellegrino y Martínez, 2001; Pellegrino, 2002).

La discusión en torno a los factores determinantes se extiende a los conceptos de “sobreoferta” de profesionales y académicos en relación con la capacidad de absorción de estos recursos por parte de los mercados nacionales,

⁵ Además, como en muchos ámbitos de estudio de la migración, el análisis de los movimientos calificados se enfrenta a problemas de disponibilidad y construcción de la información (uno de ellos es la heterogeneidad de las definiciones de migración calificada: algunas cubren un espectro amplio, que va desde las capacitaciones técnicas hasta las especializaciones más sofisticadas; Pellegrino, 2002). Por ejemplo, Solimano (2005) engloba bajo este concepto a los talentos técnicos, científicos y académicos, los profesionales del sector de la salud, empresarios y directores, los profesionales en organizaciones internacionales y los talentos culturales.

lo que generaría un descenso de los salarios y un consecuente aumento de las propensiones migratorias. A esta problemática también se alude como “subutilización”, aunque en este caso subyace una evaluación diferente: quienes hablan de sobreoferta ponen el acento en la excesiva generación de profesionales y técnicos por parte del sistema educativo superior; entretanto, quienes se refieren a la subutilización enfatizan la incapacidad del mercado de absorber recursos calificados. Desde una u otra mirada, se coincide en relacionar la temática con la expansión de los sistemas educativos que experimentó la región a mediados del siglo XX, de la mano de un importante crecimiento económico y de la transformación de sus estructuras productivas. Aunque no todos los países lo vivieron al mismo tiempo, se verificó un crecimiento de las matrículas, una expansión de la oferta de las universidades y un impulso a los centros de investigación (Martínez, 2008)⁶.

Quienes concentran su análisis en la idea de la subutilización aluden a la escasa absorción laboral, que no se condice con la rápida generación de oferta de personas con formación profesional y técnica (superior a la de fuerza de trabajo no calificada, sobre todo en las mujeres) y que generaría inactividad involuntaria, desempleo abierto, subempleo, desalarización y terciarización (Martínez, 2005 y 2008; CEPAL, 2002 y 2006).

La amplia gama de factores no incide de la misma manera en los diferentes tipos de migrantes calificados, y los matices probablemente sean igualmente vastos. Hay que considerar los diferentes tipos de calificaciones, las desigualdades de género, las barreras culturales, e incluso las diferencias de clase, aunque en este tipo de migración hay más homogeneidad desde esta perspectiva (Martínez, 2008).

Con todo, es importante advertir que la crisis no trae dilemas solo para los países receptores de la migración calificada que, por lo demás, es muy probable que se disipen en poco tiempo. El contraste que se genera para los países de origen —y, en ocasiones, para los propios migrantes calificados— es una oportunidad para fortalecer la idea de la consolidación de las diásporas, como forma probada de encarar la existencia de pérdidas de cerebros. Dicho de otro modo, estas pérdidas seguirán siendo tales en la medida en que no se aproveche como oportunidad la existencia de un creciente capital humano y social establecido en el exterior, que no dejará de formarse pese a la gravedad de la crisis en los países desarrollados.

⁶ De los cerca de 270.000 alumnos que existían en la educación superior regional a mediados de la década de 1950, se pasó a casi 10 millones a fines del siglo XX. Por los años cincuenta había en toda América Latina y el Caribe unos 600.000 profesionales, y ahora se gradúan anualmente cerca de 700.000, aun a pesar de los altos niveles de deserción y la baja eficiencia. De todos modos, el promedio de cobertura regional dista aún bastante del de los Estados Unidos (80%) o Europa (65%), pues ronda el 23%. Hay que señalar, sin embargo, que existe heterogeneidad entre los países de la región (Martínez, 2008; Rama, 2002).

I. Las áreas de intervención: incentivos para la formación, el retorno y la vinculación

Aun teniendo en cuenta los efectos de la crisis recesiva global, el pronóstico de la migración calificada para las próximas décadas es de intensificación de la captación de personal calificado inmigrante por parte de los países desarrollados, tal como lo ha venido sugiriendo con insistencia Adela Pellegrino. A modo de inventario, algunas experiencias exitosas acerca del retorno y la vinculación con las diásporas en países del sudeste asiático sugieren que es posible incidir en este fenómeno a través de medidas apropiadas (Pellegrino, 2001). Para la región es importante tener en cuenta que ninguna iniciativa debe vulnerar el respeto a los derechos de las personas, sobre todo su derecho a la libertad de circulación (Martínez, 2008).

En general, una revisión de la literatura sobre el tema de las intervenciones pone de relieve sugerencias respecto de políticas de retorno y de vinculación. Estos tipos de medidas no deben convertirse en el eje de una discusión dicotómica; por el contrario, deben pensarse como aspectos complementarios (Pellegrino y Martínez, 2001; CEPAL, 2006).

Por ejemplo, al diseñar políticas de vinculación, además de la diversidad de escenarios nacionales, es preciso visualizar las diferentes características de los grupos de migrantes calificados. Los profesionales que trabajan en compañías transnacionales deben fidelidad a sus empresas, con lo que difícilmente podrían involucrarse en actividades que impliquen transferencia de habilidades o de tecnología. En cambio, los científicos y académicos —indispensables para la formación de nuevas generaciones y para generar procesos de innovación social—, requieren de redes que podrán darse solo si, además del dinamismo exterior, existen también impulsos locales fuertes.

Los programas que buscan vincular el éxodo científico con las comunidades locales han demostrado viabilidad y efectividad, pero requieren del impulso y sostén de políticas nacionales para perdurar y no perecer con el agotamiento de la dosis de voluntarismo que suele vincularse a este tipo de emprendimientos (Pellegrino, 2001).

Entre las orientaciones y acciones que aparecen sugeridas en la literatura, algunas apuntan a estrechar el nexo entre el mundo empresarial-industrial y el universitario. Thorn y Holm-Nielsen, por ejemplo, apuestan por una vinculación temprana: “Los vínculos entre el sector académico y la industria son esenciales para desarrollar una cultura emprendedora en la educación y las investigaciones y para fortalecer la capacidad del sector privado de absorber conocimientos” (2005, pág. 12). Otras propuestas

se centran en la relación entre la migración calificada y las iniciativas empresariales. Basado en los ejemplos exitosos de la India y la provincia china de Taiwán, que fueron capaces de construir una industria nacional de alta tecnología, internacionalmente competitiva, gracias a la contribución decisiva de empresarios expatriados y expertos en tecnología que habían sido exitosos en los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países desarrollados, Solimano afirma que “a fin de atraer el capital humano y financiero a sus países de origen, podría ser necesario un trato impositivo favorable en la fase inicial” (2005, pág. 30).

La acción concertada de los países de la región, consistente en realizar firmes demandas con miras a facilitar la movilidad de profesionales y técnicos que deseen proyectarse en el extranjero como una forma de atenuar las asimetrías globales, y el ofrecimiento de una genuina ciudadanía a los emigrados a fin de garantizarles el ejercicio de derechos en sus países de origen son, además de medidas necesarias, responsabilidades ineludibles (CEPAL, 2006; Martínez, 2005).

La facilitación de la movilidad no es simplemente opcional frente a las desigualdades del capitalismo global. Como una muestra de consensos entre especialistas y gobiernos, en su informe, la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales (CMMI) también avanza en sugerencias de política: gobiernos y empleadores deben suprimir los obstáculos a la movilidad del personal altamente calificado que entorpezcan innecesariamente la competitividad económica; los gobiernos con abundancia y con escasez de mano de obra deben promover la formación del capital humano y la creación de un grupo mundial de profesionales; la ayuda y las inversiones extranjeras deben dirigirse con mayor cuidado hacia los países y sectores más afectados por la pérdida de profesionales, por ejemplo, mediante programas de coinversión; los países de destino deben promover las migraciones circulares, ofreciendo mecanismos y conductos que permitan a los migrantes desplazarse con relativa facilidad entre el país de origen y el de destino (CMMI, 2005).

En su momento, la Comisión puso en duda las “soluciones” que actúan por la vía de obstaculizar la salida de profesionales calificados de su país: “Un enfoque de este tipo violaría los principios de derechos humanos, se opondría a la tendencia a la mundialización del mercado de trabajo y, en todo caso, sería muy difícil de aplicar” (CMMI, 2005, pág. 26). Sin embargo, estos conceptos eran precedentes y se encuentran desde las primeras discusiones sobre la fuga de cerebros (*brain drain*). La Comisión además considera inviables las propuestas de que los Estados que contratan a profesionales extranjeros indemnicen directamente a los países

de procedencia, y valora los esfuerzos realizados con miras a movilizar las redes de conocimientos de las diásporas. En esa línea, realiza sugerencias enmarcadas en la propuesta de la movilidad de cerebros, al sostener que la elaboración de programas que faciliten la transferencia de las competencias y conocimientos de la diáspora a sus países de origen puede suponer un regreso físico, a través de un traslado temporal o de visita sabática, o bien puede tratarse de un “regreso virtual”, mediante videoconferencias o el uso de Internet. Finalmente, hace una advertencia interesante: los países que contratan personal calificado extranjero deben optimizar la planificación de la mano de obra e invertir más recursos en la formación de sus propios ciudadanos para salvar las brechas actuales y proyectadas en el mercado de trabajo nacional, pues “es imprudente que los Estados más prósperos del mundo ignoren estas responsabilidades y busquen luego una solución rápida a sus problemas de recursos humanos mediante la contratación de profesionales de países en desarrollo” (CMMI, 2005, pág. 27).

C. Conclusiones

La evidencia expuesta da pie para responder en forma resumida algunas de las hipótesis planteadas al inicio:

- i) en primer lugar, la demanda de talentos no ha disminuido con la crisis. Continúa incluso más allá de algunas medidas proteccionistas que, además, parecen haber sido de corta vida;
- ii) la probabilidad de que los migrantes calificados no sufran caídas en sus tasas de empleo también ha sido una idea refutada por la evidencia. Efectivamente, se registró un deterioro de los niveles de empleo de estos trabajadores, en diverso grado según el país de destino, aunque su situación en relación al conjunto de los migrantes o de los nativos menos calificados sigue siendo de menor vulnerabilidad;
- iii) los migrantes calificados acuden al subempleo antes que al retorno o el desempleo. Simultáneamente, la evidencia disponible muestra que no se ha dado un retorno masivo de migrantes calificados ni de los migrantes en su conjunto;
- iv) no ha podido comprobarse el supuesto de que, ante una eventual disminución de la demanda, los países latinoamericanos tendrían una oportunidad para retener su personal calificado. El argumento expuesto más arriba apunta a que las asimetrías salariales y de empleo persisten aun en tiempos de crisis y se mantienen como factor desencadenante de la emigración, y

- v) del mismo modo, no tiene mucho fundamento la hipótesis de que, si una parte de los migrantes calificados de la región retornara a sus países de origen, habría oportunidades para alentar la circulación de cerebros. A este respecto, la historia ha demostrado que los países latinoamericanos no han tenido gran intervención en lo que respecta a aprovechar esta alternativa. Queda más bien reforzar los esfuerzos de vinculación.

La buena noticia de la crisis para la migración latinoamericana y caribeña se refiere a las oportunidades que se abren para retomar agendas y discusiones y evaluar mejor las repercusiones de un asunto sobre el que nunca terminaron de generarse iniciativas para encarar sus aspectos problemáticos. Desde hace décadas que la migración de personas calificadas constituye un flujo de recursos humanos contextualizado en un escenario de división internacional del trabajo y un tipo de intercambio de características asimétricas, en un complejo sistema de relaciones entre países de desigual nivel de desarrollo.

Según expositores del mundo desarrollado, es muy poco probable que a largo plazo desaparezcan los factores que siempre han motivado la inmigración a los típicos países de destino durante las últimas décadas (Papademetriou y otros, 2010). Aunque la lectura desde la perspectiva de las pérdidas entre los analistas de la región tiene apoyo empírico, la emigración de personal calificado no debe considerarse un hecho irreversible, pues existen oportunidades y beneficios que podrían aprovecharse en los países en desarrollo (Pellegrino, 2001 y 2006).

Las posibilidades de circulación e intercambio de científicos, surgidas de nuevas perspectivas que intentan alejarse del concepto de “fuga”, son todavía reducidas para los países de la región. Además, se ven dificultadas por las prácticas de flexibilización laboral aplicadas por las grandes corporaciones, la retención de los estudiantes más destacados en las universidades del mundo desarrollado y la enorme disparidad entre las condiciones de trabajo y las remuneraciones que ofrecen los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, entre otras razones. En cambio, la vinculación con las diásporas parece no solo más realista, sino más promisoría.

Ante un pronóstico de intensificación de la captación de personal calificado inmigrante por parte de los países centrales en las próximas décadas, los países en desarrollo deben adoptar políticas activas (Pellegrino, 2001). En ellas se deben considerar las particularidades de los contextos nacionales y regionales, prestando atención al hecho de que ninguna iniciativa debe vulnerar el respeto a los derechos de las personas, sobre todo su derecho

a la libertad de circulación. Además de esta diversidad de escenarios nacionales, es preciso visualizar las diferentes características de los grupos de migrantes calificados al diseñar políticas de vinculación

De otro lado, la historia, las perspectivas futuras de la economía, la crisis y la actual coyuntura del capitalismo sugieren que el proteccionismo laboral frente a la inmigración tiene corta duración. Específicamente, los inmigrantes de mayor calificación son más deseados, ofrecen conocimientos especializados, generan menos problemas de integración, contribuyen con impuestos y ayudan a la innovación y la competitividad. Esto no debería eclipsar las necesidades de protección de todos los migrantes: la crisis provee la oportunidad para reforzarla. Desde el punto de vista individual, que es importante en un segmento de la población que hace sentir su voz y sus opiniones, no debe olvidarse, en todo caso, que la crisis ha traído efectos negativos para los migrantes calificados establecidos y potenciales, como la pérdida de empleos, rebajas salariales y la postergación de sus decisiones migratorias.

Bibliografía

- Adepoju, Aderanti, Femke Van Noorloos y Annelies Zoomers (2010), “Europe’s migration agreements with migrant-sending countries in the global south: a critical review”, *International Migration*, vol. 48, N° 3, Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2006), “Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en América Latina y el Caribe: Síntesis y conclusiones” (LC/G.2303(SES.31/11)), documento presentado en el trigésimo primer período de sesiones, Santiago de Chile.
- (2002), *Panorama social de América Latina 2001-2002* (LC/G.2183-P/E), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.02.II.G.65.
- CEPAL/SEGIB/OIM (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Secretaría General Iberoamericana/Organización Internacional para las Migraciones) (2010), *Taller sobre programas para trabajadores migratorios temporales: Compilación de trabajos* (LC/R.2163), Santiago de Chile.
- Cerna, Lucie (2009), “Policies and practices of highly skilled migration in times of the economic crisis”, *International Migration Papers*, N° 99, Ginebra, Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- Chappell, Laura y Alex Glennie (2010), “Show me the money (and opportunity): why skilled people leave home — and why they sometimes return”, Institute for Public Policy Research [en línea] <http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=779>.
- Clemens, Michael (2009), “Solve the crisis by... Kicking out the world’s best and brightest?”, *Global Development: Views from the Center*, Center for Global Development [en línea] <http://blogs.cgdev.org/globaldevelopment/2009/02/solve-the-crisis-bykicking-out.php>.
- CMMI (Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales) (2005), “Las migraciones en un mundo interdependiente: Nuevas orientaciones para actuar”, informe de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales.

- Cordero, Ricardo (2010), “Programa de trabajadores temporales: Una perspectiva global”, *Taller sobre programas para trabajadores migratorios temporales: Compilación de trabajos* (LC/R.2163), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
- Duncan, Natasha y Brigitte Waldorf (2010), “High skilled immigrant recruitment and the global economic crisis: the effects of immigration policies”, *Working Paper*, N° 10-1, Departamento de Economía Agrícola, Purdue University [en línea] <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/58417/2/10-1.pdf>.
- Jachimowicz, Maia y Deborah W. Meyers (2002), “Temporary high-skilled migration”, Migration Policy Institute (MPI) [en línea] <http://www.migrationinformation.org/USFocus/display.cfm?ID=69#13>.
- Martínez Pizarro, Jorge (ed.) (2008), “América Latina y el Caribe: Migración internacional, derechos humanos y desarrollo”, *Libros de la CEPAL*, N° 97 (LC/G.2358-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.08.II.G.5.
- (2005), “Globalizados, pero restringidos. Una visión latinoamericana del mercado global de recursos humanos calificados”, *serie Población y desarrollo*, N° 56 (LC/L.2233-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.153.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2006), *Panorama laboral 2005. América Latina y el Caribe*, Lima, Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
- Orrenius, Pia M. y Madeline Zavodny (2009), *Tied to the Business Cycle: How Immigrants Fare in Good and Bad Economic Times*, Washington, D.C., Migration Policy Institute (MPI).
- Papademetriou, Demetrios G. y Aaron Terrazas (2009), “Immigrants in the United States and the current economic crisis”, Migration Policy Institute (MPI) [en línea] <http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=723>.
- Papademetriou, Demetrios G., Madeleine Sumption y Aaron Terrazas (2010), *Migration and Immigrants Two Years after the Financial Collapse: Where Do We Stand?*, Washington, D.C., Migration Policy Institute (MPI)/BBC World Service.
- Papademetriou, Demetrios G., Madeleine Sumption y Will Somerville (2009), *Migration and the Economic Downturn: what to Expect in the European Union*, Washington D.C., Transatlantic Council on Migration, Migration Policy Institute (MPI) [en línea] http://www.migrationpolicy.org/transatlantic/EU_Recession_backgrounder.pdf.
- Pellegrino, Adela (2006), “La migración calificada en América Latina”, documento presentado en el Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, Madrid, 18 y 19 de julio, Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
- (2002), “Reflexiones sobre la migración calificada”, *Las migraciones internacionales en América Latina y el Caribe, Capítulos*, N° 65, Caracas, Sistema Económico Latinoamericano (SELA).
- (2001), “Éxodo, movilidad y circulación: Nuevas modalidades de la migración calificada”, *La migración internacional y el desarrollo en las Américas: Simposio sobre migración internacional en las Américas, serie Seminarios y Conferencias*, N° 15 (LC/L. 1632-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.01.II.G.170.

- Pellegrino, Adela y Jorge Martínez Pizarro (2001), “Una aproximación al diseño de políticas sobre la migración internacional calificada en América Latina”, *serie Población y Desarrollo*, N° 23 (LC/L.1687-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.01.II.G.215.
- Rama, Claudio (2002), “La emigración profesional en la sociedad del conocimiento: Algunas preguntas sin respuestas”, *Las migraciones internacionales en América Latina y el Caribe, Capítulos*, N° 65, Caracas, Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).
- Rodríguez Gómez, Roberto (2005), “Migración de estudiantes: Un aspecto del comercio internacional de servicios de educación superior”, *Papeles de población*, N° 44, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México.
- Solimano, Andrés (2005), “The international mobility of talent and its impact on global development: an overview”, documento presentado en la reunión de proyecto “International mobility of talent and development impact”, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo.
- Terrazas, Aaron (2010), *Connected through Service: Diaspora Volunteers and Global Development*, Washington, D.C., Migration Policy Institute (MPI)/Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
- Thorn, Kristian y Lauritz Holm-Nielsen (2005), “International mobility of researchers and scientists – Policy options for turning a drain into again”, documento presentado en la reunión de proyecto “International mobility of talent and development impact”, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo.

La frontera entre el Paraguay y el Brasil y la importancia del territorio, las instituciones y la sociedad en la formación de la identidad “brasiguaya”

Denise Helena França Marques¹

Roberto do Nascimento Rodrigues²

Dimitri Fazito de Almeida Rezende³

Weber Soares⁴

Resumen

La emigración masiva de brasileños al Paraguay se inició a finales de los años cincuenta y se intensificó en los dos decenios siguientes, pero durante las dos últimas décadas ha dado lugar a una migración internacional de retorno de los brasileños provenientes del Paraguay. Este fenómeno, junto con el desarrollo comercial en la región limítrofe entre el Brasil y el Paraguay y los desplazamientos que establecen una circularidad transfronteriza, constituyen algunos de los factores que contribuyeron a formar una comunidad transnacional “brasiguaya”. Vivir en el Paraguay y cruzar las fronteras nacionales entre este país y el Brasil es una práctica muy común de los “brasiguayos”, sobre todo los que residen en

¹ Doctora en demografía, economista e investigadora del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG).

² Doctor en demografía con maestría en economía, profesor titular de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista en análisis demográfico.

³ Doctor en demografía, graduado en ciencias sociales, con maestría en sociología, profesor adjunto de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG).

⁴ Graduado en arquitectura de la Universidad Santa Úrsula, maestría en planificación urbana y regional, doctor en demografía y profesor adjunto del Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG).

municipios paraguayos fronterizos con el Brasil. A la luz de este fenómeno, el objetivo del presente trabajo es investigar cómo las interacciones territoriales, institucionales y sociales influyen en la organización de la comunidad transnacional “brasiguaya” y en el desarrollo de la circularidad transfronteriza entre el Paraguay y el Brasil.

Abstract

The last two decades have seen a reversal in the mass migration of Brazilians to Paraguay, which began at the end of the 1950s and intensified in the two decades that followed, with ever more Brazilians returning from Paraguay. In addition, the commercial development of the region on the Brazil-Paraguay border and the circular pattern of cross-border movements, among other factors, have contributed to the creation of a transnational “Braziguayan” community. It is very common among “Braziguayans” to live in Paraguay and regularly cross the border into Brazil, especially among those who live in the Paraguayan municipalities that are contiguous with Brazil. In the light of this phenomenon, the aim of this article is to investigate how territorial, institutional and social interactions influence the organization of the transnational “Braziguayan” community and the development of circular pattern of cross-border movements between Paraguay and Brazil.

Résumé

L'émigration massive de Brésiliens vers le Paraguay a commencé à la fin des années 50 et s'est intensifiée durant les vingt années suivantes; au cours des deux dernières décennies, on observe néanmoins une migration internationale de retour des Brésiliens en provenance du Paraguay. Ce phénomène, ainsi que le développement commercial de la région limitrophe entre le Brésil et le Paraguay et les déplacements caractéristiques de la circulation transfrontière, sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à la formation d'une communauté transnationale pouvant être qualifiée de « brésiguayenne ». Vivre au Paraguay et traverser les frontières nationales entre ce pays et le Brésil est une pratique très courante parmi les « brésiguayens », en particulier ceux qui résident dans les villes paraguayennes frontalières avec le Brésil. À la lumière de ce phénomène, la présente étude cherche à déterminer la façon dont les interactions territoriales, institutionnelles et sociales agissent sur l'organisation de la communauté transnationale «brésiguayenne » et sur le développement de la circulation transfrontière entre le Paraguay et le Brésil.

Introducción

El objetivo de este artículo es investigar cómo las interacciones sociales, territoriales e institucionales influyen en la organización de la comunidad transnacional “brasiguaya” y cómo la circulación transfronteriza de “brasiguayos” aumenta e intensifica estas interacciones. Sin embargo, es fundamental conocer primero el contexto histórico de la inmigración de brasileños hacia el Paraguay y del retorno de miles de ellos al Brasil. Los datos cuantitativos, basados en los censos demográficos brasileños de 1991 y 2000, reflejan un panorama general del retorno internacional de brasileños del Paraguay, así como los efectos indirectos de este retorno. A continuación, se exponen las características del transnacionalismo “brasiguayo” y, sobre la base de las entrevistas a fondo (realizadas en tres municipios paraguayos fronterizos con el Brasil), los variados motivos por los cuales circulan por las fronteras nacionales entre el Paraguay y el Brasil.

A. Antecedentes históricos

La emigración masiva de brasileños hacia el Paraguay se inició a fine de los años cincuenta y aumentó en las dos décadas siguientes. Los inmigrantes brasileños del Paraguay vinieron, sobre todo, de Rio Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina. La principal ruta de entrada fue por la frontera entre el estado de Paraná y el departamento de Alto Paraná y por la “frontera seca” entre el estado de Mato Grosso do Sul y los departamentos de Canindeyú y Amambay.

La inmigración de brasileños al Paraguay está estrechamente relacionada con la confluencia de políticas económicas y militares de ambos países. Palau y Heikel (1987) subrayan que es un error considerar solo los factores económicos de atracción (en el Paraguay) y de expulsión (en el Brasil) para comprender el intenso flujo de brasileños hacia ese país. Es preciso destacar la intención del Gobierno de Paraguay de aceptar una mano de obra más especializada y más desarrollada en la agricultura, como la brasileña.

Por un lado, estaba el Brasil, con sus políticas de expansión de la frontera agrícola, de sustitución de importaciones y de incremento de las exportaciones. Por el otro, el gobierno paraguayo del general Stroessner, empeñado en comenzar a poblar las tierras vírgenes fronterizas con el Brasil, lograr la integración regional del capitalismo en expansión y alejar a los campesinos de los alrededores de la capital, Asunción, hacia áreas más distantes con la finalidad de evitar tensiones sociales (Palau y Heikel, 1987).

Los primeros brasileños que fueron atraídos al Paraguay fueron los de las regiones norte y nordeste del país. Los nuevos inmigrantes (negros, mulatos y zambos) no tenían tradición de posesión de la tierra y trabajaban en la tala de bosques y en la agricultura de supervivencia y el cultivo comercial de la hierbabuena. En 1960, Stroessner cambió su política respecto del departamento de Alto Paraná y ordenó al Estado paraguayo dar prioridad a la mano de obra de los descendientes de alemanes y convencerlos para que enseñaran a trabajar “a los perezosos paraguayos y a los negros brasileños” (Wagner, 1992, pág.17). El flujo masivo de colonos del sur del Brasil hacia el Paraguay “empujó” a los colonos del norte y nordeste hacia otras regiones de ese país, como La Paloma y Salto del Guairá. Muchos otros, en cambio, optaron por volver al Brasil.

Según Zaar (2001), la colonización del extremo oeste del estado de Paraná comenzó en los años cuarenta. El objetivo del Estado brasileño era nacionalizar la región que, durante el siglo XIX e inicio del siglo XX, estuvo ocupada por empresas extranjeras y expandir las fronteras agrícolas para aumentar el volumen de las exportaciones. El gobierno paranaense dio estímulos a muchas empresas colonizadoras que actuaban en Rio Grande do Sul para llevar a cabo el proceso de colonización de su territorio (Zaar, 2001, pág.4). A pesar de que estas empresas divulgaron su propaganda por todo el Brasil e incluso en el extranjero para difundir la fertilidad del suelo y el bajo precio de las tierras paraguayas, el público al que realmente se dirigía esta campaña eran las familias productoras agrícolas de Rio Grande do Sul (Sprandel, 1992; Zaar, 2001). La disminución de la fertilidad del suelo de ese estado brasileño y la división de las tierras heredadas fueron factores que, sumados a la campaña publicitaria, fomentaron también la emigración de colonos de Rio Grande do Sul hacia el oeste y suroeste de Paraná (Zaar, 2001, pág.4).

En los años sesenta, el gobierno brasileño puso en práctica políticas destinadas a aumentar las producciones de soja y trigo en el país y creó innumerables incentivos para consolidar la modernización agrícola brasileña. Un ejemplo de estos incentivos es el acceso al crédito en todas las fases de la producción agrícola, desde la preparación de la tierra y la compra de insumos (materia prima, equipos, capital, entre otros) y herramientas hasta la industrialización, comercialización y almacenamiento en bodegas.

La transferencia de complejos industriales de capital multinacional (para cubrir la demanda de insumos, maquinaria y herramientas agrícolas) y la implantación de agroindustrias para la trituration de la soja fueron condiciones de suma importancia para que se hiciese efectiva la modernización agrícola. Las instituciones bancarias también formaron

parte de este proceso al proporcionar financiamiento para comprar insumos, pesticidas, semillas y equipamientos agrícolas (Zaar, 2001). La única opción para los miles de agricultores que no conseguían legalizar sus posesiones ni obtener garantías de ayuda financiera y técnica para competir con el monocultivo de soja era emigrar, ya que con las nuevas tecnologías el trabajo manual de las familias se tornaba redundante. Además de las agroindustrias, el régimen militar del Brasil favoreció la entrada de capital extranjero para la instalación de empresas multinacionales (Cortêz, 1993).

A principios de la década de 1970, el proceso de transformación capitalista de la agricultura brasileña en el extremo oeste y suroeste de Paraná ya estaba bastante avanzado. Las tierras vacías, ocupadas por colonos, fueron anexadas a las tierras de las empresas colonizadoras para comercializarlas o incorporarlas a los nuevos latifundios. A los estratos de la población afectados por el proceso de concentración de tierras en el Brasil solo les quedaba emigrar al Paraguay, donde los precios de la tierra eran irrisorios.

En este ambiente de cambios, el gobierno del general Stroessner puso en práctica, con el apoyo del Instituto de Bienestar Rural (IBR), un gran plan de colonización agrícola que facilitaba la entrada de empresas y colonos extranjeros a los departamentos fronterizos. Las empresas inmobiliarias compraron grandes extensiones de tierras, contrataron peones para la deforestación y después vendieron las parcelas. Muchos agricultores vendieron sus tierras en el sur del Brasil y compraron extensiones mayores al otro lado de la frontera, en el Paraguay. Los despliegues de la "Marcha al Oeste" en el Brasil confluyeron con los de la "Marcha al Este"⁵ en el Paraguay a partir de la década de 1960 (Albuquerque, 2005, pág.65). En el encuentro de ambas "marchas" fue predominante la presencia brasileña y muchos agricultores paraguayos sufrieron la expropiación de sus tierras.

Junto con la modernización agrícola y la integración económica, el Brasil y el Paraguay buscaron también la fusión energética, consolidada con la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú. Se inundaron 1.460 km² de zonas marginales en la ribera del río Paraná. Del total, 835 km² eran del Brasil y 625 km² del Paraguay. Para la formación del embalse de Itaipú, se pagó indemnización o se expropió la propiedad de 42.000 personas, de las cuales más del 90% vivía en zonas rurales. Las familias que sufrieron expropiación tuvieron que emigrar hacia las zonas

⁵ Nota del traductor: La "Marcha al Este" fue la política de gobierno predominante en el Paraguay en este período y la "Marcha al Oeste" fue la del Brasil. Aunque la brasileña comenzó primero, las dos se encontraron en los años setenta en la ribera derecha del río Paraná. La finalidad de estos movimientos era ocupar los vacíos demográficos de forma estratégica para, posteriormente, convertirlos en explotaciones agrícolas.

urbanas, a otros municipios del estado de Paraná, a las regiones del centro-oeste o del norte del Brasil o al país vecino, el Paraguay (Zaar, 2001).

Entre 1980 y 1984, el proceso de modernización agrícola que tuvo lugar en el Brasil comenzó a desarrollarse en el Paraguay. Las grandes agroindustrias comenzaron a intervenir en la especulación inmobiliaria y expulsaron violentamente a los agricultores de sus tierras. Los bancos extranjeros y las empresas de maquinaria agrícola se instalaron en la frontera agrícola paraguaya y los productores comenzaron a comprar máquinas modernas y tractores, en detrimento del trabajo de los peones y jornaleros, que fueron despedidos. Además, muchos contratos de alquiler vencieron a principios de los años ochenta y no fueron renovados. Incluso el Banco Nacional de Fomento del Paraguay redujo la cantidad de créditos agrícolas otorgados, lo que hizo inviable la operación de los pequeños productores. En consecuencia, muchos inmigrantes brasileños tuvieron que trasladarse a otras regiones del Paraguay o volver al Brasil.

Con la salida del poder del general Alfredo Stroessner en 1989 y la posibilidad de una redemocratización en el Paraguay, surgió otro problema, ya que las reivindicaciones sociales, que hasta entonces habían sido reprimidas, empezaron a aflorar. El régimen militar del Brasil terminó en 1985 y el nuevo gobierno anunció el Plan Nacional de Reforma Agraria, con el que se abría la posibilidad de realizar una reforma agraria. Del mismo modo, en 1986 se creó el Plan Cruzado, cuyo objetivo era estabilizar la economía brasileña pero que además constituyó un atractivo adicional para el retorno de los inmigrantes (Salim, 1995).

B. El retorno de los inmigrantes y la formación de una comunidad transnacional “brasiguaya”

Así como hay incertidumbre acerca del número de brasileños que se dirigieron al Paraguay a partir de la década de 1950, tampoco se sabe mucho sobre la magnitud de los que regresaron. Los datos extraídos de los censos demográficos del Brasil de 1991 y 2000 presentan algunas limitaciones que contribuyen a una subestimación del número de retornados. Además, los datos censales solo contabilizan a los residentes legales. Otro aspecto relevante es el intenso flujo de brasileños en la frontera entre el Brasil y el Paraguay y las estrategias de supervivencia basadas en la duplicación de residencia (una en cada país), lo que ha podido aumentar la imprecisión de los datos si, por ejemplo, en el momento del recuento censal brasileño, la familia estaba ausente de la residencia en el Brasil.

El proceso migratorio de retorno tuvo lugar, más concretamente, hacia los estados de Paraná, pasando por Foz do Iguazu (frontera con el departamento de Alto Paraná) y hacia Mato Grosso do Sul. Según los datos de los censos demográficos brasileños de 1991 y 2000, cabe destacar que el estado de Paraná recibió a casi el 40% del total de los inmigrantes provenientes del Paraguay durante el quinquenio de 1986 a 1991, seguido de cerca por el estado de Mato Grosso do Sul (véase el cuadro 1). Del total de inmigrantes que llegaron al Brasil provenientes del Paraguay durante ese período, un 80,7% eran retornados. Entre 1986 y 1991 y 1995 y 2000, el número inmigrantes provenientes del Paraguay aumentó un 230%. De los 35.443 inmigrantes, más del 80,2% eran de origen brasileño. Paraná fue, con creces, el estado que recibió más inmigrantes del Paraguay entre 1995 y 2000, seguido por Mato Grosso do Sul. No obstante, cabe mencionar el aumento de la participación relativa de Santa Catarina, Mato Grosso y São Paulo como destinos de los flujo migratorios oriundos del Paraguay. Según Souchaud (2007), los jóvenes adultos en edad de trabajar emigraron de sus colonias brasileñas en el Paraguay hacia los estados de Mato Grosso do Sul (especialmente Campo Grande), Paraná (sobre todo Foz do Iguazú) y São Paulo (capital). Estos jóvenes inmigrantes salen en busca de un empleo en el sector terciario, en puestos que requieren poca calificación, como la construcción civil, los servicios domésticos, la mecánica o el comercio.

Cuadro I
**UNIDADES FEDERALES BRASILEÑAS DE DESTINO DE LOS INMIGRANTES
INTERNACIONALES Y RETORNADOS DEL PARAGUAY,
1986-1991 Y 1995-2000**
(En números y porcentajes)

Unidades federales seleccionadas	1986-1991			1995-2000		
	Inmigrantes (a)	Retornados (b)	Porcentajes (a)/(b)	Inmigrantes (a)	Retornados (b)	Porcentajes (a)/(b)
São Paulo	922	615	66,7	1 639	1 032	63,0
Paraná	4 276	3 625	84,8	20 815	17 077	82,0
Santa Catarina	281	212	75,4	2 253	1 791	79,5
Río Grande do Sul	505	457	90,5	1 029	739	71,8
Mato Grosso do Sul	4 063	3 203	78,8	6 401	5 065	79,1
Mato Grosso	154	129	83,8	2 092	1 875	89,6
Restantes unidades federales	530	416	78,5	1 214	839	69,1
Total de retornados	10 731	8 657	80,7	35 443	28 418	80,2

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), *Censo Demográfico 1991* y *Censo Demográfico 2000*.

Como se observa en el cuadro 1, incluso con el aumento significativo de la cantidad de inmigrantes internacionales provenientes del Paraguay entre 1986 y 1991 y entre 1995 y 2000, la proporción de personas que volvieron al Brasil continuó rondando el 80% en ambos quinquenios. Esto contribuyó a la formación de una comunidad transnacional “brasiguaya” fortalecida por los efectos indirectos del proceso migratorio de retorno⁶. Aunque Faist (2000) no mencionó tales efectos como uno de los elementos constitutivos de un espacio social transnacional, se los puede considerar factores de suma importancia para la construcción de dicho espacio. La entrada de extranjeros en el país, junto con la migración de retorno internacional, amplía e intensifica los lazos sociales y materiales entre la región de origen y la de destino. Estos inmigrantes internacionales (efecto indirecto) mantienen los lazos con el lugar de origen, establecen nuevos vínculos en el destino y crean nuevas formas de intercambio, tales como la combinación de culturas y el dominio de las lenguas maternas de ambos países.

En el cuadro 2 se clasifican las unidades federales elegidas como destinos de los inmigrantes retornados del Paraguay en los decenios de 1980 y 1990. Según los datos del censo de 1991, se observa que los estados de Paraná y Mato Grosso do Sul fueron los que recibieron la mayor cantidad de inmigrantes retornados del Paraguay, seguidos de lejos por São Paulo y Rondônia. En el decenio siguiente la situación se mantuvo relativamente, aunque con algunas alteraciones. La participación de Paraná como destino preferente de los inmigrantes creció significativamente. Mato Grosso do Sul siguió en la segunda posición, pero su participación relativa disminuyó más de 10 puntos porcentuales, al pasar del 26,7% en 1991 al 16,3% en 2000. Sin embargo, lo más destacado fue el aumento de la cantidad de migrantes retornados del Paraguay en el período analizado, que pasó de 16.800 a 55.000, lo que confirma la relevancia de este fenómeno

Según los datos existentes sobre el tema, en la segunda mitad de los años ochenta se registró un retorno masivo de “brasiguayos” provenientes del Paraguay. Wagner (1992) mencionó que solo en el primer semestre de 1986 había 60.000 campesinos dispuestos a volver al Brasil, aunque reconoce la posible imprecisión de estas cifras.

⁶ Son personas vinculadas a los antiguos emigrantes. En el caso del movimiento migratorio internacional de retorno del Paraguay, los antiguos emigrantes son brasileños y las personas que vinieron al Brasil con ellos poseen otras nacionalidades. Además, en la población de destino deben tenerse en cuenta los nacimientos de los hijos de estos emigrantes retornados. Estos niños nunca han salido del Brasil y tienen menos de 10 años de edad. En su trabajo, Ribeiro (1997) consideró estos dos factores como efectos indirectos del movimiento migratorio de retorno.

Cuadro 2
**BRASIL Y UNIDADES FEDERALES SELECCIONADAS: EFECTO DIRECTO DE
 LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE RETORNO
 DEL PARAGUAY EN 1991 Y EN 2000**

(En números y porcentajes)

Unidades federales seleccionadas	1991		2000	
	Retornados	Porcentajes	Retornados	Porcentajes
Rondônia	932	5,5	653	1,2
São Paulo	1 051	6,2	2 368	4,3
Paraná	8 306	49,3	33 087	60,1
Santa Catarina	399	2,4	3 234	5,9
Rio Grande do Sul	760	4,5	1 977	3,6
Mato Grosso do Sul	4 502	26,7	8 940	16,3
Mato Grosso	518	3,1	3 091	5,6
Restantes unidades federales	391	2,3	1 661	3,0
Total de retornados	16 859	100,0	55 011	100,0

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), *Censo Demográfico 1991* y *Censo Demográfico 2000*.

El movimiento migratorio de retorno se intensificó aún más en la segunda mitad de los años noventa, tal como señalan los datos presentados en el cuadro 2.

El cuadro 3 representa la distribución según edad y sexo de los retornados del Paraguay en las dos décadas analizadas. De acuerdo con el censo demográfico de 1991, se observa que la proporción de niños entre 0 y 4 años fue del 3,2% con respecto al total de retornados del Paraguay. En el censo de 2000, este porcentaje aumentó hasta representar un 4,7% del total. Dada la edad de estos niños, se podría pensar que retornaron en el segundo quinquenio de los años noventa y que sus padres realizaron una migración al Paraguay de corto plazo o que inscribieron a sus hijos en el Brasil aunque vivían en el Paraguay. La participación relativa de los niños entre 5 y 9 años de edad aumentó de un 11,0% en 1991 a un 14,9% en 2000. Es importante destacar la proporción de mujeres retornadas en edad reproductiva en relación con el total de mujeres retornadas, tanto en 1991 (30,9%) como en 2000 (28,8%), ya que esta proporción, entre otros aspectos, representa a las futuras responsables, en parte, del efecto indirecto 1 (IND1)⁷ y del efecto indirecto 2 (IND2)⁸, dado que pueden haber regresado del Paraguay con hijos y pareja paraguayos o de otras nacionalidades que no fuesen la brasileña.

⁷ El efecto indirecto 1 (IND 1) se refiere a los nacimientos en territorio brasileño de los hijos de retornados.

⁸ El efecto indirecto 2 (IND 2) corresponde a la inmigración de no brasileños, vinculada al retorno de los brasileños nativos.

Cuadro 3
**BRASIL: EFECTOS DIRECTOS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE RETORNO DE BRASILEÑOS
 DEL PARAGUAY, SEGÚN SEXO Y EDAD, 1981- 1991 Y 1990-2000**
 (En números y porcentajes)

Grupo de edad	1981-1991				1990-2000							
	Masculino retornados	Porcentajes	Femenino retornados	Porcentajes	Total retornados	Porcentajes	Masculino retornados	Porcentajes	Femenino retornados	Porcentajes	Total retornados	Porcentajes
0-4	224	1,3	315	1,9	539	3,2	1 424	2,6	1 180	2,1	2 604	4,7
5-9	895	5,3	964	5,7	1 859	11,0	4 006	7,3	4 186	7,6	8 192	14,9
10-14	901	5,3	1 237	7,3	2 138	12,7	3 402	6,2	3 108	5,6	6 510	11,8
15-19	1 050	6,2	1 111	6,6	2 161	12,8	3 175	5,8	3 207	5,8	6 382	11,6
20-24	1 073	6,4	1 142	6,8	2 215	13,1	2 635	4,8	2 525	4,6	5 160	9,4
25-29	939	5,6	1 000	5,9	1 939	11,5	2 885	5,2	3 095	5,6	5 980	10,9
30-34	847	5,0	705	4,2	1 552	9,2	2 831	5,1	2 615	4,8	5 446	9,9
35-39	526	3,1	489	2,9	1 015	6,0	2 275	4,1	2 211	4,0	4 486	8,2
40-44	559	3,3	457	2,7	1 016	6,0	1 628	3,0	1 260	2,3	2 888	5,2
45-49	405	2,4	300	1,8	705	4,2	1 302	2,4	925	1,7	2 227	4,0
50-54	282	1,7	212	1,3	494	2,9	883	1,6	658	1,2	1 541	2,8
55-59	180	1,1	141	0,8	321	1,9	720	1,3	520	0,9	1 240	2,3
60-64	229	1,4	229	1,4	458	2,7	436	0,8	544	1,0	980	1,8
65 y más	284	1,7	165	1,0	449	2,7	890	1,6	488	0,9	1 378	2,5
Total	8 394	49,8	8 467	50,2	16 861	100,0	28 492	51,8	26 522	48,2	55 014	100,0

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico 1991 y Censo Demográfico 2000.

Los hombres también pueden producir el efecto IND1, puesto que, tras haber regresado del Paraguay, pueden haber tenido hijos en el Brasil con mujeres no migrantes. Sin embargo, para facilitar el análisis, se contabilizan solo los hijos de las mujeres retornadas, lo cual supone un error en la estimación. Este error se acentúa aún más por el hecho de que las mujeres que tenían entre 50 y 54 años en el momento del censo no fueron incluidas en el cálculo del efecto indirecto 1 (IND1). Los hijos de estas mujeres (que tenían entre 40 y 44 años a principios de los dos períodos analizados) eran menores de 10 años y nacidos en el Brasil tras el retorno de sus madres, pero aún así no se consideraron para el cálculo del IND1. Estos niños tenían menos de 10 años en la fecha del recuento censal (01/09/1991) y nunca habían salido del país. En la década de 1990 el IND1 sufrió un aumento significativo, considerando un total de 11.654 niños. Este crecimiento es proporcional al aumento de mujeres retornadas en edad reproductiva, que pasó de 5.204 mujeres, en el período de 1981-1991, a 15.836 mujeres en 1990-2000 (véase el cuadro 3). Se estima que en los años ochenta, tras la migración de retorno del Paraguay, las mujeres brasileñas tuvieron en el Brasil un total de 5.109 hijos, lo que supone el total del IND1 de la primera década (véase el cuadro 4).

Cuadro 4
**BRASIL: HIJOS DE LAS MUJERES BRASILEÑAS RETORNADAS DEL PARAGUAY
(EFECTO INDIRECTO I), POR SEXO, 1981-1991 Y 1990-2000**
(En números)

Efecto indirecto I	1981-1991			1990-2000		
	Sexo		Total	Sexo		Total
	Masculino	Femenino		Masculino	Femenino	
Hijos de los jefes de hogar retornados del Paraguay	1 338	1 310	2 648	3 192	3 084	6 276
Hijos de jefes de hogar no retornados del Paraguay	1 248	1 213	2 461	2 822	2 556	5 378
Total	2 586	2 523	5 109	6 014	5 640	11 654

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), *Censo Demográfico 1991* y *Censo Demográfico 2000*.

En el cuadro 5 se presentan los efectos indirectos de tipo 2 (IND2) del movimiento migratorio internacional de retorno del Paraguay, relativos a la década de 1980, según el lugar que ocupa el inmigrante dentro de la familia. En esa década aproximadamente 1.200 inmigrantes llegaron al Brasil acompañando a algún familiar brasileño. Más del 80% (85,5%) de estos inmigrantes eran hijos del jefe de hogar. Los cónyuges de los jefes de hogar representaban un 6,9% de los inmigrantes internacionales, seguidos por los propios jefes de hogar, cuya participación relativa era del 5,9%. Cabe señalar que la mayoría

de los cónyuges eran de sexo femenino y que gran parte de los jefes de hogar eran hombres.

Cuadro 5

BRASIL: INMIGRANTES INTERNACIONALES ORIUNDOS DEL PARAGUAY QUE ENTRARON AL PAÍS ACOMPAÑADOS DE ALGÚN FAMILIAR BRASILEÑO (EFECTO INDIRECTO 2), SEGÚN EL PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR, POR SEXO, 1981-1991

(En números)

Jefe de hogar es brasileño			
Parentesco con el jefe de hogar	Sexo		Total
	Masculino	Femenino	
Cónyuge	0	75	75
Hijo (a)	439	585	1 024
Hijastro (a)	0	9	9
Nieto (a) o bisnieto (a)	0	5	5
Allegado	8	0	8
Total	447	674	1 121
Jefe de hogar no es brasileño			
Parentesco con el jefe de hogar	Sexo		Total
	Masculino	Femenino	
Jefe de hogar	66	6	72
Cónyuge	0	9	9
Hijo (a)	23	0	23
Total	89	15	104

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), *Censo Demográfico 1991*.

En la década de 1990, el total de inmigrantes que constituyó el IND2 se incrementó casi un 400,0% en relación con la década anterior, al alcanzar un nivel de 5.500 personas (véase el cuadro 6). Tal como en el caso del efecto directo (DIR), los datos recogidos en los censos también confirman la creciente importancia del IND2 en el movimiento migratorio de retorno del Paraguay.

Una vez más, la categoría de hijo/a o hijastro/a sobresale entre los demás miembros de la familia, ya que corresponde a casi un 80,0% (78,8%) del total de los inmigrantes. Los porcentajes relativos a los cónyuges y a los jefes de hogar aumentaron en esta década en comparación con la anterior y pasaron a representar un 8,7% y un 7,6%, respectivamente. La participación relativa de las mujeres en el total de cónyuges fue superior al 90% y la de los hombres, en relación con el total de jefes de hogar, fue del 89,5%. Un dato curioso es que, a diferencia del censo de 1991, cuyo IND2 se constituyó principalmente a partir de una migración familiar nuclear, en 2000 se registraron también las categorías de hermano/a, otro pariente, pensionista y empleada doméstica del jefe de hogar.

Cuadro 6
**BRASIL: INMIGRANTES INTERNACIONALES ORIUNDOS DEL PARAGUAY
 QUE ENTRARON AL PAÍS ACOMPAÑADOS DE ALGÚN FAMILIAR
 BRASILEÑO (EFECTO INDIRECTO 2), SEGÚN EL PARENTESCO
 CON EL JEFE DE HOGAR, POR SEXO, 1990-2000**

(En números)

Jefe de hogar es brasileño			
Parentesco con el jefe de hogar	Sexo		Total
	Masculino	Femenino	
Cónyuge, compañero(a)	35	446	481
Hijo(a), hijastro(a)	2 060	2 040	4 100
Nieto(a), bisnieto(a)	47	80	127
Hermano (a)	46	13	59
Otro pariente	27	35	62
Allegado	8	0	8
Pensionista	6	0	6
Total	2 229	2 614	4 843
Jefe de hogar no es brasileño			
Parentesco con el jefe de hogar	Sexo		Total
	Masculino	Femenino	
Jefe de hogar	376	44	420
Cónyuge, compañero(a)	0	4	4
Hijo(a), hijastro(a)	169	113	282
Empleado(a) doméstico(a)	0	11	11
Total	545	172	717

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), *Censo Demográfico 2000*.

I. La comunidad transnacional “brasiguaya”

La estratégica aproximación geopolítica entre el Brasil y el Paraguay y sus repercusiones, las transformaciones de la estructura productiva de ambos países, el desarrollo de un comercio en las regiones fronterizas, el retorno internacional de los brasileños del Paraguay y los efectos indirectos que esto supuso, junto con los desplazamientos transfronterizos entre ambos países, son algunos de los factores que propiciaron y propician aún la formación de una comunidad transnacional “brasiguaya”.

El intercambio dinámico de ideas, creencias, solidaridad, bienes y capital y el intenso flujo de personas en las fronteras nacionales entre estos dos países morigeran el concepto de frontera política en esta región. Las relaciones sociales de los “brasiguayos” tienen lugar en un espacio delimitado no solo por las fronteras formales que separan a los dos países, sino por las redes de elementos comunes que las constituyen, que Faist (2000) llama espacio social transnacional. Albuquerque (2005) no habla de un espacio social transfronterizo en la región que separa estos dos países

como hace Faist (2000), aunque afirma que las relaciones sociales entre los “brasiguayos” no se limitan al espacio físico de las ciudades fronterizas. Albuquerque hace alusión a la ampliación de la franja fronteriza entre ambos países, caracterizado por la mezcla cultural que se produce en las ciudades fronterizas y en los municipios paraguayos situados en un radio de 100 kilómetros o más del límite internacional, como Santa Rita, Naranjal, Santa Rosa, San Alberto y Mbaracayu, entre otros (Albuquerque, 2005, pág. 99). Este autor añade además que el crecimiento no ocurre de la misma manera en el territorio paraguayo y en el brasileño. A pesar del aumento de la inmigración paraguaya en el Brasil, que se manifiesta principalmente como efecto indirecto del movimiento migratorio de retorno, sigue siendo una cifra bastante reducida en comparación con la inmigración brasileña en el Paraguay.

Los términos transnacional y transmigrante han aparecido con mucha frecuencia en la literatura contemporánea sobre migraciones internacionales y guardan una relación directa con los sistemas de migración. Un espacio transnacional denota la idea de dinamismo y representa un sistema migratorio. Los procesos culturales, políticos y económicos en un espacio transnacional suponen acumulación, uso y efecto de diferentes tipos de capital, de su volumen y su convertibilidad: capital económico, capital humano (nivel educativo y cultural) y capital social (Faist, 2000, pág. 200).

Tanto en los Estados Unidos como en Europa, un número cada vez mayor de inmigrantes son denominados transmigrantes dado que mantienen lazos múltiples y constantes con las instituciones y entidades del país de origen. Los transmigrantes o individuos transnacionales forman parte de instituciones económicas y políticas en el país de destino y comparten el mismo estilo de vida de los residentes en el país de acogida. Al mismo tiempo, también conservan vínculos, crean instituciones, realizan transacciones e influyen en eventos regionales y nacionales del país de origen (Schiller y otros, 1995).

Sin embargo, Portes (2003), sobre la base de una investigación cualitativa y cuantitativa realizada en los Estados Unidos, destaca el hecho de que no todos los inmigrantes pueden ser considerados transnacionales, es decir, que el transnacionalismo no es un fenómeno común a todas las comunidades inmigrantes contemporáneas. Solo una minoría de los inmigrantes participa de forma regular en actividades transnacionales y el envío de bienes o la visita al país de origen, aunque sean actividades catalogadas como transnacionales, no justifican la creación de un término nuevo (Portes, 2003). Esta observación apoya la peculiaridad del transnacionalismo de los “brasiguayos” incluidos en esta investigación,

dado que el vínculo que tienen con el Brasil es frecuente y no se limita solo a los ámbitos económico y político, como sucede con muchos otros grupos de transnacionales.

Portes (2001) asegura que las personas recurren a estrategias distintas para alejarse de la inserción tradicional en los estratos más bajos de la jerarquía económica y social de las comunidades de origen. Para tal fin, organizan sus vidas profesionales y personales en el país de destino pero no abandonan totalmente sus comunidades originales.

Las comunidades transnacionales son un tipo de espacio social transnacional y se caracterizan por las conexiones sociales y simbólicas entre migrantes y no migrantes. Estos nexos sociales y simbólicos (religión, nacionalidad, etnia) se basan en la solidaridad y se desarrollan con el transcurso del tiempo. En estas comunidades se dan formas de relacionarse que sobrepasan los lazos familiares y que se caracterizan por la intimidad, la emoción, el compromiso moral, la cohesión social y la continuidad en el tiempo.

Faist (2000) considera a los grupos con identidades colectivas de las regiones de las fronteras nacionales como una forma distinta de comunidad transnacional. El autor cita las fronteras de México con los Estados Unidos y la Península Ibérica, Francia e Italia con los países del norte de África (Marruecos, Túnez y Argelia) como ejemplos de comunidades transnacionales en regiones fronterizas. Sin embargo, admite su falta de conocimiento en cuanto a una identidad única y particular para identificar a los transnacionales de estas regiones.

Los “brasiguayos”, al igual que algunos puertorriqueños (Duany, 2000) y filipinos (Schiller y otros, 1995) en los Estados Unidos, son individuos transnacionales porque poseen vínculos sociales, económicos, políticos y culturales en los países de origen y de destino. Además, tienen familiares de ambas nacionalidades, por ejemplo el padre o la madre, saben portugués, español y algunos guaraní y mezclan la cultura de los dos países. Algunos “brasiguayos” simplemente nacieron en el Brasil pero viven en el Paraguay desde entonces. Otros nacieron en el Paraguay pero por el hecho de tener parientes brasileños conocen bien la cultura y la lengua portuguesa. Estos individuos cruzan libremente la frontera entre ambos países y debido a la proximidad geográfica, echan mano de estrategias de adaptación y supervivencia más baratas y seguras que las de otros transnacionales como, por ejemplo, los puertorriqueños y los filipinos en los Estados Unidos o los haitianos en las Bahamas (Marshall, 1985). El mantenimiento de residencias en los dos países, así como la utilización de direcciones de parientes y amigos en el Brasil o incluso las de sus propias

residencias como puntos de apoyo, son diferentes estrategias para acceder a los servicios públicos brasileños y combinar varias fuentes de ingresos laborales, de familia y del Estado (beneficios asistenciales, por ejemplo).

El intenso flujo de brasileños y paraguayos entre los dos países se debe a la demanda de trabajo, estudios, compras, servicios de salud, beneficios asistenciales y visitas a familiares y amigos. En este ámbito de intensa circulación de personas, ideas y prácticas culturales, la identidad “brasiguaya” adquiere un nuevo significado, diferente del que tenía en el contexto en el que fue acuñado.

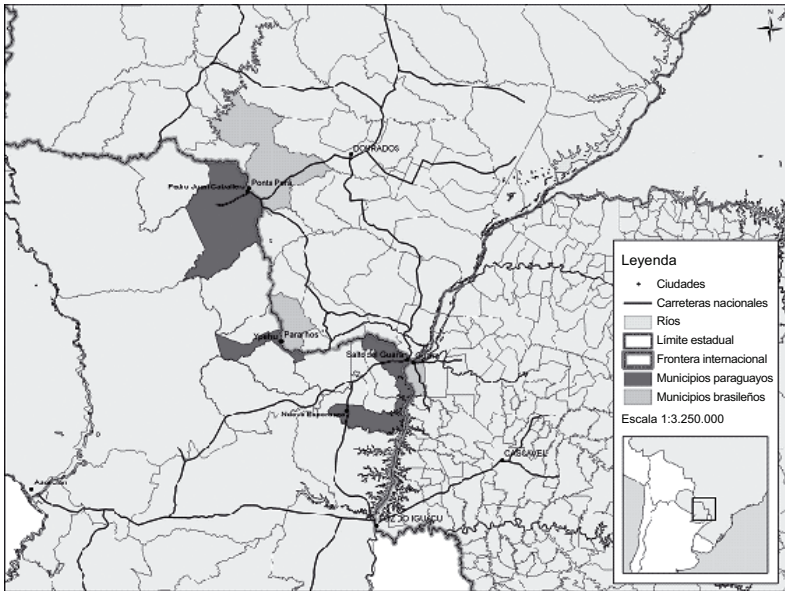
El término “brasiguayo” fue creado en 1985, cuando miles de inmigrantes brasileños en el Paraguay se organizaron para regresar al Brasil. La identidad política “brasiguaya” era una manera de recuperar la ciudadanía brasileña y, principalmente, de diferenciarse de otros grupos en el Brasil que también reivindicaban la posesión de la tierra. Esta atribución, en el momento de su concepción, poseía una fuerte connotación organizativa y no guardaba ninguna relación con los rasgos culturales que distinguían a los paraguayos y/o brasileños de otros grupos étnicos (Sprandel, 1992, pág.103). Aún así, Albuquerque (2005, pág.222), en el desarrollo de su investigación de campo, percibió la imprecisión y mutabilidad de la identidad “brasiguaya” (según su concepción) y que los variados sentidos de esta identidad dependen de quién habla sobre ella. Por ejemplo, los inmigrantes brasileños que pertenecen a las clases más pobres del Paraguay aceptan y valoran la identidad “brasiguaya” porque es un medio que les facilita acceder a los beneficios sociales en el Brasil (Albuquerque, 2005). Por otro lado, los inmigrantes que pertenecen a las clases dominantes del Paraguay y que poseen algún poder político no ven con buenos ojos la identidad “brasiguaya”. Para ellos, esa expresión es digna de aquellos inmigrantes indocumentados, pobres y marginales. Los representantes de la Pastoral del Migrante comparten una opinión parecida, ya que consideran esta denominación como un estigma, cargado de connotaciones negativas (Santa Bárbara, 2001). Las clases dominantes de origen brasileño, residentes en los municipios de La Paloma y San Alberto, ven la identidad “brasiguaya” con recelo. Para ellos, ser “brasiguayo” es ser un sin tierra, miserable, deportado y sin documentos. Por otro lado, para la mayoría de los habitantes brasileños que viven en la Colonia Jamaica, un barrio pobre de la ciudad paraguaya de La Paloma, ser “brasiguayo” significa vivir en el Paragua .

Según un trabajo de campo realizado en tres municipios paraguayos (Ypehjú, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero) fronterizos con el Brasil, la identidad “brasiguaya” está más aceptada y es mencionada

espontáneamente por los individuos brasileños que viven en municipios de frontera seca. Sin embargo, puede deducirse que la situación socioeconómica tiene una mayor influencia en la aceptación de esta identidad que la distancia.

En el mapa 1 se muestra la frontera del Brasil con el Paraguay. Los municipios fronterizos mencionados están destacados para facilitar su ubicación.

Mapa I
EL BRASIL Y EL PARAGUAY: MUNICIPIOS FRONTERIZOS VISITADOS



Fuente: Elaboración propia.

La prensa, en líneas generales, considera “brasiguayos” a todos los inmigrantes brasileños que viven en el Paraguay.

Con tiros e invasiones, los sin tierra paraguayos quieren expulsar a medio millón de “brasiguayos”. Si se produce el éxodo, será la mayor tragedia humana en la historia del Brasil. (Veja, 2008)

El gobierno del presidente paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, está realizando, junto con el gobierno brasileño, una amplia investigación sobre la situación de los brasileños que viven y son propietarios de tierras en el Paraguay, los llamados “brasiguayos”. Nadie sabe cuántos son. Según la embajada brasileña en Asunción, existen 150.000 “brasiguayos”. Otras fuentes hablan de más de 500.000. (O Globo Online, 2008)

Los campesinos paraguayos entrevistados por Albuquerque (2005, pág. 226) atribuyen un significado parecido al término

Para el joven Fernando, entrevistado para la elaboración de este trabajo, el término “brasiguayo” se refiere a los paraguayos que están en contacto permanente con los brasileños y que por eso saben portugués.

Mire, como yo estudio una carrera totalmente diferente a mi empleo, un profesor que tengo hizo un trabajo sobre eso, como una tesis de maestría. Por tanto, el “brasiguayo” aquí para nosotros es: la persona o el paraguayo que se adaptó, ya que nació aquí, pero que siempre está en contacto con lo relativo al Brasil, tiene amigos brasileños... Entonces va, aprende portugués para hablar bien y ¡listo! A estos la gente los llama “brasiguayos”. Si le preguntan: ¿Qué eres? Él responde “Brasiguayo”, pero es más paraguayo, ¡no es tan brasileño! Aún hay algunos brasileños que tienen ciertos prejuicios aquí en Ponta Porã, pero son las personas de edad más avanzada. ¡Los jóvenes no! Simplemente viven... No, no, ellos no dicen “brasiguayo”, pero tampoco se ofenden con eso... Además... El término “brasiguayo” se aplica más al paraguayo que va al Brasil, no necesariamente aprende a hablar portugués... pero que vive allí, trabaja allí, por tanto al final se aplica más al paraguayo que va al Brasil que al brasileño que viene al Paraguay. ¡Es complicado!

(Fernando, 29 años, curso superior incompleto, renta familiar de 3,5 salarios mínimos)

Según otros “brasiguayos” entrevistados en terreno y que se identifican como tales, ser “brasiguayo” es ser inmigrante brasileño y/o descendiente de estos inmigrantes y conocedor de las prácticas culturales de los dos países.

Yo considero “brasiguayo” a las personas que residen en la región fronteriza. Viven allí y conocen las costumbres tanto del Brasil como del Paraguay. ¿Por qué? Según mi opinión... son dos países hermanos, son países vecinos que se crearon como hermanos. Por eso nosotros, yo, que soy de origen paraguayo pero viví en el Brasil más de 30 años y tengo esposa brasileña, conozco tanto las costumbres brasileñas como las paraguayas. De esta forma podemos conocer los dos lados de la moneda, por decirlo así. ¡Yo me considero una persona “brasiguaya” con mucho orgullo!

(Pedro, “brasiguayo”, 42 años, enseñanza secundaria completa, renta del hogar de 3,0 salarios mínimos)

Sí, me considero brasiguaya. A pesar de haber nacido en el Paraguay y haber estudiado aquí, yo no hablo bien ninguno de los dos idiomas. También viví varios años en el Brasil y me encanta, la gente, todo... Empecé a hablar portugués y me identifiqué con las dos culturas... Esto se da, claro, porque mi padre es brasileño y mi madre es paraguaya.

(Amanda, “brasiguaya”, 20 años, curso superior incompleto, renta familiar de 6,0 salarios mínimos)

Ante el concepto de transnacionalismo y los diferentes sentidos atribuidos al término “brasiguayo”, es preciso detallar mejor los elementos que justifican que se considere a los “brasiguayos” como individuos transnacionales, según lo expuesto en el texto, y que los distinguen de los demás transmigrantes.

La difusión de la lengua portuguesa es una de las características más salientes de la comunidad transnacional “brasiguaya” y tal vez la más importante para su consolidación. En los municipios paraguayos, donde la presencia brasileña es predominante, además de la comunicación cotidiana e interpersonal, la presencia de la lengua portuguesa está en los informativos y medios de comunicación brasileños, transmitidos vía satélite en el Paraguay. Las informaciones emitidas por los programas de radio⁹ y de televisión brasileños, sobre todo los de la Red Globo, SBT y Rede Bandeirantes, también influyen en los valores y comportamientos en el Paraguay (Santa Bárbara, 2001, pág.92). El idioma guaraní supone, por tanto, un criterio exclusivo a la nacionalidad paraguaya. Sus raíces son muy diferentes de las del portugués y el español y las nuevas generaciones tienen dificultades para aprenderlo

Albuquerque (2005, pág.15) reconoce que en las regiones de la frontera entre el Paraguay y el Brasil existen “formas variadas de hibridismo lingüístico” debido a la mezcla, por ejemplo, de los idiomas, de la música o de la gastronomía, entre otros. Pero también menciona las tensiones cotidianas relacionadas con el predominio del portugués sobre el español, especialmente en relación con el guaraní, en estas zonas fronterizas. Según el autor, los profesores se quejan del portuñol (mezcla de español y portugués) en la redacción de los alumnos “brasiguayos” en las escuelas. Los profesores tendrían la misión de conservar la identidad nacional mediante la prohibición del uso de la lengua portuguesa en el ámbito escolar.

⁹ Muchas de las radios pertenecen a los inmigrantes brasileños, pero están a nombre de sus hijos paraguayos o de otros nativos. La ley de telecomunicaciones no permite que los extranjeros sean propietarios de medios de comunicación en territorio nacional (Albuquerque, 2001, p.96).

Aunque Santa Bárbara (2001) no haya realizado su investigación en municipios fronterizos con el Brasil, él denomina a los municipios paraguayos de Santa Rita, San Alberto, Katueté y La Paloma como territorios brasileños transfronterizos. El autor justifica este hecho por la presencia dominante del portugués y la circulación en la región del real, moneda brasileña. Su conclusión coincide con lo que Albuquerque (2005) denominó “ampliación de la franja fronteriza entre ambos países”.

La influencia brasileña en la religión, danza, tradiciones y gastronomía paraguaya también es fuerte. En los vehículos de propaganda y en los bares predominan las canciones brasileñas, así como las bandas contratadas para tocar en los bailes de la región fronteriza del Paraguay. Albuquerque (2005) habla de las fiestas de la Exposoja y de los Centros de Tradiciones Gaúchas (CTG) en estas zonas, donde la cultura, el idioma y la gastronomía brasileños dominan a las costumbres paraguayas. Además, la celebración de los cultos evangélicos y las misas católicas está a cargo de pastores y sacerdotes brasileños en iglesias financiadas por los inmigrantes.

La participación de los inmigrantes y de sus descendientes en la vida política de los municipios paraguayos también es una característica de la comunidad transnacional “brasiguaya” de ese país. Ejemplos no faltan, como es el caso de Mbaracayú, gobernada por un alcalde brasileño, u otras ciudades paraguayas como Naranjal, Santa Rosa del Monday y San Alberto, todas en el departamento de Alto Paraná, donde los alcaldes, aunque son paraguayos, son hijos de inmigrantes brasileños. Además, varios concejales brasileños fueron elegidos en municipios pertenecientes a los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú (Albuquerque, 2005). Estos candidatos fueron votados principalmente por los inmigrantes brasileños, por sus descendientes y por algunos paraguayos nativos. Incluso, Santa Bárbara (2001, pág. 113) destaca que el antiguo alcalde de San Alberto, Romildo Maia (brasileño, nacionalizado como paraguayo), salió elegido con los votos de fuera del municipio, ya que gran parte de los brasileños residentes en la ciudad no tenían documentación de inmigrante y no podían votar en el Paraguay. Muchos votantes brasileños fueron reclutados en las ciudades de Katueté, Troncal 4 y Puerto Indio para votar en Romildo.

Levitt y Jaworsky (2007) señalan esta y otras prácticas políticas transnacionales de los inmigrantes. Los autores consideran también como prácticas transnacionales la participación de los inmigrantes en la política como votantes, la afiliación a partidos políticos, la realización de fiestas y campañas en los dos países en cuestión y los lobbies de las autoridades de un país para influir en la política del otro

En el cuadro 7 se resumen los aspectos del transnacionalismo “brasiguayo”.

Cuadro 7
ASPECTOS DEL TRANSNACIONALISMO “BRASIGUAYO”

1- Espacio físico y social	Territorio híbrido
2- Lengua y comunicación	Presencia del portugués en las relaciones interpersonales diarias y en los medios de comunicación de masas, como emisoras de televisión y radios
3- Prácticas culturales	Música, gastronomía y patrones de comportamiento
4- Organización social	Eventos públicos, organizaciones civiles y de clase, como la Pastoral del Migrante, la fiesta de la Exposoja y los Centros de Tradiciones Gauchas
5- Economía y política	Activismo económico en ambos países (propiedades agrícolas en el Paraguay para producción de soja y ganadería y oficinas en el Brasil), redes ilegales de contrabando y utilización de la moneda brasileña y paraguaya; prácticas políticas que incluyen participaciones electorales (como votantes o como candidatos) en los dos países, participación en asociaciones políticas y en campañas electorales, tanto en el Brasil como en el Paraguay

Fuente: Elaboración propia.

Otro factor importante que contribuye a la peculiaridad de esta comunidad es el intenso tránsito de “brasiguayos” en la región fronteriza entre el Brasil y el Paraguay. La circulación de los “brasiguayos” por la frontera que separa estos países se debe a la demanda de servicios públicos en las áreas de la salud y la educación, los beneficios asistenciales, las compras, las visitas, la religión y el trabajo. La búsqueda de servicios de salud pública fue la principal motivación citada por los “brasiguayos” para ir al Brasil, independientemente del tipo de frontera respectiva y tanto en el caso de los niños como de adultos y personas de edad. No se observa regularidad alguna en dicha búsqueda, como ocurre con la recepción de beneficios asistenciales. Las personas acuden a un consultorio médico, un hospital o un centro de salud por un diagnóstico o un tratamiento solo cuando es necesario. Las principales explicaciones que dan los entrevistados a la demanda del sistema de salud brasileño son que viven en la precariedad del sistema público de salud paraguayo, que la atención médica brasileña es gratuita, que poseen documentos brasileños y pueden comprobar residencia en el Brasil. Además, algunos “brasiguayos” declaran sentirse mejor y recibir mejor trato en el Brasil. Otros creen que los médicos brasileños son mejores que los médicos paraguayos.

Los “brasiguayos” más pobres siempre recurren a los servicios de salud de los municipios brasileños más próximos a su residencia, independientemente del tipo de frontera. Cuando van a municipios más lejanos, si no han sido trasladados por el propio sistema de salud debido a la gravedad de su problema, recurren a la buena voluntad de sus familiares y amigos que los alojan y les ofrecen sus direcciones para el registro en el centro de salud u hospital. Muchos “brasiguayos”,

principalmente los residentes en Ypehjú y Salto del Guairá, poseen doble residencia, una en el Paraguay y otra en el Brasil, de forma que no necesitan pedir ayuda a familiares y amigos para que les presten la dirección. Los “brasiguayos” que pueden pagar los gastos de los servicios de salud privados paraguayos se sirven de ellos para consultas de rutina e intervenciones simples. Pero cuando consideran que el problema es grave prefieren irse a una ciudad brasileña que cuente con buenos profesionales e infraestructura médica completa. En este caso, como el servicio es particular, no necesitan declarar direcciones de familiares o amigos en el Brasil para ser atendidos. Estos “brasiguayos” afirman además, que no utilizan los servicios médicos privados de los municipios de residencia, ya que prefieren los servicios disponibles en Ciudad del Este, un importante centro económico del Paraguay.

A diferencia de la circulación por motivos de atención de salud, el flujo en la frontera para el usufructo de los servicios educativos ofrecidos por las escuelas públicas brasileñas se compone, básicamente, de niños y jóvenes “brasiguayos”. La mayoría de los niños y jóvenes entrevistados que son hijos de “brasiguayos” y viven en Ypehjú y Pedro Juan Caballero estudian en el Brasil. No hay duda de que, en este caso, el tipo de frontera influye en la elección del país y del municipio para estudiar, por ser una actividad de naturaleza diaria, al contrario de lo que ocurre con los servicios de salud, cuya demanda es, generalmente, puntual. La mayoría de los niños y jóvenes que viven en Salto del Guairá, por su parte, estudian en el Paraguay. Para estudiar en Guaíra deben atravesar en balsa y recorrer 1,5 kilómetros para llegar a la escuela pública más cercana. Otra opción es estudiar en Mundo Novo (Mato Grosso do Sul), pero necesitarían transporte. En este caso, la distancia parece ser más determinante que el nivel socioeconómico de las familias y el tipo de transporte que los estudiantes utilizan para ir a la escuela está más condicionado por los ingresos de sus hogares que por la distancia entre la casa y la escuela o por el tipo de frontera internacional.

Entre las razones para estudiar en el Brasil está el hecho de poseer nacionalidad brasileña, la calidad superior de la enseñanza impartida frente a la del Paraguay, la ayuda ofrecida por las escuelas en cuanto a alimentación y material escolar y el dominio del portugués. Al igual que ocurre en el servicio de salud, la declaración de direcciones de familiares y amigos residentes en el Brasil es una estrategia para acceder a la enseñanza pública brasileña y, por ende, a los beneficios ofrecidos por las escuelas, sobre todo para las familias de bajos ingresos.

La circulación fronteriza también se produce por motivos de trabajo. Sin embargo, gran parte de los “brasiguayos” que viven en Salto del Guairá

y en Pedro Juan Caballero declararon que trabajan en estas ciudades, en el sector comercial. A diferencia de Ypehjú, estos dos municipios se caracterizan por el activo comercio de productos importados que atrae a la población de varias partes del Brasil durante todo el año. En Ypehjú, la mayoría de los entrevistados que son vendedores trabajan de puerta en puerta, sin ninguna contratación. La naturaleza de la actividad les permite escoger el mejor país para trabajar, como pasa con los miembros del sector primario, que trabajan donde existe oferta de empleo, independientemente del país o de la cercanía al municipio.

La búsqueda de beneficios relativos a la asistencia social brasileña también está recogida como una de las causas de circulación transfronteriza de los “brasiguayos”. Sin embargo, fueron pocos los entrevistados que declararon recibir algún tipo de beneficio y, si se consiguen, deben ser recogidos en el municipio brasileño más cercano a su residencia. Como era de esperar, la frecuencia con la que se reciben estos beneficios es de una vez al mes y todos los “brasiguayos”, sin excepción, incluso los no beneficiados, concuerdan en que es obligatorio poseer residencia en el Brasil (o tener una dirección brasileña, práctica muy común) para retirar el dinero. Entre los beneficios asistenciales estaban las jubilaciones, Bolsa Familia y el PETI (Programa de Erradicación del Trabajo Infantil). Según las hipótesis expuestas por Alvarez (2006), las jubilaciones que les corresponden a los “brasiguayos” son el Beneficio de Prestación Continuada (BPC) o la jubilación rural (con beneficios no contributivos), ya que nunca han cotizado en la seguridad social brasileña y algunos incluso han recibido la ayuda de políticos para poder acceder a los beneficios

La circulación transfronteriza de los “brasiguayos” residentes en el Paraguay también es motivada por las visitas a familiares y amigos que viven en el Brasil, por religión y por compras. Las visitas a familiares y amigos en el Brasil parecen ser más frecuentes entre los “brasiguayos” de la primera generación que entre los de la segunda o la tercera. No obstante, cuando es necesario, estas últimas generaciones cuentan con el capital social de sus padres y abuelos para acceder a determinados recursos, como por ejemplo, los servicios de salud y la educación. Estas visitas no se limitan a los municipios fronterizos y cuando son a ciudades lejanas de la residencia de los “brasiguayos”, generalmente van acompañadas de otra razón, como la de solicitar atención sanitaria más compleja.

Los “brasiguayos” que frecuentan iglesias brasileñas cruzan la frontera entre estos dos países con cierta asiduidad, según los días y horarios de las misas y cultos evangélicos. Al contrario de lo que sucede con los movimientos vinculados a las compras, el traslado al Brasil para

ir a las iglesias fue observado mayormente en los municipios separados por una frontera seca. Las compras tienen lugar diariamente y son una estrategia de supervivencia que no depende de la frontera que separe a los países. La proximidad física entre el Paraguay y el Brasil posibilita a los “brasiguayos” que elijan los establecimientos con los precios más bajos. Además, algunos productos brasileños son de calidad superior a los que se comercializan en el Paraguay, sin mencionar la diferencia que existe entre la mercancía ofrecida en uno y otro lado de la frontera.

C. Conclusión

Los censos demográficos del Brasil de 1991 y 2000 ofrecen una información amplia en cuanto al fenómeno migratorio, lo que ha hecho posible el desarrollo de numerosos e importantes estudios que ponen de relieve la migración como un aspecto peculiar del proceso social. Gracias a estas informaciones y a los avances metodológicos dirigidos al estudio de esta variable demográfica, fue posible calcular los efectos directos e indirectos del movimiento migratorio internacional de retorno del Paraguay. Este desplazamiento cumple un papel relevante en la trayectoria de los migrantes y, en este caso, también en la formación de una comunidad transnacional “brasiguaya” que, a su vez, facilita la circulación transfronteriza de sus miembros, mediante la solidaridad y la reciprocidad, y forma parte, también, del proceso social en el que se incluye la migración. Tal como exponen Chapman y Prothero (1985), la desigualdad territorial de oportunidades y la naturaleza de los riesgos inherentes residen en la raíz del estilo de vida transnacional, tendencia que se está volviendo cada vez más común entre las poblaciones que viven en fronteras nacionales.

El término “brasiguayo” se creó inicialmente con el propósito político de recuperar la nacionalidad brasileña y, sobre todo, diferenciarse de otros grupos del Brasil que también reivindicaban la posesión de la tierra. En el momento de su concepción, este término poseía solo una fuerte connotación organizativa y no guardaba ninguna relación con aspectos culturales que diferenciaban a los paraguayos y/o brasileños de otros grupos étnicos. Sin embargo, según lo confirmado por los sondeos, la palabra “brasiguayo” actualmente significa mucho más que una identidad política y una “bandera de lucha”.

Ser “brasiguayo” supone poseer vínculos sociales, económicos, políticos y culturales tanto en el Paraguay como en el Brasil, tener familiares de ambas nacionalidades (como el padre y/o la madre), hablar portugués, español e incluso guaraní y mezclar la cultura de los dos países.

Ser “brasiguayo” es cruzar libremente las fronteras entre el Brasil y el Paraguay y, debido a la proximidad geográfica, recurrir a estrategias de adaptación y supervivencia más baratas y seguras, en comparación con las de otros transnacionales. Ser “brasiguayo” también es poder activar redes sociales siempre que sea necesario para conseguir empleo, estudiar, utilizar servicios públicos brasileños o hacer compras. El mantenimiento de residencias en ambos países, así como la utilización de direcciones de parientes y amigos del Brasil o, incluso, su casa en sí como punto de apoyo, son diferentes estrategias para acceder a los servicios públicos brasileños y para combinar varias fuentes de ingresos laborales, familiares y del Estado. Por tanto, el hecho de ser “brasiguayo” conlleva ser transnacional.

Bibliografía

- Albuquerque, José Lindomar (2005), “Fronteiras em movimento e identidades nacionais. A imigração brasileira no Paraguai”, tesis de doctorado, Programa de posgrado en sociología, Universidad Federal de Ceará, Fortaleza.
- Alvarez, G.O. (2006), “As fronteiras da previdência: trabalhadores nas fronteiras do Mercosul”, Brasilia, Secretaría de políticas de previsión social.
- Chapman, Murray y Mansell Prothero (1985), “Themes on circulation in the third world”, *Circulation in Third World Countries*, Boston, Routledge & Kegan Paul.
- Cortêz, Cácia (1993), *Brasiguaios: os refugiados desconhecidos*, Campo Grande, Brasil Agora.
- Duany, Jorge (2002), “Mobile livelihoods: the sociocultural practices of circular migrants between Puerto Rico and the United States”, *International Migration Review*, vol. 36, N° 2, junio.
- Faist, Tomas (2000), *The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces*, Oxford, Oxford University Press.
- IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) (2000), “Censo demográfico 2000” [en línea] <http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000ru.asp?o=11&i=P>.
- ___ (1991), “Censo demográfico 1991” [en línea] <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censodem/default.shtm>.
- Levitt, Peggy y Nadya Jaworsky (2007), “Transnational migration studies: past developments and future trends”, *Annual Review of Sociology*, vol. 33, abril.
- Marshall, Dawn (1985), “International migration as circulation: Haitian movement to the Bahamas”, *Circulation in Third World countries*, Boston, Routledge & Kegan Paul.
- Nisbet, Robert (1966), *The Sociological Tradition*, Nueva York, Basic Books.
- Palau, Tomás y María Victoria Heikel (1987), *Los campesinos: El estado y las empresas en la frontera agrícola*, Asunción, Investigaciones Sociales, Educación, Comunicaciones (BASE), Programa de Investigaciones Sociales sobre Población en América Latina (PISPAL).
- Portes, Alejandro (2001), “Inmigración y metrópolis: Reflexiones acerca de la historia urbana”, *Migraciones internacionales*, vol. 1, N°1.
- ___ (2003), “Conclusion: theoretical convergencies and empirical evidence in the study of immigrant transnationalism”, *International Migration Review*, vol. 37, N° 3.

- Ribeiro, José Teixeira Lopes (1997), “Estimativa da migração de retorno e de alguns de seus efeitos demográficos indiretos no nordeste brasileiro, 1970/1980 e 1981/1991”, tesis de doctorado, Centro de Desarrollo y Organización Regional de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
- Salim, Celso Amorim (1995), “A questão dos brasiguaios e o Mercosul”, *Emigração e imigração internacionais no Brasil contemporâneo*, Neide Lopes Patarra (ed.), Campinas, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
- Santa Bárbara, Marcelo (2005), “Des-caminhos brasileiros em terras paraguaias: territórios e jogos de identidade”, tesis de maestría, Departamento de Geografía, Universidad Federal Fluminense, Río de Janeiro.
- Sprandel, Márcia Anita (1992), “Brasiguaios: conflito e identidade em fronteiras internacionais”, tesis de maestría, Departamento de Antropología Social, Universidad Federal do Rio de Janeiro, Río de Janeiro.
- Schiller, Nina Glick y otros (1995), “From immigrant to transmigrant: theorizing transnational migration”, *Anthropological Quarterly*, vol. 68, Washington, D.C.
- Souchaud, Sylvain (2007), *Geografía de la migración brasileña en Paraguay*, Asunción, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)/Asociación de Estudios Paraguayos de la Población (ADEPO).
- Wagner, Carlos (1992), *Brasiguaios: homens sem pátria*, Petrópolis, Vozes.
- Zaar, Miriam Hermi (2001), “A migração rural no oeste paranaense/Brasil: a trajetória dos ‘brasiguaios’”, *Scripta Nova, Revista electrónica de geografia y ciencias sociales*, Nº 94 (88) [en línea] <http://www.ub.es/geocrit/sn-94-88.htm>.

La urbanización en el México contemporáneo

Jaime Sobrino¹

Resumen

El objetivo del presente documento consiste en exponer un estudio sobre las principales tendencias de la urbanización en México a partir de la década de 1980. Desde la perspectiva teórica, el documento se sustenta en aportaciones de la demografía y la teoría económica espacial en cuanto a los temas de urbanización diferencial, ciclo del desarrollo urbano y regiones urbanas. Desde el punto de vista instrumental, la información utilizada consiste en datos de los censos generales de población y vivienda de 1980, 1990, 2000 y 2010. En el corte territorial, las unidades de estudio son las áreas urbanas con 15.000 y más habitantes y las zonas metropolitanas. El documento se divide en cuatro apartados. En el primero, a manera de introducción, se estudian las principales características de la evolución demográfica nacional y la urbanización durante el siglo XX. En el segundo se analizan los patrones de la urbanización en México en el periodo 1980-2010 y se describe la dinámica de la urbanización en el contexto regional, para lo que se divide el país en cinco regiones. En el tercero se discute sobre la evolución de la conformación metropolitana en México, la distribución de la población y el empleo en las metrópolis y la emergente formación de regiones urbanas. En el cuarto y último se ofrecen notas finales, a manera de resumen, y propuestas de agenda sobre los principales lineamientos que debería asumir el país durante los próximos años en materia de política territorial.

¹ Profesor-investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México.

Abstract

This article sets out to present a study on the main urbanization trends in Mexico from the 1980s onwards. With regard to its theoretical basis, the author draws on demography and spatial economic theory in relation to differential urbanization, the cycle of urban development and urban regions. The data used is sourced from the general population and housing censuses from 1980, 1990, 2000 and 2010. In terms of territorial divisions, the study looks at urban areas with 15,000 inhabitants or more and metropolitan areas. The document is divided into four parts. By way of an introduction, the first section outlines the four main features of the country's demographic progression and urbanization during the twentieth century. The second analyses urbanization patterns in Mexico in the period 1980-2010 and examines regional urbanization trends, splitting the country into five regions. The third section discusses the evolution of metropolitan areas in Mexico, population distribution and employment in the metropolises and the emerging urban regions. The fourth and final section sums up the preceding sections and proposes some key action lines for the country's territorial policy in the coming years.

Résumé

La présente étude a pour but de faire ressortir les principales tendances de l'urbanisation au Mexique à partir de la décennie 1980. Sur le plan théorique, le document se fonde sur les contributions de la démographie et la théorie économique spatiale en ce qui concerne l'urbanisation différentielle, le cycle du développement urbain et les régions urbaines. Sur le plan instrumental, les informations utilisées sont des données issues des recensements généraux de la population et du logement de 1980, 1990, 2000 et 2010. Quant à la coupe territoriale, les unités d'études sont les zones urbaines de 15.000 habitants et plus, et les zones métropolitaines. Ce document comporte quatre parties. La première examine, à titre d'introduction, les principales caractéristiques de l'évolution démographique nationale et de l'urbanisation durant le XXe siècle. La deuxième est consacrée à l'analyse des modèles d'urbanisation au Mexique durant la période 1980-2010 et à la description de la dynamique de l'urbanisation dans le contexte régional, le pays étant, à cet effet, divisé en cinq régions. Dans la troisième partie, l'auteur étudie l'évolution de la conformation de villes au Mexique, la distribution de la population et de l'emploi dans les métropoles et la formation émergente de régions urbaines. La quatrième et dernière partie contient des notes finales, à titre de synthèse, ainsi que des propositions de programme quant aux principales lignes directrices qui devraient être adoptées dans le pays au cours des prochaines années en matière de politiques territoriales.

Introducción

La multiplicación de la población y su concentración en áreas urbanas son dos de los hechos más relevantes de la expansión demográfica en el siglo XX. En la literatura pionera sobre los estudios urbanos se reconoce una relación intrínseca, o bidireccional, entre urbanización y desarrollo económico, así como entre urbanización e industrialización. La urbanización se define como el proceso de concentración de la población en áreas urbanas y la transformación dicotómica en las conductas sociales y culturales de la población (Pacione, 2001, pág. 67). La industrialización se concibe como un cambio hacia una mayor participación de la población ocupada en la industria manufacturera dentro del mercado de trabajo, o la creciente importancia de este sector en la estructura productiva de la ciudad (Castells, 1980; Goodall, 1972). Se puede hablar de la urbanización industrial como la concentración de la población en áreas urbanas ocurrida en un determinado momento del desarrollo económico nacional, pero no necesariamente de la industrialización de la ciudad, es decir, la transformación natural de la estructura productiva local. Para que ocurriera esta transformación fueron necesarios un tamaño mínimo de la ciudad (Richardson, 1973) y la acumulación de condiciones generales de la producción (Marx, 1930, págs. 172-173).

La no necesaria industrialización de la ciudad y el surgimiento de la economía global han permitido matizar la relación entre desarrollo urbano e industrialización, así como plantear posturas alternativas sobre los factores de la urbanización: si bien su factor fundamental ha sido el desarrollo económico, este tuvo influencia en un principio gracias a la industrialización y, posteriormente, por el dinamismo del sector terciario (Goodall, 1972). Asimismo, un conjunto de ciudades se han especializado en servicios de orden superior, tales como servicios financieros y al productor (Sassen, 2000), lo que ha dado pauta a la propuesta de la revolución terciaria, es decir, el sector terciario como eje de la estructura y dinámica económica de la ciudad contemporánea (Garza, 2008, pág. 35).

La expansión demográfica, el desarrollo económico y la concentración de la población en ciudades son procesos que también se han interrelacionado en México. Entre 1900 y 2010, la población total del país se multiplicó por 8,3 veces, al aumentar de 13,6 a 112,3 millones de habitantes. Este crecimiento poblacional atestiguó tres grandes fases: la primera abarcó el período 1900-1940, en cuyo último año la población total llegó a 19,7 millones, con escaso dinamismo debido a la combinación de altas tasas de natalidad y mortalidad. El desarrollo económico, por su parte,

se caracterizó por la ruptura del modelo liberal de crecimiento económico, el movimiento revolucionario y el surgimiento del nuevo Estado nacional. La segunda fase ocurrió durante las cuatro décadas siguientes, el período 1940-1980, y se enmarcó en un modelo de crecimiento económico orientado hacia la industrialización para la sustitución de importaciones, la protección comercial y la atención del mercado interno, con lo que se lograron ritmos significativos de crecimiento en la riqueza nacional. En estos 40 años, la población se incrementó de 19,7 a 66,8 millones, expansión que obedeció a la permanencia de altas tasas de natalidad y la drástica caída en las de mortalidad. La política económica de sustitución de importaciones y la inversión pública federal favorecieron la concentración de la población en áreas urbanas, algunas de las cuales rebasaron sus límites político-administrativos para iniciar procesos de conformación metropolitana (Negrete y Salazar, 1986; Unikel, Ruiz y Garza, 1978, págs. 115-152).

La tercera fase comenzó en la década de 1980, cuando ocurrió un cambio obligado en la estrategia de crecimiento económico por el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y el desbalance en las finanzas públicas. El nuevo modelo económico asumió las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y se orientó hacia la apertura comercial y un menor peso del Estado en funciones económicas. Por otro lado, entre 1980 y 2010 el volumen demográfico del país se elevó de 66,8 a 112,3 millones de habitantes. El descenso en el dinamismo de la población se explica por la consolidación de la última etapa en el modelo de transición demográfica, la caída significativa en las tasas mortalidad y el repunte de la emigración internacional, especialmente hacia los Estados Unidos. A principios de los años ochenta la migración neta del país era negativa y del orden de 200.000 personas al año, déficit que cambió a cerca de 600.000 para los primeros años del nuevo milenio.

La población urbana se define como aquella que reside en localidades urbanas. Este concepto es claro, pero no su operativización debido, por un lado, a la interpretación del concepto de localidad urbana y, por otro, a los procesos emergentes de ocupación del territorio, lo que da lugar a la conformación de ciudades difusas, zonas metropolitanas y regiones urbanas (Delgado, 1998). La delimitación oficial y censal de localidad urbana en México alude a concentraciones de población con al menos 2.500 habitantes. Este tamaño, sin embargo, no alcanza las connotaciones que debería asumir un asentamiento humano en términos de estructura del mercado de trabajo y condiciones de vida de la población residente (Macura, 1961; Pacione, 2001, págs. 20-22; Rain, 1999), por lo que algunos estudios urbanos en el país han adoptado el tamaño de

15.000 habitantes como el mínimo para considerar urbana una localidad (Unikel, Ruiz y Garza, 1978, págs. 337-355). Asimismo, la conformación de zonas metropolitanas en México se inició en la década de 1940, cuando cinco ciudades rebasaron el límite político administrativo para ocupar suelo de otra división administrativa contigua. La primera delimitación oficial de zonas metropolitanas ocurrió en 2004, cuando en un acuerdo intergubernamental se dispuso la existencia de 55 ciudades que, o bien se extendían sobre dos o más divisiones administrativas menores (municipios), o que la ciudad central, de al menos 50.000 habitantes, tenía importantes relaciones funcionales con localidades urbanas ubicadas en municipios contiguos (SEDESOL/CONAPO/INEGI, 2004).

Si se adopta el principio de población urbana como aquella residente en localidades de 15.000 y más habitantes, entonces su volumen alcanzó 6,2 millones de habitantes en 1950, lo que representó un grado de urbanización del 24,1%. Por el contrario, si se considera la delimitación fija de las 55 zonas metropolitanas desde ese año, la población urbana fue de 10 millones, con un grado de urbanización del 38,9% (véase el cuadro 1). La diferencia entre ambas poblaciones corresponde a los habitantes en municipios metropolitanos que residían en localidades de menos de 15.000 habitantes.

Cuadro I
MÉXICO: POBLACIÓN TOTAL Y URBANA, 1980-2010

Rubro	1980	1990	2000	2010
Miles de habitantes				
Total	66 847	81 250	97 483	112 337
Urbana	40 872	52 414	66 225	78 981
Metropolitana	33 645	41 169	51 503	60 403
Citadina	7 227	11 245	14 722	18 578
Porcentajes verticales				
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Urbana	61,1	64,5	67,9	70,3
Metropolitana	50,3	50,7	52,8	53,8
Citadina	10,8	13,8	15,1	16,5

Fuente: Censos generales de población y vivienda.

El grado de urbanización aumentó del 10,6% en 1900 al 70,3% en 2010. México se hizo preferentemente urbano en 1970, al concentrar más de la mitad de su población en ciudades. En esa década ocurrió también la mayor expansión urbana, con un incremento de 14,7 millones de habitantes y una multiplicación por 1,9 veces. La significativa urbanización ocurrida en el siglo XX fue resultado del crecimiento natural en las ciudades (nacimientos menos defunciones) y la masiva migración interna desde áreas rurales hacia zonas urbanas. La incorporación de nuevas ciudades no tuvo efecto

importante. La distribución territorial de la población urbana se caracterizó, hasta 1980, por su concentración en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), cuyo monto demográfico ascendió de 345.000 habitantes en 1900 a 14,5 millones en 1980, con lo que su participación con respecto a la población total del país pasó del 2,5% al 21,6%. Sin embargo, a partir de 1980 esta megaurbe ha ido perdiendo peso en el volumen demográfico nacional, de manera que en 2010, con 20,1 millones de habitantes, concentró el 17,9% de la población mexicana. En el apartado siguiente se analiza con mayor detalle la urbanización ocurrida en la tercera fase, es decir, desde 1980.

A. Trayectorias de la urbanización en México, 1980-2010

Las principales características de la urbanización nacional a partir de 1980 han sido las siguientes: i) un importante descenso en el crecimiento poblacional de la ZMCM, que se transformó de ser el principal polo de inmigración neta, al de mayor emigración neta; ii) un significativo crecimiento poblacional en las urbes de mayor tamaño dentro del rango de ciudades intermedias, ubicadas tanto en la región Centro del país como en la Frontera Norte²; iii) cambios en el patrón de la migración interna, con predominio del flujo urbano-urbano, iv) consolidación de la dimensión metropolitana, lo que propició un cambio en el país de ser predominantemente urbano a preferentemente metropolitano; v) una emergente conformación de regiones urbanas, y vi) maduración, envejecimiento e, incluso, defunción de la planeación territorial institucionalizada en el país.

I. Población urbana y tamaño de localidad

En 1980 la población residente en ciudades y zonas metropolitanas fue de 40,9 millones de habitantes, mientras que en 2010 se incrementó a 79 millones. Esto significa que el monto se incrementó en poco más de 38 millones de personas y la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) fue del 2,2%, contra el 1,7% de la población total, por lo que su participación avanzó del 61,1% al 70,3%.

Sobre la base de la población urbana según los tamaños de localidad se observa lo siguiente: en 1980 había cuatro urbes con más de un millón de habitantes, 54 con tamaño intermedio y 165 de pequeño tamaño; en las localidades “millonarias” habitaban 20 millones de habitantes, mientras que en

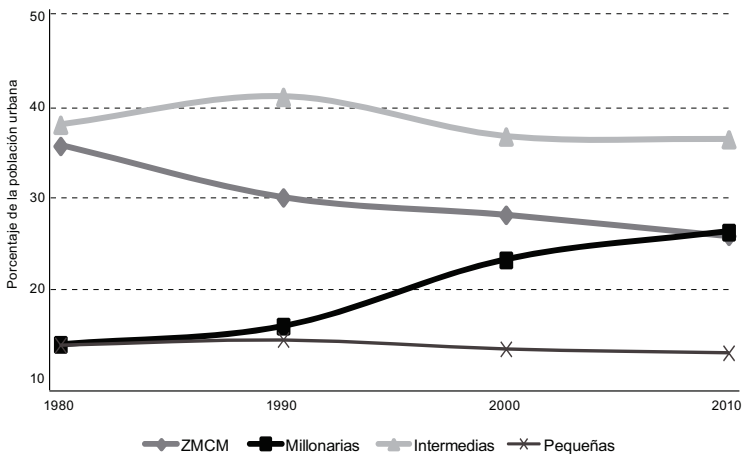
² En el caso mexicano, las ciudades pequeñas son aquellas con población entre 15.000 y 99.000 habitantes; las intermedias oscilan entre 100.000 y 999.000 habitantes, mientras que las grandes, o millonarias, contienen un millón o más de habitantes (Poder Ejecutivo Federal, 1989; Ruiz, 1989).

las intermedias había 15,4 millones y, en las pequeñas, 5,5 millones. Esto ya significaba un predominio de las urbes millonarias dentro del sistema urbano nacional, al concentrar el 48,9% de la población urbana del país. Sin embargo, tal importancia era producto del peso de la ZMCM, cuyo tamaño poblacional era 2,6 veces mayor con respecto a la suma de las otras tres metrópolis millonarias. Para 2010 las metrópolis millonarias aumentaron a 11, en tanto que las áreas urbanas de tamaño intermedio llegaron a 79 y las pequeñas, a 309. En términos absolutos, el mayor incremento de áreas urbanas ocurrió en las de tamaño pequeño mientras que, en términos relativos, el cambio más significativo fue en las millonarias, donde su cantidad casi se triplicó.

Entre 1980 y 2010, el patrón de concentración mostró una tendencia favorable hacia las urbes millonarias, que albergaron en el último año al 51,3% de la población urbana del país, contra el 48,9% del primer año. Tal ascenso fue a costa de las localidades de tamaño intermedio y pequeño; las primeras disminuyeron su aportación a la población urbana del 37,7% al 36,1%, mientras que el retroceso en las segundas fue del 13,4% al 12,6% (véase el gráfico 1). El avance de las urbes millonarias en la concentración de la población urbana del país ocurrió tanto por el incremento en su número como por el dinamismo demográfico exhibido en algunas de ellas. La ZMCM mostró un comportamiento poblacional distinto, puesto que su TCPA estuvo por debajo de la registrada en el contexto nacional, de manera que su participación en la población urbana del país se redujo del 35,4% al 25,5%.

Gráfico 1
MÉXICO: PARTICIPACIÓN EN LA POBLACIÓN URBANA
POR TAMAÑO DE LOCALIDAD, 1990-2010

(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información de los censos de población y vivienda.

2. Movilidad de la población: migración interna e internacional

Todo crecimiento poblacional es producto de la combinación de dos componentes: natural (diferencia entre nacimientos y defunciones) y social (diferencia entre inmigrantes y emigrantes). En el estudio de la transición demográfica se prioriza el análisis de los cambios en las variables del componente natural (Welti, 1997, págs. 179-231), mientras que en los aportes de la transición de la movilidad (Zelinsky, 1971) y en el ciclo del desarrollo urbano (Armstrong y Taylor, 2000, págs. 140-165; Geyer y Kontuly, 1993; Kenen, 1994, págs. 311-340; Stark, 1967) se enfatizan el comportamiento del componente social, las causas y consecuencias de la migración y el análisis de los puntos de origen y destino.

El ritmo de crecimiento poblacional del país entre 1980 y 2010, del 1,7% anual en promedio, fue menor al de su tasa de crecimiento natural, que se ubicó en el 2,0%, por lo que el país experimentó una emigración neta del orden de -9,1 millones de habitantes. En promedio, 302.000 personas abandonaron el país cada año para residir en otra nación, fundamentalmente en los Estados Unidos. La tasa de migración neta internacional se ubicó en -3,4 personas por cada 1.000 habitantes al año durante el periodo 1980-2010³.

El flujo neto de mexicanos hacia el exterior se ubicó en poco más de 350.000 personas anuales a principios de los años noventa, mientras que hacia mediados de la primera década del siglo XXI el monto aumentó a casi 600.000, para disminuir sensiblemente durante el segundo lustro. Esta migración neta internacional se generó en un 88% de las divisiones administrativas menores (DAME) rurales, un 8% de las metropolitanas y un 4% de las urbanas, lo que habla de un flujo migratorio con muy elevada participación de población residente en zonas rurales. En términos relativos, la expulsión poblacional de México solo fue superada en el continente americano por Nicaragua y Guyana.

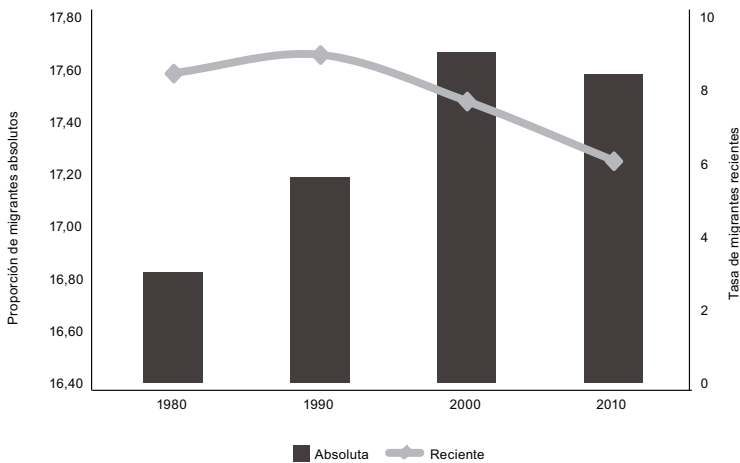
La migración internacional no es la única movilidad de la población que ocurre y que incide en su redistribución en el territorio. Existe también la migración interna, es decir, las personas que cambian su lugar de residencia hacia otra división administrativa, así como la movilidad intrametropolitana, o el cambio de residencia que tiene lugar dentro de una zona metropolitana. Los censos de población de México ofrecen

³ La tasa de migración neta se calculó con el cociente del número de migración neta dividida por el período de tiempo (29,9863 años, tiempo entre el levantamiento del censo de población de 1980 y el de 2010), entre la población intermedia del lapso temporal en cuestión. El cociente se multiplicó por 1.000, que indica el número de migración neta por cada 1.000 habitantes.

información sobre migración absoluta (o histórica) y reciente (de los últimos cinco años); los datos se refieren al cambio de residencia hacia otra división administrativa mayor (DAM) o entidad federativa.

Las muestras de los censos de población de 2000 y 2010 ofrecen datos sobre la migración reciente entre DAME. Los datos del censo de 2010 muestran que en ese año había 19,7 millones de personas que residían en una DAM distinta a la de su nacimiento y constituían la migración absoluta. Este monto representó el 17,6% de la población total del país, proporción que por primera vez en la historia censal nacional fue menor a la del censo precedente, es decir, el de 2000. Por otro lado, el número de habitantes que cambió de DAM durante los cinco años anteriores al levantamiento censal sumó 3,3 millones de personas, con lo que la tasa de migración se ubicó en 6,1 personas por cada 1.000 habitantes al año; dicha proporción ha caído drásticamente desde 1990 (véase el gráfico 2).

Gráfico 2
MÉXICO: INDICADORES DE LA MIGRACIÓN INTERNA, 1980-2010



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información de los censos de población.

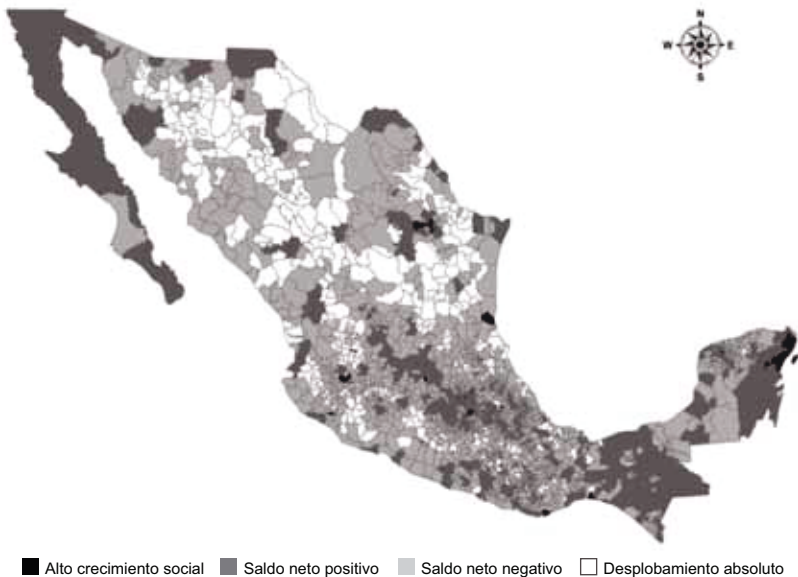
En este documento se realizó un ejercicio para estimar en forma indirecta la migración neta por DAME para el periodo 1980-2010⁴. Este ejercicio arrojó lo siguiente: durante esos años en total 9,1 millones de

⁴ En el ejercicio de medición indirecta de la migración neta por municipio y delegación se aplicó la técnica de la función compensadora, con el uso de estadísticas vitales del país y cifras de dos censos. La migración neta intercensal se obtiene con la resta del crecimiento total menos el crecimiento natural estimado (Ordorica, 1976, págs. 7-20). Dicho ejercicio se aplicó a los 2.392 municipios con dato poblacional en 1980. Entre 1980 y 2010 se crearon 64 municipios y su población de 2010 fue incluida en la del municipio que cedió superficie para la erección de las nuevas DAME.

personas abandonaron el país, constituyendo la migración internacional, y 17,3 millones de personas cambiaron su DAME de residencia, de los cuales 10,5 millones fueron migración interna neta y 6,8 millones, movilidad intrametropolitana. La tasa de migración interna neta se ubicó en 3,9 personas por cada 1.000 habitantes al año, mientras que la tasa de movilidad intrametropolitana neta fue de 2,5 personas por cada 1.000 residentes metropolitanos al año. El volumen de migración interna neta fue 1,16 veces mayor con respecto al de migración internacional neta, por lo que ambos flujos migratorios incidieron casi por igual en el proceso de redistribución de la población sobre el territorio nacional.

La migración interna neta alcanzó un promedio de 352.000 personas al año. De los 2.392 municipios existentes en el país en 1980, 591 presentaron inmigración neta y 1.801, emigración neta. Hubo 39 DAME con inmigración neta y mayor crecimiento por componente social con respecto al natural, mientras que 610 de los municipios con emigración neta atestiguaron una pérdida absoluta de población entre 1980 y 2010 (véase el mapa 1). Las DAME con inmigración neta fueron predominantemente de tipo metropolitana o urbana, mientras que las unidades con emigración neta fueron mayoritariamente rurales; esta dicotomía pone de manifiesto la polarización cada vez mayor en la geografía de la población en México.

Mapa 1
MÉXICO: SALDO NETO MIGRATORIO POR DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA MENOR, 1980-2010



Fuente: Censos generales de población y vivienda.

Las unidades territoriales de mayor inmigración neta fueron zonas metropolitanas y áreas urbanas; las diez con mayor volumen neto acumularon 3,9 millones de inmigrantes, el 37% de la migración interna neta, porcentaje que habla de un patrón centralizado en el destino de los migrantes. Su posición geográfica se caracterizó por estar ubicadas en DAM fronterizas con los Estados Unidos (Ciudad Juárez, Monterrey y Tijuana), en las inmediaciones de la ZMCM (Querétaro y Toluca), polos turísticos (Cancún, La Paz-Los Cabos y Puerto Vallarta), o nodos de industrialización reciente (Aguascalientes y León). La zona metropolitana de Tijuana, ubicada en el noroeste del país y fronteriza con los Estados Unidos, fue la unidad con mayor atracción absoluta y atrajo casi el 8% de la migración interna neta.

En el polo opuesto, las diez unidades territoriales con mayor emigración neta generaron el 27% de la emigración total (interna e internacional). La ZMCM, con un volumen de -6,1 millones de emigrantes netos, fue la de mayor monto y generó el 23% del origen total de migrantes. Esta metrópoli fue, hasta los años ochenta, el principal foco de atracción de la migración interna en el país, por lo que sus deseconomías de aglomeración, la crisis económica de los años ochenta y el cambio en la estrategia de crecimiento económico nacional hacia la apertura comercial incidieron en una transformación radical de los patrones de la migración interna del país. La ZMCM no fue la única área urbana caracterizada por su importante emigración poblacional, puesto que solo hubo una DAME rural entre las de mayor expulsión poblacional. Una característica de las unidades territoriales con mayor expulsión absoluta de población es que todas, salvo la ZMCM, son ciudades costeras o muy cercanas a esta.

3. Distribución regional de la población urbana

Como en todos los países del planeta, la población y las actividades económicas se distribuyen de manera desigual a lo largo y ancho del territorio nacional mexicano. Con el uso de ejercicios estadísticos, que emplean atributos socio-demográficos y económico-productivos, se han llevado a cabo propuestas para la regionalización del país, en las que se conjuntan DAM, o entidades federativas, tales como la de Ángel Bassols (1986), denominadas regiones geoeconómicas, o la de Luis Unikel, Crescencio Ruiz y Gustavo Garza (1978), elaborada para la comprensión de la urbanización. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 definió cinco mesorregiones para intentar facilitar la planeación y la colaboración entre entidades federativas y el gobierno federal (Poder Ejecutivo Federal, 2001). Esta última delimitación fue más bien de

conformidad con el principio de “regiones-plan” y no con el principio de homogeneidad o funcionalidad.

Con el propósito de conocer los patrones de la urbanización en las distintas porciones del territorio nacional, las 32 DAM, o entidades federativas, se agruparon en cinco regiones: i) Frontera Norte; ii) Norte; iii) Occidente; iv) Centro, y v) Sur y Sureste (véase el mapa 2)⁵.

Mapa 2
MÉXICO: REGIONES Y PRINCIPALES CIUDADES, 2010



Fuente: Censos generales de población y vivienda.

La región con mayor cantidad absoluta de población urbana era la Centro; en 2010 tenía 29,9 millones de habitantes en áreas urbanas, que representaban el 38% de la población urbana del país. La siguiente región con mayor contingente de pobladores en áreas urbanas fue la Norte, con 17,7 millones y el 22% de la población urbana nacional. En el polo opuesto, la región Norte era la de menor cantidad de habitantes en áreas urbanas, con 5,3 millones, el 7% de la población urbana nacional. Los montos demográficos de las regiones Occidente y Sur y Sureste fueron parecidos. En términos relativos aparece una ordenación distinta, puesto

⁵ La regionalización utilizada se obtuvo a partir del comportamiento de las entidades federativas en los atributos de crecimiento poblacional del período 1980-2000, grado de urbanización en 2000, producto interno bruto (PIB) por habitante en 1998 y crecimiento del PIB entre 1980 y 1998. Las regiones se conforman con las siguientes entidades federativas: i) Frontera Norte (Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas); ii) Norte (Baja California Sur, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas); iii) Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán); iv) Centro (Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala), y v) Sur y Sureste (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán).

que la región Frontera Norte era el territorio más urbanizado del país, con el 89% en 2010, seguida por la Centro con el 80% y, en tercer lugar, la Occidente con un 71%; estas tres regiones tenían una concentración de pobladores urbanos por encima del total nacional que era del 70%. Por otro lado, las regiones Norte y Sur y Sureste se caracterizaron por tener en 2010 una concentración urbana de alrededor del 50% (véase el cuadro 2).

Cuadro 2
MÉXICO: POBLACIÓN URBANA POR REGIONES, 1980-2010

Región	1980	1990	2000	2010
	Miles de habitantes			
Total	40 872	52 414	66 225	78 981
Frontera Norte	8 293	11 025	14 449	17 721
Norte	2 358	3 311	4 172	5 281
Occidente	6 308	8 902	11 076	13 487
Centro	18 501	21 352	26 326	29 884
Sur y Sureste	5 412	7 824	10 203	12 607
Porcentaje de población urbana				
Total	61,1	64,5	67,9	70,3
Frontera Norte	77,6	83,2	86,8	89,1
Norte	34,8	41,5	46,4	51,8
Occidente	56,8	63,7	67,3	70,9
Centro	78,6	78,9	79,9	80,2
Sur y Sureste	36,8	41,2	45,4	48,5
Índice de primacía ^a				
Total	2,62	2,20	2,07	1,88
Frontera Norte	1,14	1,08	0,94	0,95
Norte	0,62	0,64	0,65	0,64
Occidente	1,56	1,46	1,40	1,34
Centro	6,29	5,09	4,46	3,91
Sur y Sureste	0,35	0,41	0,40	0,41

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información de los censos generales de población y vivienda.

^a Cociente de la ciudad de mayor tamaño entre la suma poblacional de las ciudades de rango 2, 3 y 4.

En las cinco regiones se atestigua la curva de la urbanización en forma de “s” alargada; sin embargo, la ubicación de cada región en la curva fue distinta, así como la velocidad en el recorrido (Ruiz, 2006). Las regiones más urbanizadas (Frontera Norte y Centro) se ubicaron en la cúspide de la “s” y su velocidad de cambio en el grado de urbanización fue limitada; la región de Occidente se ubicó en una situación similar a la del total nacional, pero su velocidad fue mayor; las regiones menos urbanizadas (Norte y Sur

y Sureste) pasaron por la parte de alta pendiente en el cambio temporal del grado de urbanización, teniendo mayor velocidad la primera con respecto a la segunda.

El índice de primacía mide la importancia o jerarquía de la localidad de mayor tamaño en un país o región⁶. Este indicador fue en descenso para el total nacional, lo que significa la fase del reverso de la polarización según el modelo del ciclo de urbanización diferencial (Geyer y Kontuly, 1993). Esta fase también fue presenciada en las regiones Frontera Norte, Occidente y Centro, donde las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y México, respectivamente, acusaron ritmos inferiores de crecimiento poblacional con respecto a las metrópolis que les seguían.

Estas regiones eran territorios con mayor madurez en su urbanización, lo que se representa por su significativo grado de urbanización y la presencia de la fase del reverso de la polarización en su ciclo del desarrollo urbano. Por otro lado, nuevamente se ratifica la emergente urbanización de las regiones Norte y Sur y Sureste, que no habían alcanzado a ser predominantemente urbanas en 2000, además de contener menores índices de primacía y con una tendencia marginal al aumento durante el periodo 1980-2010. Fueron, entonces, territorios con importante tasa de urbanización y una presencia relevante de la metrópoli primada (San Luis Potosí en la Norte; Mérida en la Sur y Sureste).

B. Patrones de organización territorial: zonas metropolitanas y regiones urbanas

La distribución contemporánea de la población en el territorio se ha caracterizado por patrones de mayor complejidad, que se agrupan en cuatro grandes tipos (Naciones Unidas, 2010): i) aglomeraciones urbanas; ii) regiones urbanas; iii) corredores urbanos, y iv) megarregiones. Las aglomeraciones urbanas, o zonas metropolitanas, son las áreas urbanas que han rebasado un límite geográfico de naturaleza político-administrativo y han ocupado suelo de dos o más divisiones administrativas; estas concentraciones son generalmente las áreas más dinámicas del cambio económico y demográfico en buena parte de los sistemas nacionales de ciudades. Las regiones urbanas son zonas metropolitanas que se extienden más allá de sus fronteras administrativas y absorben otras zonas de influencia urbanas y rurales; contienen o una zona metropolitana de gran tamaño y áreas urbanas circunvecinas de menor población en un radio de

⁶ Los índices de primacía que se presentan en el cuadro II.1 se obtuvieron al dividir la población de la primera área urbana más poblada de cada región entre la suma de la segunda, tercera y cuarta.

hasta 160 kilómetros, o un número de áreas urbanas sin gran dominancia de ninguna de ellas. En esta configuración de asentamientos ocurre una serie de interrelaciones e interdependencias que se traducen en redistribución poblacional, especialización económica en cada centro de población y complejos procesos sociales (Meltzer, 1984, pág. 163).

Por su parte, los corredores urbanos son un conjunto de zonas metropolitanas, algunas de gran tamaño, que se conectan entre sí a través de rutas de transporte y ejes carreteros lineales. Este concepto es muy cercano al de megalópolis, utilizado en los años sesenta para referirse al conglomerado urbano del noreste de los Estados Unidos, territorio caracterizado por ser un tipo particular de región a través de un eje carretero y resultado de un proceso histórico en que intervienen el crecimiento de las ciudades, la división del trabajo y la evolución de los recursos (Gottmann, 1961). Por último, las megaregiones constituyen concentraciones superiores de población y actividades económicas que se han ido desarrollando por los siguientes motivos: i) expansión espacial de zonas metropolitanas geográficamente conectadas y otras configuraciones urbanas; ii) fusión de regiones con alta densidad demográfica; iii) aprovechamiento de grandes mercados; iv) gran cantidad de mano de obra calificada, y v) importante capacidad económica relevante y de actividades innovadoras. Las megaregiones se conforman con la unión funcional de dos o más zonas metropolitanas, de varios millones de habitantes en cada caso, o regiones urbanas en una superficie de forma geométrica y con una distancia entre ellas de no más de 250 kilómetros.

I. Dinámica metropolitana

El proceso de conformación de zonas metropolitanas en México se inició en la década de 1940, cuando el tejido urbano de cinco ciudades rebasó su límite político-administrativo (Ciudad de México, Monterrey, Orizaba, Tampico y Torreón). Estas urbes presentaban un importante crecimiento poblacional, derivado de la atracción y localización de empresas manufactureras amparadas en la política económica de sustitución de importaciones. El fenómeno de metropolización ha recibido mayor tratamiento en el sector académico del país, al existir propuestas de delimitación de zonas metropolitanas en 1970 (Unikel, Ruiz y Garza, 1978, págs. 119-135), en 1980 (Negrete y Salazar, 1986) y en 2000 (Sobrino, 2003).

Por su parte, el sector público reconoció este proceso en la década de 1970, cuando el concepto de conurbación se integró al sistema nacional de planeación del desarrollo urbano. Más adelante, en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2001-2006 se hizo una alusión conceptual sobre

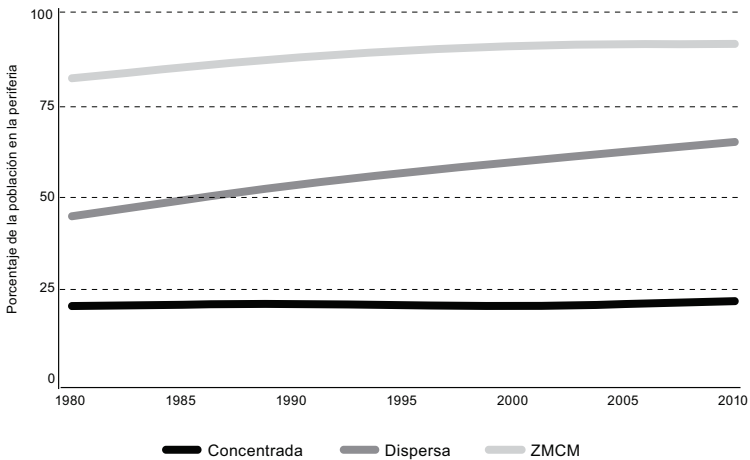
zonas metropolitanas y se esbozaron lineamientos de acción para dichas concentraciones territoriales. En el ejercicio fiscal de 2006 del gobierno federal se destinó, por primera vez, una partida presupuestal, denominada “Fondo Metropolitano”, para financiar la ejecución de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y equipamiento. De forma complementaria, en 2004 apareció una publicación interinstitucional donde se establecieron criterios y se ofreció una primera definición y delimitación oficial de 55 zonas metropolitanas de México en 2000 (SEDESOL/CONAPO/INEGI, 2004). La DAME central de la zona metropolitana se definió como el municipio donde se localizaba la ciudad principal, de al menos 50.000 habitantes, que daba origen a la zona metropolitana, mientras que las DAME periféricas se delimitaron a través de dos grandes criterios: i) estadísticos y demográficos, y ii) de planeación y política urbana. Esta delimitación de zonas metropolitanas no es del todo recomendable para estudios territoriales, puesto que incorpora municipios que en 2010 no tenían localidades de al menos 15.000 habitantes, no estaban integrados físicamente a la metrópoli y carecían de una interrelación relevante. A pesar de estos inconvenientes, es oportuno su uso por constituir el primer esfuerzo intergubernamental en la materia y para procurar homologar resultados de investigación. Cabe mencionar que de estas 55 zonas metropolitanas, 38 eran tejidos urbanos que en 2010 abarcaban más de una DAME, en tanto que las 17 restantes se habrían definido por principios de interrelación funcional o criterios de planeación. Asimismo, de las 55 zonas metropolitanas, tres estaban integradas por una sola DAME, 24 por dos y 27 por tres o más.

La suburbanización es el proceso de dispersión de la población y, posteriormente, del empleo desde la ciudad central hacia las divisiones administrativas de la periferia; dicho proceso es el responsable de la expansión física de la ciudad, la conformación metropolitana y el patrón de desplazamientos de la movilidad cotidiana de la población residente. En México, la suburbanización de la población metropolitana no ha sido tan relevante, ni en términos de su participación en el agregado demográfico total, ni en la velocidad de cambio. En las 52 zonas metropolitanas del país constituidas con al menos dos DAME, en 1980 el 53,1% de la población habitaba en la periferia, mientras que el porcentaje apenas se elevó al 56,6% en 2010.

Las 52 zonas metropolitanas de México se dividen en tres tipos, en función del grado de suburbanización logrado en 2010: i) concentrada, donde la DAME central contenía más de la mitad del volumen poblacional de la zona metropolitana; ii) dispersa, cuya población en la DAME

central era menor al 50% del total metropolitano, y iii) muy dispersa, con participación de la DAME central en la población total metropolitana menor al 10%. Las zonas metropolitanas concentradas fueron 37, mientras que las dispersas fueron 14 y la ZMCM fue la única muy dispersa en el sistema urbano nacional. La relativa alta participación de la población metropolitana en DAME de la ciudad central y su reducida velocidad de cambio se explican en gran medida por el elevado número de metrópolis concentradas, mientras que las dispersas se caracterizaron por ser activas en su fenómeno de suburbanización (véase el gráfico 3)

Gráfico 3
**MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN SUBURBANA
EN EL TOTAL METROPOLITANO, 1980-2010**
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información de los censos económicos.

La suburbanización es el tránsito hacia un mayor peso demográfico de las unidades territoriales de la periferia con respecto al de la ciudad central. El cambio en la geografía metropolitana de la población suele ir acompañado por una descentralización en la demanda ocupacional, aunque de menor magnitud. Las metrópolis mexicanas ejemplifican claramente lo anterior. En 2010, de la población total de las 52 zonas metropolitanas conformadas con más de una DAME, el 43,4% residía en las unidades centrales y el 56,6% en las de la periferia. En términos de empleo, el 58,5% de los ocupados se demandaban en unidades centrales y el 41,5%, en la periferia; estos datos ponen de manifiesto el papel preponderante de las ciudades centrales en la organización intrametropolitana de las actividades económicas (véase el cuadro 3).

Cuadro 3
**MÉXICO: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO EN LA PERIFERIA
 SEGÚN TIPO DE ZONA METROPOLITANA, 2008**

Rubro	Zonas metropolitanas			
	Total	Concentradas	Dispersas	Muy dispersas
Población	56,6	20,7	64,4	91,4
Empleo total	41,5	14,8	47,2	66,4
Industria	51,3	22,6	65,0	84,6
Comercio	43,5	13,7	46,5	75,6
Servicios al consumidor	37,7	12,7	42,1	64,7
Servicios al productor	37,6	13,2	40,8	57,0
Servicios sociales	41,1	12,9	43,3	73,1

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información del censo de población y vivienda de 2010 y los censos económicos de 2009.

Al dividir la demanda ocupacional por sectores de actividad se obtiene que la industria manufacturera era la de mayor dispersión del empleo hacia unidades territoriales de la periferia, en especial en las metrópolis concentradas. En el polo opuesto, los servicios al productor ofrecieron el mayor patrón de concentración relativa hacia unidades territoriales centrales, aspecto más visible en metrópolis dispersas. Con ello, la trayectoria en la dispersión de población del espectro metropolitano se acompañó con especificidades en la descentralización relativa del empleo: más activa en la industria manufacturera, gracias al aprovechamiento de economías de urbanización, pero menos en los servicios al productor, por el necesario uso de economías de alcance.

2. Regiones urbanas

Una región urbana alude a una superficie que contiene una gran zona metropolitana y áreas urbanas circunvecinas de menor tamaño, en un radio que generalmente se ha delimitado en hasta 150 kilómetros, o también un número de áreas urbanas de tamaño millonario o intermedio, sin gran dominancia de ninguna de ellas. En esta configuración de asentamientos ocurre una serie de interrelaciones e interdependencias que se traducen en redistribución de población y actividades económicas, especialización productiva de cada centro de población y complejos procesos sociales (Meltzer, 1984, pág. 163). Existen tres grandes modelos de conformación de región urbana (Champion, 2001; Pacione, 2001, págs. 123-125): i) por difusión, donde el centro nodal de la región desarrolla fuerzas difusoras centrípetas hacia el resto de su subsistema regional de ciudades, pero también centrífugas hacia otras zonas urbanas fuera de su área regional

de influencia; ii) por incorporación, donde la expansión urbana del nodo regional añade a su área de influencia centros de población más pequeños que eran localidades autosuficientes en términos de empleo y servicios, y iii) por fusión, es decir, la unión funcional de centros de población previamente independientes y de similar tamaño, que se origina por la mejora en los sistemas de transporte entre ellos.

Es un hecho la existencia de estas regiones urbanas, pero existen problemas en cuanto a su identificación práctica, aspectos que se pueden englobar en tres elementos (Champion, 2001): i) la escala espacial a la que se hace referencia (metropolitana, regional o megalopolitana); ii) el grado de interacción e interdependencia necesario (especialización productiva de las áreas urbanas y movilidad cotidiana de la población), y iii) manera en que se conforma (difusión, incorporación o fusión). En los modelos de conformación de regiones urbanas no se incluye como variable de análisis la marcha de la economía nacional ni regional, pero se debe recordar que la explicación del crecimiento económico opera en primer instancia a una escala nacional-social y no a escala regional-urbana (Polèse, 2005). En la literatura especializada existen propuestas sobre la existencia de regiones urbanas en México, abocadas fundamentalmente al estudio de la región Centro del país y que establecen la ZMCM como nodo de dicha región (Aguilar, 1999; Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, 1998; Delgado, 1998), o como el lugar central de una megalópolis (Garza, 2000). Adicionalmente, se ha reconocido el sistema de ciudades del estado de Guanajuato como región urbana del Bajío (Negrete y Salazar, 1986).

En la revisión de los estudios sobre regiones urbanas solo aparecen indicios sobre criterios operativos para su delimitación, por lo que en este documento se diseñó un método para definir las regiones urbanas del país al año 2010. Cabe mencionar que todo método de definición operativa en los estudios territoriales contiene grados de arbitrariedad⁷. A partir del método utilizado para la delimitación, se identificaron ocho regiones urbanas en el país, con distintos niveles de complejidad (véase el mapa 3). Estas regiones agrupan 409 DAME que tenían una población conjunta de 57,9 millones de habitantes, el 51,62% del total del país, y generaron en 2008 un

⁷ El método seguido se basó en los siguientes criterios: i) que la región urbana contara con al menos un millón de habitantes; ii) que estuviera conformada por al menos dos áreas urbanas con tamaño de 100.000 o más habitantes cada una, y iii) que estas áreas urbanas mostraran algún nivel de interrelación, evaluado a partir de la construcción de una matriz de viajes por motivo de trabajo para el año 2010 entre las 136 áreas urbanas del país que en 2010 tenían 50.000 y más habitantes. Esta información se derivó de los microdatos de la muestra del censo de población de 2010. Se estimó como nivel de interrelación aceptable si el 1% o más de la población ocupada de una área urbana trabajaba en otra. A las áreas urbanas con relación funcional (el 1% o más de los viajes por motivo de trabajo) se les anexaron municipios urbanos y rurales contiguos, siempre y cuando de estos proviniera al menos el 3% de su población ocupada).

PIB de 708.000 millones de dólares, el 65,1% de la riqueza nacional. Estos datos muestran el surgimiento en México de un patrón de concentración de población y actividades económicas en torno a regiones urbanas (véase el cuadro 4).

Cuadro 4
MÉXICO: REGIONES URBANAS
(En porcentajes)

Región	Municipios	Población 2010 ^a		PIB 2008 ^b	
		Total	Porcentajes	Total	Porcentajes
México	2 456	112 337	100,0	1 088 128	100,0
Regiones urbanas	201	41 779	37,2	558 764	51,4
Centro	114	24 208	21,5	312 406	28,7
Noreste	16	4 958	4,4	96 364	8,9
Occidente	12	4 772	4,2	58 646	5,4
Bajío	11	2 935	2,6	36 161	3,3
Centro Este	44	2 911	2,6	33 952	3,1
Noroeste	4	1 995	1,8	21 235	2,0

Fuente: Cálculos elaborados con información de la muestra censal 2010 y de los censos económicos de 2009.

^a En miles de habitantes.

^b En millones de dólares.

Mapa 3
MÉXICO: REGIONES URBANAS



Fuente: Censos generales de población y vivienda.

La región urbana del Centro es, con mucho, la de mayor complejidad y concentración poblacional y económica. El nodo central de dicha región es la ZMCM y se delimita en torno a ella de manera radial a través de los principales ejes carreteros del país; a esta región pertenecen dos metrópolis de más de un millón de habitantes (Puebla y Toluca) y ocho de tamaño intermedio (Apizaco, Cuernavaca, Cuautla, Pachuca, San Martín Texmelucan, Tlaxcala, Tula y Tulancingo). Su población en 2010 fue de 29,1 millones de habitantes, el 25,9% del total nacional, mientras que su PIB en 2008 se ubicó en 355.000 millones de dólares, el 32,6% del total. Su PIB por habitante fue 1,3 veces mayor con respecto al total nacional, lo que habla del aprovechamiento de economías de aglomeración para la localización de actividades económicas. El subsistema urbano mostró mayor presencia de urbes especializadas en servicios al productor, servicios al consumidor e industria. Esta región ha experimentado en los últimos años una reestructuración productiva desde la industria hacia los servicios, los que se han concentrado en la ZMCM, especialmente los orientados al productor. Dicha metrópoli ha iniciado un proceso de desindustrialización y difusión centrípeta para el crecimiento manufacturero hacia otras localidades del subsistema y fuera de este.

La segunda región urbana según conformación, tamaño de población y complejidad es la del Bajío. Es de forma más bien lineal, situada a lo largo de una autopista que la atraviesa de noroeste a sureste, complementada con dos ejes transversales. Se integró con 43 municipios y tenía una población de 6,7 millones de habitantes en 2010, equivalente al 5,9% del total nacional. En 2008 generó un PIB de 62.000 millones de dólares, el 5,7% del total del país, y su PIB por habitante fue cercano al promedio nacional. Los lugares centrales de esta región son León y Querétaro, ambos con más de un millón de habitantes, y se complementa con siete urbes de tamaño intermedio (Celaya, Irapuato, La Piedad, Pénjamo, Salamanca, San Francisco del Rincón y San Juan del Río). La distribución de la actividad económica sobre la región indica que las localidades de mayor jerarquía se especializan en la industria manufacturera, indicando el potencial aprovechamiento de economías de aglomeración, mientras que las de menor jerarquía se orientan o al comercio o a la producción agropecuaria. Esta producción agrícola y ganadera se utiliza como insumo en las plantas industriales de las localidades de mayor jerarquía.

La región urbana del noreste fue originada por la zona metropolitana de Monterrey y se caracteriza por ser la tercera con mayor concentración poblacional y la primera en PIB por habitante, 1,9 veces con respecto

al total nacional. Dicha región es conformada con dos ejes carreteros de orientación norte-sur y este-oeste, y Monterrey mantiene relaciones funcionales con dos metrópolis intermedias (Monclova y Saltillo). En 2010 tenía 5,6 millones de habitantes, el 5% del total nacional, y su PIB de 2008 se ubicó en 104.000 millones de dólares, el 9,5% del total del país. El significativo PIB por habitante es producto de la concentración de empresas manufactureras.

La zona metropolitana de Guadalajara es la segunda urbe más poblada del país y el lugar central de la cuarta región urbana con mayor tamaño poblacional, la Occidente, a la que pertenece otra ciudad de tamaño intermedio (Ocotlán). Esta región urbana contaba con 35 municipios, una población de 5,3 millones de habitantes, el 4,7% del total nacional, y un PIB de 61.000 millones de dólares, el 5,6% del total del país. La conformación de esta región es de forma axial, partiendo de Guadalajara y con ejes norte-sur y este-oeste. Su PIB por habitante era 1,2 veces superior al total nacional, por lo que no existen grandes aprovechamientos de economías de aglomeración. La región se especializa en industria y comercio.

La quinta región con mayor tamaño de población en 2010 fue la del Mar de Cortés, en el noroeste del país, con lugares centrales en Culiacán y Hermosillo y cuatro ciudades intermedias dentro de su área de influencia (Ciudad Obregón, Guaymas, Los Mochis y Navojoa). A ella pertenecían 17 municipios, con población conjunta en 2010 de 3,7 millones de personas, PIB en 2008 de 36.000 millones de dólares y PIB per cápita similar al promedio nacional. Su conformación es lineal, a lo largo de la costa del Mar de Cortés (o Golfo de California) y está atravesada por un eje carretero. En este territorio se aprovechan economías de localización para la producción agropecuaria y generación de energía eléctrica. Cabe mencionar que en esta región se ubican los distritos de riego agrícola con mayor productividad del país.

La siguiente región urbana por tamaño poblacional en 2010 fue la Noroeste, cuyo lugar central lo ocupa Tijuana, con más de un millón de habitantes, y comparte relaciones funcionales con otras tres urbes de tamaño intermedio (Ensenada, Mexicali y San Luis Río Colorado). Esta región está integrada a la región urbana de San Diego, o también con la conformación megalopolitana que comienza en Los Ángeles, de tal manera que se constituye en un ámbito de concentración binacional. Su población en 2010 fue de 3,3 millones de habitantes y en 2008 generó un PIB de 34.000 millones de dólares. Estos montos representaron, respectivamente, el 3% y el 3,1% con respecto al total del país, por lo que su PIB por habitante fue cercano al promedio nacional. En la

estructura económica de esta región sobresalen el comercio y la industria maquiladora de exportación.

Por último, las regiones del Golfo de México y del Mar Caribe se ubican en el sureste del territorio nacional y su conformación ha estado supeditada a una actividad económica: la extracción y refinación de petróleo en la primera y el turismo en la segunda. En la región urbana del Golfo de México existen tres urbes que funcionan como lugares centrales (Coatzacoalcos, Minatitlán y Villahermosa), mientras que en la del Mar Caribe hay dos (Cancún y Playa del Carmen). El PIB per cápita de ambas regiones en 2008 fue 1,4 veces mayor en relación al promedio del país. Cabe mencionar que la región urbana del Caribe fue el territorio del país con mayor dinamismo poblacional en el periodo 1980-2010; en el primer año su población era de 173.000 habitantes, mientras que en el segundo sumó 1,1 millones, lo que significa una T CPA del 6,5%.

Dos reflexiones se pueden esgrimir sobre las regiones urbanas del país. La primera tiene que ver con la forma de organización interna, según tipologías propuestas en la literatura (Champion, 2001; Kresl, 1998; Pacione, 2001), donde se aprecia que las regiones urbanas del Noreste y Occidente corresponden a la acepción de ciudad-región, es decir, territorios donde existe una ciudad de gran tamaño, que concentra el grueso de la población y las actividades económicas de la región y que le imprime un carácter monocéntrico. La región del Noroeste, por su posición geográfica, se adapta más a la tipología de región-puente porque, al situarse en la convergencia de dos mercados, se ha posicionado como canal de producción, aprovechando los precios sombra que brinda la frontera, así como de circulación de bienes, servicios y personas entre ambos países. La zona metropolitana de Tijuana tuvo un saldo migratorio neto positivo durante todo el siglo XX (Sobrino, 2010, págs. 53-61); en muchos casos se trataba de personas que tenían la intención original de migrar hacia los Estados Unidos.

Por último, las regiones urbanas del Centro y Bajío están más cercanas a la tipología policéntrica, puesto que son territorios con una elevada densidad poblacional y donde existen varias áreas urbanas de distinto tamaño. Quizá la diferencia con respecto a la tipología ideal consiste en que las actividades económicas en la región se organizan jerárquicamente según su distribución en la ciudad de mayor tamaño, lo que habla más de efectos difusores centrípetos desde el nodo central hacia su corona regional de localidades y menos del aprovechamiento de economías particulares en cada localidad. A esta tipología pertenecen también las regiones urbanas del Mar de Cortés, Golfo de México y Mar Caribe, aunque su conformación

es de tipo lineal (a lo largo de la costa) y sus relaciones funcionales están definidas por actividades económicas específicas: producción agropecuaria en la primera, petróleo en la segunda y turismo en la tercera.

Un segundo aspecto tiene que ver con la transmisión del desempeño económico desde el nodo de la región urbana hacia su área de influencia, situación que bien podría catalogarse como cooperación para la competitividad y que se presenta en las regiones Centro, Bajío, Noroeste, Noreste y Mar Caribe. En sentido contrario, en las regiones de Occidente, Mar de Cortés y Golfo de México existe carencia de difusión de beneficios desde el centro hacia la periferia.

La conformación de regiones urbanas en México es una modalidad territorial emergente en cuanto a distribución espacial de la población, localización de actividades económicas y yuxtaposición de mercados urbanos de trabajo. En los lugares de primer orden en cada región urbana se concentran preferentemente las ventajas competitivas para su desempeño económico, con una magra transferencia de beneficios hacia sus localidades subsidiarias. Un reto de política pública será reconocer, en primera instancia, la existencia de este tipo de organización territorial y, en segunda instancia, procurar lineamientos de política para promover el crecimiento económico de tales unidades territoriales funcionales.

C. Notas finales

En este documento se han descrito las principales tendencias en la urbanización de México a partir de 1980. El análisis se concentró en los aspectos “macro” de la demografía, es decir, agregados de las variables demográficas, dejando de lado elementos “micro”, que tienen que ver con factores normativos y culturales cuyo tratamiento escapa a los objetivos del presente trabajo. Los datos de los censos de población atestiguan un importante descenso en el ritmo del crecimiento demográfico nacional, aspecto que es congruente con un modelo teórico propuesto en la ciencia demográfica y conocido como transición demográfica. La desaceleración en el crecimiento poblacional fue producto de la importante caída en la tasa global de fecundidad, así como de la consolidación en la disminución de la tasa de mortalidad, especialmente entre la población infantil. De esta manera, México arribó al siglo XXI con una población menor a 100 millones de habitantes, en vez de los 130 que se proyectaban en ejercicios elaborados en la década de 1970.

El tránsito hacia la última fase del modelo de transición demográfica se inició en la década de 1980, justo cuando el país presentó una cruenta

crisis por el agotamiento del modelo económico de sustitución de importaciones y un importante desbalance en las finanzas públicas, aspectos que obligaron a un cambio de estrategia de crecimiento hacia otro modelo orientado a la apertura comercial y a una menor participación del Estado en las funciones de producción de bienes y servicios. Es un hecho que el factor económico no fue la variable explicativa del cambio demográfico, pero sí fue un elemento que lo aceleró, puesto que, entre otras cosas, la población femenina se insertó de manera más activa en el mercado de trabajo, al tiempo que aumentó paulatinamente la edad promedio al contraer matrimonio.

Entre 1980 y 2010 el porcentaje de población que residía en ciudades y zonas metropolitanas creció del 61,1% al 70,3%. Tal incremento se produjo, en cierta medida, por la incorporación de 176 nuevas áreas urbanas, un promedio de seis al año, que hasta antes de alcanzar los 15.000 habitantes formaban parte de la contabilidad de la población no urbana. Sin embargo, la variable fundamental del aumento en el grado de urbanización fue la migración interna, es decir, los flujos de población con origen en localidades menores a 15.000 habitantes y con destino en las áreas urbanas (ciudades o zonas metropolitanas).

Pero no toda la migración interna fue del tipo rural-urbano; de hecho su magnitud fue superada por la movilidad urbana-urbana, donde la ZMCM jugó un papel central al transformarse del principal polo de atracción de migrantes, hasta principios de los años ochenta, al nodo con mayor expulsión neta. Así, la transición demográfica, la crisis económica, el cambio en la estrategia de crecimiento, la migración internacional y la reorientación de flujos de migración interna fueron indicadores clave en la reestructuración económica y poblacional de México en las postrimerías del siglo XX. La reorientación de los flujos de migración interna tuvo como ganadoras a áreas urbanas ubicadas en la Frontera Norte y en la corona regional de la ZMCM, así como zonas turísticas, grandes metrópolis y focos de atracción de nuevas inversiones ante la apertura comercial.

Un aspecto que se observa desde los años ochenta es que la población urbana del país ha tendido a concentrarse en metrópolis millonarias, con un aumento tanto en su número como en su tamaño. En 1980 había cuatro zonas metropolitanas con tal volumen de población, cifra que aumentó a 11 para 2010. Sobre la base de las proyecciones de población disponibles (Consejo Nacional de Población, 2011), se observa que la tendencia a la concentración poblacional en metrópolis millonarias proseguirá y se consolidará, puesto que en 2030 habrá 19 zonas con tal tamaño de población, donde residirá el 53% de los habitantes del país. México,

como nación independiente, tardó 150 años para transformarse de rural a predominantemente urbana, poco menos de 20 para cambiar de urbana a predominantemente metropolitana y, de aquí al 2030, evidenciará una transformación más: de metropolitana a esencialmente de grandes zonas metropolitanas, o metrópolis millonarias.

A la par de esta tendencia a la concentración de la población en metrópolis millonarias, se consolidarán patrones de organización de la población y actividades económicas del tipo región urbana, es decir, la existencia de áreas urbanas cercanas y con importantes interrelaciones entre sí. Sobre la base del ejercicio elaborado en este documento, en 2010 había seis regiones urbanas del país, mientras que en 2030 habrá ocho, en las que se concentrará el 45% de la población total del país y se generará el 65% del PIB nacional.

Estas trayectorias encierran formidables retos, de los que aquí solo se mencionan algunos. Por ejemplo, en el aspecto agrario, ¿qué significa y qué significará el despoblamiento del campo? Indudablemente, una disminución de la frontera agropecuaria y con ello la necesidad de implementar políticas públicas para elevar la productividad, al mismo tiempo que se procura retener a la población. Se deberán buscar alternativas para que los residentes de áreas rurales no sigan viendo como única opción la migración.

También se espera despoblamiento en muchas áreas urbanas de tamaño intermedio, pero sobre todo pequeño. En este caso, los gobiernos locales deberán idear e instrumentar mecanismos para reactivar la economía local, hacer más eficiente el mercado de trabajo y procurar un mayor desarrollo social. Un aspecto central en estas áreas consistirá en la formulación de estudios y planes que permitan conocer sus ventajas competitivas y los mecanismos para su aprovechamiento.

Las metrópolis millonarias deberán encarar el crecimiento esperado de su población con acciones tendientes a consolidar los conceptos de gobernanza, competitividad, cohesión social y sustentabilidad. Como primera medida, será urgente contar con un marco normativo acorde a la nueva realidad del país, que permita el ejercicio eficiente y eficaz de los distintos gobiernos municipales en el ámbito de la concentración metropolitana. Será indispensable discutir el modelo a seguir, ya sea el de la construcción de administraciones centralizadas con jurisprudencia metropolitana, o la reglamentación de acciones para la cooperación y acuerdos entre las instancias municipales (Ugalde, 2007).

La ZMCM, por su parte, continuará creciendo en términos poblacionales y permanecerá como el principal origen de flujos de

migración interna del país. Esta megaurbe es el armazón urbanístico que cuenta con las mayores ventajas para insertar a México en el contexto global, a juzgar por su desempeño competitivo (Kresl y Ni, 2010), por lo que deberá encontrar soluciones a sus dos principales problemáticas, las del agua y el transporte, ambas vinculadas con cuestiones ambientales. En materia de agua, su balance hídrico es cada vez más deficitario, por lo que se deberá intentar revertir la tendencia. En materia de transporte, será urgente implementar acciones con miras a cambiar drásticamente el modo de transporte en los viajes que realiza la población, de tal manera que el transporte público concentre cada vez un mayor volumen de viajes. Esto implica una transformación en la cultura de tránsito y un plan integral para su reordenamiento.

En el plano económico, el PIB total del país en 2008 se ubicó en 1,1 billones de dólares. Su TCPA entre 1980 y 2008 se ubicó en el 2,7%, en tanto que el PIB por habitante creció a una tasa del 1,3%, hasta ubicarse en 9.686 dólares. El dinamismo del PIB fue francamente magro frente a las necesidades de empleo, por lo que uno de los impactos fue el deterioro en las condiciones del mercado de trabajo (Puyana y Romero, 2004; Zepeda, 2002). Si se mantiene la TCPA en el PIB per cápita que se registró entre 1980 y 2008 (1,3%), entonces el PIB total deberá crecer entre 2008 y 2030 de 1,1 a 1,6 billones de dólares constantes, es decir, un ritmo de crecimiento anual medio del 1,6%, con lo que el PIB por habitante cambiará de 9.686 a 12.869 dólares. En este escenario no se contemplarían soluciones a problemas estructurales de la economía nacional ni un mejoramiento en las condiciones del mercado de trabajo (Sobrinó, 2007).

Un escenario alternativo consistiría en alcanzar un PIB por habitante de 20.000 dólares en 2030, lo que implicaría que el PIB total acusara una TCPA del 3,7%, hasta llegar a un monto de 2,4 billones de dólares en 2030. Tal situación se alcanzaría siempre y cuando se implemente en el país una genuina política industrial abocada a la firme promoción de sectores específicos y siempre que en ellos se impulsen el restablecimiento de cadenas productivas, el crecimiento de la productividad, la conformación y consolidación de una cultura empresarial que facilite el intercambio de ideas, tecnologías e información, y la búsqueda de un crecimiento sostenible. Esta política industrial debería contar también con estrategias sobre el destino de la producción, de tal manera que no se apueste todo al intercambio global y se mire al mercado interno.

En ambos escenarios el papel de las metrópolis millonarias será central, por lo que deberá haber una conjunción de políticas federales y locales, o de ámbitos metropolitanos, de forma que se identifiquen las

responsabilidades intersectoriales y se atribuyan tareas a los distintos agentes que intervienen en el desarrollo local (gobiernos, iniciativa privada, instituciones y ciudadanía). La competitividad del país dependerá cada vez más de un selecto número de zonas metropolitanas, por lo que la promoción en cuanto al desempeño de estas deberá garantizarse a través del mejoramiento de sus ventajas competitivas.

En todos estos retos están ausentes dos asuntos de trascendental importancia: la creciente ola de inseguridad que vive el país y la crisis global. Es probable que mucho de lo que se proyecta sobre la perspectiva de la urbanización en México hacia el año 2030 se deba revisar en el futuro próximo y ajustarse a las nuevas condiciones y proyecciones poblacionales. El valor de este texto, por lo tanto, dependerá de confrontar lo que se esperaba antes de la crisis económica y de seguridad, con lo que se esperará una vez conocidos sus efectos. Esta confrontación permitirá establecer los impactos registrados, las enseñanzas sobre las acciones implementadas y el ofrecimiento de ideas, a partir de la práctica del oficio de la investigación, a fin de procurar un futuro más promisorio a la población y los territorios de México.

Bibliografía

- Aguilar, G. (1999), "Mexico City's growth and regional dispersion", *Problems of Megacities: Social Inequalities, Environmental Risk and Urban Governance*, G. Aguilar e I. Escamilla (eds.), México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México/International Geographical Union.
- Ariza, M. y J. M. Ramírez (2008), "Urbanización, mercados de trabajo y escenarios sociales en el México finisecular", *Ciudades latinoamericanas*, A. Portes, B. Roberts y A. Grimson (coords.), México, D.F., Miguel Ángel Porrúa-Universidad Autónoma de Zacatecas.
- Armstrong, H. y J. Taylor (2000), *Regional Economics and Policy*, Londres, Blackwell Publishers.
- Bassols, Á. (1986), *Geografía económica de México*, México, D.F., Trillas.
- Castells, M. (1980), *La cuestión urbana*, México, D.F., Siglo XXI.
- Champion, A. (2001), "A changing demographic regime and evolving polycentric urban regions: Consequences for the size, composition and distribution of city populations", *Urban Studies*, vol. 38, Nº 4.
- Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos (1998), *Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México*, México, D.F.
- CONAPO (Consejo Nacional de Población) (2011), *Proyecciones de la población de México, 2005-2050* [en línea] http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=234.
- Davies, K. (1969), *World Urbanization*, Los Ángeles, University of California Press.
- Delgado, J. (1998), *Ciudad-región y transporte en el México central*, México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México-Plaza y Valdés Editores.

- Garza, G. (2008), *Macroeconomía del sector servicios en la Ciudad de México 1960-2003*, Mexico, El Colegio de México.
- ___ (2003), *La urbanización de México en el siglo XX*, México, D.F., El Colegio de México.
- ___ (2000), “La megalópolis de la Ciudad de México según escenario tendencial, 2020”, *La Ciudad de México en el fin del segundo milenio*, G. Garza (coord.), México, D.F., El Colegio de México-Gobierno del Distrito Federal.
- Geyer, H. y T. Kontuly (1993), “A theoretical foundation for the concept of differential urbanization”, *International Regional Science Review*, vol. 17, N° 2.
- Gilbert, A. (1993), “Third World Cities: The Changing National Settlement System”, *Urban Studies*, vol. 30, N° 4-5.
- Gómez de León, J. (2000), “Retos y oportunidades demográficas del futuro de la población”, *México 2030. Nuevo siglo, nuevo país*, J. Millán y A. Alonso (coords.), México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
- González, L. y L. Pang (1993), “Sistemas de ciudades en México”, *Ciudades*, N° 19.
- Goodall, B. (1972), *The Economics of Urban Areas*, Oxford, Pergamon Press.
- Gottmann, J. (1961), *Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States*, Cambridge, The MIT Press.
- Kenen, P. (ed.) (1994), *Managing the World Economy*, Washington, D.C., Institute for International Economics.
- Kresl, P. (1998), “La respuesta de la economía urbana al Tratado de Libre Comercio de América del Norte: Planificar para la competitividad”, *Economía, sociedad y territorio*, vol. 1, N° 4.
- Macura, M. (1961), “The influence of the definition of the urban place on the size of the urban population”, *Urban Research Methods*, J. Gibbs (ed.), Princeton, Nueva Jersey, D. Van Nostrand Company.
- Marx, K. (1930), *Capital*, vol. I, Nueva York, J. M. Dent & Sons LTD.
- Meltzer, J. (1984), *Metropolis to Metroplex*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.
- Naciones Unidas (2010), *State of the World's Cities 2010/2011. Bridging the Urban Divide*, Nairobi, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.
- Negrete, M. E. y H. Salazar (1986), “Zonas metropolitanas en México, 1980”, *Estudios demográficos y urbano*, vol. 1, N° 1.
- Ni, P. y P. Kresl (2010), *The Global Urban Competitiveness Report*, Cheltenham, Edward Elgar.
- Ordorica, M. (1976), *Migración interna en México, 1960-1970*, México, Secretaría de Industria y Comercio, documentos de evaluación y análisis, serie III, N° 5.
- Pacione, M. (2001), *Urban Geography. A Global Perspective*, Londres, Routledge.
- Poder Ejecutivo Federal (2001), *Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006*, México, D.F.
- ___ (1989), *Programa Nacional de Desarrollo Urbano, 1989-1994*, México, D.F.
- Polèse, M. (2005), “Cities and national economic growth: a reappraisal”, *Urban Studies*, vol. 42, N° 8.
- Puyana, A. y J. Romero (2004), “Apertura comercial y remuneraciones a los factores: la experiencia mexicana”, *Estudios económicos*, vol. 19, N° 2.
- Rain, D. (1999), “Commuting directionality, a functional measure for metropolitan and non-metropolitan area standard”, *Urban Geography*, vol. 20, N° 8.
- Richardson, H. (1973), *The Economics of Urban Size*, Londres, Saxon House.
- Ruiz, C. (2006), “Distribución de la población de México en el siglo XX. Lectura de un artículo”, *Población, ciudad y medio ambiente en el México contemporáneo*, J. L. Lezama y J. Morelos (coords.), México, D.F., El Colegio de México.
- ___ (1993), “El desarrollo del México urbano: Cambio de protagonista”, *Comercio exterior*, vol. 43, N° 8.

- ___ (1989), “Distribución de población y crisis económica en los años ochenta: Dicotomías y especulaciones”, México, D.F., El Colegio de México, inédito.
- Sassen, S. (2000), *Cities in a World Economy*, Thousand Oaks, California, Pine Forge Press.
- SEDESOL/CONAPO/INEGI (Secretaría de Desarrollo Social/Consejo Nacional de Población/Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2004), *Delimitación de las zonas metropolitanas de México*, México, D.F.
- Sobrino, J. (2010), *Migración interna en México durante el siglo XX*, México, D.F., Consejo Nacional de Población.
- ___ (2007), “Desempeño industrial en las principales ciudades de México, 1980-2003”, *Estudios demográficos y urbano*, vol. 22, N° 2.
- ___ (2003), “Zonas metropolitanas de México en 2000: Conformación territorial y movilidad de la población ocupada”, *Estudios demográficos y urbano*, vol. 18, N° 3.
- ___ (1996), “Tendencias de la urbanización mexicana hacia finales del siglo”, *Estudios demográficos y urbano*, vol. 11, N° 1.
- Stark, T. (1967), “The economic desirability of migration”, *International Migration Review*, vol. 1, N° 2.
- Ugalde, V. (2007), “Sobre el gobierno de las zonas metropolitanas de México”, *Estudios demográficos y urbano*, vol. 22, N° 2.
- Unikel, L., C. Ruiz y G. Garza (1978), *El desarrollo urbano de México*, México, D.F., El Colegio de México.
- Welti, C. (ed.) (1997), *Demografía I*, México, D.F., Programa Latinoamericano de Actividades en Población.
- Zelinsky, W. (1971), “The hypothesis of the mobility transition”, *Geographical Review*, vol. 61, N° 2.
- Zepeda, E. (2002), “Empleo y salarios. Los vaivenes del estancamiento”, *Demos. Carta demográfica sob e México*, N° 15.

Transición de la movilidad: Estudio de perfiles de migrantes de la tercera edad en el Brasil

Marden Barbosa de Campos¹

Alisson Flávio Barbieri²

Gilvan Ramalho Guedes³

Resumen

El propósito del presente artículo es presentar una reflexión sobre la actual transición de la movilidad en el Brasil, a partir del análisis de las características personales y familiares de los migrantes de la tercera edad y el desarrollo de perfiles de migrantes. La base empírica de esta reflexión son los desplazamientos de población entre los estados de Minas Gerais y São Paulo, los dos más poblados del país. Para el desarrollo de estos perfiles los autores optaron por la aplicación del método de grados de pertenencia (*Grade of Membership*) a datos provenientes de los censos demográficos de 1991 y 2000. Los resultados del estudio demuestran la importancia de los factores sociales, familiares y económicos y de las redes sociales que influyen en la migración de personas mayores entre los dos estados. La acentuación de la heterogeneidad de los migrantes permite suponer que en las próximas décadas podrían surgir nuevos perfiles de migrantes, dado el envejecimiento de la estructura etaria de la población, y es posible que esos nuevos perfiles planteen nuevas demandas a las sociedades de origen y de destino de la migración.

¹ Analista del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y profesor de la Escuela de Enfermería de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG).

² Profesor del Departamento de Demografía e investigador del Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR) de la Universidad Federal de Minas Gerais.

³ Profesor adjunto del Programa de posgrado de gestión integrada del territorio y coordinador del Observatorio interdisciplinario del territorio (OBIT) de la Universidade Vale do Rio Doce (Univale).

Abstract

This article reflects on the current mobility transition in Brazil, examining the individual and family characteristics of older migrants and developing their profiles. The population movements between the two most populous states in Brazil, Minas Gerais and São Paulo, form the empirical basis for this study. To develop the profiles, the authors applied the grade of membership method to data from the population censuses of 1991 and 2000. The results of the study show the importance of social, family, economic and social network factors in the migration of older persons between the two states. With the increased heterogeneity of migrants, new migrant profiles could emerge in the coming decades, as the population as a whole ages, which could place new demands on sending and receiving societies.

Résumé

Le présent article a pour but de présenter une réflexion sur la transition actuelle de la mobilité au Brésil, sur la base de l'analyse des caractéristiques personnelles et familiales des migrants du troisième âge et l'élaboration de profils des migrants. La base empirique de cette réflexion est constituée par les déplacements de population entre les états de Minas Gerais et São Paulo qui sont les deux états les plus peuplés du pays. Pour élaborer ces profils, les auteurs ont appliqué la méthode des degrés d'appartenance (*Grade of Membership*) aux données issues des recensements démographiques de 1991 et 2000. Les résultats de l'étude font ressortir l'importance des facteurs sociaux, familiaux et économiques ainsi que des réseaux sociaux qui ont une incidence sur la migration de personnes âgées entre les deux états. L'hétérogénéité accrue des migrants permet de supposer que de nouveaux profils de migrants pourraient surgir dans la prochaine décennie au regard du vieillissement de la structure par âge de la population et que ces nouveaux profils pourraient poser de nouvelles pressions sur les sociétés d'origine et de destination de la migration.

Introducción

Una característica destacada de la situación actual en varios países de América Latina es el desarrollo de importantes procesos de transición que redefinirán las estructuras sociales y económicas. Entre otros, cabría mencionar la transición demográfica y las consecuencias de los procesos de reducción de la fecundidad y la mortalidad en lo que respecta a la estructura de la población; la transición urbana y el aumento de la concentración de la población en ciudades medianas y grandes; y, en relación con los dos anteriores, el proceso de transición epidemiológica.

Estas perspectivas de la transición tienen en común la concepción de un enfoque evolucionista —y, por lo tanto y en cierta medida, determinista— de los procesos macrosociales derivados del avance de las sociedades en los procesos de desarrollo o “modernización”.

Zelinsky (1971) ofrece una cuarta perspectiva de la transición, que viene a sumarse a la concepción mencionada. Según este autor, el proceso de transición demográfica va unido a una “transición de la movilidad” cuando el patrón migratorio de las sociedades se va modificando a medida que estas se modernizan. A su juicio, la sociedad futura será una sociedad caracterizada por una elevada movilidad y una considerable participación en ella de personas de la tercera edad, que obedecerá al aumento del porcentaje de la población total correspondiente a este grupo, debido al avance del proceso de transición demográfica

El examen de la literatura sobre las migraciones nos lleva a constatar que, aunque la mayor parte de los estudios sobre el tema se concentran en el desplazamiento de la población económicamente activa, los países que presentan una estructura etaria envejecida tienen un historial de ensayos sobre las migraciones de personas de la tercera edad (Newbold, 1996; Walters, 2002; Longino y Bradley, 2006; Hass, 2006). Sin embargo y a pesar de que en algunos países en desarrollo como el Brasil se está produciendo un envejecimiento acelerado de la población, prácticamente no existen estudios sobre el tema.

Las migraciones de personas de la tercera edad podrían tener consecuencias importantes en estos países relacionadas con la salud y la asistencia social, el mercado de trabajo, la oferta de servicios y el mercado inmobiliario, tanto en las regiones de origen como en las de destino.

El objetivo de este artículo es presentar un análisis de las características personales y familiares de las personas mayores, basado en datos recopilados en los censos demográficos, con el fin de desarrollar perfiles de migrantes de la tercera edad. Se espera que esto conduzca a una

reflexión sobre la etapa de transición de la movilidad en que se encuentra el Brasil. Para tal reflexión se recurrirá, como base empírica, a los desplazamientos de población entre los estados vecinos de Minas Gerais y São Paulo, los dos más poblados del país y que en la segunda mitad del siglo XX registraron intensos movimientos migratorios entre ambos. Como indica Rigotti (1999), durante la segunda mitad del siglo pasado Minas Gerais y São Paulo tuvieron una estrecha interrelación y ocuparon un lugar destacado en lo que respecta a los movimientos migratorios dentro del Brasil, tanto por su volumen como por la relación recíproca. Durante décadas, São Paulo recibió población procedente de Minas Gerais, pero a partir de los años ochenta del siglo pasado Minas Gerais comenzó a recibir un número significativo de inmigrantes provenientes de São Paulo, compuesto en gran parte por migrantes de retorno. Los migrantes de la tercera edad aumentaron un 65,7% en ese período, en tanto que el número de migrantes de otros grupos de edad registró un incremento del 43,4%.

El intenso proceso de industrialización y modernización de São Paulo atrajo a grandes contingentes de población, especialmente de Minas Gerais y del nordeste del país. La capacidad de atracción de São Paulo contribuyó a definir, durante varias décadas, una de las características más sobresalientes del patrón migratorio del Brasil. A partir de los años ochenta, las migraciones internas entraron en una nueva etapa, en la que el éxodo rural perdió impulso en comparación con nuevas formas de distribución espacial de la población como la migración de retorno a las antiguas regiones expulsoras de población y el aumento de la rotación migratoria, las migraciones internacionales y las migraciones hacia ciudades medianas. Paralelamente, el proceso de transición demográfica registró un avance extraordinariamente rápido en todas las regiones del Brasil, que se tradujo en un acelerado envejecimiento de la estructura etaria de la población (Wong y Carvalho, 2006). Debido a la simultaneidad de estos procesos, la participación de las personas mayores en las migraciones internas ha venido aumentando en forma sostenida.

En el presente artículo se investigan las características personales y domiciliarias que permiten delinear perfiles de migrantes mayores entre São Paulo y Minas Gerais. En vista de la falta de información directa de los censos demográficos sobre los factores que motivan a emigrar a las personas de la tercera edad y sobre la influencia ejercida por los lugares de origen y de destino, en una primera etapa tuvimos que identificar las características personales y familiares de los migrantes y determinar cómo se diferenciaban entre sí. Eso nos llevó a adoptar una estrategia de desarrollo de perfiles de migrantes conforme al método de grados de pertenencia, que se aplicó a los datos recopilados en los censos demográficos de 1991 e 2000

A. Elementos para el desarrollo de una tipología de los migrantes de la tercera edad

A diferencia de los principales estímulos atribuidos a la migración de personas jóvenes, los factores asociados a la migración de personas de edad son una extrapolación de la búsqueda de empleo e ingresos y se relacionan con las etapas del ciclo de vida características de las edades avanzadas.

La jubilación, la salud y la estructura familiar son los factores personales y familiares más importantes relacionados con estas migraciones (Biggar, 1980; Choi, 1996; Bures, 1997; Chen y Wilmoth, 2004). Existen estudios específicos sobre la relación entre la migración de personas de la tercera edad y la jubilación (Bures, 1997; Bennett, 1993; Anderson, 2002; Hass, 2006), la discapacidad (Choi, 1996; Chen y Wilmoth, 2004) y la situación domiciliaria (DeVos y Holden, 1988; Boyd, 1991; Wilmoth, 2001), así como estudios en los que se desarrollan tipologías basadas en una combinación de estos atributos (Wiseman y Roseman, 1979; Litwak y Longino, 1987; Walters, 2000). En varios estudios se destaca también la importancia de factores tales como el interés en residir en lugares con “comodidades”, entre otros un clima agradable, un bajo nivel de delincuencia y un menor costo de vida (Law y Warnes, 1976; Newbold, 1996; Anderson, 2002).

Los atributos mencionados influyen de distintas maneras en la decisión de emigrar de las personas de edad. La jubilación es uno de los factores citados frecuentemente como uno de los principales estímulos de la migración de las personas mayores, por el hecho de liberarlos de la necesidad de residir donde haya posibilidades de empleo (Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2003; Walters, 2000; Lee, 1980; Rogers, 1988). Los problemas de salud y discapacidad que trae aparejados el envejecimiento suelen ir acompañados de limitaciones físicas y, en algunos casos, cognitivas (Maddox y Clark, 1992; Medeiros y Diniz, 2004; Neri y Soares, 2004), lo que puede imponer a las personas mayores la necesidad de cambiar de lugar de residencia en un intento por facilitar su adaptación al entorno y recibir apoyo (Choi, 1996; Walters, 2002; Chen y Wilmoth, 2004). La influencia de la estructura domiciliaria o de la situación conyugal se relaciona fundamentalmente con la unidad decisoria de la migración y las estructuras de apoyo. Entre otras cosas, esto queda en evidencia en el análisis de las características estrechamente relacionadas con una etapa específica del ciclo de vida, como la viudez, en la que la pérdida de la pareja supone también una pérdida del apoyo físico y emocional (Rogers, 1988). La

estructura domiciliaria también influye en la migración a través del proceso de adopción de la decisión de emigrar. En muchos casos, la intención de emigrar surge dentro del hogar y se vincula con el tipo de relación existente entre cónyuges o familiares, que incide en el comportamiento migratorio de las personas de la tercera edad (Lawson, 1998).

Aun conociendo los mecanismos que vinculan aisladamente cada uno de los atributos citados con la migración de las personas mayores, suponemos que, tal como se indica en la literatura sobre el tema, los factores determinantes de su migración actúan en conjunto y que la combinación de todos ellos es lo que realmente estimula o impide la migración. Este es un elemento clave para comprender la influencia que ejercen las características personales, familiares y estructurales en la decisión de emigrar.

Según la literatura sobre migración de personas de la tercera edad, la marcada heterogeneidad que presentan los integrantes de este grupo se refleja en la existencia de distintos perfiles de migrantes (Walters, 2002). Esto se debe a que el envejecimiento no es un proceso uniforme, ya que las condiciones de vida de las personas mayores dependen de las experiencias acumuladas en otras etapas de la vida, que varían significativamente de una persona a otra (Settersten, 2006). Por este motivo, las personas de la tercera edad son un grupo heterogéneo que presenta características muy peculiares (Chen y Wilmoth, 2004).

Algunos autores han propuesto el desarrollo de tipologías destinadas a determinar la influencia conjunta que ejercen las características personales, familiares y estructurales en la definición de un patrón o perfil de migración de las personas mayores. En el cuadro 1 se presentan esquemáticamente tres de esas tipologías, que a nuestro juicio pueden servir de referencia a la literatura sobre el tema.

Wiseman y Roseman (1979) desarrollaron una tipología basada en la literatura sobre migración de las personas de la tercera edad registrada hasta entonces en los Estados Unidos. Según los autores, las principales variables que estimulan la migración se relacionan con la atención de la salud y la búsqueda de comodidades (calidad de vida). Eso los llevó a proponer una tipología de las personas mayores basada en la decisión de emigrar y en teorías sobre las personas de la tercera edad y las migraciones. Wiseman y Roseman clasifican a los migrantes en tres perfiles que difieren entre sí en cuanto al sujeto de la decisión de emigrar, a la modalidad de migración (solo o en compañía), a los motivos del desplazamiento, a las regiones de destino y al tipo de residencia a la que aspiran. En el primer perfil los autores incluyen a los migrantes que buscan comodidades; en el segundo, a los migrantes de retorno, y en la tercera a las personas de edad que migran por razones de parentesco.

Cuadro I
TIPOLOGÍAS DE MIGRANTES DE LA TERCERA EDAD

Autor	Motivos de migración	Estímulos	Migrante	Características
Wiseman Roseman	Búsqueda de comodidades	Jubilación y búsqueda de comodidades	Persona de la tercera edad, con o sin cónyuge	Más jóvenes, ingreso alto
	Migración de retorno	Jubilación y reunificación familiar	Persona de la tercera edad	Ingreso medio o bajo
	Reunificación familiar	Viudez y búsqueda de apoyo	Persona de la tercera edad	Más viejos
Litwak Longino	Búsqueda de comodidades	Comodidades, redes sociales	Persona de la tercera edad con o sin cónyuge	Más jóvenes, en buen estado de salud, con ingresos altos
	Búsqueda de apoyo familiar	Desarrollo de discapacidad y viudez	Persona de la tercera edad	Viudos, discapacitados, con hijos
	Búsqueda de instituciones	Discapacidad grave y enfermedades crónicas	Persona mayor	Residente en una institución, sin hijos
Walters	Búsqueda de comodidades	Jubilación	Persona de la tercera edad con o sin cónyuge	Buen estado de salud, ingreso alto o disperso en el lugar de origen y concentrado en el lugar de destino
	Búsqueda de asistencia	Viudez	Persona de la tercera edad	Ingreso bajo, sin cónyuge, con hijos o sin patrón espacial específico
	Búsqueda de apoyo en casos de discapacidad	Discapacidad y viudez	Persona de la tercera edad	Residencia en una institución y sin patrón espacial específico

Fuente: R.F. Wiseman y C.C. Roseman, "A typology of elderly migration based on the decision-making process", *Economic Geography*, N° 55, 1979; E. Litwak y L. Longino, "Migration patterns among the elderly: A development perspective", *The Gerontologist*, vol. 27, N° 3, 1987 y W. Walters, "Types and patterns of later-life migration", *Geografiska Annaler*, series B, vol 82, N° 3, 2000.

En otro estudio sobre la migración de personas mayores en los Estados Unidos, Litwak y Longino (1987) conjeturan que hay tres tipos de movimientos migratorios que pueden producirse después de la jubilación. El primero de ellos está motivado por la búsqueda de comodidades; el segundo por la búsqueda de un lugar cercano a alguien que pueda ayudarles a enfrentar una discapacidad parcial, y el tercero por la búsqueda de un lugar en el que haya instituciones que ofrezcan cuidados especiales, ante la imposibilidad de ser acogido por un familiar.

En un tercer estudio (Walters, 2000) se intenta definir los tipos de migrantes y los patrones espaciales de la migración de personas mayores, sobre la base de la migración de jubilados en los Estados Unidos y con

el propósito de refinar las tipologías descritas anteriormente. El autor elabora un modelo de migración en las edades avanzadas, a partir de la teoría sobre el ciclo de vida y los patrones espaciales de migración, en función del cual clasifica a los migrantes en tres categorías: migrantes que buscan comodidades, migrantes que buscan asistencia y migrantes con discapacidad grave. Esta tipología es similar a las presentadas anteriormente, pero refleja la mayor importancia otorgada a la dimensión espacial de los desplazamientos. A juicio de Walters (2000), en el caso del primer grupo de migrantes el patrón espacial de migración obedece a la búsqueda de lugares con un clima agradable. La segunda categoría presenta un patrón espacial difuso, por el hecho de estar integrada por personas que aspiran a vivir con familiares. La tercera categoría corresponde a las personas mayores que emigran a lugares donde existen instituciones que ofrecen asistencia médica especializada, por lo que la corriente migratoria muestra una concentración espacial.

Sobre la base de los perfiles descritos, y como sostienen Bean y otros (1994), la migración de las personas mayores puede clasificarse en dos categorías: migraciones voluntarias y migraciones necesarias. Los desplazamientos voluntarios responden al interés en disfrutar de buenas condiciones de vida característico de los jubilados que aspiran a vivir en un lugar con grandes comodidades. Los desplazamientos necesarios son los realizados por personas que tienen algún tipo de limitación, ya sea física o financiera.

Es probable que, en el caso del Brasil, los perfiles de los migrantes difieran de los descritos en los párrafos anteriores. Dadas las características específicas del régimen de jubilación brasileño, que no impide a los jubilados seguir trabajando, y las estructuras de apoyo a este grupo, constituidas principalmente por familiares en el caso del Brasil, es posible que los migrantes brasileños de la tercera edad presenten rasgos específicos

B. Propuesta metodológica de análisis multivariado de los perfiles de migrantes

Para desarrollar los perfiles de los migrantes de la tercera edad de Minas Gerais y São Paulo, se utilizó el método de cálculo del grado de pertenencia desarrollado por Manton, Woodbury y Tolley (1994). Este es un método de desarrollo de perfiles basado en el análisis de múltiples variables, que facilita la comprensión del mecanismo por el cual ciertos patrones de respuestas a determinadas características se dan en grupos específicos. En el caso de este estudio, el método permite la identificación en la muestra

de grupos (perfiles) de respuestas similares a las variables (características) observadas. A diferencia de otras técnicas de análisis multivariado, la aplicación de este método no exige que los individuos pertenezcan íntegramente a un determinado perfil. Lo que presentan son grados de pertenencia individual a los perfiles desarrollados con este método, por lo que la unidad de clasificación no son los individuos sino las respuestas comunes. Los individuos simplemente se aproximan a los patrones típicos y más frecuentes de respuestas observados en la muestra o se apartan de ellos.

Los perfiles extremos, como se denomina a los patrones típicos y más frecuentes, se establecen a partir del vínculo no observado entre las categorías de variables y representan los tipos más comunes en la población estudiada. Debido a la heterogeneidad de la muestra, la mayoría de los individuos difieren en alguna medida de los definidos como “tipos puros”, que concuerdan plenamente con el perfil extremo. Sin embargo, sobre la base de los grados individuales de pertenencia a estos perfiles extremos se pueden desarrollar tipos mixtos, constituidos por quienes presentan características de dos o más perfiles extremos a la vez. Estos individuos no pertenecen a ninguno de los perfiles extremos, pero presentan simultáneamente características de varios de ellos.

Los perfiles extremos se definen a partir del conjunto de parámetros *lambda*, es decir, de la probabilidad de que una categoría específica de una variable se dé en un determinado perfil extremo. En ese sentido, estos son perfiles de referencia en relación con los cuales se comparan todos los elementos de la muestra. A su vez, los grados de pertenencia (parámetro *gama*) representan la medida en que los individuos se aproximan a cada perfil o se apartan de este. La estimación de los grados de pertenencia es lo único que diferencia a este método de los demás métodos de análisis de conglomerados (*clusters*).

Para definir el número de perfiles extremos, es decir, para determinar el número ideal de patrones de respuestas que utilizaríamos como referencia, adoptamos el criterio de información de Akaike (Manton, Woodbury y Tolley, 1994), desarrollamos modelos con dos a seis perfiles extremos para cada año (1991 e 2000) y seleccionamos los que presentaban el menor valor de acuerdo a dicho criterio en ambos casos. A continuación, aplicamos un procedimiento de aproximación al máximo global de la función de verosimilitud estimada, que permite ampliar las posibilidades de conseguir parámetros replicables (Guedes, Queiroz y Barbieri, 2010). En Marini, Li y Fan (1996), Guedes y otros (2010) y Campos y otros (2010) se describen en detalle los aspectos técnicos del método y el procedimiento de estimación y medición utilizados en este estudio.

La descripción de cada perfil extremo se basó en sus características preponderantes y en la aplicación del procedimiento descrito por Sawyer, Leite y Alexandrino (2002), según los cuales el valor de la probabilidad estimada de pertenecer a cada perfil extremo desarrollado (“tipo puro”) de cada respuesta debería ser por lo menos un 20% superior a la probabilidad de observación de la misma respuesta en el resto de la muestra.

Se dividieron las variables en tres categorías, definidas sobre la base de los estudios mencionados en la sección anterior y los datos recopilados en los censos demográficos de 1991 y 2000 del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Los atributos individuales utilizados fueron el sexo, el grupo etario quinquenal, la condición de jubilado, la existencia de discapacidad, el desempeño o no de una actividad económica, la viudez y el ingreso per cápita del hogar. En cuanto a las relaciones domiciliarias, que es la segunda categoría empleada, utilizamos la relación con el jefe de hogar y la contribución porcentual al ingreso del hogar. En relación con la tercera categoría, que corresponde a los atributos migratorios, se consideró si las personas de la tercera edad eran o no migrantes interestaduais de retorno y se tomó en cuenta la estructura de migración del hogar en su conjunto.

Se catalogó como discapacitadas a las personas mayores que tenían grandes dificultades para subir escaleras o que eran incapaces de hacerlo, a las personas con grandes dificultades visuales y auditivas, a los ciegos y sordos, a los deficientes mentales, a los paralíticos y a quienes habían perdido una extremidad. Se consideraron viudos a las personas que, a la fecha de realización del censo, tenían ese estado civil y no vivían con un cónyuge o compañero. En relación con la actividad económica, solo se tomó en cuenta si la persona estaba trabajando en la semana de referencia de los censos. Se consideraron jubilados a quienes recibían una pensión del instituto de previsión oficial. Se clasificó como migrantes de retorno a las personas de la tercera edad nacidas en Minas Gerais que habían emigrado de São Paulo en uno de los períodos de análisis y seguían viviendo en Minas Gerais en la fecha de referencia de los censos. También se tomó en cuenta la estructura del hogar de los migrantes, específicamente si otros integrantes del mismo hogar habían emigrado o no de São Paulo a Minas Gerais en cada período.

Para agrupar a los individuos en los perfiles desarrollados, se determinó que quienes presentaran un grado de pertenencia superior al 90% en uno de los perfiles fueran considerados “tipos puros” del perfil, en tanto que quienes presentaban un grado de pertenencia del 70% al 90% se consideraran representativos del nivel 1 del mismo perfil. Los individuos que presentaban un grado de pertenencia del 50% al 70% se incluyeron como menos representativos en el nivel 2 del perfil.

C. Resultados

I. Análisis descriptivo

Como se observa en el cuadro 2, en los años ochenta 8.509 personas de la tercera edad emigraron de São Paulo a Minas Gerais y seguían viviendo en el lugar de destino en la fecha de referencia del censo de 1991. Entre 1990 y 2000, el número de migrantes de la tercera edad de São Paulo a Minas Gerais ascendió a 14.106 personas, lo que representa un aumento del 65,8%, porcentaje que supera el incremento del número de migrantes de todas las edades que replicaron ese desplazamiento (43,5%)⁴.

Cuadro 2
MIGRANTES DE LA TERCERA EDAD DE SÃO PAULO A MINAS GERAIS
(En número de personas y porcentajes)

Edad	Hombres		Mujeres		Relación entre los sexos
	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	
1991					
60 a 64 años	1 827	43,9	1 745	40,1	1,05
65 a 69 años	1 177	28,3	1 162	26,7	1,01
70 a 74 años	677	16,3	699	16,1	0,97
75 a 79 años	299	7,2	457	10,5	0,65
80 años o más	179	4,3	287	6,6	0,63
Total	4 160	100,0	4 349	100,0	0,96
2000					
60 a 64 años	2 766	41,1	2 821	38,2	0,98
65 a 69 años	2 028	30,2	1 879	25,4	1,08
70 a 74 años	1 086	16,2	1 203	16,3	0,90
75 a 79 años	463	6,9	778	10,5	0,59
80 años o más	379	5,6	704	9,5	0,54
Total	6 722	100,0	7 385	100,0	0,91

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), microdatos de los censos de 1991 y de 2000.

El aumento del número de migrantes se registró en todos los grupos etarios y en ambos sexos, pero fue más pronunciado entre las personas de 80 años o más, grupo en que el número de hombres migrantes aumentó 2,1 veces y el de mujeres 2,5 veces, lo que indicaría un leve envejecimiento de la estructura etaria de los migrantes de la tercera edad. Ese aumento superó al de las mujeres en el conjunto de la población, que fue de 1,6 veces, lo que significa que en realidad lo que se produjo fue un incremento real de los migrantes de edad muy avanzada y no un envejecimiento de la población.

⁴ Las cifras indicadas corresponden al 3,1% del total de personas (todos los grupos etarios) que emigraron de São Paulo a Minas Gerais en la década de 1980. En los años noventa, los migrantes de la tercera edad representan el 3,6% del total de personas (todos los grupos etarios) que emigraron en la misma dirección.

Como se observa en el cuadro 2, el número de mujeres mayores que emigraron fue levemente superior al de los hombres en las dos décadas consideradas. La relación entre mujeres y hombres fue de un 0,96 en la década de 1980 y de un 0,91 en la década de 1990, lo que revela una tendencia al aumento de la participación de las mujeres en el total de migrantes mayores. Mientras entre las personas mayores relativamente más jóvenes el número de hombres superó al de mujeres, en las edades más avanzadas la proporción de mujeres fue considerablemente mayor, lo que obedece en parte a la mayor proporción de mujeres que viven hasta edades más avanzadas, debido a la diferencia de longevidad por sexo.

La existencia de una mayor proporción de hombres entre los migrantes más jóvenes se relaciona con la migración en busca de trabajo, que puede haber motivado a muchos hombres mayores económicamente activos a emigrar de São Paulo a Minas Gerais. En cambio, en el caso de los migrantes de mayor edad, grupo con una participación predominante de mujeres, la viudez y el interés en vivir con familiares pueden haber sido los principales factores que impulsaron la migración, dado que en los dos períodos muchas migrantes eran madre y suegra del jefe de hogar en el que vivían y un 80% de ellas eran viudas.

El nivel de actividad de hombres y mujeres también mostró variaciones a medida que estos envejecían. Al respecto, se observa un descenso del número de personas mayores económicamente activas, sobre todo en el caso de las mujeres más jóvenes, y un aumento del porcentaje de migrantes jubilados, que obedece al aumento del número de mujeres que declararon pertenecer a esa categoría. En cambio, el porcentaje de migrantes jubilados fue elevado en ambos períodos y cabe destacar que algunos de los migrantes que declararon estar jubilados seguían trabajando.

En lo que respecta a la discapacidad, cabe señalar que se modificó la metodología de investigación entre los censos de 1991 y 2000, lo que dificulta la comparación de los datos entre los dos períodos. No se sabe si el aumento observado del número de discapacitados entre los años ochenta y noventa se debe a la acentuación real de esa característica o al nuevo método empleado.

En el cuadro 3 se observa que la viudez fue una característica típicamente femenina en las dos décadas. Además de la diferencia de mortalidad por sexo, debida a que por lo general las mujeres presentan una tasa de supervivencia superior a la de los hombres, otro hecho que puede explicar esta situación es que solo se consideraron viudos a quienes ya no vivían con el cónyuge o compañero. Como es más común que los hombres vuelvan a contraer matrimonio, es posible que muchos de los que enviudaron se hubieran vuelto a casar, por lo no aparecen registrados en los resultados.

Cuadro 3
PERSONAS MAYORES MIGRANTES DE SÃO PAULO
A MINAS GERAIS, 1991 Y 2000

(En porcentajes)

	Total	Edad				
		60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 años o más
1991						
Económicamente activos						
Hombres	22,8	33,5	17,5	13,9	9,8	4,5
Mujeres	5,1	9,3	3,1	2,7	0,9	0,5
Ambos sexos	13,8	21,7	10,3	8,3	4,4	2,1
Jubilados						
Hombres	86,9	77,1	95,2	96,7	90,3	88,4
Mujeres	51,4	41,1	52,2	54,0	68,9	76,7
Ambos sexos	68,7	59,5	73,8	75,0	77,3	81,2
Discapacitados						
Hombres	4,5	4,6	4,1	5,0	6,6	0,0
Mujeres	3,3	2,8	3,6	1,0	3,9	9,4
Ambos sexos	3,9	3,7	3,9	3,0	5,0	5,8
Viudos						
Hombres	11,8	7,9	12,5	16,3	13,1	27,2
Mujeres	45,5	30,7	45,6	60,8	58,8	77,0
Ambos sexos	29,0	19,0	28,9	38,9	40,7	57,8
2000						
Económicamente activos						
Hombres	20,6	30,6	19,9	8,1	7,2	3,4
Mujeres	4,0	5,9	3,7	3,7	0,7	1,1
Ambos sexos	18,2	12,1	5,8	3,1	1,9	11,9
Jubilados						
Hombres	66,8	85,7	89,0	89,1	97,7	79,4
Mujeres	53,9	63,1	58,7	79,1	71,7	61,4
Ambos sexos	60,3	74,8	73,1	82,8	80,8	69,9
Discapacitados						
Hombres	5,7	7,8	3,0	15,9	16,1	7,2
Mujeres	3,9	6,3	8,0	10,9	9,7	6,5
Ambos sexos	4,8	7,1	5,6	12,8	11,9	6,8
Viudos						
Hombres	7,9	9,6	13,9	32,1	42,3	13,0
Mujeres	28,6	34,3	56,8	66,9	72,9	42,9
Ambos sexos	18,4	21,5	36,4	53,9	62,2	28,7

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), microdatos de los censos de 1991 y de 2000.

En cuanto a la migración de retorno, en la década de 1980 la proporción de migrantes interestaduais de retorno, es decir, de personas nacidas en Minas Gerais que regresaron a ese estado, fue superior en el grupo de personas de la tercera edad. En 1991 se observó que del total de personas de todas las edades que emigraron de São Paulo a Minas Gerais en la década anterior el 48% había nacido en ese último estado; en cambio, en el caso de las personas mayores el porcentaje ascendía al 63,2%. En la década de 1990 el porcentaje de personas mayores que volvieron a su estado natal fue de un 58,4%, lo que se compara con un 45,2% de los migrantes en general.

2. Análisis multivariado de los perfiles de migración de las personas de la tercera edad

Conforme al método de cálculo del grado de pertenencia descrito, se optó por definir dos perfiles de migrantes de la tercera edad para la década de 1980. La elección de dos perfiles obedeció a que el menor valor observado en los resultados de la aplicación del criterio de información de Akaike corresponde a este número de perfiles, lo que indicaba que era el modelo que más se adecuaba a la estructura de datos. Las características de los individuos pertenecientes a cada perfil se presentan en el cuadro 3.

Se observó que había el doble de posibilidades de que las personas mayores pertenecientes al primer perfil extremo (PE1.80) fueran del sexo femenino, en comparación con el total de la población de personas de la tercera edad en el mismo período. Además, había más posibilidades de que tuvieran 75 años o más, fueran viudos o viudas, fueran económicamente inactivos, no fueran jubilados, vivieran en hogares cuyo ingreso per cápita equivaliera de dos a diez salarios mínimos, hubieran emigrado a un hogar en el que vivían no migrantes, aportaran menos de un 25% del ingreso del hogar, y fueran madre, suegra, hermana o cónyuge del jefe de hogar, es decir, que no estuvieran a cargo del hogar de destino. Este perfil fue definido como “mujeres interesadas en vivir con familiares y recibir apoyo”.

Existían mayores posibilidades de que los integrantes de los “tipos puros” del segundo perfil extremo desarrollado (PE2.80) fueran hombres, no viudos, económicamente activos, jubilados, vivieran en un hogar con un ingreso per cápita superior a diez salarios mínimos, hubieran emigrado solos o con su cónyuge, aportaran por lo menos la mitad del ingreso del hogar y estuvieran a cargo de este. Este perfil fue definido como “trabajadores con buena situación económica”. Las variables “migrante

de retorno” y “discapacitado” no permitieron crear perfiles que pudieran relacionarse con la media de la población de personas mayores migrantes.

Se observó una mayor probabilidad de que los individuos pertenecientes al único perfil mixto de migrantes de la tercera edad desarrollado para la década de 1980 (PM1.80) fueran hombres, económicamente activos, jubilados y que hubieran migrados solos, lo que los convertía en jefes de hogar. A diferencia de los individuos que presentaban una total pertenencia al segundo perfil extremo, descrito en el párrafo anterior, no hay pruebas de que el ingreso per cápita de estos migrantes fuera elevado y de que algunos de ellos migraran acompañados de su cónyuge, por lo que se los catalogó como “trabajadores que viven solos”.

Sobre la base de los perfiles desarrollados, se estimó que en la década de 1980 la prevalencia de las “mujeres interesadas en vivir con familiares y recibir apoyo” (PE1.80) en el total de personas de la tercera edad que migraron de São Paulo a Minas Gerais fue de un 47,4%. Los “trabajadores con buena situación económica” (PE2.80) representaron el 29,7% de los migrantes, mientras el porcentaje correspondiente a “trabajadores que viven solos” (PM1.80) fue de un 22,9%.

Para desarrollar los perfiles de migrantes mayores en la década de 1990 se utilizaron los mismos procedimientos. Sobre la base del criterio de información de Akaike, se comprobó que el mejor modelo aplicable a ese período era el que generaba tres perfiles extremos, lo que indica una acentuación de la heterogeneidad de los migrantes en comparación con la década anterior.

En los años ochenta, existían mayores posibilidades de que los “tipos puros” del primer perfil extremo (PE1.90) fueran mujeres mayores de 70 años, viudas, discapacitadas, jubiladas y que vivieran en un hogar con un ingreso per cápita de 0,5 a 1 o 5,1 a 10 salarios mínimos y en un hogar en el que no vivieran otros migrantes, que aportaran del 25% al 50% del ingreso del hogar y fueran madre, suegra, hermana u otra pariente del jefe de hogar. Tal como se hizo con respecto a la década anterior, se las catalogó como “mujeres interesadas en vivir con familiares y recibir apoyo”.

Existían mayores posibilidades de que los individuos correspondientes a las categorías de “tipos puros” y pertenecientes al segundo perfil extremo desarrollado para la década de 1990 (PE2.90) fueran hombres de 60 a 69 años, que no fueran viudos, fueran económicamente activos, jubilados, vivieran en un hogar con un ingreso per cápita superior a 10 salarios mínimos, hubieran emigrado solos o

solo con el cónyuge, aportaran más de la mitad del ingreso del hogar y fueran jefes de hogar. Por el hecho de presentar prácticamente las mismas características de los migrantes del perfil extremo 2 de la década anterior, también se los catalogó como “trabajadores con buena situación económica”. La única diferencia entre este grupo y el de los años ochenta es que en la década de 1990 la edad fue un marcador del perfil, puesto que los migrantes tenían de 60 a 69 años.

En el caso de los “tipos puros” del tercer perfil extremo (PE3.90), existían mayores posibilidades de que fueran mujeres de 60 a 64 años; que no fueran viudas ni jubiladas; que vivieran en un hogar con un ingreso per cápita de 0 a 0,5 salario mínimo, de 2 a 5 salarios mínimos o sin ingreso; que hubieran migrado solo con el cónyuge; que contribuyeran hasta con un 25% del ingreso del hogar, y que fueran cónyuge del jefe de hogar. Por tratarse de mujeres relativamente más jóvenes, económicamente inactivas y que hacían un escaso aporte al ingreso del hogar, que no eran ni viudas ni jubiladas y que habían emigrado con su cónyuge, se catalogó a las migrantes pertenecientes a este perfil como “mujeres mayores acompañantes relativamente más jóvenes”.

Las probabilidades de que los migrantes mayores pertenecientes al perfil mixto con predominio del nivel 2 del tercer perfil extremo (PM1.90) fueran mujeres, no jubiladas, que habían emigrado acompañando a su cónyuge, que vivieran en un hogar sin ingresos y que fueran cónyuge, madre o suegra del jefe de hogar eran superiores a las de los migrantes de la tercera edad en general. Lo que las diferenciaba de las pertenecientes al tercer perfil extremo era que no percibían ingresos y no tenían una edad específica. Se las catalogó como “mujeres mayores acompañantes sin ingresos”. El hecho de que las mujeres pertenecientes a este perfil también fueran madre o suegra del jefe de hogar podría indicar que algunas de ellas habían emigrado para vivir con sus hijos o con hijastros, lo que en muchos casos indicaba una incapacidad financiera de costear la privacidad de un hogar independiente.

Los migrantes pertenecientes al segundo perfil mixto (PM2.90), en el que predominan los niveles 1 y 2 del segundo perfil extremo, eran hombres, jubilados, que seguían trabajando y que habían emigrado solos. Lo que los diferenciaba de los individuos pertenecientes al tercer perfil extremo era el hecho de no presentar una edad predominante, vivir solos y no tener un rango de ingresos determinado. Este grupo fue catalogado como “trabajadores que viven solos”.

Los migrantes pertenecientes al perfil mixto sin predominio de ningún perfil extremo (PM3.90) eran mujeres de más de 75 años, viudas, discapacitadas y sin ingresos, que demostraban ser mujeres en busca de apoyo. Los que las diferenciaba de las mujeres pertenecientes al primer perfil extremo era el hecho de ser de edad más avanzada y más pobres y el no tener una determinada estructura familiar. Este grupo fue catalogado como “viudas discapacitadas sin ingresos interesadas en recibir apoyo”.

El 21,7% de las personas de la tercera edad que emigraron de São Paulo a Minas Gerais en la década de 1990 eran “mujeres interesadas en vivir con familiares y recibir apoyo” (PE1.90), en tanto que el 8,9% eran “viudas discapacitadas sin ingresos interesadas en recibir apoyo” (PM3.90), el 18,2% eran “trabajadores con buena situación económica” (PE2.90), el 30,8% eran “trabajadores que viven solos” (PM2.90), el 12,7% eran “mujeres mayores acompañantes relativamente más jóvenes” (PE3.90) y el 7,6% eran “mujeres mayores acompañantes sin ingresos” (PM1.90).

Cabe destacar que el porcentaje de migrantes interestaduais de retorno pertenecientes a todos los perfiles era elevado, por lo que esta categoría no se consideró un marcador exclusivo de ninguno.

Se repitieron los mismos procedimientos para el desarrollo de perfiles de oriundos de Minas Gerais que seguían viviendo en São Paulo (no migrantes) en las dos décadas, a fin de comparar los perfiles de los migrantes de la tercera edad con los de los individuos que no habían emigrado. Las personas mayores nacidas en Minas Gerais que vivían en São Paulo en 1991 fueron clasificadas en función de las características predominantes de los perfiles. El 28,7% de los integrantes de este grupo fueron catalogados como “hombres mayores económicamente activos” (PE3.80); el 41,5% como “mujeres mayores discapacitadas de edad avanzada” (PE4.80); el 16,3% como “jefes de hogar discapacitados y económicamente activos de edad muy avanzada” (PM2.80), y el 13,5% como “otros parientes discapacitados y económicamente activos de edad muy avanzada” (PM3.80).

En el período siguiente, el 46,3% de las personas de la tercera edad nacidas en Minas Gerais que vivían en São Paulo en 2000 fueron catalogadas como “hombres discapacitados y económicamente activos de edad avanzada” (PE4.90), el 36,6% como “mujeres mayores discapacitadas de edad avanzada” (PE5.90) y el 17,1% como “parientes discapacitados y económicamente activos de edad avanzada” (PM4.90).

Cuadro 4
CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES DE MIGRANTES DE LA TERCERA
EDAD DE SÃO PAULO A MINAS GERAIS Y DE ORIUNDOS
DE MINAS GERAIS RESIDENTES EN
SÃO PAULO (NO EMIGRANTES),
1991 Y 2000

(En porcentajes)

Perfil	Condición migratoria	Personas de la tercera edad en cada década		
		1991	2000	
Migrantes de la tercera edad				
Mujeres interesadas en vivir con familiares y recibir apoyo: mujeres de 70 años y más, viudas, económicamente inactivas que convivían con no migrantes; madre, suegra, hermana o cónyuge del jefe de hogar; con aporte inferior a la mitad del ingreso del hogar	PE1.80 y PE2.80	Migrantes	47,6	21,7
Trabajadores con buena situación económica: hombres de 60 a 69 años, no viudos, económicamente activos, jubilados, que vivían en hogares con un ingreso per cápita superior a diez salarios mínimos y que habían emigrado solos o solo con su cónyuge, que aportaban por lo menos la mitad del ingreso del hogar y eran jefes de hogar	PE2.80 y PE2.90	Migrantes	29,6	18,2
Trabajadores que viven solos: hombres económicamente activos, jubilados, que habían emigrado solos y eran jefes de hogar	PM1.80 y PM2.90	Migrantes	22,8	30,8
Mujeres de la tercera edad relativamente más jóvenes: mujeres de 60 a 64 años; no viudas; no jubiladas; que vivían en hogares con un ingreso per cápita de 0 a 0,5 salario mínimo, de 2 a 5 salarios mínimos o sin ingresos; que habían emigrado solo con el cónyuge; que aportaban un 25% del ingreso del hogar y que eran cónyuge del jefe de hogar	PE3.90	Migrantes		12,7
Mujeres mayores, acompañantes, sin ingresos: mujeres no jubiladas, que habían emigrado acompañando a su cónyuge, que vivían en hogares sin ingresos y que eran cónyuge, madre o suegra del jefe de hogar	PM1.90	Migrantes		7,6
Viudas y discapacitadas sin ingreso, interesadas en recibir apoyo: mujeres de más de 75 años, viudas, discapacitadas y sin ingreso	PM3.90	Migrantes		8,9
Total de migrantes de la tercera edad			100,0	100,0

Cuadro 4 (conclusión)

Perfil	Condición migratoria	Personas de la tercera edad en cada década		
		1991	2000	
Personas de la tercera edad no migrantes				
Hombres económicamente activos de edad avanzada: hombres mayores de 75 años; económicamente activos; viudos; que vivían en hogares con un ingreso de hasta 0,5 salario mínimo o más de 5 salarios mínimos; que aportaban más de un 25% del ingreso del hogar; jefes de hogar que vivían solos o con un familiar	PE3.80	No migrantes	28,7	
Mujeres mayores discapacitadas de edad avanzada: mujeres de 70 años o más; que vivían en hogares con un ingreso per cápita de hasta 0,5 salario mínimo o más de 5 salarios mínimos; que aportaban entre un 25% y un 50% del ingreso del hogar; que eran madre, suegra o hermana del jefe del hogar; y que vivían con un residente más del hogar	PE4.80 y PE5.90	No migrantes	41,5	36,6
Jefes de hogar de edad muy avanzada: personas de 75 años o más; discapacitadas; económicamente activas; que vivían en hogares cuyo ingreso per cápita era inferior a 0,5 salario mínimo o superior a 5 salarios mínimos; que aportaban más del 25% del ingreso del hogar; y que vivían solas o con un residente más del hogar	PM2.80	No migrantes	16,3	
Otros familiares de edad muy avanzada: hermanos o padres, madres y suegros; de 75 años o más; discapacitados; económicamente activos; que vivían en hogares con un ingreso per cápita inferior a 0,5 salario mínimo o superior a 5 salarios mínimos; que aportaban más de un 25% del ingreso del hogar; y que vivían solos o con un residente más del hogar	PM3.80 y PM4.90	No migrantes	13,5	17,1
Hombres discapacitados y económicamente activos de edad avanzada: hombres de 75 años o más; viudos; discapacitados; económicamente activos; que vivían en hogares con un ingreso per cápita inferior a 0,5 salario mínimo o superior a 5 salarios mínimos; que aportaban más de un 25% del ingreso del hogar; que eran jefes de hogar; y que vivían con un residente más del hogar	PE4.90	No migrantes		46,3
Total de no migrantes de la tercera edad			100,0	100,0

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, 1991 y 2000.

D. Análisis general

Los resultados obtenidos permitieron deducir que se había producido una intensificación de la heterogeneidad de los migrantes de la tercera edad entre las décadas de 1980 y 1990, lo que queda demostrado por el aumento del número de perfiles de migrantes. Además, el porcentaje de individuos que no se encuadraban en los perfiles extremos disminuyó de la primera a la segunda década.

En los años ochenta se observan solo tres perfiles de migrantes, prácticamente la mitad de los cuales correspondían a mujeres interesadas en vivir con familiares y recibir apoyo, mientras la otra mitad comprendía dos perfiles de trabajadores. En cambio, en la década siguiente y a pesar de que los trabajadores seguían representando casi la mitad de los migrantes, surgieron dos perfiles de mujeres interesadas en vivir con familiares y recibir apoyo, que representaban menos de una tercera parte de los migrantes; a estos se sumaban otros dos perfiles de mujeres migrantes, que habían emigrado en compañía de su cónyuge u otros familiares.

La comparación de los perfiles de migrantes con los de no migrantes muestra algunas diferencias importantes en cuanto a las variables. La primera de ellas se relaciona con la edad: los perfiles de migrantes estaban integrados por personas más jóvenes de la tercera edad, sobre todo por hombres económicamente activos o mujeres acompañantes. En cambio, en el caso de los no migrantes, todos los perfiles desarrollados correspondían a personas de edad más avanzada, lo que confirma la relación entre edad y migración.

Otra variable con respecto a la cual se observaron diferencias entre los perfiles de migrantes y no migrantes fue la condición de jubilada o jubilado, que no era un marcador de ningún perfil de no migrantes, pero sí de los perfiles de migrantes desarrollados para las dos décadas. Esto permite pensar que la jubilación influye en la migración de las personas de la tercera edad. Por ejemplo, se observó que la mayoría de las personas mayores no migrantes seguían siendo económicamente activas, aunque tuvieran un cierto grado de discapacidad, mientras en el caso de los migrantes la coexistencia de discapacidad física o mental y actividad económica en las personas de la tercera edad era menos común, probablemente debido a la influencia de la jubilación. Esta fue la principal diferencia observada entre los migrantes y no migrantes de la tercera edad. Los no migrantes eran de edad más avanzada, pero casi todos, incluso los que presentaban discapacidad, seguían siendo económicamente activos. Por otra parte, incluso siendo más jóvenes, los migrantes podían haber abandonado el mercado de trabajo después de jubilar.

Al igual que en el caso de los no migrantes, la discapacidad fue un marcador de casi todos los perfiles a pesar de no ser un rasgo de la mayoría de los perfiles de los migrantes, lo que podría deberse a que después de una cierta edad la migración deje de ser atractiva incluso en casos de discapacidad.

Sobre la base de los perfiles de migrantes desarrollados, es posible inferir la existencia de una distinción similar a la postulada por Bean y otros (1994), en virtud de la cual las migraciones de personas de la tercera edad se clasifican en voluntarias y necesarias. A diferencia de las tipologías de migraciones de personas mayores desarrolladas en otros países, los perfiles estudiados de personas de la tercera edad revelan ciertas características específicas de las migraciones dentro del Brasil

Los perfiles de migrantes más jóvenes y con mayores ingresos que vivían solos o solo con su cónyuge y eran económicamente activos corresponderían al primer tipo de migraciones, las voluntarias, pero a sus integrantes no se los podría clasificar como migrantes en busca de tiempo libre y actividades recreativas, porque todavía estaban trabajando y podrían haber emigrado por motivos laborales. Los perfiles de individuos de mayor edad, viudos, con menores ingresos y que vivían en la casa de hijos o hermanos corresponderían a la migración necesaria. En la mayoría de los casos, la estructura del hogar es un factor determinante esencial del grado de dependencia de estas personas de la tercera edad, dado que no es la discapacidad física, sino la relación con el jefe de hogar, el tipo de migración y la contribución al ingreso del hogar lo que revela la existencia de una relación de dependencia o de apoyo.

Los perfiles de personas mayores discapacitadas, relativamente mayores y que no habían migrado combinan la discapacidad con la participación en el mercado de trabajo y no confirman la existencia de una relación entre la migración y el estado de salud citada en las tipologías desarrolladas en otros contextos.

E. Conclusión

Todos los perfiles de personas de la tercera edad desarrollados con el método de grado de pertenencia demuestran la importancia relativa de ciertos factores sociales, familiares y económicos y la influencia que ejercen en la migración de personas de este grupo entre los dos estados más poblados del Brasil. Otro elemento sobresaliente del estudio es la importancia que revisten las redes sociales y familiares en relación con las migraciones de personas de la tercera edad, lo que concuerda con lo

expuesto en la literatura sobre el tema (De Jong y Gardner, 1981; Taylor, 1986; Massey, 1990; van Tilburg, 1992 y Litwin, 1995).

Los resultados del estudio permiten, asimismo, hacer algunas reflexiones sobre los efectos que tienen en el conjunto de la sociedad el perfil específico de los migrantes y el contexto en el que viven, sobre todo si se toma en cuenta el avance que registrará la transición demográfica en las próximas décadas. El interés por los migrantes jubilados se vincula con la transferencia de ingresos dentro del territorio. La migración de un individuo que haya jubilado en un lugar supone una transferencia de ingresos entre el lugar de origen y el lugar de destino que, dependiendo del volumen de la migración y las características de esos dos lugares, puede tener efectos significativos. En cambio, el interés por los migrantes en busca de apoyo se vincula con el respaldo a las familias que lo prestan. Los resultados del presente estudio no permiten determinar en qué condiciones acogen esas familias a los migrantes de la tercera edad y si contribuyen a un envejecimiento satisfactorio, lo que, por otra parte, apunta a la necesidad de realizar estudios específicos (encuestas) para abordar estos temas.

Otra consideración relevante es la relacionada con la importancia de la estructura familiar de los migrantes, dado que, en virtud de la transición demográfica y debido a la disminución del número de hijos que se está produciendo en el Brasil, no cabe duda de que en un futuro no distante habrá una generación de personas de la tercera edad con menos hijos y menos posibilidades de recibir apoyo familiar. Esta situación podría modificar el patrón migratorio actual e incluso restringir la migración de las personas de ese grupo. Por lo tanto, las necesidades que puedan impulsar la migración tendrán que ser satisfechas por otros medios, en muchos casos en el lugar de origen de los migrantes, mediante apoyo institucional o redes locales de apoyo.

Por último, cabe destacar que la acentuación de la heterogeneidad de los migrantes entre los años ochenta y noventa permite suponer que, en caso de mantenerse esta tendencia, es posible que en las próximas décadas surjan nuevos perfiles de migrantes, debido al envejecimiento de la estructura etaria de la población. Esos nuevos perfiles podrían plantear nuevas demandas a la sociedad, tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino de la migración. Por lo tanto, es preciso profundizar los estudios sobre la migración de personas de la tercera edad, utilizando censos demográficos investigaciones especializadas u otras fuentes de datos secundarios, en vista de que este fenómeno, de importancia creciente, podría aportar beneficios a los migrantes, pero también tener efectos negativos para ellos, las familias involucradas y la sociedad en su conjunto.

Bibliografía

- Anderson, J. (2002), *Retirement Migration. Motives for Migration to Warmer Climate and Housing Needs: a study of Scandinavians in Costa Blanca*, Göteborg, Chalmers University of Technology.
- Barbieri, A. F. (2007), “Mobilidade populacional, meio ambiente e uso da terra em áreas de fronteira: uma abordagem multiescalar”, *Revista Brasileira de Estudos de População*, N° 24.
- Bean, F.D. y otros (1994), “Geographic concentration, migration, and population redistribution among elderly”, *Demography of Aging*, L. Martin y S. Preston (eds.), Washington, D.C., National Academy Press.
- Bennett, D. G. (1993), “Retirement migration and economic development in high-amenity, nonmetropolitan areas”, *Journal of Applied Gerontology*, N° 12.
- Biggar, J.C. (1980), “Who moves among the elderly, 1965-70: a comparison of types of older movers”, *Research on Ageing*, N° 2.
- Borjas, G. J. (1996), “Labour mobility”, *Labor Economics*, Nueva York, Mac Graw Hill.
- Boyd, M. (1991), “Immigration and living arrangements: elderly women in Canada”, *International Migration Review*, vol. 25, N° 1.
- Bradley, D. E. y otros (2008), “Actuation of mobility intentions among the young-old: an event-history analysis”, *The Gerontologist*, vol. 48, N° 2.
- Bures, R. (1997), “Migration and the life course: is there a retirement transition?”, *International Journal of Population Geography*, vol. 3, N° 2.
- Camargos, M. C. S., C.J. Machado y R.N. Rodrigues (2007), “A relação entre renda e morar sozinho para idosos paulistanos”, *Revista Brasileira de Estudos da População*, vol. 24.
- Campos, M.B y otros (2010), “Migrações de idosos de São Paulo para Minas Gerais nas décadas de 1980 e 1990”, tesis para optar al grado de doctor en demografía, Belo Horizonte. Universidad Federal de Minas Gerais.
- Chen, P. C. y J.M. Wilmoth (2004), “The effects of residential mobility on ADL and IADL limitations among the very old living in the community”, *Journal of Gerontology*, vol. 59b, N° 3 Gerontological Society of America.
- Choi, N. G. (1996), “Older persons who move: reasons and health consequences”, *Journal of Applied Gerontology*, N° 15.
- De Jong, G.F. y R.W. Gardner (eds.) (1981), *Migration Decision Making: Multidisciplinary Approaches to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries*, Nueva York, Pergamon Press.
- De Vos, S. y K. Holden (1988), “Measures comparing living arrangements of the elderly: an assessment”, *Population and Development Review*, vol. 14, N° 4.
- Guedes, G.R., B.L. Queiroz y A.F. Barbieri (2010), “Ciclo de Vida Domiciliar, Ciclo do Lote e Mudança no Uso da Terra na Amazônia Rural Brasileira –um estudo de caso para Altamira, Pará”, tesis para optar al grado de doctor en demografía, Belo Horizonte, Universidad Federal de Minas Gerais.
- Guedes, G. R. y otros (2010) “Identificabilidade e estabilidade dos parâmetros no método Grade of Membership (GoM): considerações metodológicas e práticas”, *Revista Brasileira de Estudos de População*, vol. 27, N° 1, São Paulo.
- Harbinson, S.F. (1981), “Family structure and family strategy in migration decision making”, *Migration Decision Making: Multidisciplinary Approaches to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries*, DE G.F. Jong y R.W. Gardner (eds.), Nueva York, Pergamon Press.

- Harris, J. H. y M.P. Todaro (1970), “Migração, desemprego e desenvolvimento: uma análise com dois setores”, *Migração interna, textos selecionados: teorias e métodos de análise*, H.A. Moura, Fortaleza, 1980.
- Hass, W. H. y otros (2006), “In retirement migration, who counts? A methodological question with economic policy implications”, *The Gerontologist*, vol. 46, N° 6.
- IBGE (Instituto Brasileiro de Demografia y Estadística) (2000), “Microdados do Censo Demográfico 2000” [CD-ROM], Río de Janeiro.
- ____ (1991), “Microdados do Censo Demográfico de 1991” [CD-ROM], Río de Janeiro.
- Law, C.M.; A.M. Warnes (1976), “The changing geography of the elderly in England and Wales”, *Transactions of the Institute of British Geographers, New Series*, vol. 1, N° 4.
- Lawson, V.A. (1998), “Hierarchical households and gendered migration in Latin America: feminist extensions to migration research”, *Progress in Human Geography*, vol. 22, N° 1.
- Lee, E. S. (1966), “Uma teoria sobre a migração”, *Migração interna, textos selecionados: teorias e métodos de análise*, H.A. Moura (1980), Fortaleza.
- Liberato, V. (2003), “A oferta de trabalho masculina “pós-aposentadoria”. Brasil Urbano, 1981/2001”, disertación de maestría, Belo Horizonte, Universidad Federal de Minas Gerais.
- Litwin, H. (1997), “Social network type and health status in a national sample of elderly Israelis”, *Social Science and Medicine*, vol. 46, N° 4-5.
- Liwalk, E. y C. Longino (1987), “Migration patterns among the elderly: a development perspective”, *The Gerontologist*, vol. 27, N° 3.
- Lloyd-Sherlok, P. (2001), “Living arrangements of older persons and poverty”, *United Nation. Living Arrangements of Older Person. Population Bulletin of the United Nations*, N° especo; 42/43, Nueva York.
- Longino, C.F. y D.E. Bradley (2006), “Internal and international migration”, *Handbook of Aging and the Social Sciences*, R.H. BINSTOCK y L.K. GEORGE (eds.). Londres, Academic Press/Elsevier, sexta edición.
- Maddox, G.L. y D.O. Clark (1992), “Trajectories of functional impairment in later life”, *Journal of Health and Social Behavior*, N° 33.
- Manton, K. G., M.A. Woodbury y H.D. Tolley (1994), *Statistical Application Using Fuzzy Sets*, Nueva York, John Wiley and Sons.
- Marini, M. M.; X. Li y P. Fan (1996), “Characterizing latent structure: factor analytic and grade of membership models”, *Sociological Methodology*, vol. 26, Oxford.
- Massey, D. (1990), “Social structure, household strategies and the cumulative causation of migration”, *Population Index*, vol. 56, N° 1.
- Medeiros, M. Y D. Diniz (2004), “Envelhecimento e deficiência”, *Os Novos Idosos Brasileiros: Muito além dos 60?*, A.A. Camarano (org.), Río de Janeiro, Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).
- Mincer, J. (1978), “Family migration decisions”, *The Journal of Political Economy*, vol. 86, N° 5.
- Neri, M. C. y W.L. Soares (2004), “Idade, incapacidade e o número de pessoas com deficiência”, *Revista Brasileira de Estudos de População*, Vol. 21, N° 2, Campinas.
- Newbold, K. B. (1996), “Determinants of elderly interstate migration in the United States 1985-1990”, *Research on Aging*, vol. 18, N° 4.
- Oficina del Censo de los Estados Unidos (2003), *Internal Migration of the Older Population: 1995 to 2000. Census 2000 Social Reports*, agosto.
- Palloni, A. (2001), “Living arrangements of older persons”, *Living Arrangements of Older Person. Population Bulletin of the United Nations*, N° 42/43, Nueva York.

- Rigotti, J.I.R. (1999), “Técnicas de mensuração das migrações, a partir dos dados censitários aplicação aos casos de Minas Gerais e São Paulo”, tesis para optar al grado de doctor, Belo Horizonte, Universidad Federal de Minas Gerais.
- Rogers, A. (1988), “Age patterns of elderly migration: an international comparison”, *Demography*, vol. 25, N° 3.
- Sawyer, D.O; I.C. Leite y R. Alexandrino (2002), “Perfis de utilização de serviços de saúde no Brasil”, *Ciência & Saúde Coletiva*, vol. 7, N° 4.
- Settersten Jr., R.A. (2006), “Aging and the life course”, *Handbook of Aging and the Social Sciences*, R.H. Binstock y L.K.George (eds.), Londres, Academic Press/Elsevier, sexta edición.
- Sjaastad, L. A. (1980), “Os custos e os retornos da migração”, *Migração interna, textos selecionados: teorias e métodos de análise*, H.A. Moura (org.), Fortaleza.
- Stoller, E.P. y C.F. Longino Jr. (2001), ““Going home” or “leaving home”? The impact of person and place ties on anticipated counterstream migration”, *The Gerontologist*, vol. 41, N° 1.
- Taylor, J. E. (1986), “Differential migration, networks, information and risks”, *Migration, Human Capital and Development*, O. Stark, Greenwich, Jai Press Inc.
- Van Tilburg, T. (1992), “Support networks before and after retirement”, *Journal of Social and Personal Relationships*, vol. 9.
- Wajnman, S., A.M.H.C. Oliveira y E.L. Oliveira (2004), “Os idosos no mercado de trabalho: tendências e consequências”, *Os Novos Idosos Brasileiros: Muito além dos 60?*, A.A. Camarano (org.), Río de Janeiro, Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).
- Walters, W. (2002), “Later-life migration in the United States: a review of recent research”, *Journal of Planning Literature*, vol. 17, N° 37.
- _____ (2000), “Types and patterns of later-life migration”, *Geografiska Annaler. Series B, Human Geography*, vol. 82, N° 3.
- Wilmoth, J. M. (2001), “Living Arrangements Among Older Immigrants in the United States”, *The Gerontologist*, vol. 41, N° 2.
- Wiseman, R.F. y C.C. Roseman, (1979), “A typology of elderly migration based on the decision-making process”, *Economic Geography*, N° 55.
- Wolf, D.A. (1994), “The elderly and their kin: patterns of availability and access”, *Demography of Aging*, L. Martin y S. Preston (eds.), Washington, D.C., National Academy Press.
- Wong, L.L. y J.A.M Carvalho (2006), “O rápido processo de envelhecimento do Brasil: sérios desafios para as políticas públicas”, *Revista Brasileira de Estudos de População*, vol. 23, N° 1, São Paulo.
- Zelinsky, W. (1971), “The hypothesis of the mobility transition”, *Geographical Review*, vol. 61, N° 2, American Geographic Society.

Dinámica demográfica, ciclo de vida económica y déficits generacionales de consumo: El caso del Perú y sus regiones¹

Ciro Martínez Gómez²

Walter Mendoza³

Claudia Saravia⁴

Resumen

En este artículo se analiza el ciclo de vida económica en el Perú y sus regiones, es decir, la interacción de los patrones de consumo y producción por edad y los resultantes déficits de consumo o demandas de transferencias económicas entre los grupos poblacionales en diferentes etapas del ciclo de vida. Sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza del Perú 2009 se cuantifican de manera aproximada los volúmenes de recursos necesarios para asegurar el financiamiento de los déficits de consumo de los grupos dependientes de la población (en edad escolar y adultos mayores) y se examina, hasta donde los datos lo permiten, el papel que asume el sector público a través del gasto en educación y salud —frente al papel del sector privado— en el financiamiento de dichos déficits. Tanto en el ámbito nacional como en las regiones, el nivel de consumo es alto en el tramo de edades productivas, frente a un ingreso relativamente bajo, lo que implica un escaso nivel de ahorro y un pequeño margen o excedente para cubrir

¹ En este documento se sintetiza la última parte del estudio “Bono demográfico regional para el Perú”, realizado para la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el Perú, bajo la coordinación de Walter Mendoza. El estudio contó con la colaboración de Paulo Saad, Tim Miller y Mauricio Holz, integrantes del equipo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL que coordina el proyecto sobre cuentas nacionales de transferencias (CNT) para América Latina y el Caribe.

² Consultor del CELADE-División de Población de la CEPAL y de la oficina del UNFPA en el Perú.

³ Analista del Programa de población y desarrollo de la oficina del UNFPA en el Perú.

⁴ Oficial de proyecto de la Oficina nacional del UNFPA en el Perú.

el consumo de los tramos deficitarios. Por esta razón, los niños, los jóvenes y los adultos mayores deben financiar una parte importante de su propio consumo con ingresos laborales, lo que en el contexto de un país pobre refleja, por un lado, la prevalencia no deseable de trabajo infantil y, por otro, la baja cobertura de la seguridad social y otros programas públicos y las dificultades que enfrentaron los adultos mayores para ahorrar y acumular capital durante su vida laboral.

Abstract

This article analyses the economic life cycle at the national and regional levels in Peru, that is, the interaction between consumption and production patterns by age and the resulting consumption deficits or economic transfers between different age groups in the population. Using data from the National Household Survey on Living Conditions and Poverty of Peru 2009, the authors calculate the approximate volume of resources needed to finance the consumption deficits of the dependent groups of the population (school-age children and older adults) and examine, to the extent possible, the role of the public sector through spending on education and health, compared with the role of the private sector, in financing those deficits. Both at the national and regional levels, consumption is high and incomes are relatively low in the productive age groups, which means limited levels of saving and a small margin or surplus to cover the consumption deficit of other age groups. Children, young persons and older adults must therefore finance a significant proportion of their consumption with labour income, reflecting, in the context of a poor country, the undesirable prevalence of child labour and the low coverage of social security and other public programmes, as well as older adults' failure to save or accumulate capital during their working life.

Résumé

Dans cet article, les auteurs analysent le cycle de vie économique au Pérou et dans ses régions, à savoir l'interaction des modèles de consommation et de production par âge et les déficits de consommation qui en résultent ou les demandes de transferts économiques entre les groupes de populations aux différents stades du cycle de vie. Sur la base des données issues de l'Enquête nationale des ménages sur les conditions de vie et la pauvreté au Pérou 2009, l'étude quantifie approximativement les volumes de ressources nécessaires pour assurer le financement des déficits de consommation des groupes dépendants de la population (en âge scolaire et personnes âgées) et analyse, dans la mesure où ces données le permettent, le rôle assumé par le secteur public par le biais des dépenses en éducation et en santé, par rapport au rôle du secteur privé, dans le financement de ces déficits. On observe, tant à l'échelon national que dans la région, que le niveau de consommation est élevé dans la tranche d'âge productif, malgré un revenu relativement faible, ce qui implique que la capacité d'épargne est limitée, de même que la marge ou l'excédent nécessaire pour couvrir la consommation des tranches d'âge déficitaires. C'est pourquoi les enfants, les jeunes et les personnes âgées doivent financer une partie importante de leur propre consommation à l'aide des revenus du travail; ce phénomène traduit, dans le contexte d'un pays pauvre, la prévalence peu souhaitable du travail des enfants et par ailleurs, la faible couverture de la sécurité sociale et d'autres programmes publics, ainsi que les difficultés rencontrées par les personnes âgées pour épargner et accumuler un capital durant leur vie productive.

Introducción

El Perú, al igual que la mayoría de los países de América Latina, experimenta actualmente los fuertes cambios demográficos característicos de la etapa de transición plena, pero, como es propio de un país con alta heterogeneidad interna, estos cambios se presentan con especificidades en sus diferentes regiones. Por lo tanto, el estudio de dichos cambios demográficos y sus implicaciones debe realizarse de manera desagregada para las unidades geográficas internas y con la adecuada antelación, para que los decisores políticos puedan adoptar las medidas necesarias teniendo en cuenta estos fundamentos técnicos.

En este sentido, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha financiado la realización de un estudio sobre el bono demográfico regional para el Perú en el que se analizan las transformaciones demográficas por regiones y departamentos y sus impactos, y se hace especial referencia al bono demográfico y su vigencia, duración y magnitud económica, tanto global como en los sectores de la educación, la salud y las pensiones. Asimismo, se incursiona por primera vez en la cuantificación, a nivel subnacional, de otra gran consecuencia de los cambios de la estructura por edad de la población, a saber, los déficits generacionales de consumo o las demandas de transferencias económicas que se plantean a lo largo del ciclo de vida de las personas en virtud de los patrones de consumo y la producción por edades.

En el presente artículo se muestran los resultados de este último aspecto del estudio y se examinan de manera comparativa los patrones de consumo y de producción del país y de las tres regiones naturales del Perú (costa, sierra y selva). Se establece además una aproximación al valor económico de las demandas de transferencias que surgen en las etapas deficitarias del ciclo de vida —durante la etapa escolar y después de la edad del retiro de las personas— y se concluye con la exploración de algunos elementos relacionados con la distribución del financiamiento de los déficit o las demandas de transferencias por parte del sector público y privado.

Los perfiles por edad de la población se obtuvieron de la información de los censos y de las proyecciones de población nacionales y departamentales disponibles en el país (INEI/CELADE, 2009a, 2009b y 2010). La cuantificación del consumo, los ingresos laborales y los déficits por edad —para el país en su conjunto y para las tres regiones geográficas (costa, sierra y selva)— se obtuvieron del procesamiento de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza del Perú, realizada entre enero y diciembre de 2009, cuyos resultados se ajustaron a las cuentas nacionales del país.

La información de la encuesta de hogares permite cuantificar el ingreso laboral y el consumo total por edades. Asimismo, este consumo puede distribuirse entre público y privado y, dentro del consumo público, es posible cuantificar los gastos del gobierno en las políticas de educación y salud. De esta manera, escapan al alcance de la encuesta y de este estudio otros datos necesarios para establecer el balance completo de las fuentes de financiamiento de las transferencias, como los montos recibidos por los hogares desde el sector privado (remesas y donaciones, entre otras), las transferencias de los hogares al sector público (impuestos), los ingresos por activos y el ahorro.

Finalmente, aunque la encuesta es representativa a nivel departamental, la desagregación necesaria por edades simples y diferentes rubros de consumo puede producir una alta variabilidad de los datos. Por ese motivo, el análisis se enfoca en las tres regiones geográficas comúnmente usadas en el Perú (costa, sierra y selva).

A. Definición de ciclo de vida económica y demanda de transferencias

Durante su ciclo de vida las personas atraviesan por diferentes etapas que determinan sus niveles de consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, hay un patrón definido de consumo educativo, concentrado entre los 5 y 20 años, y otro de consumo de salud, que se caracteriza por un consumo elevado en la primera infancia, bajo en la adolescencia y rápidamente creciente en las edades adultas mayores. Asimismo, existe un patrón de participación, empleo y productividad en función de la edad que muestra ingresos laborales nulos en la infancia, un aumento acelerado de los ingresos a partir del final de la escolaridad con un máximo entre los 35 y 45 años, una constancia relativa a partir de esa edad y una disminución a medida que los adultos mayores se retiran de la actividad laboral. Obviamente, estos patrones no son estándar y cambian según el nivel de desarrollo de las regiones o países. En países con baja cobertura de los sistemas de seguridad social, por ejemplo, el descenso del consumo al final de la vida es menos pronunciado porque las personas de mayor edad deben prolongar su participación económica para poder subsistir (CELADE, 2008).

Si se superpone el patrón medio de producción (ingresos) por edad, con el patrón medio de consumo por edad, se demarcan tres etapas del ciclo de vida económica. La primera se extiende desde el principio de la vida hasta aproximadamente los 20 años, cuando los niños y los jóvenes están en el sistema educativo, no tienen ingresos y dependen de las transferencias de los padres o del gobierno para atender sus necesidades de consumo. En esta

etapa el consumo medio supera los ingresos medios, es decir, es una etapa de déficit. La segunda etapa empieza cuando la mayoría de los jóvenes entran al mercado laboral, hacia los 20 años y termina más o menos a los 40 años. Esta es una etapa de superávit ya que los ingresos superan el consumo. La tercera etapa se inicia hacia los 60 años, cuando las personas empiezan a retirarse de la actividad, son de nuevo dependientes para suplir su consumo —básicamente de salud y pensiones— y el consumo supera a los ingresos (CELADE, 2008).

Mientras atraviesan las etapas deficitarias del ciclo de vida, las personas demandan transferencias a quienes están en las etapas productivas. Las transferencias recibidas por los grupos deficitarios para cubrir sus déficits de consumo pueden ser de origen privado y en ese caso provenir de los miembros de la misma familia que aportan sus ingresos o de hogares externos, como en el caso de las remesas; también pueden ser transferencias intertemporales, como en el caso de ahorro para las pensiones. Si los ingresos de las personas productivas no son suficientes, el Estado cubre los consumos en las etapas deficitarias y se producen transferencias intersectoriales (del sector público al privado). El Estado ejerce un papel regulador de estas transferencias en la medida en que capta recursos del grupo productivo de la población mediante los impuestos y los distribuye entre los grupos no productivos a través de pago de prestaciones y de los programas de educación y salud, entre otros mecanismos.

B. Resultados

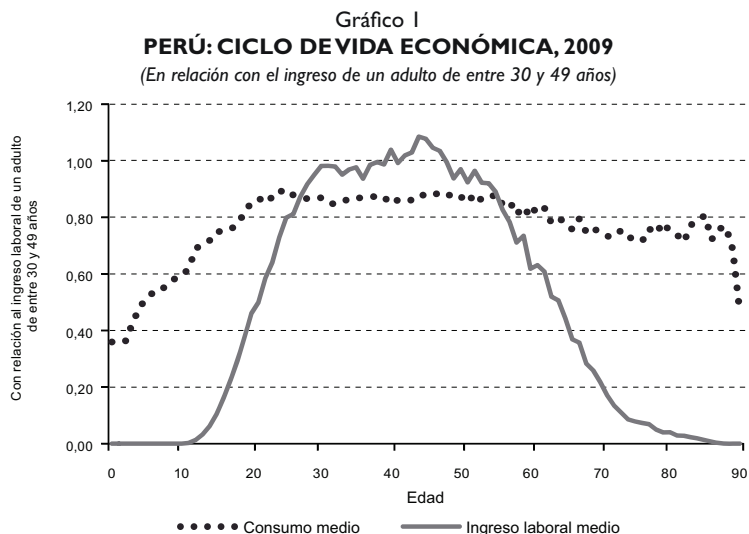
I. Déficits del ciclo de vida y demandas de transferencias en el Perú

En el gráfico 1 se presenta el ciclo de vida económica del Perú en 2009, en el que se superpone el patrón medio de producción, representado por los ingresos laborales a cada edad, con el patrón medio de consumo. El consumo se refiere tanto al consumo privado como al consumo público y en este último se agregan los tres ámbitos considerados en el estudio: educación, salud y pensiones.

En primer lugar, el comportamiento de los ingresos laborales medios en el Perú no difiere de manera general del de otros países latinoamericanos estudiados en el proyecto de cuentas nacionales de transferencias (CNT) —Brasil, Chile, Costa Rica, México y Uruguay— y analizados por Lee y Donehower (2010)⁵. Todos ellos se aproximan a la curva de ingresos laborales

⁵ El proyecto de cuentas nacionales de transferencias es una iniciativa internacional para medir la actividad económica nacional por edad, liderada por la Universidad de California en Berkeley y el Centro Este-Oeste de estudios sobre población y desarrollo. El CELADE-División de Población de la CEPAL coordina el proyecto regional para América Latina y el Caribe, con el apoyo financiero del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID).

observada en países menos desarrollados, que describe un inicio más temprano de la actividad remunerada y una mayor permanencia en ella para las edades mayores. Quizás la diferencia más relevante del comportamiento de los ingresos en el Perú con relación a otros países latinoamericanos estriba en que su curva de ingresos presenta cierto aplanamiento, con una cúspide menos acentuada⁶. Es una diferencia importante porque refleja una menor productividad relativa en esas edades y, por lo tanto, posibilidades más limitadas para hacer transferencias a los dependientes.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

El comportamiento del consumo en el Perú, por su parte, difiere en varios aspectos del de los demás países. En primer lugar, el nivel del consumo en las edades productivas es más elevado en relación con los ingresos. Aunque en general un nivel alto de consumo puede relacionarse con un mayor bienestar, en este tramo de edades y frente a un ingreso relativamente bajo, implica un nivel bajo de ahorro y deja escaso margen o excedente para cubrir los déficits de consumo de los tramos deficitarios, como puede apreciarse claramente en el gráfico 1 por la altura del ingreso frente a la altura del consumo en las edades productivas y frente a las áreas de las etapas deficitarias.

En segundo lugar, hay diferencias importantes en la pendiente de la curva de consumo en los diferentes tramos de edad. Si bien en el caso de

⁶ Se observan irregularidades en la curva de ingresos precisamente en las edades de la cúspide, que pueden deberse a problemas en la información de la encuesta. A pesar de ello, se ha optado por no hacer ajustes que podrían sesgar la información en uno u otro sentido.

los dependientes menores de 27 años el consumo crece con celeridad de manera similar a otros países, entre los 27 y 55 años el consumo permanece prácticamente constante, mientras que en otros países continúa creciendo aunque sea levemente. Sin embargo, la diferencia más notoria es que a partir de los 55 años el consumo en el Perú disminuye de una manera marcada, mientras que en los demás países latinoamericanos tiende a aumentar o a permanecer constante en ese tramo de edades⁷.

La disminución del consumo de los adultos mayores es un hecho que llama la atención si se tiene en cuenta que a esas edades las demandas se orientan principalmente a la salud y a otros servicios con costos elevados. El resultado obtenido para el Perú indicaría condiciones económicas muy débiles de la población adulta mayor o barreras de acceso que no les permiten realizar las inversiones requeridas para atender adecuadamente su salud y otros consumos y, por tanto, constituye una alerta para las políticas públicas.

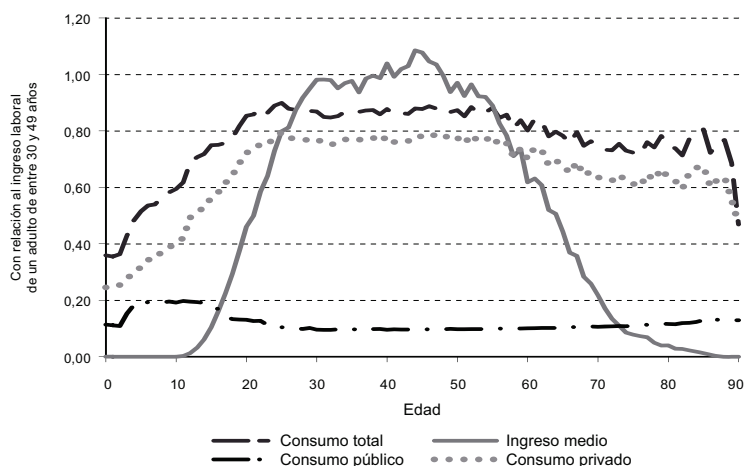
De hecho, como puede apreciarse en el gráfico 2, la caída del consumo en los adultos mayores proviene prácticamente en su totalidad de un comportamiento del consumo privado. Esto se debe a que, aunque el consumo público es creciente a estas edades, su magnitud es relativamente pequeña (alrededor del 14% del consumo total) y no alcanza a revertir la pendiente negativa como sucede en los países desarrollados, donde los gastos del gobierno en salud y otros servicios para adultos mayores son muy elevados (Bravo y Holz, 2010).

Otra característica importante que debe analizarse es la extensión del período de superávit en las edades productivas, donde el ingreso medio supera el consumo medio. De acuerdo con los resultados correspondientes a 2009, este período en el Perú comprende 30 años —de los 27 a los 56 años— y es más largo que en la mayoría de los países de América Latina, donde fluctúa entre 16 y 28 años⁸. Es decir, el rango de edades superavitarias en el Perú es relativamente amplio, lo que debería favorecer la generación de mayores recursos para cubrir los déficits, pero las posibilidades de financiamiento que se producen son limitadas debido a una curva de ingresos achatada y un consumo elevado frente al ingreso.

⁷ Las referencias y datos de los países del proyecto de CNT provienen del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, Notas de población, N° 90 (LC/G.2469-P), Santiago de Chile, diciembre de 2010. Para comparaciones con países de fuera de la región sírvase consultar los artículos de Lee y Donehower (2010) y Mason y Lee (2010); Bravo y Holz (2010) en el caso de Chile; Rosero-Bixby y Zúñiga (2010) en el de Costa Rica; Mejía, Fernández y García (2010) en el de México, y Bucheli, González y Olivieri (2010) en el del Uruguay.

⁸ Según los datos más recientes, el período superavitario en Chile va de los 26 a los 54 años de edad (28 años); en Costa Rica, de los 27 a los 55 (28 años); en México, de los 33 a los 48 (16 años), y en el Uruguay, de los 24 a los 61 (37 años).

Gráfico 2
PERÚ: DESAGREGACIÓN DEL CONSUMO, 2009
 (En relación con el ingreso de un adulto de entre 30 y 49 años)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

Como se observa en el gráfico 3, el déficit global en el Perú —al igual que en muchos países menos desarrollados— supera con creces los ingresos laborales netos del tramo de edades activas. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con una ecuación básica de las cuentas nacionales, la suma del consumo más la inversión debe ser igual a los ingresos laborales más la renta por activos, esto significa que en el Perú la inversión es muy inferior a los ingresos por activos o, en otras palabras, que una parte importante de la renta por activos se está dedicando a atender el consumo corriente y no la inversión.

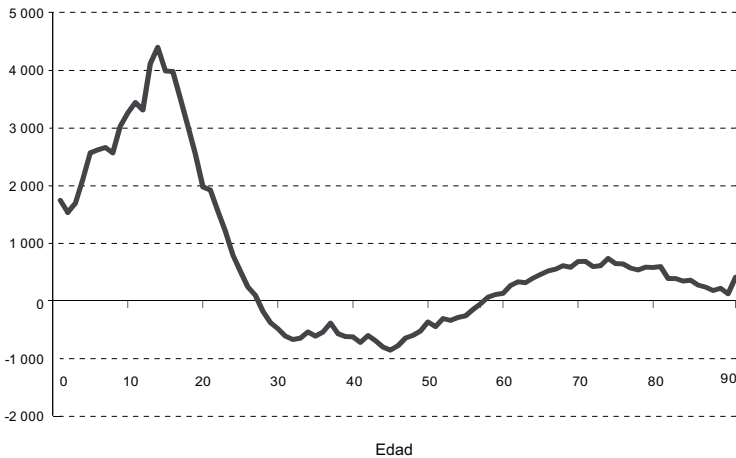
Más en detalle, es necesario distinguir entre los déficits globales y los déficits per cápita en cada tramo de edad. Los déficits globales son la masa de recursos requeridos para cubrir el consumo de los tramos de edad deficitarios y se ven influidos por el tamaño de la población. Con los déficits per cápita se controla el tamaño de la población y se evalúan los recursos requeridos para que cada persona del tramo de edad obtenga los bienes y servicios que necesita para cubrir su bienestar.

Como es común en los países menos desarrollados⁹, el Perú presenta déficits globales concentrados en la infancia y la juventud (véase el gráfico 3) debido a que tiene un alto volumen de población en esas edades, mientras que dicha masa deficitaria es por ahora pequeña en las edades adultas mayores, debido a que la población de adultos mayores es

⁹ Véase por ejemplo el caso de Indonesia para 2004 (Lee y Donehower, 2010).

aún relativamente reducida. En estas circunstancias, se requiere una gran cantidad de recursos para los niños, lo que se traduce en una demanda de importantes transferencias descendentes (desde las edades adultas hacia los menores), ya sean públicas o privadas. Como lo señalan Mason y Lee (2010), al distribuirse estos recursos entre muchos niños, la inversión per cápita en capital humano es reducida. Así pues, es necesario realizar esfuerzos para incrementar la inversión en capital humano como una necesidad no solo para hoy, sino para que en el futuro se incremente la productividad y la capacidad de ahorro y, por tanto, el superávit de la población productiva.

Gráfico 3
PERÚ: DÉFICIT GLOBAL DEL CICLO DE VIDA, 2009
 (En millones de nuevos soles)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

Como resultado de la distribución de la población, el déficit global de los adultos mayores en el Perú es mucho menor (solo una quinta parte) que el de los niños y jóvenes. Pero si se aísla el efecto del tamaño poblacional, como se hace en el gráfico 4, en el que se presenta el déficit medio de consumo referido al ingreso de la población productiva de entre 30 y 49 años, se percibe claramente que el déficit de consumo por persona en esas edades es elevado y mayor que el déficit per cápita que se produce en la infancia. Es decir, es muy importante la inversión o el esfuerzo social necesario para garantizar el bienestar de los adultos mayores.

Gráfico 4
PERÚ: DÉFICIT PER CÁPITA DEL CICLO DE VIDA, 2009
 (En relación con el ingreso de un adulto de entre 30 y 49 años)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

2. Consumo, ingresos y demandas de transferencias en las regiones naturales del Perú

a) Perfiles de consumo e ingresos laborales por regiones

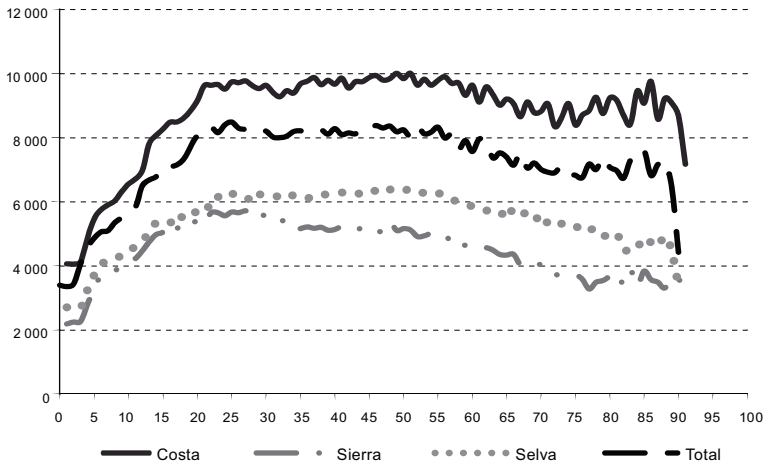
Como es de esperar por la heterogeneidad de desarrollo socioeconómico, las regiones del Perú muestran perfiles de ingresos y consumo claramente diferenciados. En primer lugar, en consonancia con su mayor avance demográfico y nivel de bienestar, la región de la costa presenta un nivel de consumo per cápita mayor que el de la sierra y la selva en todas las edades (véase el gráfico 9). Además, en esta región el consumo per cápita se mantiene más o menos constante en el tramo central de las edades activas y, aunque cae hacia las edades adultas mayores, esta caída es mucho menos pronunciada que en las otras dos regiones. Es decir, el consumo en la región de la costa se comporta de manera similar al de varios países latinoamericanos de desarrollo intermedio analizados en el proyecto CNT.

La región de la selva muestra un nivel de consumo intermedio, sobre todo si se consideran los grupos de adultos mayores. Este es un resultado acorde con un rasgo notable de su evolución demográfica: el importante peso de población adulta en edades activas, generado por el tipo de actividad productiva (extractiva) que atrae flujos migratorios. La región de la sierra, por su parte, tiene los niveles más bajos de consumo y, además, estos caen marcadamente hacia las edades adultas mayores. La estandarización de los perfiles de consumo (refiréndonos al consumo promedio de un adulto

de entre 30 y 44 años) deja claro que, si bien el consumo infantil tiende a ser mayor en la región de la sierra, las diferencias fundamentales en los patrones de consumo se presentan en las edades adultas mayores y esta región concentra el fenómeno de bajo consumo en los adultos mayores identificado como característica para el promedio del país y que se asocia con un menor nivel de bienestar para estas personas (véase el gráfico 6).

Gráfico 5
PERÚ Y REGIONES: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO TOTAL PER CÁPITA, 2009

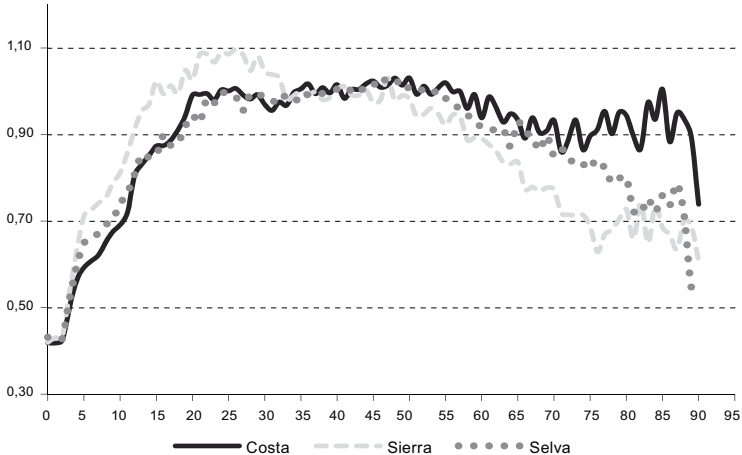
(En nuevos soles)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

Gráfico 6
PERÚ (TRES REGIONES): CONSUMO PER CÁPITA, 2009

(En relación con el consumo de un adulto de entre 30 y 49 años)

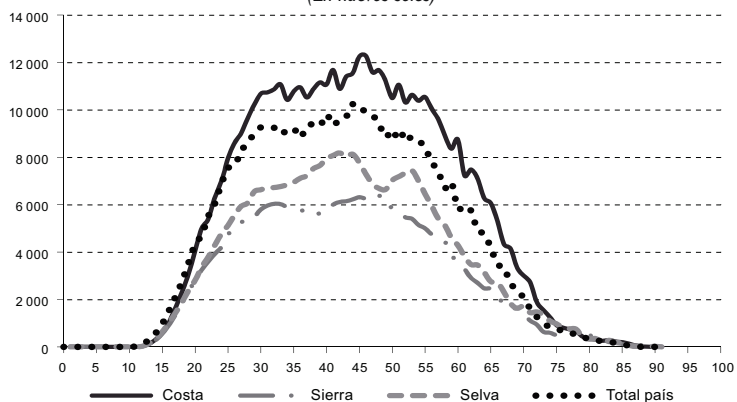


Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

Las diferencias de desarrollo entre las regiones se manifiestan también en los niveles y perfiles del ingreso laboral. La región de la costa presenta niveles de ingreso laboral per cápita mucho mayores que los de las otras dos regiones: más del doble que el de la región de la sierra y un 75% más alto que el de la región de la selva (véase el gráfico 7). La curva del ingreso laboral de esta región, como sucede en países más ricos (Mason y Lee, 2010), se desplaza hacia la derecha y tiene una cúspide un poco más tardía que en las regiones de menor desarrollo; los ingresos se mantienen más altos hasta edades mayores —en este caso hasta los 65 años aproximadamente— y después caen más rápido que en las otras regiones (véase el gráfico 8)

Gráfico 7
PERÚ REGIONES: COMPORTAMIENTO DEL INGRESO LABORAL PER CÁPITA, 2009

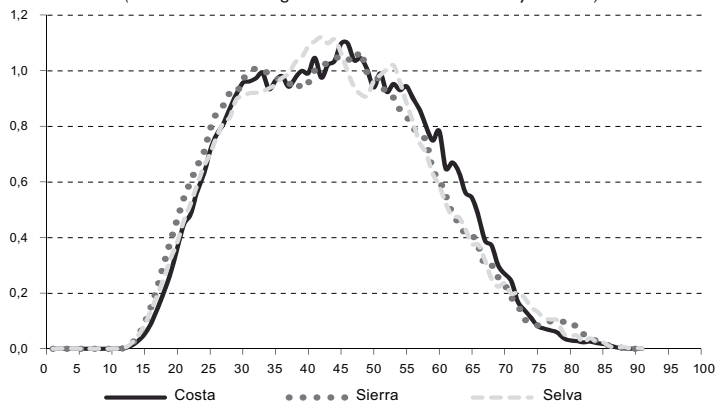
(En nuevos soles)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

Gráfico 8
PERÚ (TRES REGIONES): COMPORTAMIENTO DEL INGRESO LABORAL PER CÁPITA, 2009

(En relación con el ingreso de un adulto de entre 30 y 49 años)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

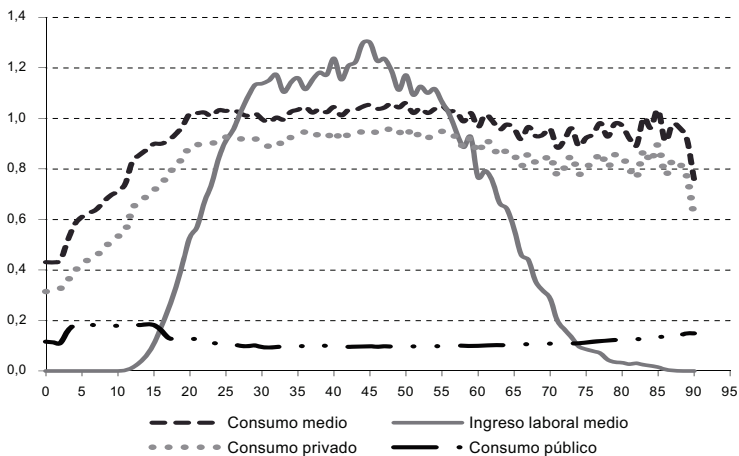
El hecho sobresaliente en el perfil de ingresos de la región de la sierra es el inicio relativamente más temprano de la actividad remunerada, que se observa en el mayor nivel que presenta la curva de ingresos laborales en las edades menores, hasta más o menos los 25 años. Este fenómeno ya se había identificado en el Perú en comparación con otros países de América Latina y puede decirse, sobre la base de esta desagregación regional, que se concentra especialmente en la región de la sierra.

En suma, la región de la costa presenta niveles de ingreso laboral muy superiores a los de las otras dos regiones y su perfil de ingresos se asemeja al de los países más ricos, debido fundamentalmente a la prolongación de la actividad con buenos ingresos hasta edades activas más avanzadas, pero con una caída drástica de la actividad remunerada después de la edad de retiro. Por su parte, la región de la sierra presenta características propias de regiones menos desarrolladas debido a la entrada temprana de la población a la actividad económica.

b) Ciclo de vida económica y demandas de transferencias en las regiones naturales del Perú

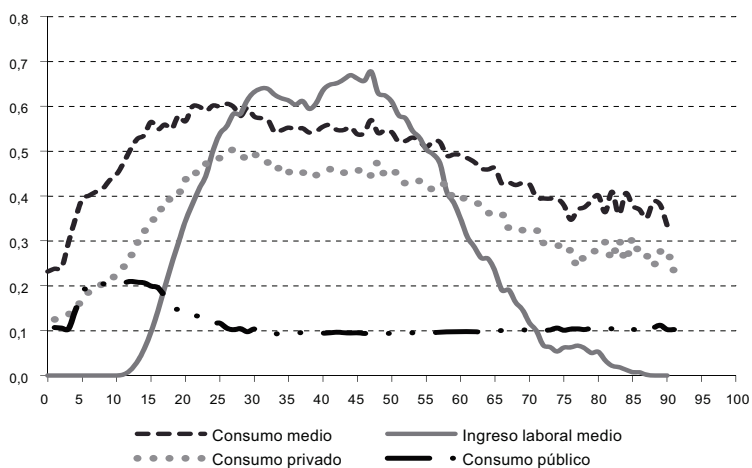
Al igual que el análisis realizado para todo el país, el examen conjunto de las curvas de consumo e ingreso per cápita de las regiones permite localizar las etapas deficitarias del ciclo de vida y cuantificar las demandas de transferencias que realizan los grupos dependientes. En los gráficos 9 a 11 se presentan las etapas del ciclo de vida económica en las regiones, junto con la desagregación de los consumos por privados y públicos.

Gráfico 9
PERÚ (REGIÓN DE LA COSTA): CICLO DE VIDA ECONÓMICA, 2009
(En relación con el ingreso y el consumo de un adulto de entre 30 y 49 años)



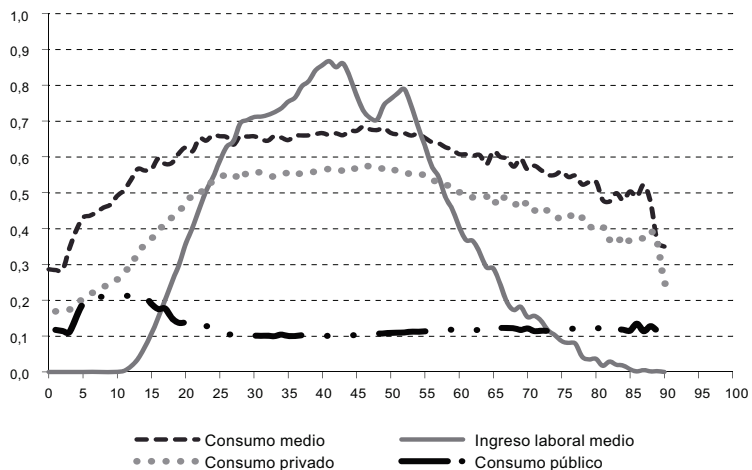
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

Gráfico 10
PERÚ (REGIÓN DE LA SIERRA): CICLO DE VIDA ECONÓMICA, 2009
 (En relación con el ingreso y el consumo de un adulto de entre 30 y 49 años)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

Gráfico 11
PERÚ (REGIÓN DE LA SELVA): CICLO DE VIDA ECONÓMICA, 2009
 (En relación con el ingreso y el consumo de un adulto de entre 30 y 49 años)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

Prácticamente no se encuentran diferencias entre las regiones en cuanto a las edades límites y la duración de las etapas deficitarias y superavitarias. Por otro lado, es difícil establecer de manera visual las diferencias en la magnitud de los déficits y superávits. Sin embargo, a partir de las curvas puede deducirse que la región de la costa enfrenta en el

caso de los adultos mayores déficits relativamente más acusados que los de las otras dos regiones, mientras que la región de la sierra registra déficits relativamente mayores en el caso de los niños y los jóvenes.

En cambio, sí se pueden resaltar diferencias importantes en la distribución del consumo entre los sectores público y privado, que dan indicios para el análisis de las fuentes de financiamiento de los déficits. En la región de la costa —la de mayor nivel de consumo per cápita— el consumo privado tiene un peso mucho mayor en el consumo total que lo que puede apreciarse en las otras dos regiones. El consumo público per cápita en esa región es relativamente bajo y se concentra en los niños y los jóvenes. El mayor peso del gasto público frente al consumo total y al ingreso se observa en la región de la sierra, donde incluso a la edad de 5 años el consumo público llega a superar el consumo privado. El consumo público se dirige prácticamente en su totalidad a la educación primaria y secundaria, sin que haya aparentemente ningún programa público dirigido a los adultos mayores.

Finalmente, en la región de la selva —cuyo consumo e ingreso se ubican en una posición intermedia— el consumo público tiene un peso menor que en la sierra y, aunque el gasto se concentra también en la población escolar, hay algunos leves indicios de gasto en adultos mayores.

De la estructura de los ciclos de vida económica de las regiones se derivan demandas de transferencias altas en las tres regiones, pero con importantes diferencias. El volumen total de estas demandas, que tiene que ver con el tamaño poblacional, es mayor en la región de la costa puesto que es la región más poblada. El déficit de los dependientes de la costa es casi 4 veces el de la región de la sierra y casi 10 veces el de la región de la selva (véase el cuadro 1).

Tomando el déficit como porcentaje del consumo total de la región, las diferencias operan en otro sentido: las regiones con mayor déficit en relación con su consumo total son la sierra y la selva —ambas con más del 40%—, mientras que en la costa la situación es ligeramente mejor puesto que el déficit constituye un 37% de su consumo total. Si se valora el déficit frente al consumo propio de cada grupo de dependientes, este adquiere un peso muy importante y constituye entre el 64% y el 69% del consumo de los dependientes; en este caso la región de la selva es la más deficitaria y la región de la costa la menos afectada.

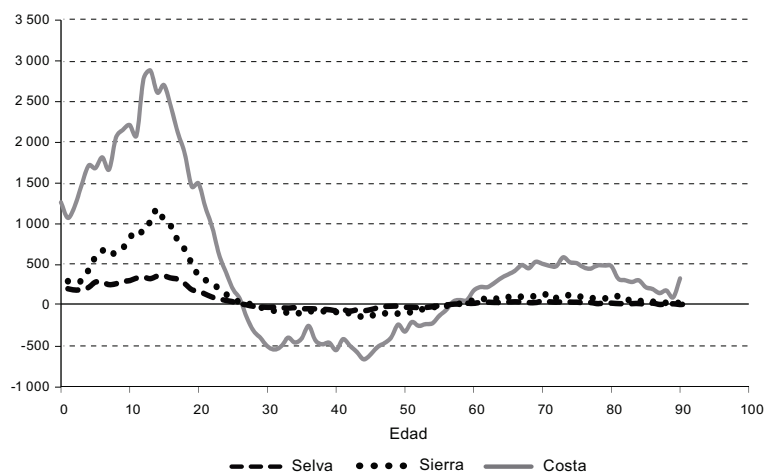
El volumen global del déficit proviene principalmente de los dependientes niños y jóvenes, como puede apreciarse en el cuadro 1 y el gráfico 12. El peso de este grupo en el déficit global es muy alto en las tres regiones, con un 79%, un 85% y un 88% para la costa, la sierra y la selva, respectivamente, con una situación más favorable en la región de la costa.

Cuadro I
PERÚ: INGRESO, CONSUMO Y DÉFICIT DE LOS GRUPOS
DEPENDIENTES, POR REGIONES, 2009

	Costa	Sierra	Selva	Total
Valores absolutos (en millones de nuevos soles)				
Ingreso	30 612	8 206	2 807	41 625
Consumo público	15 327	8 706	3 024	27 057
Educación	4 862	3 504	1 137	9 504
Salud	2 626	1 113	515	4 253
Consumo privado	70 640	16 713	6 298	93 651
Consumo total	85 967	25 419	9 322	120 708
Déficit global de grupos de dependientes	-55 355	-17 214	-6 515	-79 084
Superávit de la población activa	11 799	2 381	1 154	15 321
Medidas relativas				
Déficit de dependientes como porcentaje del consumo total	37,06	43,95	42,53	38,79
Déficit de dependientes como porcentaje de su consumo	64,39	67,72	69,89	65,59
Déficit de menores como porcentaje del déficit total	79,47	85,21	88,11	81,44
Razón superávit/déficit de dependientes menores	0,27	0,16	0,20	0,24
Razón superávit/déficit de dependientes mayores	1,04	0,94	1,49	1,04

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

Gráfico 12
PERÚ (TRES REGIONES): DÉFICIT GLOBAL DEL CICLO DEVIDA, 2009
(En millones de nuevos soles)

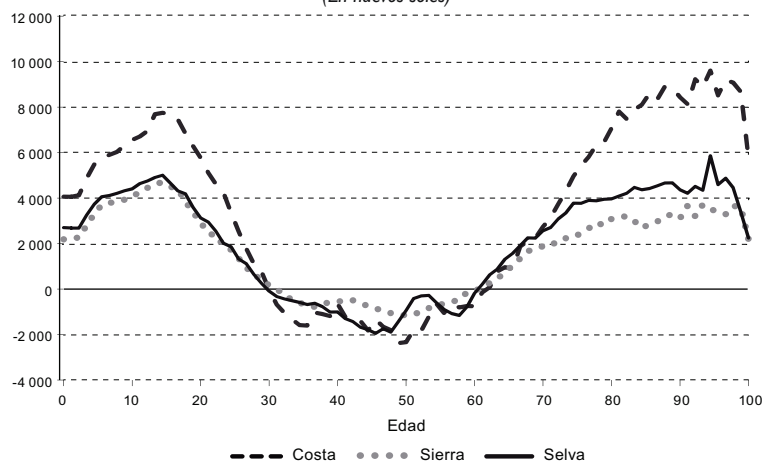


Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

La situación que se plantea al utilizar el déficit per cápita es diferente (véase el gráfico 13). En la región de la costa —la más

desarrollada y avanzada en la transición demográfica— se observa claramente un mayor peso del déficit de los adultos mayores. El déficit per cápita puede interpretarse como el esfuerzo que hace falta realizar por parte de la sociedad (no solo del Estado) para atender adecuadamente las necesidades de los grupos de dependientes y elevar su bienestar. El mayor déficit per cápita en este grupo está relacionado con el envejecimiento de la población, puesto que esta tendencia incrementa el peso de las necesidades de las personas adultas mayores en la distribución de las necesidades totales de la población, necesidades que pueden quedar desatendidas en la medida que la sociedad no esté capacitada —desde un punto de vista de las instituciones o del presupuesto— para satisfacerlas.

Gráfico 13
PERÚ (TRES REGIONES): DÉFICIT PER CÁPITA DEL CICLO DE VIDA, 2009
 (En nuevos soles)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

El déficit per cápita de los dependientes en la región de la sierra está relativamente más equilibrado entre los dos grupos de dependientes (menores y adultos mayores). Esta situación no significa necesariamente que se haya alcanzado un mayor bienestar de los dos grupos sino que el peso de las necesidades de los adultos mayores todavía no ha aumentado sensiblemente. Además, como ya se ha señalado, en esta región el consumo de los dependientes adultos mayores es marcadamente bajo y descendente lo que se ha interpretado en este estudio como una falta de acceso a bienes y servicios y, por lo tanto, de bienestar.

La región de la selva muestra déficits similares a los de la sierra en el caso de los dependientes menores, pero el déficit de los dependientes mayores es más acentuado en la selva, situación que puede estar

relacionada con un relativo envejecimiento de la población en esa región, probablemente como consecuencia de los procesos migratorios.

Dados los niveles del déficit total y el superávit de las diferentes regiones, se hace evidente que ninguna de las regiones alcanza a cubrir los déficits de consumo de los niños, jóvenes y adultos mayores con los excedentes de las edades productivas. Es más, el superávit está muy por debajo de las necesidades de los niños y jóvenes y solo alcanza a cubrir poco más de la cuarta parte del déficit en la costa, una quinta parte en la selva y menos de una quinta parte en la sierra (véase el cuadro 1).

Los superávits que se producen en la región de la costa y de la selva serían más que suficientes para cubrir el déficit de sus adultos mayores (1,04 veces y 1,49 veces, respectivamente). No ocurre lo mismo en la sierra, donde el superávit solo alcanza a cubrir el 94% de las necesidades de ese grupo. En todo caso es conveniente recordar que el hecho de que el superávit total alcance para cubrir el déficit de los adultos mayores es solo un dato de referencia puesto que lo deseable —y lo que se hace en la mayoría de los países— es priorizar las necesidades de los niños y menores.

3. Financiamiento de los déficits de los dependientes y papel de los sectores público y privado en el país y las regiones naturales

El déficit global que enfrentaba el Perú en 2009 era de algo más de 79.000 millones de nuevos soles de ese año, es decir más de 26.000 millones de dólares. El déficit representaba el 39% del consumo total de todas las edades y el 66% del consumo de los dependientes. Como referencia, el déficit global de Costa Rica constituía el 31% del consumo total en 1991 y bajó al 24% en 2004 (Rosero-Bixby y Zúñiga, 2010). El superávit global se situaba en 15.000 millones de soles, unos 5.000 millones de dólares de 2009. Este superávit alcanzaría a cubrir solo la cuarta parte del déficit absoluto de los niños y jóvenes, aunque sí cubriría la totalidad del déficit de los adultos mayores.

Se hace evidente que el superávit que se produce en las edades productivas es insuficiente para financiar los consumos de los niños y adultos mayores. Esta no es una situación exclusiva del Perú, puesto que, como lo señalan Mason y Lee (2010), en la mayoría de los países en desarrollo las solas transferencias a los hijos ya son superiores al superávit del ciclo de vida. Como se ha dicho antes, dado que el déficit sobre los ingresos laborales se financia mediante rentas provenientes de activos, en estos países aún se gasta una parte importante de estos ingresos en el sostenimiento de niños y jóvenes, lo que deja poco espacio para la

inversión. En los países desarrollados participantes en el estudio de CNT, el superávit basta o sobra para financiar el déficit de los niños, pero en ningún país, salvo China, el superávit sobrepasa el déficit de los niños y los adultos mayores en su conjunto.

También es necesario tener en cuenta que no todo el consumo de los dependientes se financia mediante transferencias —provenientes del gobierno o de los adultos receptores de ingresos—, ya que una parte puede ser financiada por los mismos dependientes. En el caso del Perú, los dependientes de 26 años y menos producen el 30% de su consumo, mientras que los dependientes de 56 años y más producen el 40% del suyo (véase el cuadro 2).

Cuadro 2
**PERÚ: AUTOFINANCIAMIENTO DEL CONSUMO DE LAS
PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS MAYORES, 2009**

	Dependientes de 10 a 18 años	Dependientes menores de 27 años	Dependientes de 56 años y más
Porcentaje financiado del consumo total	8,8	30,1	48,3
Porcentaje financiado del consumo privado	12,6	40,1	56,5

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

Llama la atención el porcentaje de autofinanciamiento del consumo de los dependientes niños y jóvenes, superior al de otros países latinoamericanos; por ejemplo, en Chile ese porcentaje es del 26% (Bravo y Holz, 2010). Pero a pesar del aparente alivio que constituye la generación de ingresos por parte de los dependientes menores, esta situación no es del todo deseable, sobre todo cuando se trata de ingresos obtenidos por los niños.

En el Perú se observa un inicio muy temprano de la actividad remunerada y una alta participación de niños de 10 a 18 años, posiblemente vinculados a actividades remuneradas en los sectores minero, agrícola y pastoril. Ellos financian casi el 9% de su propio consumo o el 13% del consumo privado en esas edades. Esta actividad infantil y juvenil se hace necesaria para apoyar la débil situación económica de los hogares, pero es ilegal y usualmente se desarrolla en condiciones precarias, al tiempo que afecta negativamente la permanencia de la población en el sistema educativo y, por consiguiente, la generación de capital humano y la productividad hacia el futuro.

En principio, parece deseable que los adultos mayores financien una parte importante de sus necesidades a partir de las rentas generadas por los

bienes propios (acumulación de capital que han hecho precisamente con ese fin) —como lo hacen en los Estados Unidos, México y varios países asiáticos— y dependieran menos de programas de transferencias públicas como sucede en América Latina y Europa (Mason y Lee, 2010).

Pero el elevado porcentaje de financiamiento del déficit mediante ingresos laborales de los propios adultos mayores que se presenta en el Perú (40% de su consumo), más que una ventaja puede ser el reflejo de situaciones adversas a su bienestar, como la baja cobertura de la seguridad social y otros programas públicos, y las dificultades que enfrentaron para ahorrar y acumular capital durante su vida laboral. De hecho, según lo señalan Picado, Mendoza y Durán (2008), la cobertura de los sistemas de seguridad social en el Perú es de las más bajas de América Latina, del 20% en salud en 2007 y el 15% en pensiones. Esta situación induce a los adultos mayores, por un lado, a permanecer en la actividad económica remunerada y, por otro, a limitar su consumo en detrimento del bienestar que debieran disfrutar a edades avanzadas. De nuevo, esta situación llama la atención sobre la necesidad de políticas públicas para garantizar servicios a las personas adultas mayores en el Perú.

a) Transferencias públicas y privadas a los grupos deficitarios

Las transferencias públicas hacia los individuos u hogares comprenden toda la provisión de bienes y servicios que benefician a la población de manera directa o indirecta (Bravo y Holz, 2010). Esta definición incluye una gama muy amplia de rubros, entre ellos, la construcción de infraestructura. La información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009 aquí utilizada solo permite estimar las transferencias que reciben los individuos desde el gobierno en los programas tradicionales de educación, salud y pensiones y rubros residuales no desagregados. Los datos disponibles tampoco permiten determinar las transferencias desde los individuos al gobierno (impuestos), y, por tanto, no es posible calcular las transferencias netas entre estos dos sectores. Así pues, el análisis realizado proporciona solo una mirada parcial de la financiación por parte del Estado de las necesidades de los grupos deficitarios

Como se aprecia en la última columna del cuadro 3, con el gasto público se financia algo más del 22% del consumo de los dependientes mientras que el consumo privado cubre casi el 78% de sus necesidades. En promedio, el gasto público en educación constituye un porcentaje relativamente pequeño del consumo total de la población dependiente (7,9%) y el gasto en salud, menos de la mitad del consumo en educación (3,5%). Otros gastos públicos cubren un 11% adicional del consumo de estos grupos.

El consumo público en educación beneficia principalmente a los dependientes niños y jóvenes —para los que constituye casi un 10% del consumo total— pero, dentro de ese grupo, los más beneficiados son los menores de 18 años (es decir, la educación primaria y secundaria), donde constituye casi un 14%. El gasto público en salud benefició principalmente a los mayores de 55 años (4,5% de su consumo), aunque ese énfasis es menos marcado de lo esperado. En el conjunto de programas de educación, salud y otros, el gasto público favorece ampliamente a los menores de 18 años, a los que beneficia con un 30% de su consumo, mientras que a los dependientes de 55 años y más el Estado les aporta un 14% de su consumo.

Como la población del Perú continúa siendo mayoritariamente juvenil, conviene aquí también controlar el efecto de la estructura por edad. Con tal propósito, en el gráfico 14 se presentan los valores per cápita gastados por el Estado en la población de las diferentes edades y en los diferentes programas públicos. Se aprecia claramente que el gasto público per cápita en educación favorece a la población de niños y jóvenes, mientras que el gasto público en salud favorece a la población de adultos mayores y también a los niños en sus primeros años de vida. Además, el beneficio público per cápita se concentra en la educación primaria —donde el gasto depende prácticamente en su totalidad del Estado— y en la secundaria. En esos tramos el gasto público tiende a ser mayor que el privado pero después cae abruptamente, lo que refleja un escaso apoyo estatal a la educación postsecundaria y universitaria.

Cuadro 3

PERÚ: IMPORTANCIA DEL GASTO PÚBLICO Y PRIVADO PARA FINANCIAR EL DÉFICIT DE LOS GRUPOS DEPENDIENTES, 2009

(En porcentajes)

	0 a 18 años	0 a 26 años	56 años y más	Total
Educación	13,59	10,31	0,01	7,89
Salud	3,74	3,15	4,70	3,52
Otros	12,65	11,37	9,83	11,01
Total público	29,99	24,84	14,54	22,41
Total privado	70,01	75,16	85,46	77,59
Total déficit	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

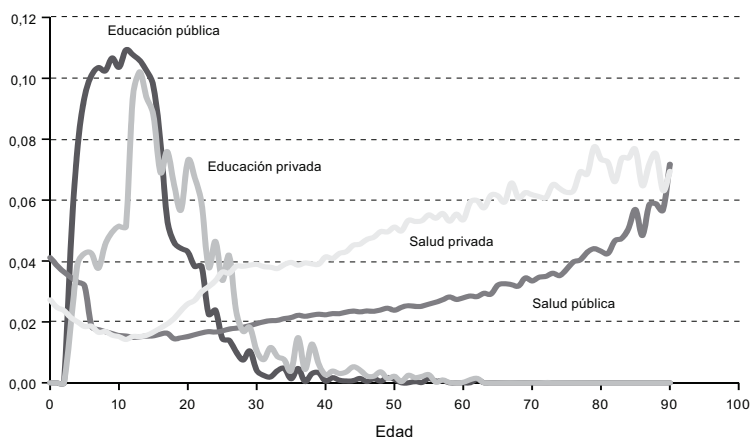
El esfuerzo privado per cápita en educación, por su parte, se inicia a partir de los 12 años y se concentra en la educación secundaria; a partir de ahí se mantiene por encima del gasto público per cápita, pero también cae sustancialmente. En suma, sin detrimento de los necesarios aumentos del gasto per cápita en todos los tramos educativos, tanto el sector público

como el privado deberán incrementar considerablemente su esfuerzo de inversión en el sector postsecundario y universitario.

El gasto público per cápita en salud también es superior al gasto privado durante la infancia. Este grupo tradicionalmente ha sido atendido por el Estado a través de los programas de salud materno-infantil. El gasto en salud de la población adulta y adulta mayor está siendo sufragado sobre todo por el sector privado pero, como puede observarse, este grupo de población demanda inversiones crecientes como consecuencia de la transición epidemiológica y de la mayor supervivencia a dichas edades. En el caso de las edades avanzadas, el esfuerzo privado decae en relación con el esfuerzo público. Es posible que dentro del sistema de salud estén operando mecanismos para trasladar hacia el Estado la responsabilidad de la atención de salud de mayor complejidad y costo.

Gráfico 14
PERÚ: TRANSFERENCIAS PÚBLICAS Y GASTO PRIVADO PER CÁPITA EN EDUCACIÓN Y SALUD, 2009

(En relación con el ingreso de un adulto de entre 30 y 49 años)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

b) **Financiamiento del déficit de los dependientes en las regiones naturales**

Examinando con más detalle las fuentes de financiamiento los datos del cuadro 4 ratifican que el gasto público tiene menor importancia en la costa que en las otras dos regiones. Con el conjunto de los programas de educación, salud y otros gastos públicos, en la primera región se financia el 18% del consumo de los dependientes, mientras que en la sierra se financia el 34% y en la selva el 32% de ese consumo.

En las tres regiones el gasto público favorece ampliamente a los dependientes menores, a quienes estos programas financian un 20%, un 37% y un 35% de su consumo en la costa, la sierra y la selva, respectivamente. Dentro de los menores, se hace evidente que el grupo de 18 años y menos de edad es el más beneficiado puesto que el porcentaje de su consumo financiado por el Estado asciende casi al 25% en la costa, el 42% en la sierra y a casi el 40% en la selva.

Cuadro 4
PERÚ: TRANSFERENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA FINANCIAR EL DÉFICIT DE LOS DEPENDIENTES EN LAS REGIONES, 2009
(En porcentajes)

	0 a 18 años	0 a 26 años	56 años y más	Consumo total de dependientes
Costa				
Educación	10,21	7,62	0,02	5,66
Salud	3,28	2,71	4,04	3,05
Otros	10,64	9,52	7,97	9,12
Total público	24,14	19,85	12,03	17,83
Total privado	75,86	80,15	87,97	82,17
Total déficit	100,00	100,00	100,00	100,00
Sierra				
Educación	21,21	17,20	0,00	13,79
Salud	4,29	3,82	6,64	4,38
Otros	16,85	15,76	17,38	16,09
Total público	42,34	36,78	24,02	34,25
Total privado	57,66	63,22	75,98	65,75
Total déficit	100,00	100,00	100,00	100,00
Selva				
Educación	17,97	14,62	0,00	12,20
Salud	5,59	5,02	8,06	5,52
Otros	16,14	15,06	13,02	14,72
Total público	39,71	34,70	21,08	32,44
Total privado	60,29	65,30	78,92	67,56
Total déficit	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Nacional de Hogares 2009.

El gasto educativo se orienta hacia los dependientes jóvenes y, dentro de estos, a los de 18 años y menos, es decir a la educación primaria y secundaria. La región que más se apoya en el gasto público para financiar las necesidades educativas de los jóvenes es la sierra, donde se financia más del 21% del consumo de los jóvenes de 18 años y menos mediante gasto público en educación, mientras que en la selva y la costa ese porcentaje es del 18% y el 10%, respectivamente.

Aunque los programas educativos están orientados especialmente a la población de 18 años y menos, las cifras permiten entrever que las proporciones de gasto público que se dedican a las poblaciones de entre 19 y 26 años no son despreciables. Por otro lado, en el rubro de otros gastos, que incluye gastos generales del Estado, se dedica una proporción considerable a los jóvenes, por lo que puede pensarse que buena parte son inversiones en infraestructura y otros gastos públicos del sector educativo que no quedan desagregadas en los datos utilizados.

Un porcentaje menos importante del financiamiento público se orienta a la salud. En la región de la costa solo un 4% de los consumos de los dependientes en ese ámbito se financia con gasto público; en las regiones de la sierra y la selva esos porcentajes son un poco mayores, del 7% y del 8%, respectivamente. En las tres regiones el gasto en salud favorece a los dependientes adultos mayores, pero por sus bajas proporciones y el abultado déficit per cápita que afronta este grupo de población, puede concluirse que se deben realizar importantes esfuerzos para incrementar la atención de sus déficits. Finalmente, las transferencias privadas se orientan fundamentalmente a los adultos mayores en las tres regiones.

C. Conclusiones

El nivel del consumo en el Perú es alto en el tramo de edades productivas frente a un ingreso relativamente bajo, lo que implica un nivel bajo de ahorro, dejando escaso margen o excedente para cubrir los déficits de consumo de los tramos deficitarios del ciclo de vida. Aparte de esto, el consumo disminuye de una manera marcada a partir de los 55 años aproximadamente, lo que indica condiciones económicas débiles de la población adulta mayor o barreras de acceso que no les permiten realizar las inversiones requeridas para atender a su salud y otros consumos y, por tanto, constituye una alerta para las políticas públicas. La caída del consumo en las edades mayores es una característica que comparten las tres regiones, pero es menos pronunciada en la costa.

Las diferencias de desarrollo entre las regiones se manifiestan claramente en los niveles y perfiles del ingreso laboral. La región de la costa presenta niveles de ingreso laboral per cápita mucho mayores que las otras dos regiones: más del doble que el de la sierra y un 75% más alto que el de la selva. Asimismo, la curva del ingreso laboral de la región de la costa se desplaza hacia la derecha y tiene una cúspide un poco más tardía, con ingresos más altos hasta edades mayores (hasta los 65 años aproximadamente) y después cae más rápidamente, es decir, presenta un perfil propio de región más desarrollada

El volumen de recursos que demandan los grupos deficitarios (la masa del déficit) en el Perú y sus regiones es aún grande en la infancia y la juventud debido al alto volumen de población en esas edades. En estas circunstancias, se requiere una gran cantidad de recursos para los niños, lo que se traduce en demanda de importantes transferencias descendentes, ya sean públicas o privadas. El déficit global de los adultos mayores es menor porque el peso de esta población aún no es alto; sin embargo, el déficit per cápita —que se interpreta como la inversión necesaria para garantizar el bienestar de cada dependiente— es superior en el caso de los adultos mayores que en el de los niños y jóvenes.

El déficit global que enfrentaba el Perú en 2009 era de algo más de 79.000 millones de nuevos soles de ese año, es decir más de 26.000 millones de dólares, mientras que el superávit global alcanzaba los 15.000 millones de nuevos soles, unos 5.000 millones de dólares de 2009. Este superávit alcanzaría a cubrir solo la cuarta parte del déficit absoluto de los niños y jóvenes, aunque sí cubriría la totalidad del déficit de los adultos mayores. Se hace evidente que el superávit que se produce en las edades productivas es insuficiente para financiar los consumos de los niños y adultos mayores.

Los niños y jóvenes del Perú financian casi el 9% de su propio consumo con ingresos laborales; en el caso de los adultos mayores ese porcentaje se sitúa en el 40%. Más que una ventaja, esto puede ser el reflejo, en el primer caso, del trabajo infantil que usualmente se desarrolla en condiciones de ilegalidad y precariedad y, en el segundo, de una baja cobertura de la seguridad social y otros programas públicos así como de las dificultades que estas personas enfrentaron para ahorrar y acumular capital durante su vida laboral.

Entre las fuentes de transferencias para cubrir el consumo de los grupos dependientes, el gasto público en educación y salud tiene una importancia relativamente pequeña —poco menos del 22% de su consumo—, mientras que el consumo privado cubre más del 78% de las necesidades de estos grupos. El consumo público en educación beneficia principalmente a los dependientes niños y jóvenes —para los que constituye casi un 10% del consumo total— pero, dentro de ese grupo, los más beneficiados son los menores de 18 años (educación primaria y secundaria), donde constituye casi un 14%. El gasto público en salud beneficia principalmente a los mayores de 55 años (4,5% de su consumo).

En la región de la costa el consumo privado tiene un peso mucho mayor que en las otras dos regiones y el consumo público per cápita es relativamente bajo. La región que más se apoya en el gasto público para

financiar las necesidades de los jóvenes es la sierra. En las tres regiones naturales el gasto público favorece ampliamente a los dependientes menores, a quienes financia un 20%, un 37% y un 35% de su consumo en la costa, la sierra y la selva, respectivamente. Una parte menos importante del financiamiento público se orienta a la salud. En la región de la costa solo un 4% del consumo de los dependientes se financia con gasto público en salud; en las regiones de la sierra y la selva ese porcentaje es algo mayor, del 7% y el 8%, respectivamente.

Dados los niveles del déficit total y el superávit de las diferentes regiones, se hace evidente que ninguna de ellas alcanza a cubrir los déficits de consumo de los niños, jóvenes y adultos mayores con los excedentes de las edades productivas. El superávit está muy por debajo de las necesidades de los niños y jóvenes y solo alcanza a cubrir poco más de la cuarta parte del déficit en la costa, una quinta parte en la selva y menos de una quinta parte en la sierra. Aunque el superávit que se produce en las regiones de la costa y la selva sería suficiente para cubrir el déficit de sus adultos mayores, lo deseable, y lo que se practica en la mayoría de los países, es priorizar las necesidades de los niños y los menores.

Bibliografía

- Bravo, Jorge y Mauricio Holz (2010), “La importancia de las transferencias económicas intergeneracionales en Chile”, *Notas de población*, N° 90 (LC/G.2469-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.10.II.G.56.
- Bucheli, Marisa, Cecilia González y Cecilia Olivieri (2010), “Transferencias del sector público a la infancia y la vejez en Uruguay”, *Notas de población*, N° 90 (LC/G.2469-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.10.II.G.56.
- CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía – División de Población de la CEPAL) (2008), *Transformaciones demográficas y su influencia en el desarrollo en América Latina y el Caribe* (LC/G.2378(SES.32/14)), Santiago de Chile, junio.
- INEI/CELADE (Instituto Nacional de Estadística e Informática/Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL) (2010), “Perú: Estimaciones y proyecciones de población departamental, por años calendario y edades simples, 1995-2025”, *Boletín especial*, N° 22, Lima, Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), noviembre.
- ____ (2009a), “Perú: Estimaciones y proyecciones de población, 1950-2050”, *Boletín de análisis demográfico*, N° 36, Lima, Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales, marzo.

- ____ (2009b), “Perú: Estimaciones y proyecciones de población por departamento, sexo y grupos quinquenales de edad, 1995-2025”, *Boletín de análisis demográfico*, N° 37, Lima, Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), octubre.
- Lee, Ronald y Gretchen Donehower (2010), “El envejecimiento de la población, las transferencias intergeneracionales y el crecimiento económico: América Latina en el contexto mundial”, *Notas de población*, N° 90 (LC/G.2469-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.10.II.G.56.
- Mason, Andrew y Ronald Lee (2010), “Nuevos enfoques sobre las cuentas nacionales de transferencias para la política fiscal, los programas sociales y las transferencias familiares de los países”, *Notas de población*, N° 90 (LC/G.2469-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.10.II.G.56.
- Mejía, Iván, Félix Fernández y Juan García (2010), “El primer dividendo demográfico y los sistemas de protección social en México”, *Notas de población*, N° 90 (LC/G.2469-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.10.II.G.56.
- Picado, Gustavo, Walter Mendoza y Fabio Durán (2008), *Viabilidad de las pensiones no contributivas en el Perú: Proyecciones demográficas y financiera*, Lima, Organización Internacional del Trabajo (OIT)/Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
- Rosero-Bixby, Luis y Paola Zúñiga (2010), “Las transferencias intergeneracionales en Costa Rica”, *Notas de población*, N° 90 (LC/G.2469-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.10.II.G.56.

Áreas de alta vulnerabilidad ambiental en América Latina y el Caribe: Una perspectiva regional a escala subnacional¹

Susana B. Adamo²

Liana Razafindrazay²

Alexander de Sherbinin²

Resumen

En el presente artículo se distinguen áreas de alta vulnerabilidad ambiental en América Latina y el Caribe mediante un análisis exploratorio a escala subnacional, basado en la distinción de dos planos de vulnerabilidad: externo e interno. La integración de tres bases de datos espaciales —sobre desastres naturales, población y pobreza— en un sistema de información geográfica permitió identificar áreas de alta vulnerabilidad, el tamaño y la distribución de la población de cada una de ellas y la existencia de diferentes niveles de pobreza. Los resultados muestran una gran heterogeneidad entre países y dentro de ellos, lo que destaca la importancia de considerar diferentes escalas espaciales en el análisis de la vulnerabilidad ambiental.

¹ Una versión anterior de este artículo fue presentada por Susana B. Adamo en la reunión de expertos “Población, territorio y desarrollo sostenible”, organizada por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, Santiago de Chile, 16 y 17 de agosto de 2011.

² Center for International Earth Science Information Network (CIESIN). Earth Institute, Universidad de Columbia.

Abstract

This article performs an exploratory analysis of areas of high environmental vulnerability in Latin America and the Caribbean, distinguishing between two distinct types of vulnerability: external and internal. By combining three spatial databases —on natural disasters, population and poverty— into a geographical information system, the study identified the areas of high vulnerability, the size and distribution of the population in each of them and the existence of different poverty levels. The results show an extremely heterogeneous situation both between and within countries, highlighting the importance of considering different spatial scales in the analysis of environmental vulnerability.

Résumé

Dans cet article, les auteurs réalisent une analyse exploratoire à l'échelle sous-nationale, sur la base de la distinction entre deux plans de vulnérabilité, à savoir les plans interne et externe, pour cerner les zones à forte vulnérabilité environnementale. L'intégration de trois bases de données spatiales, sur les catastrophes naturelles, la population et la pauvreté, au sein d'un système d'information géographique a permis de détecter des zones à forte vulnérabilité, de déterminer la taille et la distribution de la population dans chacune d'elles, ainsi que l'existence de niveaux variés de pauvreté. Les résultats font apparaître une grande hétérogénéité entre les pays et au sein de ces derniers, ce qui montre clairement l'importance de tenir compte de différentes échelles spatiales dans l'analyse de la vulnérabilité environnementale.

Introducción

En este artículo se presenta un análisis exploratorio de la vulnerabilidad ambiental en unidades subnacionales de América Latina y el Caribe, con el objetivo de contribuir al estudio de las desigualdades territoriales en la región en el marco del desarrollo sostenible. Con este fin, en el presente trabajo se describen los temas indicados a continuación, en forma estilizada y desde una perspectiva regional:

- áreas de alta exposición a riesgos ambientales en términos de alta intensidad (número y frecuencia de eventos), elevada mortalidad atribuible a desastres y pérdidas económicas considerables;
- tamaño y distribución de la población (densidad, urbanización y centros poblados) en áreas con gran intensidad (número y frecuencia) de fenómenos naturales, y
- niveles de pobreza, también en áreas con gran intensidad de fenómenos naturales.

El documento se divide en cinco secciones. En la primera se expone el tema de los desastres naturales en América Latina y el Caribe en las últimas décadas. En la segunda se describe el marco conceptual, incluidas consideraciones sobre la relevancia que reviste la magnitud de escala en relación con la vulnerabilidad. En las secciones siguientes se describen la metodología y las fuentes de datos utilizadas y se dan a conocer los resultados del estudio. La última sección está dedicada a las conclusiones y consideraciones finales.

A. Panorama regional de los desastres naturales

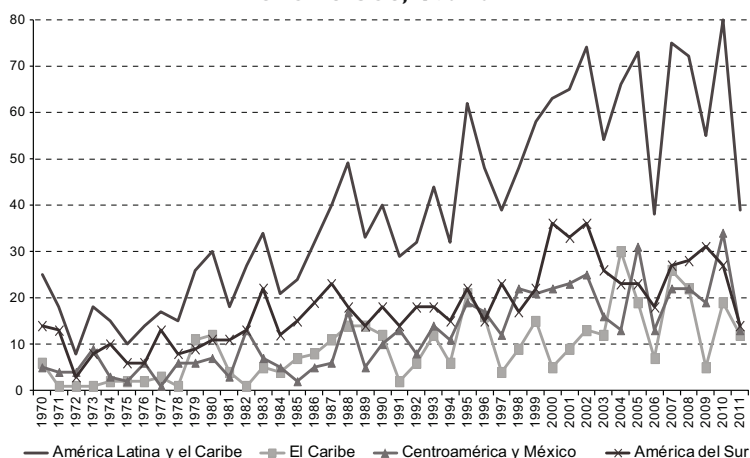
En el año 2010 hubo un total de 85 desastres ambientales en América Latina y el Caribe³, que corresponden al 22,8% del total mundial; estos dejaron un saldo de más de 13 millones de afectados⁴ (6,3%), 224.473 muertos (75,6%) y 48.000 millones de dólares de pérdidas materiales según cifras preliminares (44%) (CEPAL, 2010, cuadro 1). El terremoto de Haití produjo la mayor cantidad de víctimas fatales (222.570), en tanto que el mayor impacto económico registrado en 2010 fue consecuencia del terremoto de Chile (30.000 millones de dólares).

³ Se consideran los fenómenos de origen climatológico (eventos climáticos extremos, inundaciones y sequías) y geofísico (terremotos, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierras).

⁴ En la base de datos EM-DAT se define como "afectados" a los individuos que requieren asistencia inmediata durante un período de emergencia. Esto incluye necesidades básicas de supervivencia tales como comida, agua, refugio, medidas sanitarias y atención médica (<http://www.emdat.be/glossary/9>).

Si bien los daños varían considerablemente de un año a otro, la evolución de la frecuencia de los desastres climatológicos y geofísicos y de sus efectos (véanse el gráfico 1 y el cuadro 1) revelarían una tendencia general ascendente entre 1970 y 2010⁵. Mientras los costos económicos presentan una evolución similar, el número de víctimas fatales mostraba una tendencia descendente hasta el terremoto de Haití. De hecho, el impacto de los terremotos de 2010 obliga a actuar con cautela en la proyección de tendencias y a tomar en consideración el tipo de fenómeno y el país.

Gráfico 1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESASTRES CLIMATOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS, 1970-2011^a



Fuente: Elaboración propia, según base de datos internacional de desastres (EM-DAT), Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED), Universidad Católica de Lovaina.

^a Fenómenos considerados: sequías, terremotos y actividad sísmica, temperaturas extremas, inundaciones, deslizamiento de tierras, tormentas y vulcanismo.

En el cuadro 2 se presenta información desagregada por tipo de desastre, lo que permite observar diferencias en términos de frecuencia y de impacto. Concretamente, las inundaciones y las tormentas son los fenómenos más frecuentes y los terremotos son los más letales, dado que en promedio cada uno de ellos deja 2.215 víctimas fatales, y los de mayor costo económico, puesto que en el período 1970-2011 este ascendió en promedio a alrededor de 365 millones de dólares en cada caso. Las sequías son los fenómenos que afectan a un mayor número de personas, puesto que en el período considerado dicho costo ascendió en promedio a 635.000 personas por caso. La frecuencia de las sequías, las temperaturas extremas, las inundaciones y las tormentas

⁵ Es necesario evaluar cautelosamente estas cifras, ya que el aumento del número de desastres desde 1970 hasta 1995 puede deberse a mejoras del sistema de recopilación de información de la base EM-DAT y de la consignación de información sobre los desastres en general (Wheeler, 2010, pág. 6).

presenta una clara tendencia ascendente, que ha sido vinculada a los efectos de los ciclos de El Niño y La Niña, el agujero en la capa de ozono y el cambio climático global (Kang y otros, 2011; Wheeler, 2010; Samaniego, 2009; Conde-Álvarez y Saldaña-Zorrilla, 2007).

Cuadro I
**AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESASTRES CLIMATOLÓGICOS
Y GEOFÍSICOS POR TIPO DE IMPACTO, 1970-2011**^a

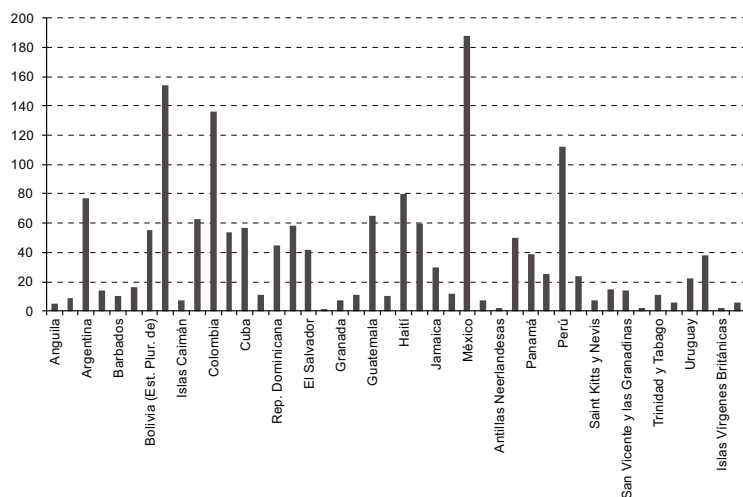
Década	Frecuencia	Afectados	Víctimas fatales	Costo económico (en miles de dólares)
1970-1979	166	40 176 176	120 672	7 601 909
1980-1989	308	57 695 549	49 858	2 704 3336
1990-1999	432	34 142 215	61 626	39 134 143
2000-2009	635	46 803 510	18 485	46 644 095
2010-2011	119	14 901 644	226 406	48 600 800

Fuente: Elaboración propia, según base de datos internacional de desastres (EM-DAT), Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED), Universidad Católica de Lovaina.

^a Fenómenos considerados: sequías, terremotos y actividad sísmica, temperaturas extremas, inundaciones, deslizamiento de tierras, tormentas y vulcanismo.

La cantidad de desastres varía notablemente de un país a otro (véase el gráfico 2). México presenta la más alta, seguido por el Brasil y Colombia. Esta variación obedece a la localización de los territorios, el tamaño de los países, su topografía y otras características naturales.

Gráfico 2
**AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: NÚMERO DE DESASTRES
NATURALES POR PAÍS, 1970-2011**



Fuente: Elaboración propia, según base de datos internacional de desastres (EM-DAT), Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED), Universidad Católica de Lovaina.

Cuadro 2
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: IMPACTO DE DIFERENTES TIPOS DE DESASTRES, 1970-2011
 (En miles de dólares)

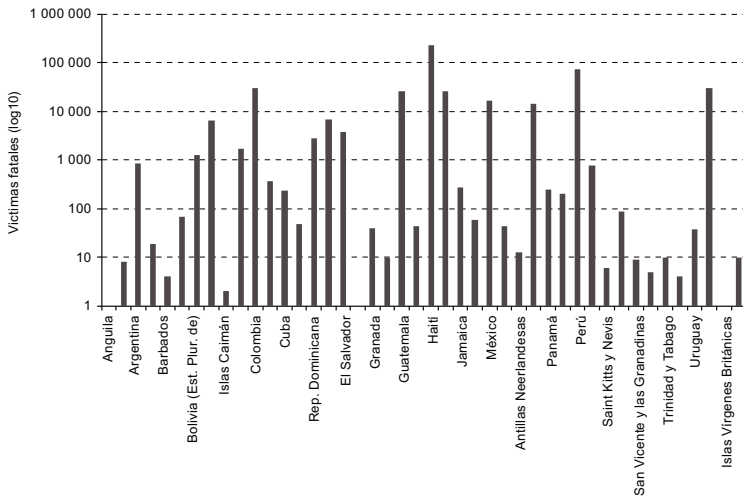
Categoría	Número de desastres										Víctimas fatales				
	1970-1979	1980-1989	1990-1999	2000-1909	2010-2011	1970-1979	1980-1989	1990-1999	2000-2009	2010-2011	1970-1979	1980-1989	1990-1999	2000-2009	2010-2011
Sequías	10	19	29	34	7	0	20	12	45	0					
Terremotos	23	42	50	37	4	101 752	16 301	2 434	2 044	223 137					
Temperaturas extremas	3	3	13	31	10	226	117	943	1 019	503					
Inundaciones	69	131	147	281	49	2 739	6 307	33 752	7 546	2 403					
Deslizamientos	18	36	39	29	0	5 355	3 136	2 067	864	0					
Tormentas	34	70	130	188	38	10 595	2 077	22 349	6 674	363					
Vulcanismo	9	7	24	22	3	5	21 900	69	23	0					
Total	166	308	432	622	111	120 672	49 858	61 626	18 215	226 406					

Categoría	Número de personas afectadas					Costo económico (en dólares)				
	1970-1979	1980-1989	1990-1999	2000-2009	2010-2011	1970-1979	1980-1989	1990-1999	2000-2009	2010-2011
Sequías	16 257 000	24 165 049	16 664 360	6 199 711	124 500	2 307 100	1 616 600	2 702 000	2 054 239	114 700
Terremotos	11 217 504	3 649 223	1 292 403	2 908 925	5 286 622	2 790 000	9 054 900	2 580 626	3 279 900	39 150 000
Temperaturas extremas	0	2 700	35 000	3 119 954	216 625	600 000	600	569 250	10 000	0
Inundaciones	9 752 656	24 842 820	6 198 955	16 945 752	7 891 639	838 079	9 259 790	8 832 450	10 751 970	1 988 000
Deslizamientos	12 006	868 000	348 420	18 648	0	21 700	992 600	906 400	86 000	0
Tormentas	2 747 010	4 121 657	9 038 131	16 993 889	1 374 458	1 043 030	5 001 846	23 519 695	30 286 011	7 348 100
Vulcanismo	190 000	46 100	564 946	595 321	7 800	2 000	1 117 000	23 722	160 975	0
Total	40 176 176	57 695 549	34 142 215	46 782 200	14 901 644	7 601 909	27 043 336	39 134 143	46 629 095	48 600 800

Fuente: Elaboración propia, según base de datos internacional de desastres (EM-DAT), Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED), Universidad Católica de Lovaina.

Las consecuencias de los desastres naturales también varían notablemente de un país de la región a otro, como se observa en el gráfico 3, en el que se indica el número de víctimas fatales registrado en cada país en el período transcurrido entre 1970 y 2010. Estas diferencias son un reflejo más de la gran diversidad que presenta América Latina y el Caribe en términos de los factores que influyen en el grado de vulnerabilidad: nivel de pobreza, educación, estructura sociodemográfica recursos financieros, infraestructura básica de servicios, gobernabilidad y desarrollo (Samaniego, 2009; Levi y otros, 2010; Conde-Álvarez y Saldaña-Zorrilla, 2007; Macías, 1992).

Gráfico 3
NÚMERO DE VÍCTIMAS FATALES (LOG) ATRIBUIDAS A DESASTRES AMBIENTALES 1970-2011



Fuente: Elaboración propia, según base de datos internacional de desastres (EM-DAT), Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED), Universidad Católica de Lovaina.

B. Marco conceptual ⁶

I. Vulnerabilidad ambiental

Cuando se habla de riesgos o peligros ambientales siempre es necesario considerar que se trata de fenómenos de origen social, en el sentido de que no son naturales, que obedecen a la combinación de un evento ambiental y una vulnerabilidad preexistente (Blaikie y otros, 1994, pag. 21; Coy, 2010). Por consiguiente, se deben especificar las características

⁶ Esta sección está basada en Adamo y de Sherbinin (2011).

del fenómeno ambiental, el tipo de vulnerabilidad y el ámbito en que se manifiesta. De estos tres elementos, la vulnerabilidad suele ser la más difícil de definir.

En el contexto del cambio climático global, el grupo de trabajo II del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) definió la vulnerabilidad como el grado de susceptibilidad de un sistema a los impactos adversos del cambio climático, incluidas las variaciones climáticas y los fenómenos extremos, y su incapacidad de tolerarlos. La vulnerabilidad depende de las características, la magnitud y la velocidad del cambio climático al cual el sistema está expuesto, y su sensibilidad y capacidad de adaptación (Parry y otros, 2007, pág. 27)

En términos más generales, la vulnerabilidad puede entenderse como la reducción o eliminación de la capacidad de una persona o grupo de responder, ya sea resistiendo, recuperándose o adaptándose, a las presiones o amenazas externas a sus medios de vida y su bienestar (Blaikie y otros, 1994; Kelly y Adger, 2000; Meze-Hausken, 2000; Cardona, 2001). En este sentido, la vulnerabilidad está inversamente relacionada con la resiliencia social y la capacidad de adaptación (Longhurst, 1994)⁷.

Dada la complejidad del concepto, conviene distinguir dos dimensiones analíticas. La primera de ellas es la dimensión externa, definida como la exposición al evento ambiental, es decir el hecho de estar presente donde y cuando este se produce. Esto significa que la vulnerabilidad presenta variaciones espaciales y temporales relacionadas, entre otras cosas, con la temporada de ciclones o los ciclos de sequías. La distribución de la población, las viviendas y la infraestructura están directamente vinculadas a esta dimensión.

La dimensión interna consiste en la indefensión o el desamparo ante un riesgo o peligro (Chambers, 1989; Kasperson y Kasperson, 2001), que se traduce en diferentes grados de vulnerabilidad. Esta gradiente está determinada por características del grupo, del hogar o de los individuos, tales como la edad, el género, el nivel educativo, la composición del hogar, el ciclo de vida, el nivel socioeconómico y la situación laboral (Macías, 1992; Blaikie y otros, 1994; CELADE, 2002; Hogan y Marandola, 2007; de Sherbinin y otros, 2007). Un ejemplo de esta dimensión podría ser el caso de los adultos mayores, que son más

⁷ Adger (2000, págs. 347-348) define resiliencia social como la habilidad de grupos o comunidades de soportar o resistir presiones externas, *shocks* y otras perturbaciones que pueden afectar la estructura social, como consecuencia de cambios sociales, políticos y ambientales.

vulnerables a las altas temperaturas de una ola de calor, como ocurrió en Europa en el verano de 2003.

La pobreza es uno de los factores más citados de la dimensión interna de la vulnerabilidad. En el cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático se indica que, históricamente, los pobres y marginados han estado más expuestos al riesgo y son más vulnerables a los efectos del cambio climático (Adger, Agrawala y Monirul Qader Mirza, 2007, pág. 720). Si bien los términos están relacionados tanto conceptual como empíricamente, es importante distinguir vulnerabilidad de pobreza. Moser (1998, pág. 3) argumenta que, mientras la pobreza es un concepto estático, la vulnerabilidad es un concepto dinámico y, por tanto, más adecuado para la medición del cambio. Chambers (1995, págs. 188-189) sostiene que la pobreza consiste en la falta de recursos materiales, ya sean activos o ingresos, en tanto que la vulnerabilidad consiste en la exposición a *shocks*, presiones y riesgos y en la falta o escasez de medios para enfrentar el daño o la pérdida; asimismo, indica que los términos estarían relacionados, por el hecho de ser distintos aspectos de un concepto más amplio, el de carencia.

Kelly y Adger (2000, págs. 330-331) sostienen que la pobreza es de hecho un indicador de vulnerabilidad, ya que está ligado a la marginación y la disponibilidad de recursos limitados. Finalmente, Blaikie y otros (1994, págs. 9-10) afirman que, en general, los pobres están más expuestos a los riesgos ambientales que los ricos y tienen pocas posibilidades de vivir en áreas frágiles o peligrosas desde el punto de vista ambiental; además, los desastres naturales los afectan en forma más profunda y prolongada.

2. Escala de vulnerabilidad

Los patrones y grados de vulnerabilidad presentan diferencias temporales y espaciales (véase Coy, 2010, entre otros). En el cuarto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático se toma en cuenta este aspecto crítico cuando se afirma que la elección de la escala considerada en el examen de los efectos es fundamental, ya que, por razones de justicia y equidad, se deben estudiar la distribución de los efectos, la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación de los diferentes grupos y de cada uno de ellos. La agregación, ya sea por región, sector o grupo de población, implica juicios de valor que se manifiestan en la selección, la posibilidad de comparación y la importancia asignada a las vulnerabilidades y cohortes (Schneider y Pathwardhan, 2007, 784).

Las diferencias espaciales responden a los siguientes elementos:
i) la heterogénea distribución de los factores de riesgo ambiental, que se

concentran en determinados lugares, ii) la distribución de la población, que también dista de ser espacialmente uniforme y iii) la heterogénea distribución espacial de otros elementos de la estructura económica y social, que abarcan desde la infraestructura de servicios hasta las oportunidades económicas. Estos elementos preceden a los fenómenos ambientales y condicionan sus efectos. Del cruce de estas heterogeneidades resulta una exposición diferencial (Adamo, 2009).

Por ejemplo, la residencia en un área urbana o rural influye en el acceso a servicios y recursos básicos y “filtra” la influencia de los factores económicos y políticos de carácter más amplio. En general, la población de las áreas rurales está más aislada y es muy dependiente de las redes de transporte. Además, suele mostrar una mayor cohesión social que la población de las áreas urbanas, en tanto que sus redes sociales suelen ser más densas y compactas, aunque también pueden ser más reducidas y homogéneas. Los modos de vida muy dependientes de los recursos naturales, entre otros la agricultura y la ganadería a pequeña escala, temporal o de subsistencia en áreas caracterizadas por precipitaciones muy variables, presentan una elevada vulnerabilidad ante el cambio climático (Burton, 2001; Bilsborrow, 2002). Por el contrario, las áreas urbanas suelen exhibir un alto grado de segregación espacial y social, una alta concentración de la pobreza, una expansión de la “mancha urbana” hacia zonas ambientalmente frágiles e instituciones poco preparadas para hacer frente a los problemas derivados de efectos ambientales adversos (Satterthwaite y otros, 2007; de Sherbinin y otros, 2007; Bull-Kamanga y otros, 2003; Huq y otros, 2007).

La consideración de diferentes escalas temporales y espaciales constituye un desafío para distintas disciplinas científicas y también para la formulación de políticas. Por ejemplo, los estudios demográficos basados en grandes agregados suelen centrarse en poblaciones que presentan determinadas escalas de agregación, generalmente de alcance nacional, que pueden ocultar diferencias críticas a nivel subnacional. La implementación local de políticas nacionales puede revelar importantes desequilibrios territoriales, en tanto que los análisis realizados a nivel de manzanas urbanas o rurales pueden ocultar la magnitud real de algunos fenómenos.

Por lo general, los estudios de vulnerabilidad ambiental se llevan a cabo a nivel de región o país o, en el extremo opuesto, de áreas muy circunscritas como ciudades o municipios. Se ha señalado repetidamente que la consideración de otras escalas geográficas en el análisis de efectos y factores de vulnerabilidad es fundamental, dado que la medición y evaluación de los riesgos ambientales y las medidas de adaptación a

estos presentan expresiones geográficas concretas y múltiples (véanse, entre otros, PNUMA, 2002, pág. 313; Samaniego, 2009, pág. 76). Uno de los objetivos de este estudio es identificar áreas de alta vulnerabilidad ambiental a escala subnacional, pero sin perder de vista el ámbito regional.

C. Metodología y fuentes de información

La metodología aplicada en este estudio se basa en la integración de diversas fuentes de información en una base de datos espaciales y el empleo de sistemas de información geográfica⁸. Se trabajó con variables que daban cuenta de las características del evento y el riesgo pertinente, recreando las dimensiones externa (exposición) e interna (carencia) de la vulnerabilidad, es decir, la frecuencia de distintos tipos de desastres ambientales, la distribución y el tamaño de la población en las áreas con alta frecuencia de desastres naturales y los niveles de pobreza en dichas áreas.

Para la identificación de las áreas que presentan riesgo ambiental en América Latina y el Caribe se utilizaron las bases de datos en formato raster del proyecto sobre focos globales de desastres naturales (*Global Natural Disaster Risk Hotspots*) (Dilley y otros, 2005)⁹. Específicamente, se usó una base de datos de riesgos múltiples, que ofrece información sobre áreas pertenecientes a los tres deciles más altos (8, 9 y 10) de distribución de la frecuencia de eventos, la mortalidad asociada a eventos catastróficos y las pérdidas económicas. La determinación de los niveles de riesgo se basó en datos históricos que cubren aproximadamente el período 1980-2000. Las áreas de exposición crítica se redefinieron en función de la frecuencia de los fenómenos ambientales, en tanto que las áreas críticas de alta mortalidad se identificaron de acuerdo al número de muertes asociadas a los eventos y la selección de las áreas críticas en términos de pérdidas económicas se basó en la proporción del PIB del área afectada que representaba cada desastre natural. La resolución espacial de las imágenes raster varía entre 30" y 2,5" (Dilley y otros, 2005, pág. 6).

La información sobre población proviene de las imágenes desarrolladas en el proyecto global de elaboración de mapas urbanos y rurales (*Global Urban Rural Mapping Project*) de la Red de Información Internacional sobre Geociencia, centro que forma parte del Earth Institute de la Universidad de Columbia, en el que se combinan datos recopilados en censos de población con información satelital de luces nocturnas del sensor OLS (Sistema operacional en línea) del Programa Meteorológico

⁸ Parcialmente basada en la metodología utilizada en Levy y otros (2010) y Schuschny y Gallopín (2004).

⁹ [En línea] <http://www.ldeo.columbia.edu/chrr/research/hotspots/coredata.html>.

Satelital del Departamento de Defensa de los Estados Unidos¹⁰, en el que se emplea un sistema de exploración por líneas y otras fuentes de información para el desarrollo de una malla de distribución de la población en áreas urbanas y rurales, y la estimación de los totales y la densidad en los años 1990, 1995 y 2000 (Balk y otros, 2004; Balk, Yelman y de Sherbinin, 2010)¹¹. Para este artículo se utilizaron las mallas correspondientes al total de la población, densidad, extensión de las áreas urbanas y los centros poblados en 2000. La resolución es de 30", lo que representa aproximadamente 1 km x 1 km en la línea del Ecuador.

En lo que respecta a las situaciones de carencia, las mediciones de pobreza varían considerablemente de un país a otro. A fin de posibilitar las comparaciones, y por razones de conveniencia, se utilizaron datos de mortalidad infantil como indicadores de pobreza y carencia (Storeygard y otros, 2008; Balk, Yetman y de Sherbinin, 2010). La información proviene del proyecto de elaboración de mapas globales de pobreza¹² de la Red de Información Internacional sobre Geociencia, como parte del cual se compila información sobre mortalidad infantil en formato de vector y con resolución subnacional.

Los datos de las diversas fuentes de información espacial se combinaron en un sistema de información geográfica de la aplicación ArcGIS. Las estimaciones por país de la población de áreas de alto riesgo ambiental y áreas que combinan alto riesgo ambiental con un elevado nivel de pobreza, es decir cuya tasa de mortalidad infantil es igual o superior a 29 por 1.000¹³, se realizaron a partir de estadísticas zonales en formato de cuadro¹⁴. Estas estimaciones deben ser entendidas como indicadores de órdenes de magnitud.

Los resultados se presentan en mapas resumidos y cuadros que contienen información sobre áreas de alta vulnerabilidad ambiental y alta mortalidad y que registran pérdidas económicas cuantiosas; densidad de población, áreas urbanas y ciudades de 50.000 habitantes y más en áreas de alto riesgo ambiental; población estimada expuesta a riesgos ambientales por país, y población estimada de áreas de alta vulnerabilidad ambiental y con alta mortalidad infantil.

¹⁰ [En línea] <http://www.ngdc.noaa.gov/ngdc.html>.

¹¹ [En línea] <http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw/global.jsp>.

¹² [En línea] http://sedac.ciesin.columbia.edu/povmap/ds_global.jsp.

¹³ Basado en el promedio de la base de datos para América Latina y el Caribe en combinación con las cifras del CELADE 2010.

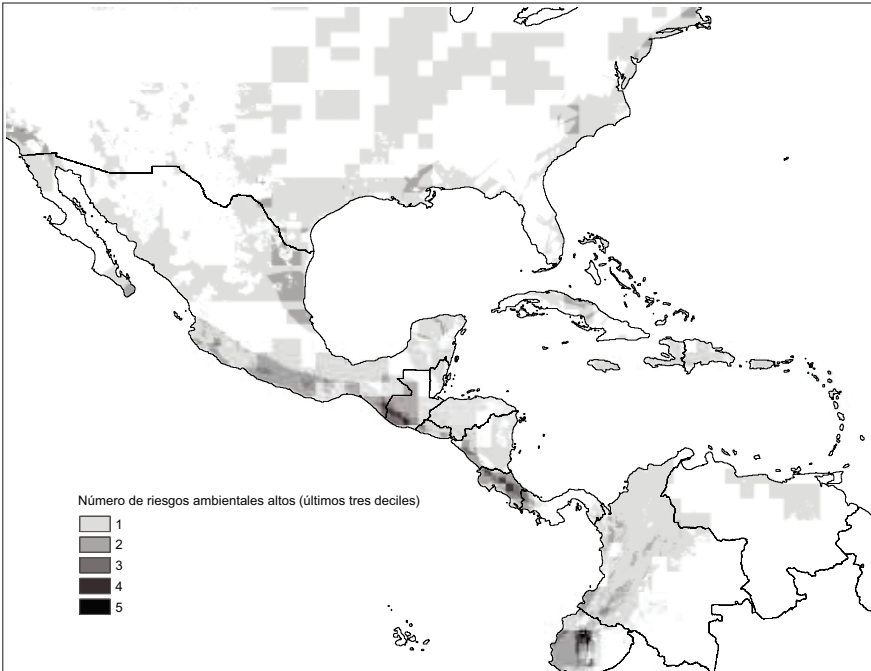
¹⁴ Esta herramienta resume los valores de un raster o malla dentro de zonas determinadas por otro dataset (raster o vector) y presenta los resultados en formato de cuadro (ArcGis Resource Center <http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/009z000000w8000000>).

D. Centroamérica y el Caribe

I. Áreas de alta vulnerabilidad ambiental

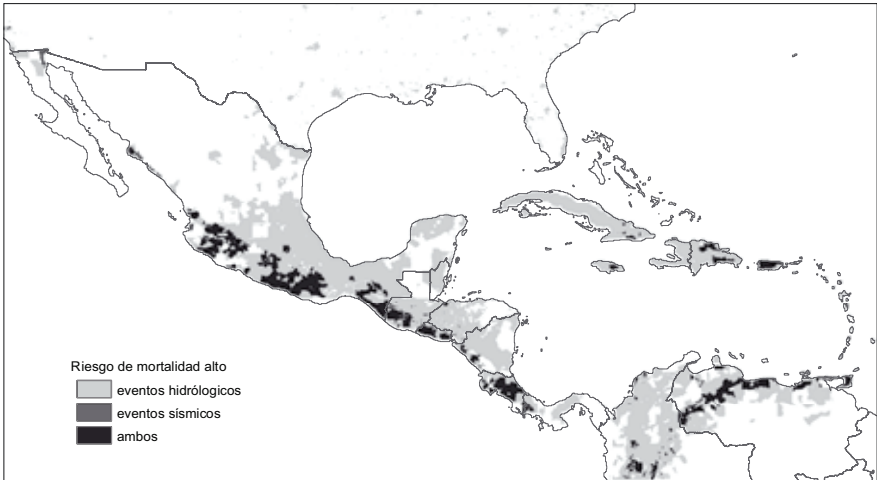
En los mapas 1a, 1b y 1c se muestra la distribución de las áreas de alta vulnerabilidad ambiental en Centroamérica y el Caribe en relación con los tres factores de interés: i) alta intensidad (frecuencia), ii) elevada mortalidad y iii) pérdidas económicas elevadas. Las áreas expuestas por lo menos a un fenómeno ambiental de gran intensidad son predominantes en la subregión, en tanto que las áreas expuestas a dos o más riesgos se localizan principalmente en la costa del Pacífico de Centroamérica. Las áreas expuestas a un mayor número de fenómenos de distintos tipos y de alta intensidad se encuentran en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Mapa 1a
**CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: ÁREAS DE ALTA INTENSIDAD
DE DESASTRES NATURALES**



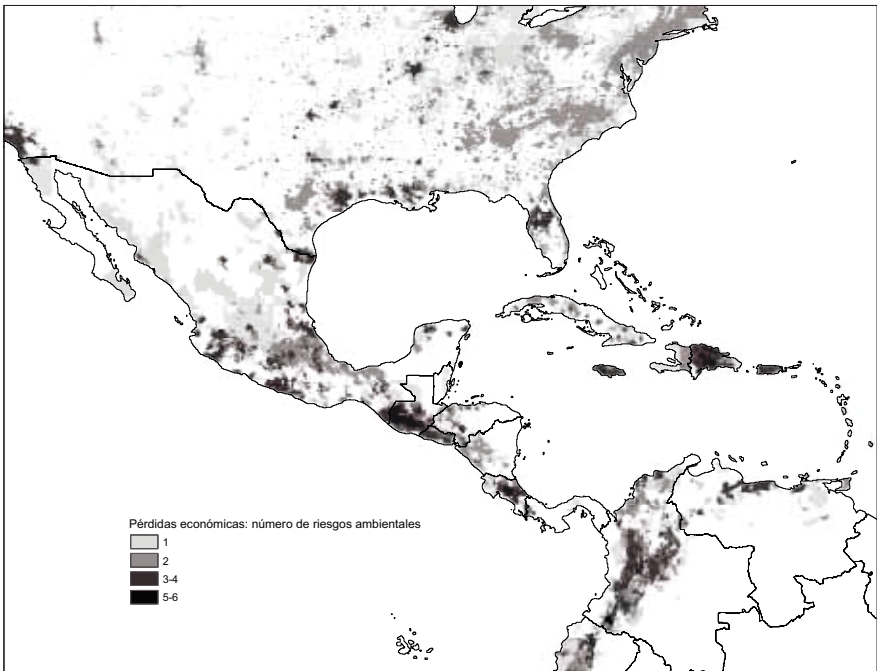
Fuente: Elaboración propia.

Mapa 1b
**CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: ÁREAS CON ELEVADA MORTALIDAD
 DEBIDA A DESASTRES NATURALES**



Fuente: Elaboración propia.

Mapa 1c
**CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: ÁREAS CON PÉRDIDAS ECONÓMICAS
 ELEVADAS DEBIDAS A DESASTRES NATURALES**



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de *Global Natural Disaster Risk Hotspots*.

Las áreas expuestas a una alta mortalidad debida a diferentes tipos de desastres ambientales presentan una distribución un tanto diferente. Prácticamente toda la región, con la excepción del norte y el oeste de México, está expuesta al riesgo de alta mortalidad por fenómenos hídricos, incluidas inundaciones y ciclones, en tanto que la exposición a eventos sísmicos está limitada solamente al oeste de México¹⁵. Las áreas expuestas a una alta mortalidad atribuible a los dos tipos de eventos son extensas y cubren el oeste de México, Centroamérica y muchos países caribeños.

Finalmente, en el mapa sobre exposición a pérdidas económicas se observa que el impacto económico combinado de dos o más tipos de eventos es muy extendido en México y la zona del Pacífico en Centroamérica y el Caribe. Ciertas áreas de Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana aparecen expuestas a pérdidas económicas altas debido a cinco o seis tipos de eventos.

Esta serie de mapas indica que la mayor parte del territorio de esta región está expuesta a un riesgo ambiental y que un alto porcentaje está expuesto a más de uno. Sin embargo, la distribución espacial de los factores de riesgo muestra diferencias a nivel nacional y entre los países. También se observan áreas en las que se concentran todos los tipos de riesgos y fenómenos, por lo que podrían ser consideradas zonas de vulnerabilidad crítica o extrema.

2. Distribución de la población en áreas de alta vulnerabilidad ambiental

En el cuadro 3 se presentan estimaciones por país de la densidad de población en las áreas de alta vulnerabilidad expuestas a una elevada frecuencia de uno o más fenómenos ambientales¹⁶. Como se observa en el cuadro, el rango es sumamente amplio y la densidad fluctúa entre unos 70 millones de personas en México y alrededor de 3.700 en Montserrat, lo que es esperable dadas las diferencias de población existentes entre los países. Sin minimizar la importancia de las magnitudes netas, la conversión de estas cifras a porcentaje de la población total de cada país permite considerar la situación desde otra perspectiva. En un número considerable de países, particularmente en el Caribe, una abrumadora mayoría de la población vive en áreas de alta vulnerabilidad ambiental.

¹⁵ La base de datos utilizada fue desarrollada con anterioridad al terremoto de Haití de 2010.

¹⁶ No se incluyeron los países sin áreas de alta vulnerabilidad ambiental.

Cuadro 3
POBLACIÓN ESTIMADA DE ÁREAS DE ALTA VULNERABILIDAD
Y ELEVADA MORTALIDAD INFANTIL

País o territorio	Población estimada de áreas de alto riesgo ambiental (1)	Población estimada de áreas de alto riesgo ambiental y alta mortalidad infantil (2)	Población total estimada en 2000	Porcentaje (1)	Porcentaje (2)
Anguila	10 150		12 003	84,57	
Antigua y Barbuda	75 189		80 507	93,39	
Antillas Neerlandesas ^a	27 258		215 000	12,68	
Argentina	21 532 900	2 484	37 657 340	57,18	0,01
Bahamas	67 328		30 5801	22,02	
Belice	191 424	172 637	262 667	72,88	65,72
Bolivia (Estado Plurinacional de)	3 720 450	3 711 720	8 646 659	43,03	42,93
Brasil	106 604 000	58 491 400	179 289 227	59,46	32,62
Chile	12 875 900		15 783 991	81,58	
Colombia ^a	40 007 600	23 071	42 321 000	94,53	0,05
Costa Rica	3 933 230	2 126	4 083 197	96,33	0,05
Cuba	5 346 280		11 175 434	47,84	
Dominica	77 816		78 000	99,76	
Ecuador	11 840 600	5 391 030	12 767 415	92,74	42,22
El Salvador ^a	6 262 340	4 267 800	6 276 000	99,78	68,00
Guadalupe	428 491		435 222	98,45	
Guatemala	10 939 900	9 985 990	11 800 351	92,71	84,62
Haití	7 314 160	7 072 560	893 5252	81,86	79,15
Honduras	6 280 950	6 204 820	6 477 525	96,97	95,79
Islas Caimán	20 275		45 117	44,94	
Islas Vírgenes Británicas	20 007		21 156	94,57	
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	109 820		108 933	100,81	
Jamaica	2 428 160		2 625 968	92,47	
Martinica	50 507		390 681	12,93	
México	69 100 700	9 659 780	102 634 153	67,33	9,41
Montserrat	3 705		4 660	79,50	
Nicaragua	4 111 930	1 876 220	5 219 724	78,78	35,94
Panamá	542 353		3 069 123	17,67	
Paraguay	3 278 570	495 985	5 564 709	58,92	8,91
Perú	20 028 900	8 219 090	26 579 252	75,36	30,92
Puerto Rico ^a	3 801 210		381 6000	99,61	
República Dominicana	7 153 600	4 372 240	8 860 760	80,73	49,34
Saint Kitts y Nevis	37 937		47 307	80,19	
Trinidad y Tabago	3 222		1 301 576	0,25	
Islas Turcas y Caicos	18 009		23 044	78,15	
Uruguay	676 284		3 325 379	20,34	
Venezuela (República Bolivariana de)	12 656 200		25 273 336	50,08	

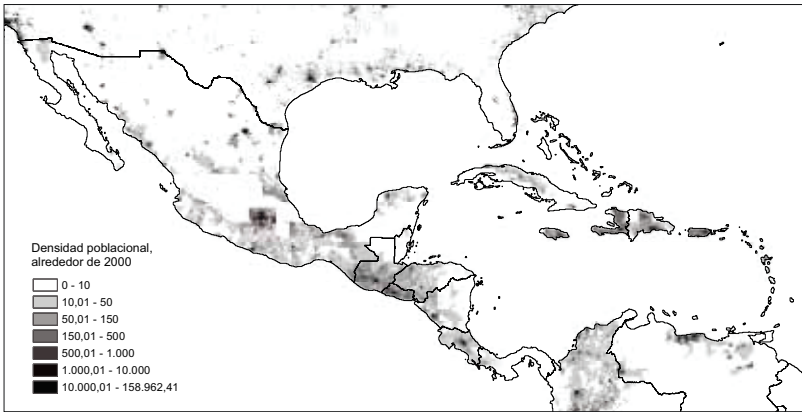
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de *Global Natural Disaster Risk Hotspots*, *Global Rural Urban Mapping Project* (GRUMP), División de Población de las Naciones Unidas, 2011 y Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, "América Latina y el Caribe: Estimaciones y proyecciones de población, 1950-2050", *Boletín Demográfico*, N° 73 (LC/G. 2225-P), Santiago de Chile, 2004. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II. G.209. Las cifras de población en las áreas de alto riesgo ambiental y alta mortalidad infantil fueron calculadas usando estadísticas zonales en ArcGIS y deben ser interpretadas como indicativas.

^a Los datos sobre población total corresponden a información del CELADE (2004).

En los mapas 2a, 2b y 2c se ilustra la distribución de la población para las zonas de alta densidad y las ciudades. En primer lugar, se observa que la densidad de población es muy variada en las áreas de alta vulnerabilidad ambiental, que comprenden desde zonas prácticamente despobladas a zonas con una densidad muy elevada. La muy alta densidad en las áreas de “vulnerabilidad crítica” de Costa Rica, Guatemala e incluso la República Dominicana es particularmente inquietante.

Mapa 2a

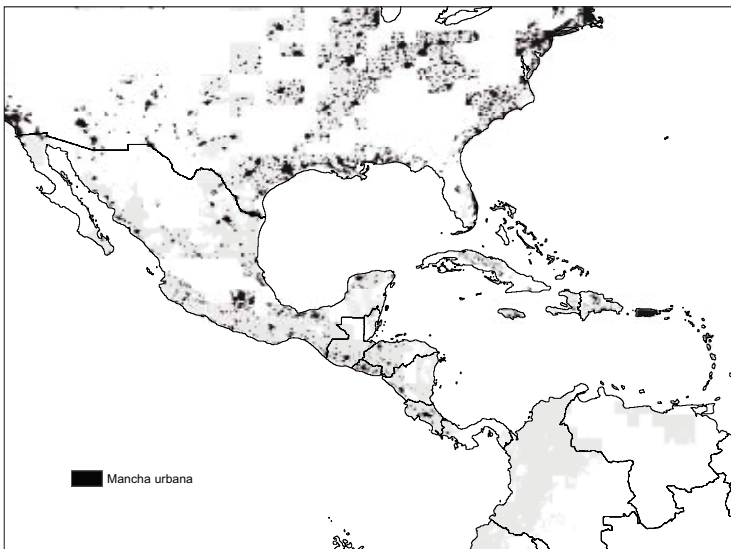
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ÁREAS DE ALTO RIESGO AMBIENTAL (ALTA INTENSIDAD)



Fuente: Elaboración propia.

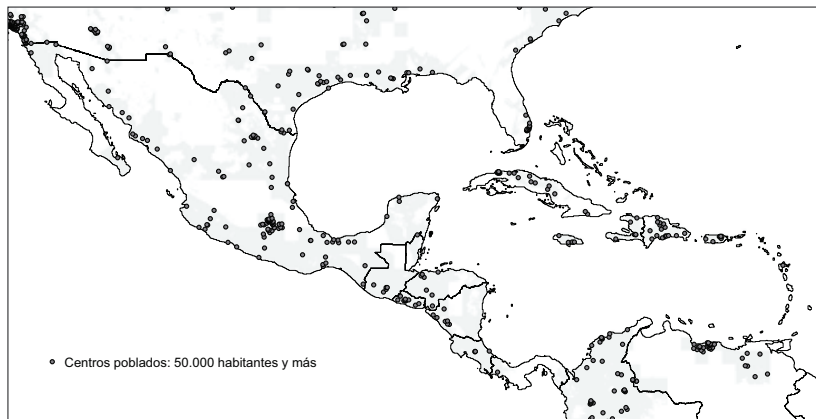
Mapa 2b

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: ÁREAS URBANAS



Fuente: Elaboración propia.

Mapa 2c
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: CIUDADES



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de *Global Natural Disaster Risk Hotspots* y *Global Rural Urban Mapping Project* (GRUMP).

Los mapas 2b y 2c indican que la distribución de la población es muy heterogénea, tanto en las áreas urbanas como en las ciudades. De hecho, un gran número de ciudades que superan los 50.000 habitantes se encuentran en áreas de alta vulnerabilidad ambiental (véase el cuadro 4), incluidas nueve que en 2000 tenían por lo menos un millón de habitantes¹⁷, siete de las cuales se encuentran en México.

Cuadro 4
MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: NÚMERO DE CIUDADES DE 50.000 HABITANTES O MÁS, ALREDEDOR DEL AÑO 2000

País	Número de habitantes				Total
	50 000 a 99 999	100 000 a 499 999	500 000 a 999 999	1 000 000 y más	
Costa Rica	2	2	0	0	4
Cuba	8	13	0	1	22
El Salvador	5	7	1	0	13
Guadalupe	1	0	0	0	1
Guatemala	1	3	1	0	5
Haití	3	3	1	0	7
Honduras	3	3	1	0	7
Jamaica	3	1	1	0	5
México	52	54	12	7	125
Nicaragua	5	1	1	0	7
Panamá	1	0	0	0	1
Puerto Rico	4	4	0	0	8
República Dominicana	9	6	0	1	16
Total	97	97	18	9	221

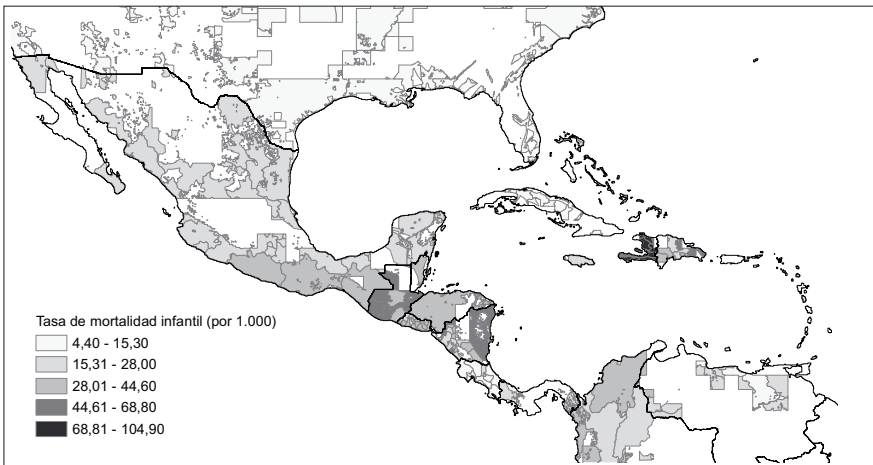
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de *Global Rural Urban Mapping Project* (GRUMP).

¹⁷ Las ciudades son: La Habana, Santo Domingo, Puebla, Netzahualcóyotl, Ciudad de México, Ecatepec, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana.

3. Pobreza en áreas de alta vulnerabilidad

Como se indica en la sección B, la pobreza puede acentuar el grado de vulnerabilidad. En el caso de México, Centroamérica y el Caribe, en el mapa 3 se muestra la distribución espacial de la tasa de mortalidad infantil en el área de alta vulnerabilidad ambiental, es decir, con alta frecuencia de desastres naturales. En Haití las áreas con alto riesgo ambiental presentan las tasas de mortalidad infantil más elevadas de la región¹⁸. También se observan tasas elevadas en áreas de alta vulnerabilidad ambiental de Guatemala, Nicaragua y la República Dominicana. En el extremo opuesto, las áreas de alta vulnerabilidad ambiental de Cuba y Costa Rica registran las tasas más bajas de mortalidad infantil. Es interesante señalar la heterogeneidad de la pobreza, no solo entre países sino también a nivel subnacional, entre otros países en México, Nicaragua y la República Dominicana.

Mapa 3
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: MORTALIDAD INFANTIL EN ÁREAS CON ALTO RIESGO AMBIENTAL (ALTA INTENSIDAD)



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de *Global Natural Disaster Risk Hotspots* y *Global Poverty Mapping Project*.

En el cuadro 3 se indica la población estimada de áreas que se caracterizan a la vez por una alta frecuencia de desastres ambientales y una elevada mortalidad infantil y que pueden clasificarse en la categoría de zonas de vulnerabilidad crítica. En ciertos casos, los números son muy

¹⁸ A modo de referencia, la tasa de mortalidad infantil era de 56 por 1.000 a nivel global en 2000 y fluctuaba entre 9 por 1.000 en los países desarrollados, 30 por 1.000 en Centroamérica, 43 por 1.000 en el Caribe, 62 por 1.000 en los países en desarrollo y 100 por 1.000 en los países menos adelantados (División de Población de las Naciones Unidas, 2011).

elevados pero representan una proporción baja de la población total del país, como ocurre en Costa Rica y México. En otros casos, las cifras elevadas representan también un porcentaje muy alto de la población nacional, como en Haití, Honduras y Guatemala.

E. América del Sur

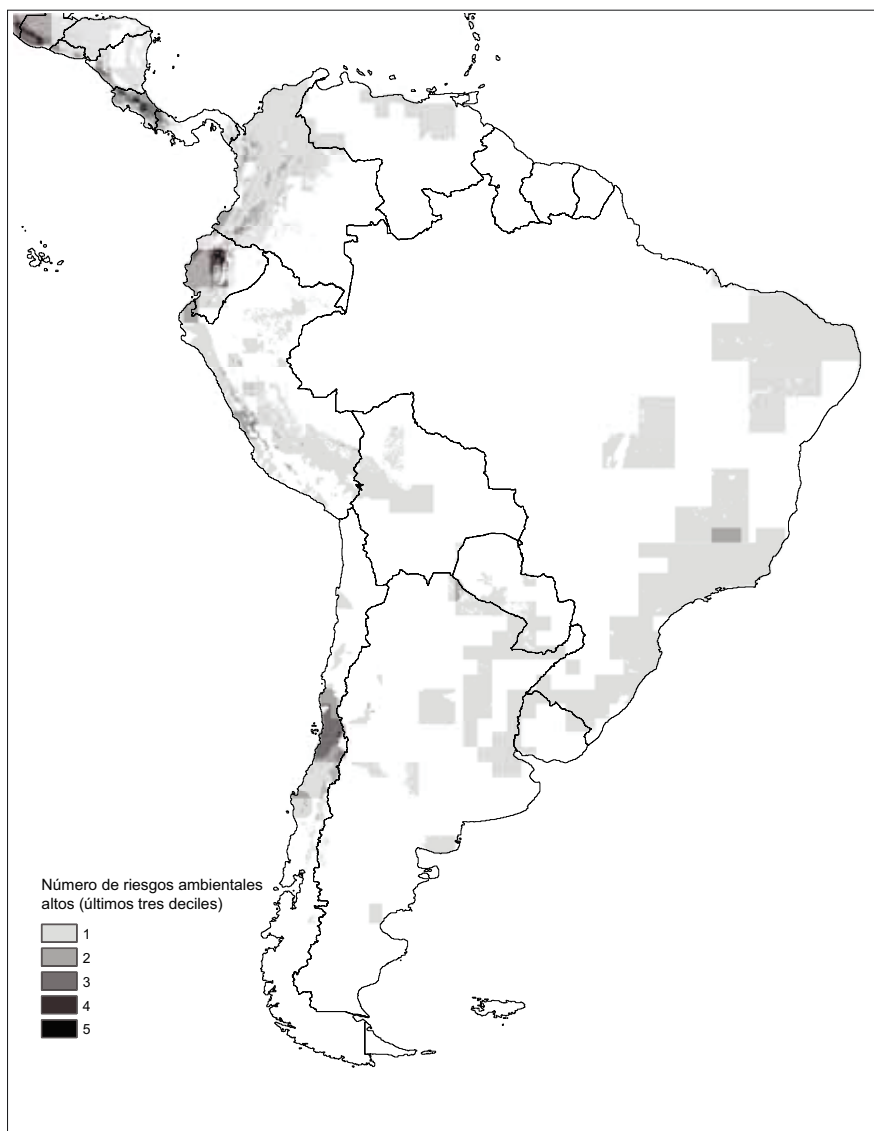
I. Áreas de alta vulnerabilidad ambiental

En los mapas 4a, 4b y 4c se presenta la distribución de las áreas de alta vulnerabilidad ambiental en lo que respecta a las dimensiones de intensidad, mortalidad y pérdidas económicas. Las áreas muy vulnerables a un solo tipo de fenómenos se localizan en las costas del Pacífico y el Atlántico; a lo largo de los Andes, desde Bolivia (Estado Plurinacional de) a Venezuela (República Bolivariana de); en el nordeste del Brasil, y en el litoral y el centro de la Argentina. Las áreas expuestas a dos o más tipos de desastres naturales se encuentran principalmente en la costa oeste de América del Sur y los Andes; destaca en este contexto el área andina del Ecuador, en la que hay zonas expuestas a cinco tipos de fenómenos de alta intensidad.

La distribución de la exposición al riesgo de alta mortalidad debida a fenómenos hidrológicos es muy similar a la distribución espacial de las áreas que presentan una alta intensidad de fenómenos naturales, es decir, una extensa área en el sudeste del Brasil y el litoral de la Argentina, además de las zonas altas de los países andinos. La menor concentración de áreas expuestas al riesgo de alta mortalidad por fenómenos sísmicos se extiende a lo largo de los Andes, al igual que las áreas expuestas a ambos tipos de eventos, concentradas en Chile, Colombia, el Ecuador y Venezuela (República Bolivariana de).

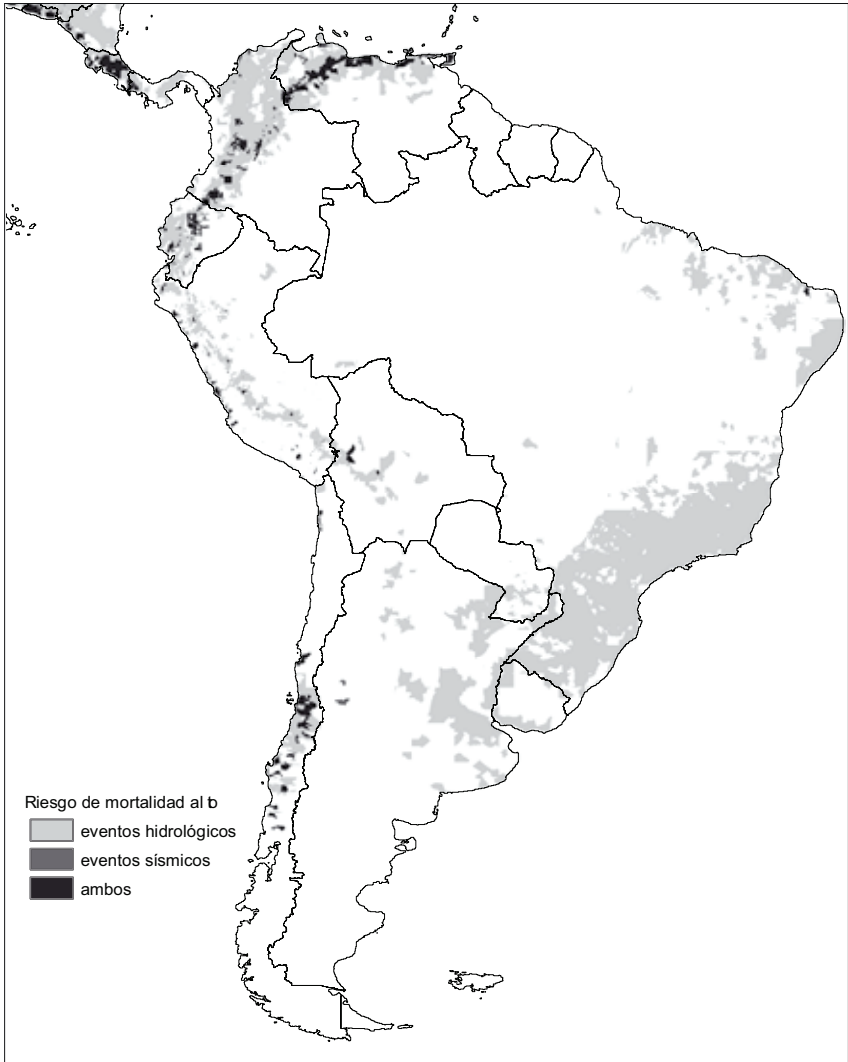
En relación con las zonas expuestas a pérdidas económicas elevadas, es interesante observar que las principales áreas metropolitanas de América del Sur (Santiago, Buenos Aires, São Paulo, Montevideo y Caracas, entre otras) están localizadas en áreas expuestas a pérdidas económicas elevadas debidas a dos o más tipos de fenómenos catastróficos. Cabe destacar la acumulación de riesgos en la zona central de Chile y la región andina de Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de).

Mapa 4a
**AMÉRICA DEL SUR: ÁREAS DE ALTA VULNERABILIDAD AMBIENTAL
(ALTA INTENSIDAD)**



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de *Global Natural Disaster Risk Hotspots* y *Global Poverty Mapping Project*.

Mapa 4b
AMÉRICA DEL SUR: ÁREAS CON ELEVADA MORTALIDAD



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de *Global Natural Disaster Risk Hotspots*.

Mapa 4c
**AMÉRICA DEL SUR: ÁREAS CON PÉRDIDAS ECONÓMICAS DEBIDAS
A DESASTRES NATURALES**



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de *Global Natural Disaster Risk Hotspots*.

En resumen, en las costas del Atlántico y el Pacífico, la región andina y la cuenca del Río de la Plata, se encuentran las áreas que podrían considerarse críticas en términos de exposición a varios de los factores de vulnerabilidad ambiental considerados.

2. Distribución de la población en áreas de alta vulnerabilidad ambiental

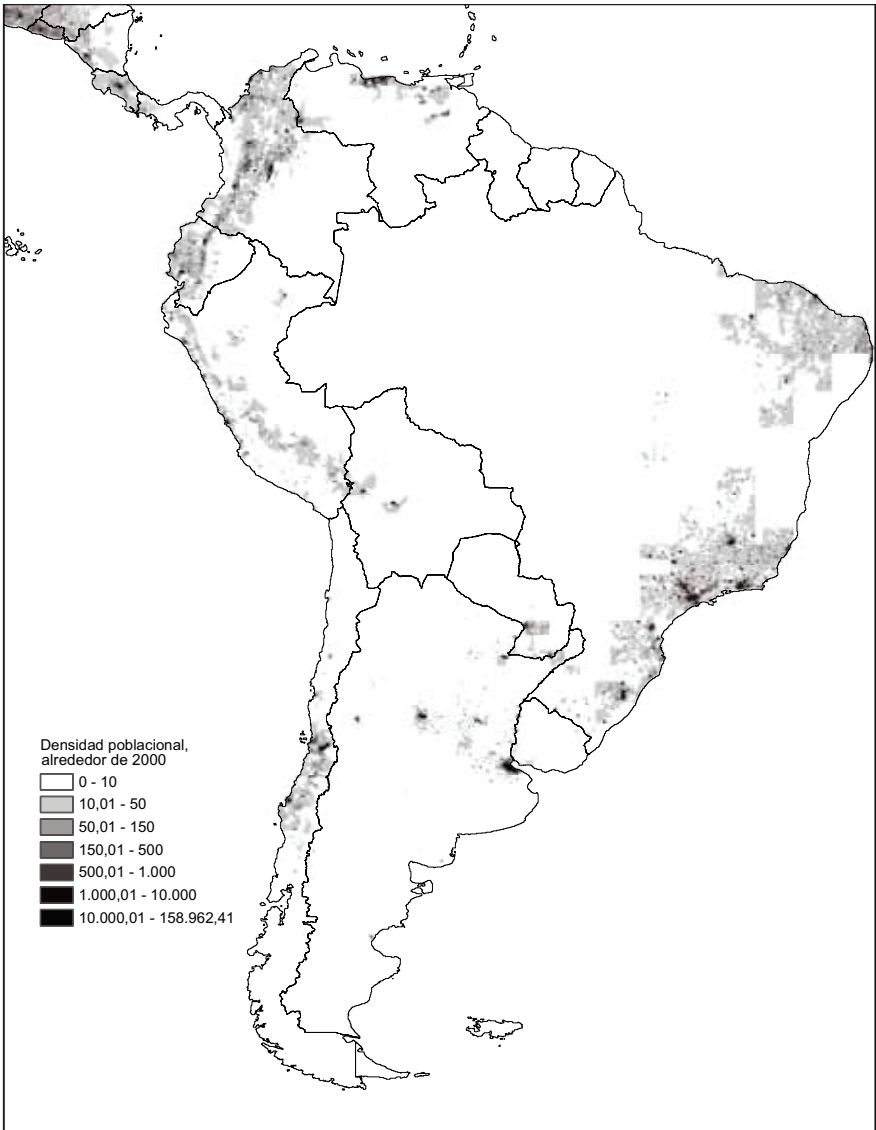
La población estimada de áreas de alta vulnerabilidad muestra grandes variaciones en América del Sur, puesto que fluctúa entre 100 millones en el Brasil y alrededor de 3.000 personas en Trinidad y Tabago (véase el cuadro 3). En términos de proporción de la población total, Colombia y el Ecuador presentan los porcentajes más altos (más del 90%), seguidos por Chile (81%) y el Perú (75%).

Al igual que en Centroamérica y el Caribe, la distribución de la población de estas áreas es muy heterogénea (véanse los mapas 5a, 5b y 5c). También hay grandes variaciones en términos de densidad, dado que en estas áreas se encuentran algunas de las zonas más densamente pobladas de América del Sur, como la región metropolitana de São Paulo, y otras de muy baja densidad; en el mapa 5b se presentan los patrones de asentamiento en áreas rurales y urbanas y se ilustra la localización de las manchas urbanas.

Finalmente, en el mapa 5c se ilustra la distribución de ciudades de 50.000 o más habitantes, entre las que destaca la aglomeración de São Paulo-Río de Janeiro. En el mapa se observa que una proporción considerable de la población urbana de América del Sur se concentra en áreas de alta vulnerabilidad ambiental. En el cuadro 5 se presentan datos sobre la distribución de centros urbanos de 50.000 o más habitantes en áreas de alta vulnerabilidad ambiental. En América del Sur hay 20 centros urbanos con un millón o más de habitantes, 8 de los cuales se encuentran en el Brasil¹⁹.

¹⁹ Centros urbanos considerados: Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Porto Alegre, Santiago, Curitiba, São Paulo, Gran São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Guayaquil, Quito, Cali, Bogotá, Medellín, Valencia, Caracas y Barranquilla.

Mapa 5a

AMÉRICA DEL SUR: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ÁREAS DE ALTO RIESGO AMBIENTAL (ALTA INTENSIDAD)

Fuente: Elaboración propia.

Mapa 5b
AMÉRICA LATINA: ZONAS URBANAS



Fuente: Elaboración propia.

Mapa 5c
AMÉRICA LATINA: CIUDADES



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de *Global Natural Disaster Risk Hotspots* y *Global Rural Urban Mapping Project* (GRUMP).

Cuadro 5
AMÉRICA DEL SUR: CENTROS URBANOS
DE 50.000 O MÁS HABITANTES ^a

País	Población				Total
	50 000 a 99 999	100 000 a 499 999	500 000 a 999 999	1 000 000 y más	
Argentina	21	31	4	3	59
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2	0	3	0	5
Brasil	118	117	11	8	254
Chile	10	15	0	1	26
Colombia	30	25	2	4	61
Ecuador	6	12	0	2	20
Paraguay	4	5	1	0	10
Perú	22	37	1	0	60
Uruguay	3	0	0	0	3
Venezuela (República Bolivariana de)	16	16	1	2	35
Total	232	258	23	20	533

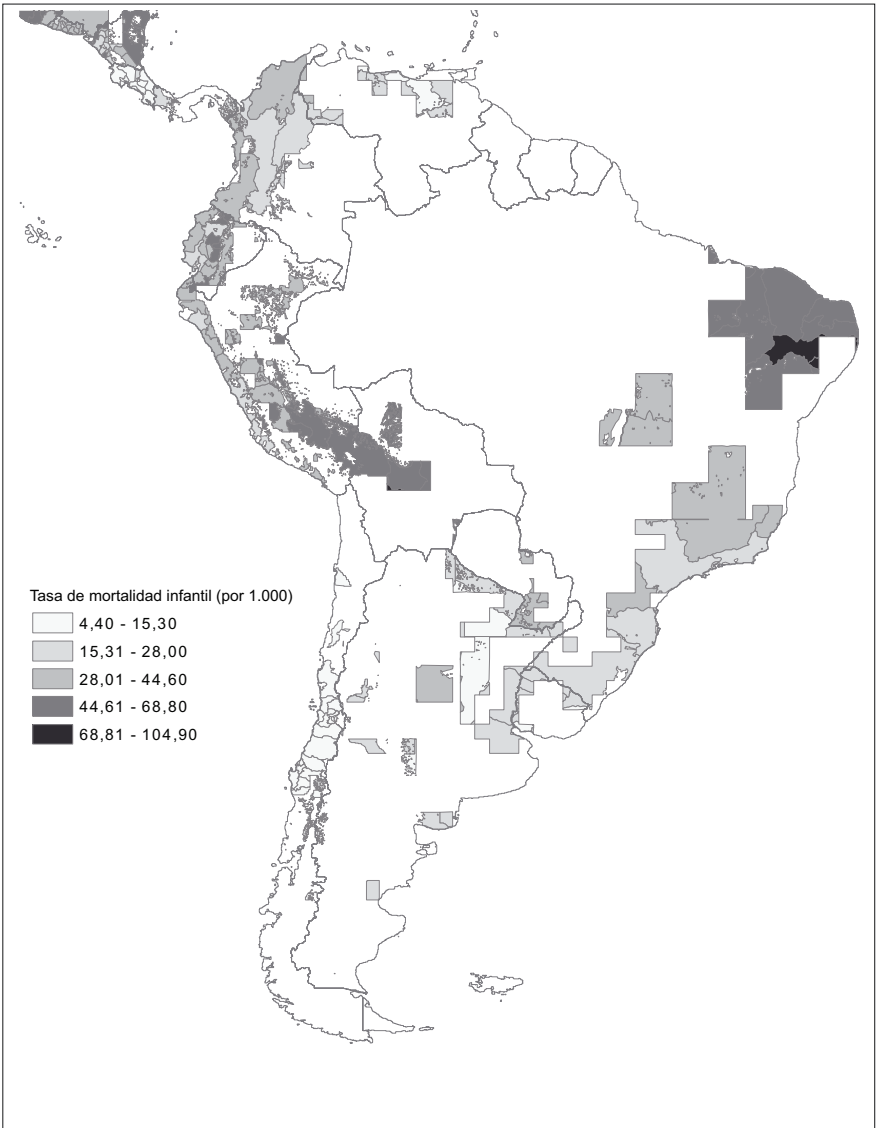
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de *Global Rural Urban Mapping Project* (GRUMP).

3. Pobreza en áreas de alta vulnerabilidad

En el mapa 6 se ilustra la distribución de la tasa de mortalidad infantil en las áreas de alta vulnerabilidad. Los niveles más altos de esta variable se observan en el nordeste del Brasil, la zona andina de Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Perú y la zona andina central del Ecuador. En cambio, en las áreas de alta vulnerabilidad de la Argentina, Chile y Venezuela (República Bolivariana de) los niveles de mortalidad infantil son más bien bajos.

Como se ha indicado, las áreas de alta intensidad y de alta mortalidad infantil pueden coincidir, lo que da origen a situaciones de vulnerabilidad crítica (véase el cuadro 3). Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador y el Perú (países andinos) presentan proporciones similares de habitantes en estas áreas críticas. El Brasil presenta los números absolutos más altos: 58 millones, cifra que corresponde al 32% de la población.

Mapa 6
**AMÉRICA DEL SUR: MORTALIDAD INFANTIL EN ÁREAS DE ALTO RIESGO
AMBIENTAL (ALTA INTENSIDAD)**



Fuente: Elaboración propia sobre la base de *Global Natural Disaster Risk Hotspots* y *Global Poverty Mapping Project*.

F. Conclusiones y consideraciones finales

En este trabajo se presenta un análisis exploratorio de las áreas vulnerables a los desastres naturales de América Latina, Centroamérica, México y el Caribe, a escala subnacional y desde una perspectiva regional. El método analítico empleado se basa en una descomposición de la vulnerabilidad en una dimensión externa (exposición) y una dimensión interna (indefensión). En un intento de aproximación multivariada a la definición de situaciones de vulnerabilidad ambiental, se consideran la existencia de riesgos ambientales y sus consecuencias, la distribución de la población y la pobreza.

En general, se observa que las áreas de alta vulnerabilidad ambiental se distribuyen heterogéneamente dentro de cada país y, además, revelan grandes diferencias en el plano nacional, en lo que respecta al volumen y la densidad de la población, la urbanización y los niveles de pobreza. Esta heterogeneidad pone de manifiesto la conveniencia de analizar por separado la vulnerabilidad ambiental de distintas zonas, a fin de facilitar la identificación de las poblaciones y las comunidades en situación de riesgo y sus respectivos contextos. Asimismo, apuntaría a la necesidad de integrar o agrupar los estudios de caso que se realicen.

Los resultados del estudio descrito en el presente artículo permiten suponer que existen dos tipos de áreas de vulnerabilidad crítica: i) áreas en que se combinan un elevado riesgo de desastres, una alta mortalidad y grandes pérdidas económicas y ii) áreas de alta intensidad (frecuencia) de desastres ambientales, que a la vez registran niveles elevados de mortalidad infantil, considerada como variable representativa de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida. En el primer caso, la exposición de la población es más alta. Esta situación plantea diferentes desafíos en términos de las políticas de adaptación y mitigación que convendría adoptar, y también en relación con el desarrollo sostenible local.

El presente artículo constituye una primera aproximación a esta problemática compleja, en relación con la cual se han considerado un número limitado de factores, seleccionados en función de una conceptualización específica de la vulnerabilidad y el riesgo ambiental, y de la información disponible con el grado de resolución espacial requerido. Entre otras cosas, es necesario ampliar el análisis, para considerar también los cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo, en períodos de distinta duración, que den cuenta de la estacionalidad, las variaciones interanuales y las variaciones *aperiódicas* de los fenómenos ambientales, como también de las variables socioeconómicas.

Bibliografía

- Adamo, Susana (2009), *Climate Change-Population Interactions from a Spatial and Regional Perspective*, documento presentado en la XXVI Conferencia Internacional de Población de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (UIECP).
- Adamo, Susana y Alex de Sherbinin (2011), “The impact of climate change on the spatial distribution of populations and migration”, *Population Distribution, Urbanization, Internal Migration and Development: an International Perspective* (ESA/P/WP/223), Nueva York, División de Población de las Naciones Unidas.
- Adger, W., Shardul Agrawala y M. Monirul Qader Mirza (2007), “Assessment of adaptation, practices, options, constraints and capacity”, *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Martin Parry (ed.), Cambridge, Cambridge University Press.
- Balk, D. y otros (2004), *The Distribution of People and the Dimension of Place: Methodologies to Improve the Global Estimation of Urban Extents*, Palisades, NY., Columbia University.
- Balk, D., G. Yetman y A. de Sherbinin (2010), “Construction of gridded population and poverty datasets from different data sources”, *Proceedings of European Forum for Geostatistics Conference*, Tallinn, 5 al 7 de octubre.
- Bilborrow, R. (2002), “Migration, population change, and the rural environment”, *ECSP Report*, N° 8, Washington, D.C., Environmental Change and Security Project.
- Blaikie, P. y otros (1994), *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*, Londres, Routledge.
- Bull-Kamanga, L. y otros (2003), “From everyday hazards to disasters: the accumulation of risk in urban areas”, *Environment and Urbanization*, vol. 15, N° 1.
- Burton, I. (2001), *Vulnerability and Adaptation to Climate Change in the Drylands*, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
- Cardona, O. (2001), “La necesidad de repensar de una manera holística los conceptos de vulnerabilidad y riesgo. Una crítica y una revisión necesaria para la gestión”, documento presentado en la International Work-Conference on Vulnerability in Disaster Theory and Practice, Wageningen, Wageningen University and Research Center.
- CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía – División de Población de la CEPAL) (2010), “Mortalidad”, *Observatorio demográfico*, N° 9 (LC/G.2490-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/S.11.II.G.34.
- (2004), “América Latina y el Caribe: Estimaciones y proyecciones de población. 1950-2050”, *Boletín demográfico*, N° 73 (LC/G.2225-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.209.
- (2002), «Separata», *Vulnerabilidad sociodemográfica viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2010), “Desastres y desarrollo: El impacto en 2010 (cifras preliminares)”, *Boletín*, N° 2, Santiago de Chile, 16 de diciembre.
- Chambers, R. (1995), “Poverty and livelihoods: whose reality counts?”, *Environment and Urbanization*, vol. 7, N° 1.
- (1989), “Vulnerability, coping and policy”, *IDS Bulletin*, vol. 20, N° 2, Institute of Development Studies.

- Conde-Álvarez, C. y S. Saldaña-Zorrilla (2007), "Cambio climático en América Latina y el Caribe: Impactos, vulnerabilidad y adaptación", *Ambiente y desarrollo*, vol. 23, Nº 2, Santiago de Chile [en línea] http://200.75.6.169/RAD/2007/2_CeciliaConde.pdf.
- Coy, Martín (2010), "Los estudios del riesgo y de la vulnerabilidad desde la geografía humana. Su relevancia para América Latina", *Población y sociedad*, Nº 17.
- De Sherbinin, A., A. Schiller y A. Pulsipher (2007), "The vulnerability of global cities to climate hazards", *Environment and Urbanization*, vol. 19, Nº 1.
- De Sherbinin, A. y otros (2007), "Household demographics, livelihoods and the environment", *Global Environmental Change*, vol. 18, Nº 1.
- Dilley, M. y otros (2005), *Natural Disaster Hotspots: a Global Risk Analysis*, Washington, D.C., Banco Mundial.
- División de Población de las Naciones Unidas (2011), *World Population Prospects, the 2010 Revision*, Nueva York, UNDESA.
- Hogan, D.J. y E. Marandola (2005), "Towards an interdisciplinary conceptualisation of vulnerability", *Population, Space and Place*, vol. 11, Nº 6.
- Huq, S. y otros (2007), "Editorial: reducing risks to cities from disasters and climate change", *Environment and Urbanization*, vol. 19, Nº 1.
- Kang, S.M. y otros (2011), "Impact of polar ozone depletion on subtropical precipitation", *Science*, vol. 332, Nº 6032, 21 de abril.
- Kasperson, J. y R. Kasperson (2001), "A workshop summary", documento presentado en el International Workshop on Vulnerability and Global Environmental Change, Estocolmo, SEI Risk and Vulnerability Programme.
- Kelly, P. y W. Adger (2000), "Theory and practice in assessing vulnerability to climate change and facilitating adaptation", *Climatic Change*, vol. 47, Nº 4.
- Levy, M. y otros (2010), "Multi-hazard Risks and Vulnerable Populations in the Caribbean and Gulf of Mexico Region: Implications of Spatial Population and Land Cover Dynamics", documento presentado en la mesa redonda "Fighting for survival: the vulnerability of America's Gulf Coast and Caribbean Basin", Nueva Orleans.
- Longhurst, R. (1994), "Conceptual frameworks for linking relief and development", *IDS Bulletin*, vol. 25, Nº 4, Institute of Development Studies.
- Macías, J. (1992), "Significado de la vulnerabilidad social frente a los desastres", *Revista mexicana de sociología*, vol. 54, Nº 4.
- Meze-Hausken, E. (2000), "Migration caused by climate change: how vulnerable are people in dryland areas? A case study in Northern Ethiopia", *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, vol. 5, Nº 4.
- Moser, C. (1998), "The asset vulnerability framework: reassessing urban poverty reduction strategies", *World Development*, vol. 26, Nº 1.
- Parry, M.L. y otros (2007), "Technical summary", *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, M.L. Parry y otros (eds.), Cambridge, Reino Unido, Cambridge University Press.
- PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) (2002), *Perspectivas del medio ambiente mundial 2002: GEO-3: Pasado, presente, futuro*, Nairobi, [en línea] <http://www.unep.org/geo/GEO3/spanish/pdf.htm>.
- Samaniego, José Luis (coord.) (2009), *Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe. Reseña 2009* (LC/L.3140), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Sánchez González, D. y C. Egea Jiménez (2009), "Vulnerabilidad sociodemográfica y ambiental, viejos y nuevos riesgos", *Cuadernos geográfico*, Nº 45 [en línea] <http://www.ugr.es/~cuadgeo/docs/revistas/045.pdf>.

- Satterthwaite, D. y otros (2007), *Adapting to Climate Change in Urban Areas. The Possibilities and Constraints in Low and Middle Income Nations*, Londres, International Institute for Environment and Development (IIED).
- Schneider, S., S. Semenov y A. Patwardhan (2007), “Assessing key vulnerabilities and the risk from climate change”, *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Martin Parry (ed.), Cambridge, Cambridge University Press.
- Schuschny, A. y G. Gallopín (2004), “La distribución espacial de la pobreza en relación a los sistemas ambientales en América Latina”, *serie Medio ambiente y desarrollo*, N° 87 (LC/L.2157-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.85.
- Storeygard, A. y otros (2008), “The global distribution of infant mortality: a subnational spatial view”, *Population, Space and Place*, vol. 14, N° 3.
- Wheeler, David (2010), *Quantifying Vulnerability to Climate Change: Implications for Adaptation Assistance*, Washington, D.C., Center for Global Development.



Publicaciones de la CEPAL *ECLAC publications*

Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Economic Commission for Latin America and the Caribbean
Casilla 179-D, Santiago de Chile. E-mail: publications@cepal.org

Véalas en: www.cepal.org/publicaciones
Publications may be accessed at: www.eclac.org

Revista CEPAL / *CEPAL Review*

La Revista se inició en 1976 como parte del Programa de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con el propósito de contribuir al examen de los problemas del desarrollo socioeconómico de la región. Las opiniones expresadas en los artículos firmados, incluidas las colaboraciones de los funcionarios de la Secretaría, son las de los autores y, por lo tanto, no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Organización.

La Revista *CEPAL* se publica en español e inglés tres veces por año.

Los precios de suscripción anual vigentes son de US\$ 30 para la versión en español y US\$ 35 para la versión en inglés. El precio por ejemplar suelto es de US\$ 15 para ambas versiones. Los precios de suscripción por dos años son de US\$ 50 para la versión en español y US\$ 60 para la versión en inglés.

CEPAL Review first appeared in 1976 as part of the Publications Programme of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, its aim being to make a contribution to the study of the economic and social development problems of the region. The views expressed in signed articles, including those by Secretariat staff members, are those of the authors and therefore do not necessarily reflect the point of view of the Organization.

CEPAL Review is published in Spanish and English versions three times a year.

Annual subscription costs are US\$ 30 for the Spanish version and US\$ 35 for the English version. The price of single issues is US\$ 15 for both versions. The cost of a two-year subscription is US\$ 50 for the Spanish version and US\$ 60 for the English version.

Informes periódicos institucionales / *Annual reports*

Todos disponibles para años anteriores / *Issues for previous years also available*

- *Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2011, 184 p.*
Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean 2011, 164 p.
- *Estudio económico de América Latina y el Caribe 2010-2011, 344 p.*
Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2010-2011, 318 p.

- *Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe, 2010-2011*, 140 p.
Latin America and the Caribbean in the World Economy, 2010-2011, 168 p.
- *Panorama social de América Latina, 2011*, 252 p.
Social Panorama of Latin America, 2011, 242 p.
- *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, 2010*, 216 p.
Foreign Direct Investment of Latin America and the Caribbean, 2010, 204 p.
- *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe / Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean, 2011*, 220 p.

Libros de la CEPAL

- 114 *China y América Latina y el Caribe. Hacia una relación económica y comercial estratégica*, Osvaldo Rosales y Mikio Kuwayama, 2012, 258 p
- 114 ***China and Latin America and the Caribbean Building a strategic economic and trade relationship*, Osvaldo Rosales y Mikio Kuwayama, 2012, 244 p.**
- 113 *Competitividad, sostenibilidad e inclusión social en la agricultura: Nuevas direcciones en el diseño de políticas en América Latina y el Caribe*, Octavio Sotomayor, Adrián Rodríguez y Mónica Rodríguez, 2012, 352 p.
- 112 *El desarrollo inclusivo en América Latina y el Caribe. Ensayos sobre políticas de convergencia productiva para la igualdad*, Ricardo Infante (editor), 2011, 384 p.
- 111 *Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral, un enfoque de derechos*, Simone Cecchini y Rodrigo Martínez, 2011, 284 p.
- 110 *Envejecimiento en América Latina. Sistema de pensiones y protección social integral*, Antonio Prado y Ana Sojo (eds.), 2010, 304 p.
- 109 ***Modeling Public Policies in Latin America and the Caribbean*, Carlos de Miguel, José Durán Lima, Paolo Giordano, Julio Guzmán, Andrés Schuschny and Masazaku Watanuki (eds.), 2011, 322 p.**
- 108 *Alianzas público-privadas. Para una nueva visión estratégica del desarrollo*, Robert Devlin y Graciela Moguillansky, 2010, 196 p.
- 107 *Políticas de apoyo a las pymes en América Latina. Entre avances innovadores y desafíos institucionales*, Carlos Ferraro y Giovanni Stumpo, 2010, 392 p.
- 106 *Temas controversiales en negociaciones comerciales Norte-Sur*, Osvaldo Rosales V. y Sebastián Sáez C. (compiladores), 2011, 322 p.
- 105 ***Regulation, Worker Protection and Active Labour-Market Policies in Latin America*, Jürgen Weller (ed.), 2009, 236 p.**
- 104 *La República Dominicana en 2030: hacia una sociedad cohesionada*, Víctor Godínez y Jorge Máttar (coords.), 2009, 582 p.
- 103 ***L'Amérique latine et les Caraïbes au seuil du troisième millénaire*, 2009, 138 p.**
- 102 *Migración interna y desarrollo en América Latina entre 1980 y 2005*, Jorge Rodríguez y Gustavo Busso, 2009, 272 p.
- 101 *Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe*, Adolfo Rodríguez Herrera y Hernán Alvarado Ugarte, 2009, 236 p.

Copublicaciones recientes / *Recent co-publications*

Sentido de pertenencia en sociedades fragmentadas. América Latina desde una perspectiva global, Martín Hopenhayn y Ana Sojo (comps.), CEPAL/Siglo Veintiuno, Argentina, 2011.

Las clases medias en América Latina. Retrospectiva y nuevas tendencias, Rolando Franco, Martín Hopenhayn y Arturo León (eds.), CEPAL/Siglo XXI, México, 2010.

Innovation and Economic Development. The Impact of Information and Communication Technologies in Latin America, Mario Cimoli, André Hofman and Nanno Mulder, ECLAC/Edward Elgar Publishing, United Kingdom, 2010.

Las clases medias en América Latina. Retrospectiva y nuevas tendencias, Rolando Franco, Martín Hopenhayn y Arturo León (eds.), Siglo Veintiuno, México, 2010.

Sesenta años de la CEPAL. Textos seleccionados del decenio 1998-2008, Ricardo Bielschowsky (comp.), CEPAL/Siglo Veintiuno, Argentina, 2010.

El nuevo escenario laboral latinoamericano. Regulación, protección y políticas activas en los mercados de trabajo, Jürgen Weller (ed.), CEPAL/Siglo Veintiuno, Argentina, 2010.

Internacionalización y expansión de las empresas eléctricas españolas en América Latina, Patricio Rozas Balbontin, CEPAL/Lom, Chile, 2009.

Gobernanza corporativa y desarrollo de mercados de capitales en América Latina, Georgina Núñez, Andrés Oneto y Germano M. de Paula (coords.), CEPAL/Mayol, Colombia, 2009.

Coediciones recientes / *Recent co-editions*

La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre para la Tierra. Avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe, CEPAL/Naciones Unidas, 2012.

Sustainable development 20 years on from the Earth Summit. Progress, gaps and strategic guidelines for Latin America and the Caribbean, ECLAC/United Nations, 2012.

Perspectivas económicas de América Latina 2012. Transformación del Estado para el desarrollo, CEPAL/OCDE, 2011.

Latin America Outlook 2012. Transforming the State for Development, ECLAC/OECD, 2011.

Perspectives économiques de l'Amérique latine 2012. Transformation de l'État et Développement, CEPAL/OCDE, 2012.

Breeding Latin American Tigers. Operational principles for rehabilitating industrial policies, Robert Devlin and Graciela Mognillansky, ECLAC/World Bank, 2011.

Espacios iberoamericanos: Hacia una nueva arquitectura del Estado para el desarrollo, CEPAL/SEGIB, 2011.

Espaços ibero-americanos: A uma nova arquitetura do Estado para o desenvolvimento. CEPAL/SEGIB, 2011.

Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe, CEPAL/FAO/IICA, 2011.

The Outlook for Agriculture and Rural Development in the Americas: A Perspective on Latin America and the Caribbean, ECLAC/FAO/IICA, 2011.

Pobreza infantil en América Latina y el Caribe, CEPAL/UNICEF, Chile, 2010.

Espacios iberoamericanos: vínculos entre universidades y empresas para el desarrollo tecnológico, CEPAL/SEGIB, 2010

Espaços ibero-Americanos: vínculos entre universidades e empresas para o desenvolvimento tecnológico, CEPAL/SEGIB, 2010.

Clases medias y desarrollo en América Latina, Alicia Bárcena y Narcís Serra (eds.), CEPAL/SEGIB/CIDOB, Chile, 2010.

Cuadernos de la CEPAL

- 99 *Si no se cuenta, no cuenta*, Diane Alméras y Coral Calderón Magaña (coordinadoras), 2012, 394 p.
- 98 **Macroeconomic cooperation for uncertain times: The REDIMA experience**, Rodrigo Cárcamo-Díaz, 2012, 164 p.
- 97 *El financiamiento de la infraestructura: Propuestas para el desarrollo sostenible de una política sectorial*, Patricio Rozas Balbontín, José Luis Bonifaz y Gustavo Guerra-García, 2012, 414 p.
- 96 *Una mirada a la crisis desde los márgenes*, Sonia Montañó (coordinadora), 2011, 102 p.
- 95 *Programas de transferencias condicionadas. Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe*, Simone Cecchini y Aldo Madariaga, 2011, 226 p.
- 95 **Conditional cash transfer programmes. The recent experience in Latin America and the Caribbean**, Simone Cecchini and Aldo Madariaga, 2011, 220 p.
- 94 *El cuidado en acción. Entre el derecho y el trabajo*, Sonia Montañó Virreira y Coral Calderón Magaña (coords.), 2010, 236 p.
- 93 *Privilegiadas y discriminadas. Las trabajadoras del sector financiero*, Flavia Marco Navarro y María Nieves Rico Ibáñez (eds.), 2009, 300 p.

Cuadernos estadísticos de la CEPAL

- 39 *América Latina y el Caribe: indicadores macroeconómicos del turismo*. Solo disponible en CD, 2010.
- 38 *Indicadores ambientales de América Latina y el Caribe, 2009*. Solo disponible en CD, 2010.
- 37 *América Latina y el Caribe: Series históricas de estadísticas económicas 1950-2008*. Solo disponible en CD, 2009.

Observatorio demográfico / Demographic Observatory

Edición bilingüe (español e inglés) que proporciona información estadística actualizada, referente a estimaciones y proyecciones de población de los países de América Latina y el Caribe. Incluye también indicadores demográficos de interés, tales como tasas de natalidad, mortalidad, esperanza de vida al nacer, distribución de la población, etc.

El Observatorio aparece dos veces al año, en los meses de enero y julio.

Suscripción anual: US\$ 25. Valor por cada ejemplar: US\$ 15.

Bilingual publication (Spanish and English) providing up-to-date estimates and projections of the populations of the Latin American and Caribbean countries. Also includes various demographic indicators of interest such as fertility and mortality rates, life expectancy, measures of population distribution, etc.

The Observatory appears twice a year in January and July.

Annual subscription: US\$ 25. Per issue: US\$ 15.

Notas de población

Revista especializada que publica artículos e informes acerca de las investigaciones más recientes sobre la dinámica demográfica en la región, en español, con resúmenes en español e inglés. También incluye información sobre actividades científicas y profesionales en el campo de población.

La revista se publica desde 1973 y aparece dos veces al año, en junio y diciembre.

Suscripción anual: US\$ 20. Valor por cada ejemplar: US\$ 12.

Specialized journal which publishes articles and reports on recent studies of demographic dynamics in the region, in Spanish with abstracts in Spanish and English. Also includes information on scientific and professional activities in the field of population.

Published since 1973, the journal appears twice a year in June and December.

Annual subscription: US\$ 20. Per issue: US\$ 12.

Series de la CEPAL

*Comercio internacional / Desarrollo productivo / Desarrollo territorial / Estudios estadísticos y prospectivos / Estudios y perspectivas (Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, México, Montevideo) / **Studies and Perspectives** (The Caribbean, Washington) / Financiamiento del desarrollo / Gestión pública / Informes y estudios especiales / Macroeconomía del desarrollo / Manuales / Medio ambiente y desarrollo / Mujer y desarrollo / Población y desarrollo / Políticas sociales / Recursos naturales e infraestructura / Seminarios y conferencias.*

Véase el listado completo en: www.cepal.org/publicaciones

A complete listing is available at: www.cepal.org/publicaciones

كيفية الحصول على منشورات الأمم المتحدة

يمكن الحصول على منشورات الأمم المتحدة من المكتبات ودور التوزيع في جميع أنحاء العالم. استعلم عنها من المكتبة التي تتعامل معها أو اكتب إلى : الأمم المتحدة ، قسم البيع في نيويورك أو في جنيف .

如何购取联合国出版物

联合国出版物在全世界各地的书店和经售处均有发售。请向书店询问或写信到纽约或日内瓦的联合国销售组。

HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section, New York or Geneva.

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Издавания Организации Объединенных Наций можно купить в книжных магазинах и агентствах во всех районах мира. Наводите справки об изданиях в вашем книжном магазине или пишите по адресу: Организация Объединенных Наций, Секция по продаже изданий, Нью-Йорк или Женева.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.

Las publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y las del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) se pueden adquirir a los distribuidores locales o directamente a través de:

Publicaciones de las Naciones Unidas
2 United Nations Plaza, Room DC2-853
Nueva York, NY, 10017
Estados Unidos
Tel. (1 800)253-9646 Fax (1 212)963-3489
E-mail: publications@un.org

Publicaciones de las Naciones Unidas
Sección de Ventas
Palais des Nations
1211 Ginebra 10
Suiza
Tel. (41 22)917-2613 Fax (41 22)917-0027

Unidad de Distribución
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura
7630412 Santiago
Chile
Tel. (56 2)210-2056 Fax (56 2)210-2069
E-mail: publications@cepal.org

Publications of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) and those of the Latin American and the Caribbean Institute for Economic and Social Planning (ILPES) can be ordered from your local distributor or directly through:

United Nations Publications
2 United Nations Plaza, Room DC2-853
New York, NY, 10017
USA
Tel. (1 800)253-9646 Fax (1 212)963-3489
E-mail: publications@un.org

United Nations Publications
Sales Sections
Palais des Nations
1211 Geneva 10
Switzerland
Tel. (41 22)917-2613 Fax (41 22)917-0027

Distribution Unit
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura
7630412 Santiago
Chile
Tel. (56 2)210-2056 Fax (56 2)210-2069
E-mail: publications@eclac.org



Primera edición
Impreso en Naciones Unidas • Santiago de Chile • S1200118

ISSN 0303-1829

ISBN 978-92-1-221093-3 • Número de venta S.12.II.G.15

Copyright © Naciones Unidas 2012

